HISTORIA DEL PCE

JOSÉ LUIS MARTÍN RAMOS



HISTORIA DEL PCE

JOSÉ LUIS MARTÍN RAMOS



HISTORIA DEL PCE

JOSÉ LUIS MARTÍN RAMOS

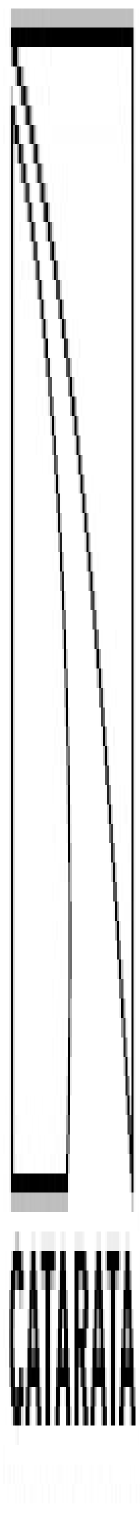


José Luis Martín Ramos

Catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, sus investigaciones se han centrado en la historia del socialismo y el comunismo, en particular del Partido Socialista Unificado de Cataluña, así como de la Guerra Civil. Entre otras obras, ha publicado El origens del PSUC (1977), Rojos contra Franco. Historia del PSUC, 1939-1947 (2002), Historia de la UGT. Entre la revolución y el reformismo, 1914-1931 (2008) y, recientemente, El Frente Popular: victoria y derrota de la democracia en España (2016) y Guerra y revolución en Cataluña, 1936-1939 (2018).

José Luis Martín Ramos

Historia del PCE


CATARATA

diseño de cubierta: estudio joaquín gallego

Fuencarral, 70

28004 Madrid

Tel. 91 532 20 77

www.catarata.org

Historia del PCE

isbne: 978-84-1352-202-9

ISBN: 978-84-1352-171-8

DEPÓSITO LEGAL: M-2.781-2021

thema: JPFC/JPL/1DSE

impreso en artes gráficas coyve

es que sea utilizado lo más ampliamente posible, que sean adquiridos originales para permitir la edición de otros nuevos y que, de reproducir partes, se haga constar el título y la autoría.

A Salvador Jové, Pere Gabriel, Pau Verrié y Alberto Ortega, compañeros del Comité de Estudiantes del PSUC, en 1966

PRESENTACIÓN

Este libro es un ensayo sintético sobre la historia del Partido Comunista de España; con la intención de que pueda ser leído por todo el que esté interesado en ella, sin necesidad de tener conocimientos especializados. Por esa razón se ha dado una mayor dimensión a los momentos fundamentales del partido, a las ideas y propuestas políticas; con algún detalle sobre su implantación territorial y el sentido social de su militancia. No obstante, quien quiera ampliar sus conocimientos sobre la historia del PCE y profundizar en ella, encontrará una bibliografía referenciada de manera sucinta en el texto, por autor y año de publicación, cuyos datos completos se dan en el apartado final de obras utilizadas. El texto presente es producto de mis propias investigaciones, en particular sobre la historia del partido entre 1919 y 1939; así como de la consulta de los estudios publicados y citados cuyos autores no son responsables, desde luego, de mi interpretación, aunque en muchos casos puedan compartirla, o yo la de ellos. Para darle agilidad a la lectura se han limitado al máximo las citas a final de capítulo, utilizando solo el recurso para ampliar o precisar alguna información, que he considerado que una buena parte de los lectores puede no tener. Y desde luego en tanto que ensayo sintético se prioriza la interpretación sobre la descripción.

Soy de los que considera que el trabajo científico, y escribir historia también lo es, no anula al investigador-autor, sino todo lo contrario; es hijo de él y del mundo en que vive. El neutralismo es una falacia y la verdad científica es la mayor aproximación a la realidad. En cualquier caso, ese trabajo ha de estar garantizado en nuestra disciplina por el uso de una metodología objetiva, transparente y compartible, que tiene como principio primero el que señaló Marc Bloch en su pequeño gran libro sobre el oficio de historiar: solo se puede sostener aquello que está sustentado en el uso crítico de la documentación, que aquel que quiera puede consultar, aunque sea con el mismo esfuerzo que el investigador. Doy fe que la bibliografía utilizada y referenciada tiene esa garantía y por ello este ensayo no es gratuito; lo que no quiere decir que sea obligatorio compartir todo lo que en él se dice, ya que incluso el uso crítico de la documentación admite la discrepancia. Quedo en última instancia a disposición del lector, que será el juez de mi obra, y de todo el que quiera debatirla desde el

respeto y el debate objetivo; eso en la medida de mis fuerzas y del tiempo que quede.

Finalmente, es una satisfacción poder hacer públicos determinados reconocimientos. El primero a Sisinio Pérez Garzón, que me propuso hacer esta historia y, es obvio, a la editorial que ha confiado en que pudiera llevarla a cabo. También agradecer a Mariano Aragón, con el que hemos conversado de manera frecuente sobre la historia del PSUC desde la transición, de la que es testimonio, y me ha proporcionado información sustantiva y sugerencias fundamentales; lo que también han hecho Antoni Lucchetti y Salvador Jové. Y recordar como siempre a Carme Millán, que ha tenido que soportarme en la tarea siempre absorbente de escribir un libro.

PARTE I

EL NACIMIENTO

DE UN PARTIDO NUEVO

CAPÍTULO 1

EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN MUNDIAL

Ha llegado la revolución

Desde mediados del siglo XIX el movimiento obrero soñó con el advenimiento de un momento revolucionario con el cual alcanzar la utopía de una sociedad igualitaria, y por ello realmente libre. Una utopía, no una quimera, y además necesaria; surgida de la división de clases, del paroxismo de la desigualdad establecido por el capitalismo, no como daño colateral, sino como núcleo del sistema. La proclamación de la Comuna en París, en marzo de 1871, como respuesta popular a la derrota del Imperio francés de Napoleón III a manos de la Prusia de Bismarck, hizo pensar que el momento había llegado. Fue fugaz, Thiers, con los restos del Ejército napoleónico y la ayuda de tropas prusianas, acabó con la Comuna; sepultada bajo un mausoleo humano de decenas de miles de muertos, presos y deportados, aunque nunca olvidada. La hegemonía burguesa, tan potente que redujo desde entonces el vocablo "liberal" a sus acepciones de liberalismo económico e individualismo, aseguró a partir de esa década cuatro decenios de paz interna en Europa; al tiempo que sus gobiernos ponían al servicio de la expansión imperialista del capitalismo los ejércitos que hasta entonces habían dirigido tan frecuentemente contra los pueblos.

No se sabía cómo ni cuándo se produciría un nuevo momento. No obstante, el movimiento obrero siguió creciendo y añadió a sus formas societarias la constitución de partidos, impulsados bajo la propuesta de Marx de que las clases trabajadoras desarrollaran con organizaciones propias su propia política de clase. Esa fue la razón del nacimiento de la socialdemocracia y la Segunda Internacional, en la década de los ochenta del siglo XIX. Tiempos nada revolucionarios en Europa, en los que la revolución era sobre todo una esperanza. El socialista francés Paul Lafargue escribió en 1882 que, a pesar de lo que pudiera parecer, "la revolución está cerca. Solo es preciso el choque entre dos nubes para determinar la explosión al cabo de la cual está la explosión humana"[1]. En el tránsito del siglo XIX al XX los partidos socialistas pasaron de la esperanza, casi religiosa, en ese advenimiento a considerar la organización del momento revolucionario. Se dividieron entre los que defendieron que este solo

podía ser, en realidad, un proceso evolutivo a través de la reforma del sistema y los que, sin negar el beneficio material de las reformas, consideraban que el cambio de un sistema a otro necesitaba una ruptura que solo podría llevarse a cabo por la movilización de las clases trabajadoras.

El debate interno sobre la conveniencia de una u otra opción pasó a ser un debate sobre su necesidad y su posibilidad. El impulso del cambio lo proporcionaron la agravación en 1905 de los conflictos entre las potencias internacionales por el reparto del mundo[2], con la amenaza de una guerra general, por un lado; y, por otro, la Revolución rusa de 1905-1906, cuyo estallido marcó el desenlace de la guerra entre el Imperio del zar y el de Japón, iniciada un año antes. Desde el Congreso de Stuttgart de la Segunda Internacional, en 1907, una parte de la socialdemocracia consideraba que la única manera de impedir la guerra o de acabar con ella si estallaba era la movilización revolucionaria de las clases trabajadoras y populares. Así lo habían defendido entonces Lenin, Rosa Luxemburgo y Martov —menchevique de izquierda—, consiguiendo que su previsión, que solo era una manifestación genérica, fuese aprobada por el congreso. Entre 1907 y 1914 el término “revolución mundial” se fue consolidando en el discurso socialdemócrata, incluso August Bebel lo usó en 1912 como argumento oratorio en el Reichstag. Aunque antes de la guerra fue sobre todo descriptivo o propagandístico. El estallido de la Gran Guerra en el verano de 1914, convertida en una catástrofe humana de características y dimensiones mayores que las pestes del pasado lejano, vino a zanjar el debate. La guerra significó la quiebra de aquella hegemonía burguesa liberal que tan feliz se las prometía a finales del XIX, y la primera consecuencia social fue la respuesta airada de las clases trabajadoras y populares de San Petersburgo el 8 de marzo de 1917[3]. La tormenta había sido la guerra, y de ella habían nacido los choques que originaron el rayo de la revolución, que no cesaba y se hacía cada vez más intenso.

Durante nueve meses esa transformación se disputó en los territorios del caído Imperio del zar, trasladando a la práctica el debate intelectual y político que arrastraba el movimiento obrero; hasta que el 7 de noviembre de 1917, la disyuntiva entre reforma o revolución se resolvió en el proceso ruso en favor de la segunda opción, con la insurrección liderada por el ala radical de la socialdemocracia: los bolcheviques de Lenin. No resultó un episodio local. La prosecución de la Gran Guerra y su desenlace final en la revolución alemana, en noviembre de 1918, generalizaron la onda revolucionaria. El espectro anunciado por Marx y Engels en su Manifiesto comunista en 1848, y que no recorrió

Europa ni entonces ni en 1871, volvía a aparecer ahora, por un lateral de la casa, para recorrer no solo el continente, sino todo el mundo, durante un siglo.

Cuando estalló la guerra, Lenin ató los cabos enseguida: la guerra imperialista mundial había de ser transformada en guerra civil revolucionaria, también mundial, y para ello era ineludible constituir una Tercera Internacional; integrando en ella a los sectores del movimiento obrero que venían rechazando el reformismo. Hasta 1917, Lenin no pudo hacer otra cosa que defender esa perspectiva. Lo hizo en los medios de la izquierda socialista y en el movimiento contra la guerra iniciado en Zimmerwald en 1915[4]. Su postura quedó siempre en minoría frente a la posición de no romper con la Segunda Internacional, sino reconstruirla desde la recuperación de los principios fundadores, que tampoco confiaba en la expectativa de un estallido revolucionario generalizado. Cuando en 1917 estalló la revolución en el Imperio zarista, Lenin se vio corroborado por el hecho. Lo enfocó con luces largas y concluyó que la transformación de la guerra imperialista en guerra civil había empezado en Rusia; que había que mantener la revolución hasta que se produjera también en occidente; y que, en esa perspectiva, era preciso que los bolcheviques fundaran inmediatamente la Tercera Internacional.

Esa última propuesta resultó precipitada incluso para él mismo. En occidente no se produjeron movilizaciones revolucionarias en 1917, la rusa quedó aislada y la guerra se recrudeció con la intervención de Estados Unidos y la gran ofensiva alemana de la primavera de 1918. Lenin, en su defensa en marzo de 1918 ante el Comité Central bolchevique de firmar la paz por separado con los imperios centrales, reconoció que hasta que no se produjera en occidente un levantamiento la revolución mundial, sería “un magnífico cuento, un hermoso cuento”, y lo mismo la nueva Internacional. De “hermoso cuento” pasó a expectativa real con la revolución de noviembre de 1918 en Alemania, que derrocó al Imperio alemán y dio paso al fin de la Gran Guerra. Fue entonces cuando los bolcheviques dieron el paso anunciado por Lenin en 1917. Un paso que no tuvo ya como referente la bancarrota de la Segunda Internacional ni la guerra mundial, finalizada, sino la progresión del proceso revolucionario iniciado en el Imperio ruso que se difundiría por Europa entre 1918 y 1919.

El 24 de enero de 1919 el diario Pravda publicó la convocatoria urgente del “primer Congreso de la nueva Internacional revolucionaria” impulsada por el Partido Comunista Ruso-bolchevique (PCR-b) (Raggioneri, 1973; Agosti, 1974). Su propósito estuvo claro desde aquel anuncio: constituir una Internacional

Comunista con un vínculo permanente entre sus componentes para una acción común, en la que se subordinaran los intereses de cada uno de ellos al interés común de la revolución a escala internacional. La noticia se dirigió de manera expresa a una cuarentena de organizaciones o corrientes de la socialdemocracia contrarias a la guerra: los partidos que ya se llamaban comunistas —en Austria, Hungría, Polonia, los países bálticos, Bielorrusia, Ucrania y Holanda— y otros que mantenían la denominación de socialistas o laboristas —en Bulgaria, Chequia, Noruega, Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos—; minorías organizadas como la Liga Espartaquista alemana, las facciones de izquierda socialista de Suecia, Suiza y Francia o, sencillamente, "elementos" revolucionarios en los casos del socialismo español y del portugués. También se convocaba al sindicato revolucionario Industrial Workers of World (IWW), fundado en 1905, cuyo núcleo principal estaba en Estados Unidos, con presencia también en el Reino Unido y México; y a la Internacional Juvenil Socialista. Esa consideración del sindicalismo revolucionario y del movimiento juvenil habría de tener un sentido particular en el caso de España.

¿También en España?

La referencia al socialismo español en la convocatoria manifestaba el escaso conocimiento que de él se tenía; tampoco se hacía ninguna alusión a la CNT. El desconocimiento era mutuo; lo que se sabía del Imperio del zar y de la socialdemocracia rusa en el movimiento obrero español, antes de 1917, tampoco era prácticamente nada. La reacción ante el inicio de la revolución en Petrogrado y su desarrollo posterior fue distante y dispar.

La dirección del PSOE lo hizo a través de El Socialista, con una serie de artículos publicados sin firmar, entre el 17 y el 24 de marzo, bajo el título "El movimiento revolucionario ruso" y el mucho más significativo subtítulo "Contra el espíritu alemán". Plenamente aliadófila, asumía que la guerra se libraba entre pueblos con ideales progresistas y democráticos frente a imperios de la Europa Central autoritarios y reaccionarios; una versión que fallaba, al ser uno de esos aliados la autocracia zarista. Su derrocamiento acababa con esa anomalía y reforzaba, a sus ojos, el carácter democrático de los aliados. El derrocamiento del zar y el Gobierno provisional formado por miembros de la Duma se

consideró un movimiento patriótico de dignidad nacional y no una revolución social (Forcadell, 1978). Empeñada en defender que el único camino de avance hacia el socialismo pasaba por la acción parlamentaria, solo se consideró el protagonismo de la Duma; como se subrayó en los citados artículos: “La Revolución rusa, como la francesa y como la inglesa, las dos más importantes de la historia, se ha producido como un choque entre el Parlamento y el poder constituido”. No se hizo en ellos alusión al Sóviet de Petrogrado. Diferente fue la reacción de la prensa anarcosindicalista, que negó que la revolución fuera resultado de la acción de la Duma, puso todo el protagonismo en el pueblo y destacó la novedad del sóviet ignorada por El Socialista: “Un comité formado por representantes de los obreros y los soldados para vigilar los actos del Gobierno provisional tiene un significado muy elocuentísimo [sic]” (Solidaridad Obrera, 30 de abril de 1917). Que el resultado de la revolución fuese un Gobierno y la falta de mayor conocimiento, inducían, empero, a juzgarla con cautela.

En las filas socialistas y anarcosindicalistas no hubo tampoco reacción notable que trascendiera al público. En ambas, la posición ampliamente mayoritaria era la aliadófila y solo un minoría ínfima socialista se identificaba con el movimiento antibélico de Zimmerwald: el catedrático de Psicología José Verdes Montenegro, que en el X Congreso del PSOE, en 1915, había pedido sin éxito la condena de la guerra; Virginia González, miembro de los comités nacionales del partido y del sindicato socialista, la Unión General de Trabajadores (UGT); el periodista y concejal socialista en Madrid, Mariano García Cortés; los jóvenes socialistas de Madrid —entre Manuel Núñez de Arenas y Ramón Lamoneda, con algún peso creciente en el partido—, que en 1915 habían propuesto sin éxito que las Juventudes Socialistas se adhirieran al movimiento de Zimmerwald. En 1917, las militancias estaban ocupadas en el aumento de la conflictividad social y política y su propia movilización

Entre marzo y noviembre de ese año, mientras la Revolución rusa se radicalizaba, la situación política española experimentó una aceleración. La crisis política e institucional de la monarquía dio alas a la movilización, iniciada por el descontento ante la inflación. La crisis política española se venía manifestando desde antes de la guerra, en la fragmentación interna de los partidos Conservador y Liberal, que monopolizaban el Gobierno turnándose en él; en la emergencia de un movimiento regionalista en Cataluña, que ponía en cuestión al propio tiempo el turno entre dos y el sistema centralista; y en el comportamiento intervencionista del rey Alfonso XIII, que ponía trabas a una

solución plenamente parlamentaria de los problemas. El año 1916 acabó con dos apuntes: la huelga general de un día, el 18 de diciembre, convocada conjuntamente por la UGT y el sindicato anarcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) para protestar contra el encarecimiento de los artículos de consumo básico (Martín Ramos, 2008); y la cristalización en el seno del Ejército de un movimiento corporativo de la oficialidad, organizado en Juntas de Defensa, contra el proyecto de reforma militar y en demanda del uso exclusivo del criterio de antigüedad para la promoción de ascensos.

El éxito de la huelga de diciembre llevó a la UGT y a la CNT a renovar el 25 de marzo su pacto de unidad de acción y convocar, sin fecha de inicio, una huelga general indefinida. Era solo un acuerdo genérico para presionar "cambios fundamentales" del sistema, que sobre todo consolidó la presencia del factor social en la configuración de un conflicto de múltiples caras. Poco después, el intento del Gobierno del liberal García Prieto de poner firmes a los oficiales prohibiendo las Juntas de Defensa fracasó por la intervención de Alfonso XIII; el rey forzó la sustitución del Gobierno del liberal García Prieto, promotor de la reforma, por el del conservador Dato, al que instó a la contemporización de las Juntas y su reconocimiento legal, No es preciso aquí seguir el detalle del conflicto militar. Solo interesa señalar que produjo la certeza de la cesión de la Corona y una parte de la élite política a las presiones militares; y también el equívoco de que los oficiales pudieran estar dispuestos a ir más allá de su reivindicación corporativa y contribuir al "cambio del sistema". La decisión de Dato de bloquear la creciente oposición política, cerrando las Cortes de manera anticipada y suspendiendo —por enésima vez— las garantías constitucionales, concluyó el esbozo de un cuadro explosivo que algunos temieron, y otros esperaron, que llegara a ser inesperadamente revolucionario, como el de Rusia.

Los problemas internos del régimen monárquico abrieron espacio para una movilización política iniciada cuando la Lliga Regionalista de Cataluña, dirigida por Francesc Cambó, organizó en julio de 1917 una Asamblea de Parlamentarios como respuesta al cerrojazo de las Cortes. Republicanos y socialistas se sumaron, al tiempo que la movilización obrera, que había discurrido de manera autónoma al conflicto político, alentó la expectativa de que el proceso abierto acabara en un cambio político significativo. La crisis saltó a crisis general, aunque había en el movimiento opositor una discrepancia de fondo sobre medios y objetivos. Republicanos y socialistas contemplaban una revolución política con el cambio de régimen; los regionalistas catalanes solo pretendían forzar la recomposición política de la monarquía, el fin del turno liberal-conservador y

transformar la Mancomunidad de diputaciones catalanas en un subsistema autonómico; y en el anarcosindicalismo se abrigó la ilusión de que todo, y en particular la huelga general, pudiera derivar en una insurrección social. Finalmente, en 1917 no hubo ni ruptura política ni reforma.

La Asamblea de Parlamentarios se constituyó en Barcelona, el 19 de julio, sin más participación que los grupos que la habían impulsado. Las Juntas de Defensa, invitadas, rechazaron asistir, y Cambó no logró que Antonio Maura, conservador disidente de Dato, lo hiciera. El limitado grupo de parlamentarios acordó exigir un Gobierno provisional que convocara Cortes con carácter constituyente y cuando el gobernador civil instó a disolverse acabaron su reunión citándose para un segundo encuentro. El protagonismo pasó entonces a las organizaciones obreras y su huelga general pendiente. De manera inopinada, esta estalló el 13 de agosto, antes de que se hubiera cumplido su preparación. Las direcciones de la UGT y la CNT la precipitaron para coincidir con una huelga nacional ferroviaria impulsada desde la correspondiente federación de la UGT, de manera inesperada para aquellas. Cayeron en la trampa de una provocación prematura del movimiento general organizada por Dato, que manipuló al dirigente ferroviario Cordoncillo; cuando estalló la huelga general, los ferroviarios de la UGT no se unieron y pusieron fin a su propio movimiento, cerrando un canal fundamental de comunicación y extensión de este. La huelga general salió adelante solo donde había una implantación sindical consolidada (Madrid, Barcelona y sus comarcas industriales, Asturias, Vizcaya, Valencia, Zaragoza, y en lugares dispersos de Galicia, Andalucía y las dos Castillas). Tampoco consiguió, ninguna adhesión importante del mundo campesino. Los reveses se acumularon: el día 15 fue detenido el Comité de Huelga —Largo Caballero y Anguiano por la UGT, y Besteiro y Saborit por el PSOE— y la dimensión política de la huelga se diluyó con una desbandada republicana con pocas excepciones; el 16 una cruenta actuación del Ejército acabó con el movimiento en Vizcaya; y los trabajadores madrileños y catalanes abandonaron la huelga el día 18. Aunque en Asturias el paro se mantuvo hasta el 17 de septiembre, el movimiento fue derrotado.

No hubo ninguna “revolución de febrero” en aquellas jornadas de agosto. Los socialistas vieron frustrada su ilusión de promover una ruptura política y la circunstancial coalición opositora quedó disgregada por la espantada republicana. El equívoco sobre las Juntas de Defensa se deshizo, sus miembros no solo no se sumaron a la huelga, sino que se destacaron en su represión. En Asturias, en Barcelona, y especialmente en Sabadell, el regimiento del coronel

Márquez —dirigente principal de las juntas— destacó por su saña contra los huelguistas. Cambó, que condenó la huelga, reunió por última vez la Asamblea de Parlamentarios, en octubre, en Madrid, para aprobar un programa de mera recomposición de la monarquía: el fortalecimiento del parlamentarismo, la sustitución de los senadores de designación por senadores electos —en parte por corporaciones— y la incorporación a la constitución de la región como figura administrativa. Acto seguido pactó de inmediato la entrada de representantes del nacionalismo catalán en el nuevo Gobierno de concentración presidido por García Prieto, el 3 de noviembre, y él mismo se incorporaría al Ejecutivo nacional presidido por Maura a partir de marzo. Todo quedó por resolver, fragilizado. Con cualquier propuesta de cambio en entredicho, la crisis de la monarquía se prolongó con el del golpe de Primo de Rivera en septiembre de 1923. En ese contexto, el salto dado por la Revolución rusa en noviembre de 1917, el fin de la Guerra Mundial y la convulsa posguerra europea de 1919 y 1920, llenaron la sociedad española de fantasmas diferentes. Los fantasmas de la esperanza en la revolución, que nunca llegó a producirse, y los del miedo a ella, que resultaron los dominantes.

En la resaca de la huelga de agosto llegó la noticia de la toma del poder por los bolcheviques y los socialistas revolucionarios de izquierda, el 7 de noviembre (25 de octubre del calendario juliano); repitiéndose en la prensa obrera española las diferencias de reacción registradas en marzo y la consideración del hecho a través del prisma de la Guerra Mundial. El editorial de El Socialista, el 10 de noviembre, lamentaba que el nuevo Consejo de los Comisarios del Pueblo hubiese acordado poner fin a la participación en la contienda: “Si los episodios que hoy contemplamos con asombro y dolor dan por fruto una paz separada, una deserción de las filas de los pueblos aliados ante el enemigo de toda libertad y de toda afirmación del derecho popular, ¿qué va a quedar de aquella revolución soberbia? ¿Qué va a ser de la Rusia redimida?” Por el contrario, en Solidaridad Obrera, el día 11 se indicó: “Los rusos nos indican el camino a seguir. El pueblo ruso triunfa; aprendamos de su actuación para triunfar a nuestra vez arrancando por la fuerza lo que se nos niega y lo que se nos detenta”. Manuel Buenacasa, uno de los líderes anarquistas de la época, elogió en el diario de la CNT a Lenin, “el hombre, más interesante, más noble y más ultrajado de la Europa actual”, y le tendió un puente: “Es posible llegar a la paz como piensa Lenin que debe llegarse, y como nosotros pensamos, por la revolución”. La predisposición anarquista a mirar con mejores ojos que la cúpula socialista lo que sucedía en Rusia, no obstante, tenía alguna voz discrepante. Un autor anónimo, Salvador Seguí o alguien próximo a él, compartió en sus “Notas a la Revolución rusa”

(Solidaridad Obrera, 12 de noviembre de 1917), el temor a que “el triunfo de la Revolución rusa implica de momento que la paz se retarde, que la ansiada paz no llegue todavía, que la guerra continúe”; en consecuencia no se veía capaz hasta que la guerra terminase de “sentar un juicio concreto de esa Revolución que allá en Rusia se desarrolla”.

Las respuestas no fueron más allá. La confusión de noticias, la desazón ante cómo interpretar lo que estaba sucediendo en Rusia y la prioridad de los acontecimientos internos en España apartaron la Revolución rusa del primer plano de las preocupaciones de las organizaciones obreras. En las elecciones generales de febrero de 1918, los socialistas se resarcieron de la decepción del verano anterior. Llevados en volandas por la popularidad conseguida durante el consejo de guerra, que los había condenado como miembros del Comité de Huelga a cadena perpetua el 4 de octubre, Largo Caballero, Besteiro, Anguiano y Saborit fueron elegidos diputados en el seno de la candidatura conjunta de republicanos y socialistas[5]. Además, Pablo Iglesias resultó relegido y Prieto consiguió ser por primera vez diputado, por Bilbao. La representación socialista en las Cortes había pasado de una excepción singular, la de Iglesias, a ser una pequeña fracción. En la calle la conflictividad sindical se reactivó con un creciente número de conflictos, aunque tuviesen menor duración (Martín Ramos, 1992)[6]. La reforma institucional reapareció con el inicio en Cataluña de un movimiento de reclamación de la autonomía, aquella primavera. El escenario se estaba llenando de nuevos indicios de aceleración social y política.

En esas circunstancias el segmento de la afiliación socialista que simpatizaba con la Revolución rusa, todavía reducido y disperso, empezó a aglutinarse en torno a la revista Nuestra Palabra, fundada en agosto de 1918 por Mariano García Cortés y Ramón Lamoneda. La publicación incluyó a un amplio abanico generacional: veteranos como Juan José Morato, José Verdes Montenegro y Matías Gómez Latorre; miembros de la segunda generación socialista como Virginia González, el propio García Cortés, Torralva Beci, Anguiano y Eladio F. Egocheaga; y representantes de la primera generación de las Juventudes Socialistas como Ramón Lamoneda —ya secretario general de la Federación Gráfica Española de la UGT—, Rafael Millá, César R. González y Ramón Merino Gracia. Adquirieron con ello visibilidad y empezaron a trascender en la vida del partido. En el XI Congreso del PSOE, iniciado el 23 de noviembre, Millá y Eduardo Ugarte —del Grupo de Estudiantes Socialistas de Madrid—, secundado entre otros por Lamoneda, censuraron el exceso en la posición aliadófila y el menosprecio a los “maximalistas” rusos, a los que no se había

defendido de los ataques de la “prensa burguesa”. Ugarte propuso, sin éxito, que se enviara un telegrama de simpatía al Gobierno de la República rusa de los Sóviets y otro de protesta a Wilson por la intervención militar aliada contra ella. A instancias de Besteiro, el congreso se limitó a un saludo “entusiasta”, pero retórico, a la Revolución rusa. Anguiano, Núñez de Arenas y Verdes Montenegro no los apoyaron. Quedaron entonces en minoría, aunque por última vez. Esa orientación fue difundiéndose en los meses siguientes, empujada por la radicalización social y política en España, que desbordó al reformismo parlamentarista dominante en el socialismo español y al sindicalismo de la CNT; y por la perspectiva abierta en Europa con la revolución de noviembre de 1918 en Alemania, el fin de la Guerra Mundial y la convocatoria de los bolcheviques a constituir una Tercera Internacional para encauzar aquel momento revolucionario mundial. Sería la Revolución rusa la que enjuiciaría la Gran Guerra y su fin, y no al revés, como había escrito, probablemente, Salvador Seguí.

¿Con quién quedarse?

La primera mitad de 1919 fue, o cuando menos pareció serlo, el momento de la revolución. Los acontecimientos en Europa Central y Oriental reanudaron el ciclo revolucionario mundial iniciado en Rusia dos años atrás, con episodios recurrentes: insurrecciones obreras de enero y marzo en Alemania; república soviética en Baviera hasta el 1 de mayo; revolución húngara desde marzo hasta el 1 de agosto, con extensión hacia Eslovaquia entre junio y julio. Frente a ello, los gobiernos vencedores en la guerra se reunieron en París y Versalles, desde el 18 de enero, para negociar su victoria mediante la reordenación europea y mundial, y frenar la expansión de la revolución socialista. Los dos polos de la ruptura de la socialdemocracia respondieron de inmediato para encabezar la reacción general en favor de sus proyectos, antagónicos. Los bolcheviques convocaron el 24 de enero el congreso para fundar la Tercera Internacional; dos semanas más tarde se reunió en Berna, del 5 al 9 de febrero, una conferencia de partidos socialdemócratas para elaborar una propuesta común ante las negociaciones de París-Versalles. Los resultados de ambas fueron escasos, aunque con significación y trascendencia muy diferentes.

La Conferencia de Berna bordeó el fracaso. No asistieron los belgas, que se pronunciaron como incompatibles con los alemanes; ni los italianos, serbios y rumanos, que rechazaron a los convocantes por constituir el bloque "socialpatriótico" de los tiempos de la guerra. Y su desarrollo quedó marcado por las exigencias del delegado francés, Albert Thomas, de debatir la responsabilidad alemana en la guerra y enjuiciar al Estado soviético. Se acordó una fórmula de compromiso sobre lo primero, estableciendo al Imperio alemán como culpable del estallido de la guerra, pero exonerando a la nueva república alemana, lo que no cerró la puerta a la paz de castigo que tuvo que pagar esta joven democracia; y se discrepó sobre el juicio al Estado soviético. El sueco Branting presentó una moción de condena ideológica y política que establecía un vínculo exclusivo entre socialismo y democracia parlamentaria; frente a la del francés Longuet y el austriaco Fritz Adler, que rechazaron tal condena por no tener base suficiente de juicio y condenaron, en cambio, el bloqueo y la intervención militar de los aliados en Rusia. La conferencia aprobó la moción Branting, por lo que la SFIO[7] y el Partido Socialista Austriaco (SPO) se descolgaron de la reactivación de la Segunda Internacional, objetivo de fondo de la reunión de Berna. De esta salió una imagen malparada de la capacidad de los restos de la Segunda Internacional para reactivarse y dio lugar a una subdivisión de los partidos que se mantuvieron en el campo ideológico de la socialdemocracia, mantenida hasta 1923[8], lo que favoreció el avance de la propuesta "tercerista" en sus inicios.

El Congreso de Moscú, iniciado el 2 de marzo de 1919, tampoco pudo registrar un éxito de convocatoria. El Estado soviético estaba aislado y el proyecto de los bolcheviques seguía siendo muy desconocido fuera de él. Las delegaciones representativas fueron las del PCR-b y los partidos comunistas constituidos bajo su liderazgo en los territorios del antiguo Imperio zarista, junto con las del Partido Comunista Alemán (KPD), el austriaco, el Partido Obrero Noruego, el Partido Socialdemócrata Sueco de Izquierda y la corriente de izquierda del Partido Socialista Suizo. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en Berna, se tomó una decisión orientada hacia la movilización revolucionaria en Europa: constituir formalmente la Tercera Internacional, bajo la denominación de "comunista". Se hizo con mínimos contenidos: la aprobación de un nuevo Manifiesto comunista, su carta de presentación ideológica y política, y la elección de un primer Comité Ejecutivo presidido por Zinóviev. El objetivo era, a partir de esa salida, impulsar la constitución de nuevos partidos comunistas en todo el mundo, en la convicción de que la expansión revolucionaria de finales del invierno, que se inspiraba en la pauta de la Revolución rusa, seguiría

adelante. Quedó pendiente para un próximo congreso la formalización de su estructura organizativa y su línea política básica.

El impacto inicial de ambos encuentros fue más que escaso en España: el de los restos de la Segunda Internacional por lo decepcionante de su desarrollo, el de los fundadores de la Tercera por el desconocimiento. A Berna asistió Besteiro, donde votó la moción Adler-Longuet, pero no pudo trasladar de ella nada que entusiasmara a la militancia obrera. A Moscú no fue nadie. El Socialista no se hizo eco de su convocatoria hasta el 13 de febrero; y Nuestra Palabra, que tampoco lo hizo antes, la acogió con cautela ante su carácter rompedor. No se tenía una noción clara de lo que se estaba planteando. Sin embargo, la decisión tomada en Moscú de constituir la nueva Internacional conectó con la dinámica de conflictividad social ascendente, que en España alcanzó aquel año su cota máxima con las huelgas en la provincia de Barcelona —el ciclo de La Canadiense se inicia en febrero— y Vizcaya, y la movilización campesina en el sur. Una dinámica propulsora de las relaciones de empatía de esa militancia movilizada con las insurrecciones obreras y la proclamación de repúblicas soviéticas en Alemania y Hungría, a las que las páginas de El Socialista dedicaron buena atención. Propulsora también de solidaridad con sus víctimas y sus mártires, de manera singular Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, linchados por los paramilitares en el levantamiento de enero en Berlín.

En diversas agrupaciones socialistas españolas se celebraron actos de homenaje a los dos asesinados. En el más importante, organizado por la Escuela Nueva en la Casa del Pueblo en Madrid, el 24 de enero, intervinieron Núñez de Arenas, Merino Gracia, Virginia González, Álvarez del Vayo, Andrés Ovejero y Daniel Anguiano; todos ellos —a excepción del voluble Álvarez del Vayo y de Andrés Ovejero—, protagonistas poco tiempo después de la formación del comunismo español. La solidaridad es un factor aglutinante de primer orden y así se volvió a demostrar. El sector que protagonizó el mitin del 24 de enero ganó el 27 de febrero siguiente las elecciones al Comité Ejecutivo de la Agrupación Socialista Madrileña (ASM), la más importante en afiliación y en peso cualitativo en el partido[9]. García Cortés y César R. González fueron elegidos presidente y secretario general, en tanto que García Quejido, Núñez de Arenas y Lamoneda lo fueron para representar al partido en el Instituto Nacional de Previsión. En vísperas de la fundación de la Tercera Internacional, el sector más afín a lo que todavía se denominaba “bolchevismo” o “maximalismo” empezó a tener algún espacio de poder en el PSOE; poco tiempo después de esa fundación, desde sus filas se tomó la iniciativa de proponer el debate sobre en qué Internacional había

de situarse el socialismo español.

Ese debate fue inicialmente trompicado. El 9 de abril El Socialista dio la noticia del Congreso de Moscú de manera sesgada, sosteniendo que la primera conclusión era que el partido bolchevique “se compromete a dirigir la lucha del proletariado en todas las naciones”. Los admiradores de los bolcheviques se sintieron moralmente reconfortados; mientras que sus contrarios se reafirmaron en que eso de la Tercera no era más que un instrumento de dominio soviético ajeno al proletariado del resto de naciones. Besteiro intentó desarrollar la segunda perspectiva. En su artículo “Bolchevismo”, publicado en el número extraordinario de El Socialista del 1 de mayo, dijo reconocer que el Estado soviético era un hecho con “verdadera consistencia”, pero que derivaba de las condiciones concretas del Imperio de zar, que solo podría repetirse en algún Estado de Europa occidental —incluida España, si la monarquía seguía su involución— siempre que se dieran aquellas mismas condiciones; dejaba implícito que no era una doctrina general y no podía derivarse de ella una ruptura general. Con su argumento descartaba que los bolcheviques dirigieran la revolución en todas las naciones, como pretendían, según El Socialista. Era un primer no, rotundo, implícito a la Tercera Internacional.

Frente a esa posición, Torralva Beci presentó en la ASM, el mismo mes de mayo, una propuesta para que esta agrupación instara a la Comisión Ejecutiva del PSOE a la convocatoria de un plebiscito entre todas las agrupaciones del partido sobre el ingreso en la Tercera Internacional, que se habría de hacer de manera inmediata si el resultado fuera favorable[10]. La celebración de las elecciones generales de junio de 1919 retrasó la toma en consideración de la propuesta de Torralva Becí; pero así que acabaron aquellas —que dejaron las cosas como estaban, con el Gobierno en manos de los conservadores, apoyados por Alfonso XIII—, el incipiente sector “tercerista” empezó a apoyar de manera explícita la adhesión a la Internacional Comunista. En un mitin de apoyo a las revoluciones en Rusia y Hungría, el 20 de julio en la Casa del Pueblo de Madrid, Torralva Beci y Ovejero llamaron a dar por “sepultada en las trincheras” la Segunda Internacional y pasar a la Tercera. La ASM asumió el debate y el 2 de septiembre se pronunció en favor del plebiscito interno y también del ingreso en la Tercera, por 398 votos a favor y solo dos abstenciones. A pesar de todo, el plebiscito no prosperó. Pablo Iglesias, Besteiro y Largo Caballero reaccionaron en contra de él y consiguieron, el 5 de septiembre, que la Comisión Ejecutiva convocara un congreso extraordinario para mediados de noviembre, para resolver la cuestión de la Internacional y también la de la alianza con los partidos

republicanos.

CAPÍTULO 2

LA BATALLA DE LAS INTERNACIONALES

El ‘tercerismo’ en fase creciente

El camino que se emprendió para resolver la disyuntiva fue largo y estuvo condicionado por el cambio de coyuntura. El fin de la demanda extraordinaria que había generado la Gran Guerra frenó en seco la actividad económica, en la industria, la minería y la agricultura. La patronal reaccionó reduciendo drásticamente el empleo y los jornales y se cerró a la negociación con los sindicatos. La catalana, en particular, echó un pulso a la CNT contra el reconocimiento de la afiliación y la representación sindical, motivo que había originado el ciclo de huelgas de La Canadiense; y lo culminó en el cierre patronal catalán, iniciado en noviembre y mantenido hasta finales de enero de 1920, que dejó a los sindicatos exhaustos, sin capacidad para seguir desarrollando un sindicalismo de masas, y a los trabajadores sin su protección colectiva. El ascenso de la movilización obrera en Cataluña, mantenido desde 1916, fue yugulado. La represión policial y pistolera extendida por el general Martínez Anido, gobernador civil de Barcelona entre noviembre de 1920 y octubre de 1922, remató el acoso y derribo de la expansión anarcosindicalista. Otro tanto ocurrió en Andalucía, donde la movilización social había culminado en la huelga general campesina de Córdoba, en octubre de 1918, y en la extensión de las huelgas generales por toda la región en marzo de 1919, con algunas quemas de cosechas, en realidad solo poco más de una docena constatables como acción deliberada de los campesinos. Los propietarios, refugiados en sus residencias de las ciudades, confiaron en la represión gubernamental de las revueltas, que se materializó con la suspensión de las garantías constitucionales en Andalucía en marzo de 1919, y la declaración del estado de guerra en la provincia de Córdoba en mayo de ese año. El calificado “trienio bolchevique” se diluyó por el efecto combinado del agotamiento de la movilización y la represión gubernamental y social a partir de 1920. La CNT, perseguida policialmente e ilegalizada, quedó prácticamente desmantelada a

comienzos de 1921. Mejor parada salió la UGT, en la que se impuso la supervivencia del proyecto de sindicalismo reformista, que priorizó la consolidación de la organización obrera y la negociación. Esa táctica diferente se puso de relieve en el desenlace pactado de los conflictos de la metalurgia en Vizcaya, entre el verano de 1919 y el primer trimestre de 1920. La UGT vizcaína se negó a secundar las proposiciones de huelga general que le hizo el recién constituido sindicato metalúrgico de la CNT, a lo que la patronal vasca respondió cediendo mejoras salariales y de interlocución sindical, con el matiz añadido de que cuando algún empresario pretendió enrocarse en una posición de enfrentamiento con la UGT Indalecio Prieto recabó, y consiguió, la ayuda del Ministerio de la Gobernación, que amenazó a la empresa con la retirada de la protección policial a la fábrica (Fusi, 1975).

El Congreso del PSOE se reunió, por fin, a partir del 8 de diciembre en la Casa del Pueblo de Madrid. Coincidiendo, desde el día 10, con el II Congreso de la CNT, celebrado también en la capital, en el Teatro de la Comedia. Compartieron el ambiente del reflujo de la movilización, el interés por la Revolución rusa y la Tercera Internacional, y también la indecisión sobre ambas cuestiones. En buena medida, la discusión en ellos sobre la revolución y sus instrumentos organizativos, empezando por la asociación internacional, mantuvo la tensión militante que se debilitaba por la caída de la movilización. Desde aquel momento las fuentes del nacimiento del comunismo español iban a ser dos: el PSOE y sus juventudes y determinados sectores sindicalistas revolucionarios de la CNT. Aunque la decisión final tardó en llegar.

Ninguno de los dos congresos tomó un acuerdo claro. El de los anarcosindicalistas fue el más enredado y ambiguo. La cuestión de la Tercera Internacional fue en él, más que un motivo de interés directo, un argumento de confrontación entre el sector reformista liderado por Seguí, que quería mantener a la CNT en la línea del sindicalismo de masas, y el Comité Nacional y su secretario —entonces Manuel Buenacasa—, que defendía reforzar la movilización de ruptura, revolucionaria, con la ocupación por el sindicato de las empresas en cierre patronal. El rechazo del reformismo se reforzaba dirigiendo la mirada hacia la Revolución rusa y la Tercera Internacional, por más que esa mirada fuese algo de reojo, con importantes reticencias sobre el Estado soviético y el partido comunista que la promovían. La única voz que defendió sin reparos la Tercera Internacional y la integración de la CNT en ella fue la del delegado valenciano Hilario Arlandis, que no consiguió ningún apoyo público. Quienes serían las dos figuras principales del comunismo en Cataluña hasta 1936, Nin y

Maurín, no intervinieron en el congreso. El primero, recién incorporado a la CNT, asistió como delegado sin tomar la palabra; Maurín, que aún no se había afiliado al sindicato, lo hizo desde la tribuna de espectadores.

La resolución final, aprobada por aclamación, fue de compromiso y abiertamente equívoca: empezaba por ratificar los principios sostenidos por Bakunin y se adhería solo provisionalmente a la nueva Internacional por su carácter revolucionario, a la espera de que pudiera celebrarse —y se precisaba en España— el congreso que de manera definitiva estableciera "los principios que rijan la nueva Internacional de obreros". Significativamente, la delegación escogida para asistir al próximo congreso de la nueva Internacional quedó integrada por Ángel Pestaña, Salvador Quemades —con posiciones más sindicalistas que anarquistas— y Eusebi C. Carbó —que compartía las posiciones de Buenacasa—. Ninguno de ellos era probolchevique. A pesar de ello, la opción tercerista habría de cobrar fuerza en el seno de la CNT entre 1920 y 1921, en el contexto de la clandestinidad forzada por su ilegalización y la radicalización de la militancia. La opción definitiva no llegó hasta tres años después del Congreso de La Comedia.

Aunque la decisión del Congreso Extraordinario del PSOE[11] se ajustó más a la convocatoria de la IC, fue también una decisión provisional, dominada por el principio del compromiso y en la práctica imposible de aplicar. La Comisión Ejecutiva expuso de entrada su división. La mayoría —Besteiro, Saborit y Núñez Tomás— contemporizó con el apoyo a la Revolución rusa para acabar defendiendo la permanencia en la Segunda Internacional, que tenía previsto celebrar su congreso de reactivación en Ginebra en la siguiente primavera; en tanto que Anguiano, por la minoría, rechazó esa permanencia y propuso el ingreso incondicional en la IC. Entre ambas posiciones, inequívocas, se interpuso la Federación Socialista Asturiana, encabezada por Acevedo, que, a pesar de manifestarse identificada con la Tercera, propuso mantenerse en la Segunda hasta que se reuniera el Congreso de Ginebra, para intentar depurarla de los elementos que habían traicionado al espíritu de la socialdemocracia durante la Guerra y reunificar el marxismo político con la fusión de ambas internacionales. La Comisión de Política Internacional del congreso, encargada de presentar la resolución a votar, reprodujo con variantes la división. Su mayoría —Verdes Montenegro, Núñez de Arenas, García Cortés— apoyó sin reservas a Anguiano; en tanto que Fabra Ribas y Pérez Solis rechazaron una nueva Internacional, con el argumento de que solo tenía que haber una, y propusieron seguir en la Segunda, asistir a su próximo congreso en Ginebra

defendiendo allí las sanciones individuales y colectivas a quienes hubieran actuado “fuera de los principios socialistas” y trabajar por la fusión en un solo organismo de las secciones afiliadas a la Segunda y a la Tercera. La Federación Socialista Asturiana propuso entonces una adición al voto particular de la minoría de la Comisión: que si en el Congreso de Ginebra no fuese posible la unión de las dos internacionales, “por discrepancias fundamentales con la Tercera Internacional, que los partidarios de la Segunda quieran mantener”, tan pronto como acabara ese congreso, el PSOE ingresara, entonces, en la Tercera Internacional.

El ambiente del debate fue mayoritariamente hostil a la Segunda Internacional y favorable a la Tercera. Ante esa situación, Besteiro, Fabra Ribas y Pérez Solís respondieron aceptando incorporar al voto de minoría de la Comisión la adición final de la Federación Socialista Asturiana: si el Congreso de Ginebra hacía imposible la unión por su propia decisión, ingresar en la Tercera. El principio de compromiso y de unidad, habituales en los congresos socialistas, favorecieron la maniobra y la moción de Fabra Ribas y Pérez Solís, con la adición asturiana, fue aprobada por 14.010 votos de afiliados representados frente a 12.497[12]. Era un acuerdo ambiguo, sin ninguna garantía de que pudiera ser operativo, que sumaba minorías heterogéneas en su posicionamiento ante la nueva Internacional.

La decantación en favor de la Tercera en las filas socialistas se completó en el Congreso de las juventudes, reunido acto seguido al del partido. Con el precedente de la integración en la IC de la Internacional Juvenil Socialista, presidida por Willi Münzerberg, las delegaciones de Madrid y Asturias propusieron la integración de las españolas en la nueva Internacional. No obstante, también hubo debate porque Núñez de Arenas se empeñó en que las juventudes tomaran la misma decisión que el partido, dejando ver las diferencias que se estaban empezando a perfilar entre los partidarios de la Tercera Internacional de ambas organizaciones. Finalmente, Lamoneda, más hábil que Núñez de Arenas, neutralizó el enfrentamiento sosteniendo que no había inconveniente en el ingreso en la Tercera, dado que la Internacional Juvenil Socialista ya lo había hecho; y el congreso así lo aprobó con el solo voto en contra de la delegación de Málaga. Núñez de Arenas, Lamoneda y Saborit —que votó también el ingreso— se desvincularon a partir de entonces de las juventudes y se eligió un nuevo Comité Nacional, propuesto por la delegación de Madrid, con José López y López, presidente; Merino Gracia secretario-tesorero; Luis Portela, vicesecretario-tesorero; y Tiburcio Pico responsable de Renovación.

El Partido Comunista Español

El paso dado por las juventudes fue aún mayor después de que llegaran a la capital española Mijail Gruzenberg, alias Borodin —un veterano bolchevique, miembro del primer aparato de la IC y del Comisariado de Asuntos Exteriores soviético—, acompañado por un tal Jesús Ramírez, alias del estadounidense Richard Francis Phillips[13], que venían de haber impulsado la constitución del Partido Comunista en México. Lo hicieron forzando que la dirección del Partido Socialista Mexicano, una pequeña organización presente en Ciudad de México, se adhiriera a la IC y sustituyera el nominativo "socialista" por el de "comunista". No retuvieron más que una escasa militancia de algunas docenas de miembros, en la convicción de que serían la levadura del nuevo movimiento revolucionario. Borodin "vivía en el reino de las palabras" (Taibo II, 1986) y esa constitución de la sección mexicana de la IC fue un ejemplo meridiano de vanguardismo y sectarismo, que privilegiaba el acatamiento al discurso ideológico por encima del lento trabajo de construcción de un movimiento obrero independiente de Venustiano Carranza, que era lo que entonces se dirimía en México. Poco después del alumbramiento del PCM, Borodin recibió la instrucción de regresar a Moscú. Acompañado del mencionado Ramírez, elegido para representar al PCM ante la Internacional, lo hicieron con escala temporal en España y llegaron a Madrid poco después de los tres congresos, contactando primero con Fernando de los Ríos y a través de este con Mariano García Cortés y el incipiente sector "tercerista" del PSOE. Ni uno ni otro conocían casi nada del movimiento obrero del país, cuya primera información fue la que leyeron en los periódicos, en su trayecto desde el puerto de La Coruña hasta la capital de España. Así y todo, llegaron en un momento clave del inicio del debate socialista sobre las internacionales y decidieron intervenir.

Su acción incidió de manera sustantiva con la autoridad bolchevique de Borodin y el activismo y la labia de Ramírez. Primero actuaron como catalizador de un colectivo heterogéneo y no organizado. Tras entrevistarse con García Cortés, Anguiano, José López y López y Ramón Merino Gracia, se constituyó, a propuesta de Anguiano, un "bloque de izquierdas" interno en el PSOE; de hecho, un comité pro Tercera Internacional. Ante un nuevo aplazamiento del congreso de la Segunda Internacional que debía celebrarse en febrero, el "bloque" acordó

el 10 de enero un manifiesto[14], en el que dio por sentado que no llegaría a celebrarse aquel congreso, lo que dejaba obsoleto el acuerdo tomado en el del PSOE; en conclusión, proponía ejecutar lo que consideraban el sentir absolutamente mayoritario del partido de ingresar en la Tercera Internacional, para poder asistir al congreso que habría de celebrarse en cualquier caso antes de finales de julio de la IC, según decían saber “por conducto fidedigno”. Aunque El Socialista no lo publicó hasta doce días después, al siguiente de que lo hiciera el diario El Liberal y fuera ya imposible no darle publicidad; después de ser publicado en ambos diarios, el manifiesto circuló ampliamente incluso más allá de las bases socialistas.

El conducto fidedigno hubo de ser Borodin, que era quien podía tener en sus manos la relación con la IC. Sin embargo, pudo estar produciéndose una confusión sobre la naturaleza de la reunión; la decisión de convocar el II Congreso dela IC no se tomó hasta finales de abril (Agosti, 1974), y el congreso al que se refería el manifiesto sería en realidad la Conferencia de Partidos Comunistas de Europa occidental organizada por el Buró de Ámsterdam de la IC[15], el 3 de febrero de 1920. Borodin partió a finales de enero de Madrid rumbo a Ámsterdam y la firmeza del “bloque de izquierdas” se tambaleó en los siguientes pasos que tuvo que dar. En línea con la argumentación del manifiesto, el Comité Provincial de la Federación Socialista Asturiana pidió el 25 de enero a la Ejecutiva del partido que se procediera al ingreso en la IC tras consultar a las agrupaciones, pero esta volvió a rechazar el mecanismo del referéndum y remitió a la reunión del Comité Nacional del 21 de febrero la decisión sobre la propuesta asturiana. Para cuando este se reunió había llegado la noticia de la Secretaría de la Segunda Internacional de que se realizaría en Róterdam el 13 de marzo una reunión preparatoria del congreso, que habría de celebrarse el 31 de julio. El dato sirvió a la dirección del PSOE para descartar la propuesta de la Federación Socialista Asturiana y nombrar, en cambio, a Besteiro y Anguiano para que asistieran a la reunión de Róterdam a título informativo; a su regreso, el Comité Nacional tomaría la decisión final, que se mantenía pendiente.

Que Anguiano, Lamoneda y Núñez de Arenas participaran en ese acuerdo, tomado por unanimidad, fue considerado por Ramírez y Borodin como una deslealtad al “bloque de izquierdas” y un error que daba tiempo al sector contrario al ingreso en la nueva Internacional. Y mayor fue su enojo cuando la reunión del “bloque” respaldó a sus tres miembros del Comité Nacional, con la excepción de Merino Gracia, que mantuvo la propuesta del referéndum. Ramírez decidió entonces cambiar de interlocutor y, a través de Merino Gracia, entró en

relación con Andrade y Ugarte, del Grupo de Estudiantes Socialistas. Todos ellos convinieron en forzar el ritmo, prescindir del bloque tercerista del PSOE, que a sus ojos estaba en una dinámica "centrista", y transformar las juventudes en partido comunista mediante un procedimiento singular. Así lo acordaron en una reunión conjunta, el 6 de marzo, en la que decidieron también ofrecer a Anguiano la Secretaría General del nuevo partido. El Comité Nacional Juvenil lo aprobó con la sola oposición de López y López, e ideó un procedimiento supuestamente secreto para evitar que el partido pudiera intervenir: convocar a todas las secciones, con un plazo breve de antelación, para que se reunieran el 15 de abril y debatieran una propuesta del Comité Nacional, que hasta ese día no habrían de conocer. No debió de ser tan secreto; la revista portavoz de las juventudes, Renovación, informó el 17 de marzo que López y López dimitía "por su divergencia con el resto del Comité en una grave y delicada cuestión" y era sustituido en sus funciones por Merino Gracia; el 3 de abril publicó la convocatoria, y el mismo día 15, el comunicado a debatir en el sentido de que el Comité Nacional de las juventudes había decidido convertirlas en el Partido Comunista Español (PC español), adherido a la IC. Desde que pasó a ser dirigida por Merino Gracia, Renovación preparó la decisión final con una crítica sin contemplaciones a Largo Caballero y Besteiro, a las vacilaciones en el PSOE, al seguidismo respecto a la expectativa del Congreso de Ginebra; así como a algunos terceristas que reputaban no revolucionarios, como García Cortés por defender la aceptación de tenencias de alcaldía en el Ayuntamiento de Madrid, si se presentaba la ocasión después de las elecciones municipales del 8 de febrero. Los promotores del naciente PC español estaban en plena sintonía con las posiciones del Buró de Ámsterdam en la asunción de una política revolucionaria que no admitía concesiones al parlamentarismo y las instituciones del Estado capitalista, ni siquiera en términos de participación táctica (Andrade, 1983).

La transformación de la organización juvenil en Partido Comunista Español tuvo un éxito parcial y resultó contraproducente para el avance del "tercerismo" dentro del PSOE. Las Juventudes Socialistas ya se habían adherido como tales a la IC, pero su conversión en partido no fue seguida por el grueso de las secciones de Asturias y Vizcaya, que sumaban más de la mitad de sus afiliados. El nuevo partido debió alcanzar un máximo de 2.000 militantes, de los que unos 400 correspondían a Madrid, incluidos los estudiantes. Por su parte, las Juventudes Socialistas fueron reorganizada por José López y López y César R. González, que mantuvieron la adhesión a la Internacional Juvenil Comunista y la defensa del ingreso de todas las organizaciones socialistas españolas, al unísono, en la IC. En abril de 1921, contaban con algo más de 3.500 afiliados. La ruptura

significó que una parte importante de los 7.800 jóvenes afiliados en diciembre de 1919 se desorganizó, no formando parte del PC español ni manteniéndose en las juventudes.

Anguiano, además, rehusó ser el secretario general, aunque mantuvo relación con el grupo dirigente de aquel primer partido comunista. Incluso aceptó hacer de intermediario con el Buró de Ámsterdam durante su estancia en Róterdam. No lo pudo cumplir, al encontrarle la policía de frontera holandesa la documentación que Ramírez le confiara a tal efecto y serle prohibida la entrada al país, ante la indignación de Besteiro por la acción de su compañero de delegación. Sin Anguiano, la incidencia en la UGT fue nula. Todo el "tercerismo" que pudiera haber en la central sindical socialista correspondía al sector contrario a la iniciativa de Ramírez y los jóvenes madrileños; algo que reforzó en estos el rechazo al sindicalismo y la simpatía hacia el consejismo de los comunistas holandeses, a los que defendieron contra Lenin, que los había criticado en su alegato contra el izquierdismo. Andrade calificó al líder bolchevique de oportunista. Ese alineamiento no tuvo futuro. A la condena de Lenin, en abril, de las posiciones "infantiles" de los holandeses se sumó una redada policial que puso fin a la existencia del Buró de Ámsterdam, lo que no impidió que sus posiciones siguieran siendo mencionadas por los socialistas españoles contrarios a la IC, poniendo a los "terceristas" en el mismo saco del antiparlamentarismo y el antisindicalismo. La formación del PC español abrió un frente fallido en la batalla de las internacionales en España: desvió fuerzas del frente principal, entorpeció los movimientos de los que actuaban en este y favoreció la reacción de sus contrarios.

Apogeo equívoco del 'tercerismo'

La disyuntiva entre Segunda y Tercera Internacional se hizo más compleja cuando el USPD acordó, en diciembre de 1919, proponer un tercer movimiento en favor de la reconstrucción de una Internacional revolucionaria, que incluyese a las formaciones que no compartían la reactivación en curso de la Segunda Internacional. Esa moción "reconstructora" fue la salida para mantener la unidad en partidos muy divididos, con una orientación mayoritaria de rechazo del reformismo que, sin embargo, no habían tomado la decisión de integrarse en la

IC. A ella se adhirieron el Partido Socialista Suizo, el Partido Laborista Independiente y la SFIO. El movimiento de los “reconstructores” podía ser, además, un puente tendido hacia la IC para negociar las condiciones definitivas de constitución de la Internacional alternativa a la Segunda. El USPD decidió enviar una delegación a Moscú para defender sus criterios, que incluían el de la autonomía táctica de las secciones nacionales, y la SFIO estaba camino de hacer lo propio. En la medida en que el programa, la línea política general y los estatutos de la IC habían quedado para su II Congreso, parecía existir un amplio campo de negociación. Besteiro y Anguiano conocieron en París, camino de Róterdam, la propuesta “reconstructora” que les expusieron los socialistas Cachin y Frossard, así como la intención de convocar también una conferencia del nuevo movimiento en Suiza en fecha próxima. A su regreso a Madrid, informaron de esa iniciativa al Comité Nacional del PSOE —sus informes se publicaron en El Socialista del 28 y 29 de abril— sin mostrar ningún interés por ella. Anguiano porque la consideraba ociosa y Besteiro porque puso en duda que las demandas de autonomía táctica pudieran ser aceptadas “por los rusos”. La opción “reconstructora” no suscitó en un principio mayor interés en el socialismo español, solo la defendió entre sus cuadros dirigentes Fabra Ribas, que entonces dirigía el diario del partido. No obstante, la prolongación del conflicto en el socialismo español acabó haciendo de ella la vía definitiva.

Mayor atención se puso a la Conferencia de Róterdam, de la que solo pudo informar Besteiro. La reunión había tenido una muy limitada asistencia, reducida a los laboristas ingleses; los socialistas suecos, belgas y neerlandeses; los mencheviques georgianos; y una representación de los socialistas revolucionarios rusos. A pesar de ello, Besteiro sostuvo que la presencia laborista aseguraba la vida de Segunda Internacional, que había que ir a la celebración del Congreso de Ginebra y rechazar, en cambio, el ingreso en la IC, porque significaría el aislamiento del PSOE del socialismo occidental. Apostillando que, mientras el Partido Laborista estuviese en ella, la Segunda “existe y es capaz de acción”. Expresó además la esperanza de una aproximación entre los “reconstructores” y la Segunda Internacional, a condición de que esta respetara y defendiera la Revolución rusa y el Estado soviético frente la intervención extranjera, y dejara de considerar antagónicos los conceptos de “dictadura del proletariado” y “democracia”, como había hecho Branting un año atrás.

Oídos Besteiro y Anguiano, el Comité Nacional no tomó ninguna decisión y la remitió a un próximo congreso del partido, sin fijar la fecha. Entretanto la

situación se precipitó. A la confirmación de la celebración del Congreso de Ginebra para el 31 de julio, se sumó el acuerdo del Comité Ejecutivo de la IC el 22 de abril de iniciar su II Congreso el 19 de aquel mismo mes de julio. Presionado por las partes y la inmediatez de las fechas, el Comité Nacional del PSOE fijó un nuevo congreso extraordinario para el 19 de junio. Desde aquel momento se abrió una dura confrontación para configurar el congreso y orientar los términos que en él se habrían de debatir. El primer choque fue en el seno de la Comisión Ejecutiva, por la determinación del orden del día, en una reunión a la que asistieron seis de sus miembros, cuatro de ellos partidarios de ir a Ginebra —Besteiro, Largo Caballero, Saborit y Lucio Martínez Gil— y solo dos "terceristas" —Lamoneda y Núñez de Arenas[16]—. La mayoría impuso un prolijo orden de nueve puntos, desglosando en dos posibilidades la opción de entrar en la IC: hacerlo "incondicionalmente" o "con condiciones". Además, se añadía la pregunta —que apuntaba hacia la IC— sobre si el PSOE había de reclamar su libertad táctica en cualquiera de las dos opciones. Finalmente, el punto octavo establecía una disyuntiva absoluta entre la lucha por las "mejoras inmediatas" del proletariado, mediante la relación con la patronal y la participación en las instituciones y corporaciones del Estado, o trabajar por "la aceleración de la revolución social". Esta última era una argumentación de parte que se apoyaba en la presunción de la vigencia de la línea del desaparecido Buró de Ámsterdam y constituía una manera de centrar el debate en la línea de defensa de los partidarios de la Segunda Internacional reformada. Lamoneda y Núñez de Arenas protestaron en la reunión, sin éxito, y no tuvieron más salida que publicar en El Socialista las discrepancias respecto al orden del día, que consideraban parcialmente tendenciosa.

A lo largo de las siguientes semanas, el diario del PSOE publicó artículos de la mayoría y la minoría de la Comisión Ejecutiva, también de Fabra Ribas, Acevedo, Pérez Solís, Comaposada y, finalmente —el mismo día del congreso—, de Pablo Iglesias. El argumentario de la mayoría insistió en el supuesto rechazo de "la tendencia llamada comunista" a la lucha por las mejoras inmediatas y la participación electoral e institucional y en la exigencia de no aislarse de las organizaciones obreras y socialistas europeas. El documento de la minoría consideró confusa la posición de los "reconstructores" y negó que ingresar en la IC significara suprimir la participación institucional ni la acción sindical y la lucha por mejoras materiales, lo que distinguía a la IC era era que había que seguir utilizando todos esos "medios de acción como instrumentos revolucionarios y no de colaboración". Finalmente reconocían que el ingreso en la nueva Internacional implicaría modificaciones tácticas, precisamente aquellas

que subrayarían la personalidad revolucionaria del partido, que se aceptarían, practicando la misma disciplina que se había venido llevando a cabo en el PSOE. Fabra Ribas se quedó solo en su defensa de los “reconstructores”, y Pablo Iglesias defendió ir a Ginebra y a la conferencia de los “reconstructores” para abogar, en ambas partes, en favor de una sola Internacional, y dirigirse al “Comité socialista de Moscú” para que hiciese por su parte todo lo posible por que hubiese una sola Internacional Socialista.

El II Congreso Extraordinario empezó con una maniobra de Largo Caballero. Tras darse a conocer la acreditación de las delegaciones, sostuvo que el congreso era poco representativo al sumar estas la representación de 12.491 afiliados, una escasa cuarta parte del total de los casi 53.000 afiliados que registraba entonces la Secretaría Administrativa. Su objetivo era que se pusiese a discusión la anulación del congreso y pasaran los puntos del orden del día de la Comisión Ejecutiva a referéndum interno del partido. Núñez de Arenas lo rebatió, recordando que en el congreso solo tenían derecho a estar representados los afiliados al corriente de cotización, condición que únicamente cumplían 19.526 afiliados. De acuerdo con ese derecho, las delegaciones representaban el 64% y no había base para cuestionar la representatividad del congreso; así se reconoció el congreso y no se tomaron en consideración los reparos de Caballero. El incidente fue el anuncio de una agria confrontación, que prosiguió acto seguido al rechazarse el orden del día del Comité Ejecutivo y elegir la formación de una ponencia que propusiera los temas a debate y el dictamen de resolución. La correlación se invirtió con respecto a la Ejecutiva. La mayoría de la ponencia —Anguiano, García Cortés, Mancebo y Vicente— propuso “ingresar incondicionalmente en la Tercera Internacional”; además, su dictamen reconoció una lucha de clases sin compromisos con los partidos burgueses y los socialistas nacionalistas, la unión con aquellas organizaciones que la concibieran así —es decir, con la CNT—, acción de masas para la lucha por el poder para la clase trabajadora, dictadura del proletariado y sóviets como democracia proletariado y resolución de las cuestiones tácticas en cada país y las dudas y diferencias en el seno de los organismos internacionales. La minoría —Acevedo, De los Ríos y Suárez— condenó a la Segunda por su fracaso en la Gran Guerra, pero reprochó a la IC que estuviera dominada por el partido ruso. Así y todo, propuso también la incorporación a la IC, si bien condicionado a tres bases: autonomía del PSOE en la táctica de lucha, derecho a revisar en el congreso del partido la doctrina y los acuerdos de la Internacional, y representar en esta el propósito de unificación de las fuerzas socialistas defendido por la SFIO y el USPD, a cuyas reuniones al efecto habría de acudir el PSOE.

La asistencia a Ginebra y el mantenimiento en la Segunda Internacional quedaron descartados por ambos dictámenes. A pesar de ello, Pérez Solís, Largo Caballero, Besteiro y Fabra Ribas siguieron reclamando la participación en el Congreso de la Segunda Internacional. El más agrio en el rechazo de las posiciones "terceristas" fue Besteiro, que insistió en basar sus críticas en los textos del Buró de Ámsterdam, aun reconociendo que este ya había desaparecido, y en defender que el PSOE había de ir donde estuviere el Partido Laborista británico. No fue el mejor discurso de Besteiro, que acusó a los comunistas de tener "furores de mujeres histéricas" y pretendió desacreditar el principio de la "acción de masas" y defender el "régimen sindical" de la UGT con una frase de vergüenza ajena: "Por aspirar a radicalismos opuestos a este funcionamiento han muerto Carl Liebknecht y Rosa Luxemburgo". Por lo demás López y López dio en el duro clavo de la realidad afirmando que no podía ser el PSOE quien impusiera condiciones de ingreso en la IC porque era a esta a la que correspondía establecerlas a quienes quisieran ingresar, dejando desnudo el artificio de la propuesta de la minoría.

Ante la inclinación mayoritaria hacia la IC, Fabra Ribas, que había defendido la opción de los "reconstructores", se sumó al dictamen de la minoría como mal menor. La defensa directa de los "reconstructores" había dejado de ser efectiva, pero la propuesta de la minoría significaba una opción de recambio, que mantenía al partido en el terreno de la socialdemocracia sin plantear un enfrentamiento perdedor con la IC. La minoría recogió de inmediato su cambio de posición y, para hacer más aceptable su propuesta a los "terceristas" de convicción, retiró la alusión a participar en otros congresos internacionales que tuvieran propósitos unificadores. Por su parte la mayoría sustituyó el término "ingreso incondicional" por "ingresar inmediatamente". Fue esta última una decisión equivocada y tuvo una deriva imprevista, cuando la delegación asturiana anunció que, dado que el mandato de su federación era el "ingreso incondicional" y este se había sustituido por el "inmediato", votaría teniendo en cuenta el debate realizado en el congreso, esto es, en favor de condicionar el ingreso. Ese condicionamiento, tal como había señalado López y López, era imposible. La minoría no solo pedía autonomía táctica, algo que se discutió a lo largo de la historia de la IC, sino también el derecho a no acatar los acuerdos de los órganos supremos de la nueva Internacional, lo que hacía imposible un internacionalismo efectivo que no volviera a caer en el hundimiento de 1914.

El comportamiento de la delegación asturiana (representaban entre 1.400 y 1.500 votos) debió resultar decisivo. La propuesta del ingreso inmediato, que recogía

el contenido real del “ingreso incondicional”, obtuvo 5.016 votos; ganó la de ingresar si se aceptaban las condiciones, con 8.269 votos; los delegados que se abstuvieron representaron 1.615. Se acordó, asimismo, que De los Ríos y Anguiano integraran la delegación que habría de ir a Moscú. La moción vencedora no solo era equívoca, con tan pocas posibilidades como la que se había adoptado en diciembre, sino que se apoyaba en una amalgama heterogénea de posiciones, entre las que figuraban los que habían seguido el consejo del mal menor de Fabra Ribas, y el retorcimiento del mandato de la Federación Asturiana. A pesar del ambiente dominante en el congreso, y más que probablemente en el partido, ese resultado fue una derrota política de los partidarios de la IC. El ánimo de la solución de compromiso prevaleció también en la elección de la nueva Comisión Ejecutiva. Pablo Iglesias siguió como presidente del partido por aclamación, y por votación se eligió a Besteiro como vicepresidente, a Anguiano como secretario general, así como a Largo Caballero, Lamoneda y Núñez de Arenas, entre otros. Los delegados seguían persiguiendo la unidad, pero esta se había empezado a quebrar de manera irreversible. Besteiro y Largo Caballero rechazaron participar en la nueva Ejecutiva y tuvieron que ser sustituidos por García Quejido y Fernando de los Ríos.

Las dimisiones de Besteiro y Largo Caballero no fueron una renuncia, su beligerancia se trasladó al XIV Congreso de la UGT, que empezó tan pronto como acabó el congreso del partido, con una asistencia de unos 133.000 federados, el 61,6% de la afiliación que tenía en ese momento el sindicato. Largo Caballero no aceptó en él ninguna transacción con los “terceristas”, ni siquiera en los gestos. Defendió la permanencia en la Federación Sindical Internacional, la aceptación del nuevo orden internacional establecido en los tratados de Versalles y que había de gestionar la Sociedad de Naciones, la plena integración en la Oficina Internacional del Trabajo y el mantenimiento de la política de lucha por las mejoras materiales, preferentemente mediante la negociación, y de participación en las instituciones del Estado. Las intervenciones de Anguiano, Acevedo, Egocheaga y Núñez de Arenas no obtuvieron apenas eco. El congreso rechazó alinearse con la reciente posición mantenida por el PSOE, cosa que defendió Núñez de Arenas como mal menor, y por el contrario aprobó de manera abrumadora mantenerse en la Federación Sindical Internacional, por 111.000 votos a favor frente a 18.000 en contra y 3.900 abstenciones. Largo Caballero decidió capitalizar en exclusiva esa victoria y se opuso a la propuesta de mantener la Ejecutiva saliente, hecha por Manuel Ferreiro, delegado del Sindicato de la Alimentación de Madrid, que habría significado la continuidad de Anguiano y Lamoneda. Se votó una nueva y el resultado fue contundente.

Pablo Iglesias fue relegido presidente; Besteiro, vicepresidente; y Largo Caballero, secretario general. Ningún “tercerista”, ni siquiera ningún partidario del ingreso condicionado, fue elegido ni como vocal. Largo Caballero y Besteiro convencieron a la UGT de que la IC estaba en su contra.

Gestión de un imposible

El equívoco acuerdo del II Congreso Extraordinario se dio de bruces con la realidad que López y López había advertido. Lenin, Trotsky y Zinóviev habían virado en los primeros meses de 1920 en favor de la formación de partidos comunistas de masas, tomando en cuenta la simpatía que se había extendido en la socialdemocracia hacia la idea de una Tercera Internacional; también en favor de una mayor ductilidad táctica en relación con los sindicatos y la participación electoral en una Europa en la que tras la guerra avanzaba la universalización del sufragio masculino, e incluso el reconocimiento del femenino, fuera total —Alemania— o parcial —Reino Unido—. El objetivo pasó a ser atraer al proyecto revolucionario internacionalista a aquellos partidos socialistas que ya estaban en posición de ruptura con la Segunda Internacional y en los que, en mayor o menor medida, se estaba planteando el ingreso en la Tercera. Ahora bien, si posiciones como las de los comunistas holandeses podían, en el criterio de la dirección de la IC, alejar a la gran masa trabajadora europea de la Internacional, la atracción de los socialistas que abandonaban la Segunda Internacional tenía un riesgo: que el proyecto revolucionario pudiera desestabilizarse desde dentro, en nombre de una unidad obrera y de las ilusiones “reconstructoras”. Por todo ello, se decidió recibir de la manera más abierta a todas las delegaciones que acudieron al II Congreso de la IC, desarrollado entre el 19 de julio y el 7 de agosto, pero cerrar en él no solo las condiciones de admisión, sino unos estatutos que establecieran formalmente su condición de partido mundial y no de plataforma mundial de partidos. Por otra parte, se optó por constituir una Internacional Sindical Roja (ISR) para resolver el sinsentido de integrar a los sindicatos revolucionarios en la sección nacional de un partido y potenciar un movimiento sindical que aceptara el liderazgo de la IC y plantara cara en su terreno al sindicalismo reformista.

Las condiciones de admisión se materializaron en un documento de 21 puntos, que contemplaban aspectos fundamentales de la concepción política y

organizativa. Se rechazaban el reformismo y el orden de Versalles, y todos debían defender las repúblicas soviéticas y apoyar los movimientos de emancipación colonial; la táctica y la organización de los partidos había de prever al propio tiempo políticas de masas y mecanismos de preparación de procesos insurreccionales. Los partidos serían secciones nacionales de la IC y todos los acuerdos del Congreso Internacional y del Comité Ejecutivo en él elegido eran de obligado cumplimiento; y todas sus secciones adoptarían la denominación de “comunista” y el gentilicio del Estado, correspondiendo a cada uno de estos una sola sección. Como garantía contra el reformismo, y del abandono de toda tentación “centrista” de compromiso, se habría de excluir del partido a los principales representantes de esas posiciones —y se daban como ejemplo los nombres de Turati, Kautsky, Hilferding, Longuet y Mac Donald—; separar de los grupos parlamentarios y las instituciones centrales del partido los elementos dudosos; y combatir para separar igualmente de sus responsabilidades en el movimiento obrero a reformistas y centristas. En el plazo de cuatro meses a partir de la celebración del II Congreso, los partidos habían de realizar el suyo propio para pronunciarse sobre las 21 condiciones, y no serían admitidos aquellos que las rechazaran. Los estatutos daban forma a la Internacional como un partido, regido por el centralismo democrático, en el que el órgano máximo eran los congresos mundiales, de carácter anual, así como el Comité Ejecutivo de la IC como organismo permanente de dirección. Este estaría integrado por cinco miembros del partido del país sede del congreso más un representante por cada uno de los 12 partidos que cada congreso considerase más importante.

La cláusula de prima al anfitrión estaba en las tradiciones del movimiento obrero, tenía que interpretarse a la luz de la celebración anual de los congresos y la previsión, optimista, de que los avances revolucionarios pudieran proporcionar en el futuro próximo nuevas sedes para la IC. No se cumplieron tales previsiones, entonces centradas en el desarrollo de la guerra entre la República de los Sóviets y la Polonia instituida por el Tratado de Versalles; una victoria, se pensaba, redundaría en la reactivación de la movilización revolucionaria en Alemania. A mediados de agosto, ya acabado el congreso y contra pronóstico, las tropas polacas de Pilsudsky rechazaron el asalto a Varsovia y contratacaron obligando a los soviéticos a solicitar el armisticio, firmado el 18 de octubre. Polonia no cayó de su lado izquierdo, y no hubo opción para un estímulo de emulación para la hipotética revolución alemana. El Estado soviético quedó aislado hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y la cláusula del país anfitrión se convirtió en una condición permanente, manteniendo el Partido Comunista Ruso, no ya por autoridad, sino por norma, la

preeminencia en la IC.

Por parte española, solo Ángel Pestaña, enviado por la CNT, llegó a tiempo de participar. Lo hizo en su segunda sesión, integrado en la ponencia sindical, en la que criticó el papel dirigente atribuido al partido. Asistió también a la conferencia preparatoria del congreso constituyente de la ISR, a celebrar en 1921, cuyo documento firmó haciendo constar que lo hacía como afiliado a la CNT y no en su representación, dado que la propuesta no existía en el momento del Congreso de La Comedia. A Pestaña le costó largo tiempo regresar a España y, cuando llegó a Barcelona, fue para ser detenido a pie de barco por orden de Martínez Anido. No pudo dar cuenta de su viaje a la CNT, en la que, por otra parte, se mantuvo una corriente de simpatía —de proporciones difíciles de evaluar, aunque minoritaria— por la IC, identificada como una opción internacionalista revolucionaria.

Merino Gracia, De los Ríos y Anguiano llegaron a Moscú cuando el congreso ya se había acabado; el primero por la lentitud de un viaje que tenía que hacer en clandestinidad; y los representantes del PSOE porque optaron por hacerlo legalmente y hasta septiembre no obtuvieron el visado soviético. Merino Gracia llegó el 27 de agosto, se entrevistó con Lenin y consiguió que el Comité Ejecutivo de la IC reconociera al PC español como sección propia. El 19 de octubre llegaron a la capital soviética los representantes del PSOE y, a pesar del informe negativo que de ellos hizo Merino Gracia, fueron acogidos sin problemas, alojados en el Hotel Lux, y recibidos por el Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista (CEIC) y por Lenin (Zapatero, 1999). Ante el CEIC De los Ríos aclaró que conocían ya los 21 puntos y la respuesta que la IC había dado a todos aquellos partidos que habían planteado condiciones propias para su integración. A pesar de ello, siguieron el viaje, porque Paul Levi, secretario general del KPD, con el que estuvieron en agosto en Berlín, les animó a hacerlo, diciéndoles que solo el CE de la Internacional podía darles la respuesta definitiva sobre la cuestión de las condiciones; consejo que aceptaron, dijeron ante el Ejecutivo, porque ese era el mandato del congreso y su deseo personal. Ambos estaban interesados en conocer por ellos mismos la realidad soviética.

Ante el CEIC manifestaron ser representantes de dos corrientes y pidieron aclaraciones sobre los 21 puntos; en particular sobre el segundo —constitución en el seno del partido de organismos clandestinos—, en vistas al momento insurreccional; el decimosegundo, acerca del centralismo democrático; y el decimosexto, que establecía la obligatoriedad de las decisiones de los congresos

de la Internacional, aunque también el compromiso de que, dada la variedad de las condiciones de lucha en cada país, solo se aprobarían resoluciones generales obligatorias “en los problemas donde ello sea posible”. Por lo demás, De los Ríos expresó a Bujarin sus discrepancias sobre el concepto de la revolución mundial, mientras que Anguiano se sintió identificado con él. La reunión con Lenin fue el 10 de diciembre, mientras esperaban la respuesta definitiva del CEIC a las condiciones para el ingreso presentadas por el PSOE. No trataron con él la cuestión de la Internacional, sino que debatieron sobre el sistema soviético, cuyo régimen de dictadura aceptó Lenin que era excepcional, pero que había de mantenerse cuando acabara la guerra civil por las grandes exigencias de la reconstrucción económica. Fue entonces cuando De los Ríos sacó la conclusión del rechazo de Lenin a la instauración de un régimen político plural, que incluyera las libertades formales clásicas; y Anguiano la ratificación de la hegemonía absoluta del Partido Comunista, el desdibujamiento del sóviet y la subordinación absoluta del sindicalismo. Tres días después recibieron la respuesta de la IC, que rechazaba las condiciones e instaba a aceptar los 21 puntos, como había hecho la mayoría del USPD en su congreso de octubre y haría la SFIO a finales de diciembre. El camino del ingreso en la IC no podría ser de unidad, como habían esperado los “terceristas” del PSOE, sino de ruptura; quedaba por ver si, como en aquellos dos partidos, sería el de la mayoría. De los Ríos y Anguiano regresaron a España, llegaron a Madrid el 28 de diciembre, se reunieron con la Comisión Ejecutiva a la que presentaron sus dictámenes diferentes y esta pasó la decisión al Comité Nacional, que el 15 de enero decidió convocar un tercer y definitivo Congreso Extraordinario.

CAPÍTULO 3

RUPTURA FINAL Y FUNDACIÓN DEL PCE

Fase menguante

Desde el verano de 1920 la situación en el PSOE había evolucionado en contra del “tercerismo”. Su razón de fondo fue el agotamiento de la movilización social que se manifestó por toda la geografía española. En Cataluña, con el agotamiento de la CNT, sometida a los golpes sucesivos del cierre patronal y la represión sanguinaria de Maestre Laborde, gobernador civil de Barcelona de diciembre de 1919 a junio de 1920, y Martínez Anido, que lo fue desde noviembre de 1920 hasta octubre de 1922; en Andalucía, con la remisión de las movilizaciones campesinas y la agotadora y derrotada huelga minera en Riotinto de 1920, la única que la UGT, dirigida localmente por Egocheaga, mantuvo como acción de fuerza. La expectativa del cambio revolucionario chocó con la realidad de ese agotamiento y la quiebra de las organizaciones que persistían en una movilización de conflicto. Además, el retroceso de las expectativas revolucionarias fue general en Europa, con el decaimiento de las huelgas en Francia y el rechazo de la Confederación General del Trabajo francesa a una huelga general preinsurreccional el 1 de mayo, así como en Italia tras el fracaso del movimiento de los consejos y de su ocupación de fábricas en septiembre de 1920. El fin de la guerra soviético-polaca puso el cierre a aquella expectativa, con el estrambote final de un llamamiento del KPD a un nuevo movimiento revolucionario en marzo de 1921, que tuvo que ser desconvocado por el propio partido a los pocos días de querer impulsarlo (Hajeck, 1984). El atractivo de la revolución y la República de los Sóviets se deslució. Una vez que la intervención militar de Francia y el Reino Unido cesó, entre la primavera y el verano de 1920, la guerra que enfrentaba al Estado soviético era una guerra civil desnuda y con componentes difíciles de asimilar en occidente, entre ellos, el aplastamiento de la rebelión campesina dirigida por el anarquista Majnó en Ucrania, la invasión de Georgia —gobernada por los mencheviques— por el Ejército Rojo en febrero de 1921 y la represión de la sublevación de Kronstadt, un mes más tarde.

En ese contexto, la iniciativa “tercerista” no dejó de perder fuelle. Todavía a la vuelta del verano los partidarios de la IC tuvieron dos buenas noticias. Primero, el pacto de unidad de acción entre la CNT y la UGT, hecho público el 3 de septiembre para conseguir el fin de la represión y el retorno a la legalidad constitucional; que, sin ser ni de lejos la unificación deseada por los “terceristas”, y aún más por el PC español, suponía, al menos, un restablecimiento de relaciones entre los sindicatos, mediante el cual esperaban que la UGT no cayera definitivamente en el reformismo. Y segundo, la renovación del Comité de la ASM, el día 7 del mismo mes, en la que se revalidó la mayoría tercerista; con Mariano García Cortés, presidente; Evaristo Gil, vicepresidente; y José López y López, secretario general, aunque hubo vocales opuestos a esa mayoría, como Trifón Gómez. Aún no se habían roto las relaciones y la mayoría “tercerista” no impuso un comité monocolor. Fue el canto del cisne.

A finales de octubre el Comité Ejecutivo de la ASM intentó boicotear las elecciones a representantes de la UGT en el Instituto de Reformas Sociales. La participación en el Instituto era para los “terceristas” una expresión del más absoluto reformismo y el comité madrileño acordó que los miembros de su agrupación se abstuvieran de ser candidatos y de votar. Esta decisión desafiaba a la dirección de la UGT, llevaba al partido a un enfrentamiento abierto con el sindicato y a los terceristas a una imagen de connivencia con la táctica anarcosindicalista de acción directa. Fue un solemne patinazo. La Comisión Ejecutiva del PSOE tuvo que reconocer —Lamoneda dijo que “bien a su pesar”— que ninguna agrupación ni organismo dirigente del partido podía imponer tal veto, ya que aquella participación era un acuerdo de congreso que obligaba a todos hasta que no fuese revocado en otro congreso.

Las relaciones y las formas estaban empezando a romperse. Y lo hicieron de manera definitiva con motivo de la convocatoria, aquel mismo mes de octubre, de nuevas elecciones generales, que habrían de celebrarse el 19 de diciembre de 1920. La dirección de la UGT condicionó el apoyo electoral al PSOE a que este no presentara ningún candidato hostil a la Federación Sindical Internacional (Arranz, 1986) y su maniobra tuvo efecto. En la ASM, la votación de las candidaturas, en la que participaron 412 afiliados, atribuyó los seis primeros puestos —la máxima atribución por mayorías— en favor del sector reformista: Pablo Iglesias, De los Ríos, Besteiro, Largo Caballero, Prieto y Llaneza. No entró ningún candidato “tercerista“, solo unos pocos consiguieron ser candidatos del PSOE por otras circunscripciones: Ovejero, García Cortés, Lamoneda, López

y López, Serra y Moret, pero ninguno de ellos resultó elegido.

En el camino hacia la celebración de las elecciones la confrontación interna fue creciendo. Ante la represión impulsada por Martínez Anido, el abogado republicano Francesc Layret, próximo a los sindicalistas, propuso presentar una candidatura obrera en Barcelona con elementos de su formación, como Lluis Companys, sindicalistas y socialistas. Para ello se entrevistó el 29 de noviembre en Barcelona con García Quejido y Lamoneda, que compartieron la posibilidad, y se llegó a hablar de Ovejero como parte de esa candidatura. No pudo concretarse nada; al día siguiente, Layret fue asesinado por encargo de Martínez Anido y el proyecto acabó con su muerte. Lo que es peor, las relaciones entre anarcosindicalistas y socialistas volvieron a torcerse. La CNT, que había declarado una huelga general en Barcelona contra la represión, propuso a la UGT extenderla a toda España y de manera indefinida. No era una huelga revolucionaria como se ha llegado a escribir, su objetivo era parar el salto cualitativo de la represión, pero la dirección de la UGT no estaba dispuesta a lanzarse a un movimiento indefinido que podía apartarla de la senda que había tomado y que, sin ninguna duda, interferiría en las elecciones. Por el contrario, el PC español dio su apoyo, y una parte de los socialistas madrileños debió de hacerlo, ya que la dirección de la Casa del Pueblo lo hizo también en principio, aunque no con carácter indefinido. La Comisión Ejecutiva de la UGT logró controlar la situación en una reunión conjunta con la del PSOE y la Junta Directiva de la Casa del Pueblo. No tuvo problemas, la Ejecutiva del partido no quiso tomar una decisión orgánica, que consideró competía a los dos sindicatos, y entre los terceristas de la Ejecutiva del PSOE no existía tampoco una convicción clara sobre el movimiento. La CNT acabó convocando por su cuenta la huelga el 12 de diciembre y dos días más tarde el Comité Nacional de la UGT la descartó de manera definitiva. Con lo que el pacto del 3 de septiembre quedó roto y la militancia socialista aún más enfrentada en vísperas del 19 de diciembre.

Las elecciones no ratificaron la posición socialista en el Congreso de los Diputados, ni las expectativas creadas por el gran salto que el partido había dado en las anteriores municipales, en las que había pasado de 82 a 578 concejales en toda España. Se bajó de seis a cuatro diputados: Iglesias y Besteiro por Madrid, Prieto por Bilbao y Saborit por Oviedo. Funcionó la máquina de control electoral de la Restauración y el éxito de las municipales no se trasladó a las generales. Con todo, lo más negativo fue el cisma que se creó en Madrid. Tras el primer cuento de votos, El Socialista se hizo eco de que una parte de la afiliación

madrileña, que obviamente solo podía ser tercerista, había boicoteado las elecciones dejando de repartir las papeletas que obraban en su poder, renunciando a última hora a hacer de interventores sin tiempo de sustituirlos o practicando otras acciones que el redactor del diario calificó de “sabotaje”. Se sugería que sin esa acción traidora, el resultado podría haber sido diferente.

Eso era una exageración; el sistema electoral establecía en Madrid la atribución de cuatro escaños, por “mayorías”, a las candidaturas ganadoras, y dos, por “minorías”, a las colocadas en segundo lugar. Iglesias y Besteiro habían obtenido poco más de 17.000 votos, 11.000 por debajo del último candidato elegido por mayoría, de manera que nunca la candidatura socialista hubiera podido conseguir otra cosa que los escaños por minoría. No obstante, la acusación hizo su efecto. El 5 de enero de 1921, en la Asamblea de la ASM se constituyó una Comisión de Encuesta sobre lo sucedido y lo que quedaba del Comité, reducido ya a tres miembros desde el voto de las precandidaturas, presentó su dimisión. La elección del nuevo Comité, el 16 de enero, con participación de solo 321 afiliados, significó una derrota absoluta de los terceristas, por 117 votos frente a los 204 del bloque alternativo, con Largo Caballero como nuevo presidente, Trifón Gómez como vicepresidente, Núñez Tomás como secretario general, Muiño como secretario de actas y Severo García como contador. Esta vez no hubo ninguna concesión y hasta el último vocal elegido, Fermín Blázquez, era del sector ganador. El vuelco en el Comité Ejecutivo de la ASM iba a tener consecuencias generales.

Derrota tercerista y fundación del Partido Comunista Obrero Español

El Socialista contribuyó no poco al vuelco que iba a producirse en el partido. Dio amplia publicidad a la invasión de Georgia y la sublevación de Kronstadt. El propio Fabra Ribas, que no había conseguido el 2 de marzo que la Ejecutiva del PSOE diera apoyo a la condena de la invasión de Georgia presentada por Camille Huysmans, secretario de la Segunda Internacional, hizo pública su posición en el diario, condenándola como una “táctica bolchevique”. Se habían acabado los tiempos de la condescendencia. Además, el 27 de febrero, la conferencia de los socialistas austríacos, suizos e italianos y las minorías de la SFIO y el USPD[17] fundó la Unión de Partidos Socialistas para la Acción

Internacional (UPSAI), que en España siguió denominándose “reconstructora”. El Socialista le dio una amplia cobertura informativa y fue la llave para aglutinar, por encima de sus diferencias, a los que se oponían al ingreso en la IC.

Largo Caballero y Besteiro, secundados por Iglesias, emprendieron la campaña final con la agrupación madrileña como palanca. El nuevo Comité de la ASM propuso formalmente rechazar las 21 condiciones e ingresar en la plataforma de los “reconstructores”. Acto seguido, los tres dirigentes, junto con Fabra Ribas, Trifón Gómez, Saborit y una larga lista de afiliados, publicaron en El Socialista del 22 de marzo un manifiesto llamando a secundar en todo el partido la propuesta del comité madrileño e invitando a manifestar su apoyo en las páginas del diario en días sucesivos; resultó una larga lista de adhesiones que fueron publicadas hasta el día mismo del congreso, el 9 de abril. El “grupo tercerista” de la ASM publicó dos días más tarde un “contramanifiesto”; un texto por completo a la defensiva, dando por sentado que las posiciones de sus antagonistas en nombre de la unidad del partido no hacían otra cosa que hacer “INEVITABLE” (lo escribieron con mayúsculas) la división. Para no cargar las páginas del diario con listas de nombres en un momento en que tenía problemas para seguir apareciendo, pidieron que no se publicara la lista de adhesiones que su “contramanifiesto” pudiera suscitar; algo que pudo ser un reconocimiento más o menos inconsciente de su debilidad y fue, sin ninguna duda, un error, dejando todo el espacio de la agitación a sus contrincantes. La Asamblea de la ASM aprobó el 2 de abril, por 243 votos a favor, el ingreso en la plataforma de los “reconstructores”, con 147 votos en contra que seguían defendiendo la IC y 2 que lo hicieron por “permanecer a la expectativa”. La desmovilización obrera perjudicaba a los “terceristas”.

La suerte estaba echada. El único consuelo para los partidarios de la IC fue que la Federación Socialista Asturiana aceptó los 21 puntos, esta vez sin ambigüedades. Desde el verano de 1920 el “tercerismo” no había avanzado, salvo en casos aislados, como el singular de Pérez Solís, que se había trasladado de Valladolid a Bilbao y allí, al contacto directo con una movilización social muy diferente de la vallisoletana y un obrerismo radicalizado, cambió su posición 180 grados, sumándose a los partidarios de la IC. El III Congreso Extraordinario, iniciado el 9 de abril de 1921, tuvo, como el de junio del año anterior, sus momentos de tensión y enfrentamiento, aunque no para debatir nada, sino para manifestar por última vez las propias posiciones. Lamoneda volvió a dar por inevitable la escisión. La votación dio el triunfo a los

“reconstructores” por 8.808 votos contra 6.025 de los partidarios de la IC y 205 de seguir a la expectativa. Significó la ruptura, no la escisión de una parte; si la votación hubiese sido al contrario, también se habría producido, y el referente del USPD y de la SFIO lo había dejado claro. Acabada la votación casi todos los delegados partidarios de la IC abandonaron el Congreso del PSOE y fundaron el Partido Comunista Obrero Español (PCOE); habían tenido en el Congreso la representación de 5.907 afiliados, por lo que no se trataba de una minoría menospreciable. Acto seguido, el Congreso de las Juventudes Socialistas se pronunció a favor de la IC, por 3.197 votos a favor contra 350 de los “reconstructores”, constituyéndose también como Juventudes Comunistas.

La posibilidad de que la sección española de la IC tuviera un cierto peso en el movimiento obrero no era una fantasía en la primavera de 1921. No obstante, para que se materializara habían de resolverse de manera favorable tres cuestiones: la conversión efectiva de lo que había sido una corriente del PSOE, el “tercerismo”, en un partido nuevo, diferente; la unificación entre el PC español y el PCOE en una sola sección nacional; y la consolidación de un sindicalismo propio tanto a través de la CNT como mediante el drenaje hacia posiciones propias de una parte de la UGT. Ninguna de esas cuestiones tenía fácil resolución y la realidad fue que ninguna de ellas se resolvió a favor del comunismo español.

La primera novedad fue positiva. Un Pleno de Regionales de la CNT, celebrado en clandestinidad en Barcelona el 28 de abril, aprobó el ingreso en la ISR, aunque insistiendo en la plena autonomía de la Confederación. Estuvieron presentes Andrés Nin, por el Comité Nacional; Joaquín Maurín, por la regional de Cataluña; Hilario Arlandís, por la de Levante; Jesús Ibáñez, por la de Asturias —todos ellos se habían manifestado en favor de la Tercera—; Parera, de Aragón; y Belloso, del norte. La delegación andaluza, que llegó a Barcelona una vez celebrado el Pleno, acató sus decisiones. La reunión se produjo con la CNT en condiciones precarias, ilegalizada, reprimida muy duramente en Cataluña y Andalucía, y no pudiendo contar para decisiones de envergadura con sus cuadros principales; algunos de ellos, como Seguí, Buenacasa o Pestaña, por citar nombres ya conocidos que se podrían haber opuesto a la decisión, estaban encarcelados. Aunque tampoco hay que perder de vista que en el seno de la CNT había un ambiente favorable a la Revolución rusa y que los detalles de la constitución de la IC y la ISR no fueron conocidos hasta que Pestaña fue puesto en libertad en abril de 1922 y presentó su informe. Por el momento, el Pleno de abril de 1921 tomó el acuerdo que consideró representativo del estado de opinión

interno —imposible de consultar en esos momentos— y envió a Nin, Maurín, Arlandis e Ibáñez al congreso fundacional de la ISR. Todos ellos asistieron en 1921 al III Congreso de la IC como espectadores y en julio lo hicieron en el primero de la ISR como participantes. Formalizado el ingreso, Nin, al que la Policía española implicaba en el asesinato de Dato producido el 8 de marzo, se quedó en Moscú como representante de la CNT; el resto regresó en septiembre a España. Era una buena noticia, aunque se torció en buena parte un año más tarde.

El paso de corriente a partido fue más problemático. No todos los votos que representaban los delegados en el congreso se transformaron en militantes. Cada delegado representaba el total de los afiliados de su agrupación, fuera cual fuese su posición individual, de manera que la batalla final se iba a librar cuando las agrupaciones se reunieran para examinar la resolución del congreso. En esa batalla, no solo los afiliados que habían quedado en minoría en agrupaciones terceristas iban a mantenerse dentro del PSOE, invocando el acuerdo del congreso, agrupaciones enteras que habían votado en favor de la IC no siguieron el paso de la constitución de un nuevo partido. El principio de la unidad siguió pesando, favorecido por el hecho que la plataforma de los “reconstructores” no pretendía ser una nueva Internacional, sino un puente entre las existentes. En El Socialista se fue dando información sobre la decisión de una buena parte de las agrupaciones, pero no es posible establecer una cuantificación exacta, la información habitualmente no detallaba datos de asistencia y, cuando cambiaba la decisión tomada por su delegado, se limitaba a señalar que era “por mayoría” y en algún caso “por unanimidad”. A pesar de ello, puede realizarse una conclusión redondeada: de las 46 agrupaciones (aparte de la Federación Asturiana) que votaron a favor de la IC, una veintena de ellas, con unos 1.500 afiliados, o no firmó la constitución del PCOE de entrada o rectificó la decisión de sus delegados. Respecto a la Federación Asturiana, se dividió en dos, con contingentes parejos (Erice, 1996).

Maximizando posibilidades, el contingente inicial del PCOE no debió alcanzar los 4.000 miembros; Graziadei, delegado de la IC, le atribuyó un máximo de 4.500, incluyendo a las juventudes. En 1922 esa cifra ya había empezado a disminuir. El PCOE solo convirtió a una parte del “tercerismo” en comunismo organizado; no tanto como consecuencia de sus capacidades o incapacidades, sino sobre todo de factores que no podía controlar. Uno de ellos fue el peso del discurso de la unidad en el movimiento obrero, contra el que tuvo que luchar no solo el comunismo español, sino la IC en general. Otro el retroceso de la

movilización social, que afectó también al PSOE, que a finales de 1922 había bajado a 10.500 afiliados. Finalmente, la represión del Estado y la patronal industrial y agraria afectó a los comunistas mucho más que a los socialistas, ya fuera porque eran detectados como enemigos principales o como consecuencia de su táctica de radicalización de los conflictos.

Lo que sí estuvo en sus manos fue resolver su división y unificarse como única sección española de la IC, algo que el PC español rechazaba en esos términos, al considerar a buena parte de los dirigentes del "tercerismo" en el PSOE como reformistas de hecho, entre ellos, a Oscar Pérez Solís como un converso de última hora y a García Cortés como un corrupto por su condición de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Todo lo más estaban dispuestos a aceptar la integración, filtrada, de los miembros del PCOE en el PC español, que ya era sección reconocida de la IC. Esas pretensiones no tenían ningún sentido. Los estatutos de la IC eran taxativos, no podían subsistir dos partidos en un Estado, pero su cumplimiento no podía pasar por la absorción en el que ya existía. El PC español era poco más que un grupúsculo y su formación se había producido dominada por el vanguardismo y las orientaciones políticas de los comunistas holandeses, descartadas por la dirección de la IC desde hacía un año. La solución era la unificación.

El primer contacto entre ambas organizaciones recogió todavía las pretensiones máximas del PC español. En una reunión, el 11 de mayo de 1921, entre Andrade, Portela y Chicharro por el PC español y Núñez de Arenas, Torralva Beci y César R. González por el PCOE, la delegación del PC español sostuvo que ellos eran los representantes de la política comunista revolucionaria, por lo que el partido que saliera de la unificación había de seguir denominándose PC español, y sus órganos dirigentes principales —Comité Central y comités regionales— habrían de estar integrados por dos tercios de miembros de su formación; además, se debía excluir a los que consideraban "centristas" o "reformistas": Anguiano, García Cortés, Pérez Solís, Acevedo y López y López. Núñez de Arenas dio una respuesta conciliatoria: defendió que la proporcionalidad de los órganos de dirección fuera de acuerdo con la militancia respectiva, remitió la decisión sobre las exclusiones al congreso fundacional del partido unificado y propuso avanzar con la fusión inmediata de los dos comités centrales hasta la celebración de ese congreso. No acabó como el rosario de la aurora, pero casi. El único acuerdo fue dejar la unificación para después del III Congreso de la IC, convocado para el 12 de junio, al que asistieron por separado, y manteniendo las distancias, Merino Gracia, Millá, Pumarega, Gonzalo Sans y Joaquín Ramos por el PC español; y

Torrralva Beci, César R. González, Virginia González, José Rojas y Evaristo Gil por el PCOE (Meaker, 1978). Merino Gracia no logró que la dirección de la IC accediera a la absorción que pretendían y el Secretariado Latino de la IC, presidido por el suizo Humbert-Droz, estableció una unificación acordada por las dos partes, para lo que enviaría a España un representante propio; entretanto, y eso no dejó de ser significativo, escogió a César R. González, del PCOE, como representante de los comunistas españoles ante el CEIC.

El encargo de la intermediación recayó en el comunista italiano Antonio Graziadei, que recibió en Roma el encargo a comienzos de septiembre, pero no pudo llegar a Madrid, por causa de un viaje vía París realizado en clandestinidad, hasta la noche del 4 de noviembre. Graziadei buscó el compromiso, no la imposición. Por la regla de clandestinidad formó un Comité de Negociación con un representante de cada uno de los dos partidos, designados por estos, Núñez de Arenas y Gonzalo Sanz; y mantuvo contactos bilaterales con diversos cuadros, entre ellos, García Quejido, Virginia González, Ugarte y Andrade (Humbert-Droz, 1970). El italiano detectó que la cuestión de las exclusiones podía llegar a hacer fracasar la unificación. Sin embargo, convirtió con habilidad ese escollo en una clave de la solución; consiguió que el PC español renunciara a ellas a cambio de asegurarle la mayoría en el Comité Central y en los comités territoriales, provisionales hasta la realización del Congreso de Unificación, que se iba a celebrar cuatro meses más tarde. Y para que el PCOE no bloqueara el acuerdo, argumentó a sus representantes que, con su mayor número de miembros —eran más del doble—, podían corregir la correlación en ese congreso, ya sin cupos previos. Hasta entonces, el secretario general del Comité Central sería Millá; que sería también el redactor en jefe del periódico del partido, La Antorcha, flanqueado por Núñez de Arenas y Andrade, ambos con igual responsabilidad. Esa misma orientación se siguió en el caso de La Aurora Roja, portavoz de la Federación Comunista Asturiana, en cuya dirección se mantuvo Acevedo, acompañado a partir de entonces por un miembro de cada partido; aunque no en Bandera Roja, de Bilbao, de cuya dirección se desplazó a Pérez Solís, que fue sustituido por un miembro del PC español acompañado por otro del PCOE como redactor en jefe. Graziadei procuró siempre escoger para aquellas responsabilidades a quienes pudieran ser aceptables por ambas partes. Finalmente, la denominación de la sección unificada sería la de Partido Comunista de España (PCE), cortando toda sugestión simbólica de absorción de un partido por otro.

Primeros problemas

Graziadei se sintió satisfecho de su misión. Había evitado el choque y asegurado la unificación a cambio de aparcar cualquier debate político. Pecó de optimismo y de no haber convencido a nadie por no haber entrado en ninguna cuestión de fondo. La mayoría del grupo dirigente del PC español, dirigida por Andrade y Portela, se propuso actuar como colectivo organizado dentro del nuevo Comité Central unificado para garantizar la hegemonía de sus posiciones. Pero no fueron secundados por su antiguo compañero Merino Gracia, quien, por el contrario, publicó en La Antorcha del 2 de diciembre un duro artículo autocrítico contra la política desarrollada por su partido hasta el momento. Merino Gracia, secretario general del PC español, y Andrade habían entrado ya en conflicto tras el III Congreso de la IC. Andrade consideraba que había tomado una línea errónea mientras que el secretario lo había acatado, asumiendo que la errónea había sido la línea de su partido[18].

Merino Gracia llevó a sus posiciones a otros antiguos miembros del PC español, como Gonzalo Sanz, y el 4 de diciembre el Comité Central unificado acordó la participación del nuevo PCE en las elecciones municipales de febrero. Andrade, Ugarte, Pumarega y Chicharro votaron en contra argumentado que el partido no estaba todavía en condiciones de presentarse y que había un rechazo mayoritario entre los obreros españoles a la participación electoral. Era una consideración más política que ideológica. En el obrerismo español se discutía la participación electoral cuando se trataba de comicios generales; pero no en las elecciones locales, en las que llegaban a participar afiliados a la CNT que, al propio tiempo, militaban en una formación republicana. En cualquier caso, los cinco discrepantes pudieron comprobar que no solo no había funcionamiento colectivo del grupo dirigente del PC español, sino que su supuesta mayoría se había esfumado.

El grupo minoritario del Comité Central, junto con la mayoría del Comité Central de las Juventudes Comunistas, hizo público el 1 de enero de 1922 un manifiesto “a los comunistas españoles” en el que rechazaron la gestión y los acuerdos del Comité Central del PCE y anunciaron que se constituían en el Grupo Comunista Español para encabezar la rectificación del rumbo que estaba tomando el proceso de unificación. El manifiesto no pasó de fórmulas genéricas, de la alusión constante a la lucha contra el “centrismo” y del rechazo a la

participación en las elecciones municipales. Se equivocaron en la forma y en el fondo. El Congreso de Unificación, celebrado en Madrid entre el 14 y el 19 marzo de 1922, consumó la fusión y también la derrota del grupo minoritario, al que se sancionó con un año de incapacitación para tener cargos en el partido. El congreso eligió nueva dirección, encabezada por García Quejido como secretario general y Lamoneda como “secretario del Interior” —es decir, de Organización —, de la que también formaban parte Virginia González, Núñez de Arenas, Exoristo Salmerón, Evaristo Gil, Ignacio Ojalvo y Antonio Malillos; César R. González fue elegido director de La Antorcha y Andrés Nin lo sustituyó en la delegación del partido en Moscú, que habría de desempeñar inicialmente junto con la de la CNT.

El sector procedente del PCOE había invertido la correlación de fuerzas, ayudado por la torpeza de los promotores del manifiesto de enero. No obstante, el CEIC decidió volver a intervenir directamente y envió al propio Humbert-Droz a Madrid para gestionar la solución definitiva de la crisis. Se reunió con las dos partes y logró frenar la ruptura, consiguiendo que Andrade, Ugarte, Chicharro y Portela acataran la sanción con el compromiso de que el PCE no prescindiría de sus servicios, como así fue; solo Pumarega lo rechazó y abandonó la militancia.

Todo el proceso de la unificación y su temprana primera crisis pusieron en evidencia uno de los hándicaps que afectarían al PCE en sus largos primeros diez años de existencia: la carencia de un grupo dirigente con autoridad y nervio organizativo y militante. El grupo “tercerista” del PSOE tuvo siempre una cabeza muy heterogénea, sin que hubiera en él liderazgo político, ni siquiera por parte de aquellos a los que, como a Núñez de Arenas, se les reconocía valor intelectual. Tampoco estaban sobrados de nervio militante, y el que quizás era el más activo de todos ellos, Oscar Pérez Solís, era el menos fiable por su volubilidad. Por su parte, la homogeneidad del núcleo procedente del PC español estaba frágilmente anclada en una interpretación inicial de la política comunista —la del Buró de Ámsterdam— que la dirección de la IC había desacreditado; entre ellos no faltaban cuadros activos y enérgicos, como Andrade, pero sus posibilidades quedaban anuladas por su tendencia al sectarismo y su incapacidad para integrar posiciones discrepantes.

En muchos aspectos, en particular en la heterogeneidad ideológica y política de sus cuadros dirigentes y en la dificultad para consolidar un grupo dirigente, la situación del PCE era análoga a la del PC francés. Con una diferencia más que

sustantiva: el francés nunca dejó de contar con el apoyo de una base de masas importante, concretada de manera principal en la fracción comunista de la CGT primero y en la CGT-Unitaria cuando se produjo la ruptura sindical; algo de lo que careció el PCE, que vio cómo se perdían o se malbarataban en sus dos primeros años las pequeñas posibilidades que había tenido. Cuando Seguí, Pestaña y Buenacasa fueron puestos en libertad en la primavera de 1922, aunaron sus fuerzas para rechazar la adhesión a la ISR. La Conferencia de Zaragoza de la CNT, el 11 de junio, acordó revocarla y asistir, en diciembre en Berlín, al congreso fundacional de una Internacional anarcosindicalista, que recuperó la histórica denominación de Asociación Internacional de Trabajadores. Ni Nin ni Maurín pudieron estar presentes en Zaragoza, Ibáñez no fue convocado y la defensa de la decisión de 1921 solo pudo hacerla Arlandis, de nuevo aislado por completo. La CNT abandonó el campo comunista, aunque Maurín, Arlandis y Nin pudieron mantener una corriente comunista dentro del sindicato hasta que fue expulsada en 1932.

La batalla por los sindicatos se perdió por completo. El XV Congreso de la UGT, en noviembre de 1922, descartó definitivamente toda relación con la ISR y el movimiento comunista. Después de un sangriento altercado, del que resultó muerto por tiro de revólver el socialista González Portillo, el congreso expulsó a la quincena de comunistas que asistían como delegados —entre ellos Perezagua, Pérez Solís, Núñez de Arenas y Virginia González—, así como a los sindicatos que representaban, con unos 15.000 federados de los poco más de 208.000 que tenía todo el sindicato. La UGT quedó desvinculada por completo del PCE hasta 1935 y durante diez años este intentó, infructuosamente, encontrar la compensación en la CNT, cuyo control persiguió sin éxito. El grave tropiezo sindical y el giro sectario de la política de la IC a partir de 1924 bloquearon la configuración del PCE como partido de masas hasta los tiempos de la Segunda República; lo limitaron a una formación de agitación social y propaganda, con militancias abnegadas y en ocasiones heroicas, y trifulcas constantes en las que la falta de acción política real se sublimaba en el exceso de acción política en el seno del partido.

PARTE II

DE LA SOLEDAD

AL FRENTE POPULAR

CAPÍTULO 4

Geografía y acción del primer PCE

La opción mayor del comunismo de masas había quedado frustrada, aun así, las fuerzas iniciales del PCE no eran desdeñables. Más allá del cómputo general de la afiliación, en el momento de su fundación tenía unas 80 agrupaciones repartidas por toda España, a excepción de Castilla la Vieja (hoy Castilla y León) y Extremadura, con una importante implantación en Bilbao y su cuenca minera, así como en Asturias, una presencia con expectativas de crecimiento en Cataluña, un núcleo en Madrid relevante en la dirección aunque con el hándicap de su muy débil incidencia sindical, y organizaciones dispersas en Andalucía, Galicia, Cantabria, Valencia y Castilla la Nueva (Castilla-La Mancha).

El punto fuerte del partido eran las regiones del norte. En Asturias el PSOE y el PCE se repartieron por la mitad el movimiento obrero existente. La Federación Comunista Asturiana contaba con un millar y medio de afiliados, y había conseguido controlar la Casa del Pueblo de Oviedo. Además, lideró el proceso de radicalización en el Sindicato Obrero Minero Asturiano de la UGT, que dio lugar a las huelgas generales de la cuenca minera de diciembre de 1920, mayo y diciembre de 1921 y enero de 1922. Manuel Llaneza tuvo que abandonar la dirección del sindicato, que fue asumida por militantes comunistas entre mayo y octubre de 1921. En contrapartida, fracasó su aproximación a los sindicatos de la CNT, cuya Federación Local de Oviedo rechazó en febrero de 1922 la adhesión a la ISR. En Vizcaya, los comunistas, probablemente un millar, predominaron en Bilbao y San Sebastián, donde controlaron la Casa del Pueblo en ambas ciudades; así como en la cuenca minera de Somorrostro y en los sindicatos del metal, la construcción y las artes gráficas de la capital vizcaína. En junio de 1921, el dirigente del Sindicato Minero de Vizcaya Constantino Turiel, alineado con Prieto, fue sustituido por el comunista José Bullejos; este era el paradigma del cuadro político encargado de asumir responsabilidades sindicales, licenciado en derecho y proletarizado como cartero en Madrid, tras ingresar en la UGT en 1920 fue enviado a Bilbao, donde se integró en el Sindicato Minero. La sustitución de Turiel por Bullejos representó también la adhesión del sindicato a la ISR y, meses después, la escisión de la minoría, encabezada por Turiel-Prieto,

que constituyó el Sindicato Minero de La Arboleda. La correlación de fuerzas resultó favorable al sindicato comunista, con 1.300 afiliados, frente al medio millar de su rival. En cualquier caso, ambos no sumaban ni la tercera parte de los 6.700 afiliados que habían tenido antes de la ruptura, en julio de 1920. En ambas provincias, Asturias y Vizcaya, los comunistas abandonaron la táctica sindical negociadora que había prevalecido en 1919, respondiendo con la movilización generalizada al endurecimiento de las posiciones de la patronal, que repercutió de inmediato en una crisis de trabajo y remuneración con el fin de la bonanza económica de los años de la Gran Guerra y la caída de la demanda.

La presencia comunista en el norte se completó con el núcleo de Santander, que había votado en favor de la IC en el congreso de 1921, aunque no se constituyó de manera definitiva como Agrupación Comunista hasta febrero de 1923. En las elecciones municipales de 1922, uno de sus miembros, José Muñoz, fue elegido concejal en la capital cántabra. También existieron en Galicia tres agrupaciones iniciales, en Vigo, Pontevedra y Santiago, a las que se sumarían entre 1922 y 1923 las de Ferrol y Verín, en la provincia de Orense. Todo ello sumaba la mitad de los efectivos del partido y constituía su área de acción más importante.

La Agrupación Madrileña, con algunos cientos de afiliados y repercusión directa a través de sus cuadros en la dirección del partido, destacó negativamente por su escasa influencia en el movimiento obrero. Reducida a sectores menores de la madera, la construcción y la dependencia mercantil, su única incidencia de relieve fue en la Federación Nacional Tabacalera de la UGT, mediante la pertenencia al partido de su fundador y secretario general Severino Chacón. Más allá de esas áreas, la presencia del PCE se completaba con agrupaciones dispersas en Castilla-La Mancha (Toledo y La Villa de Don Fadrique), Andalucía (Puente Genil —que regresó al PSOE en 1922—, Villanueva de Córdoba, Cuevas del Becerro, Torredonjimeno, Almería, Sevilla y, desde 1923, Jerez de la Frontera) y Comunidad Valenciana (Alicante, Crevillente, Novelda, Castalia, Elche y Valencia). Mucho más reducida fue la presencia inicial en Cataluña, donde ninguna agrupación socialista abandonó el PSOE y la militancia comunista estuvo integrada en sus primeros tiempos por un reducido número de jóvenes; esa notable limitación se compensó por la adhesión a la ISR del sector procomunista de la CNT liderado por Maurín, aunque no ingresaría en el partido hasta después del golpe de Primo de Rivera.

Ese capital humano y organizativo no era un mal punto de partida. Ahora bien, hilvanarlo, dotarlo de una orientación común, requería dedicación específica —

un mínimo aparato—, un contexto favorable y claridad en la acción a seguir. La dedicación fue deficiente; los primeros dirigentes del PCE lo fueron a tiempo parcial, actuando como tales cuando habían acabado sus jornadas laborales (Humbert-Droz, 1970). El contexto no pudo ser más desfavorable: involución política, crisis económica, particularmente en las áreas industriales, y desmovilización obrera. Y la confusión política por los giros de la IC, los acertados y los que no lo eran, no permitió más línea clara de acción que la de la denuncia del capitalismo, la agitación y la propaganda, que además había de tener en cuenta los cambios de consignas y de sus reinterpretaciones.

El primer giro importante de la IC respondió al fin del ciclo de levantamientos revolucionarios de 1919-1920, y lo inició el secretario general del KPD, Paul Levi, cuando en enero de 1921 propuso un acuerdo de unidad de acción a todos los partidos obreros alemanes (SPD, USPD y el Partido Comunista Obrero de Alemania escindido del KPD) y a los sindicatos, para reivindicar mejoras materiales para los trabajadores y la proscripción de los grupos paramilitares contrarrevolucionarios. Levi proponía un paso atrás para situar al partido en la realidad y fue rechazado por casi todos, la mayoría de la dirección del KPD y la mayoría de la dirección de la IC, entre ellos, Zinóviev y Bujarin; y fue desplazado de la dirección. Sin él al frente el KPD desencadenó un movimiento insurreccional, fracasado, en marzo de 1921; la acción se justificó con el postulado de que la misión histórica del partido —y de la Internacional— era la de desarrollar constantemente una “ofensiva revolucionaria” (Hajek, 1984). Eran las primeras formulaciones de lo que se pasó a denominar “teoría de la ofensiva”: marchar siempre adelante y conseguir la unidad de las clases trabajadoras solo en torno al partido comunista. No obstante, después del fiasco de marzo, Lenin y Trotsky recogieron la iniciativa de Levi y la impusieron, no sin dificultades, en el III Congreso de la IC. Afirmaron que el proceso revolucionario había de situarse en el largo plazo —“será cuestión de años”—, por lo cual, el insurreccionalismo lo único que hacía era ampliar la distancia entre el Partido Comunista y las clases trabajadoras. Había que dejar atrás lo que Lenin calificó de “empacho en la lucha con el centrismo” y la confrontación con la socialdemocracia y conseguir el apoyo de la mayoría de los trabajadores. El giro se completó en el primer Pleno ampliado del CEIC, en febrero-marzo de 1922, con la aprobación de la consigna del frente único; abandonando la política de ruptura frontal con la socialdemocracia, se pasaba a postular una línea unitaria entre las clases trabajadoras y en el movimiento obrero, que no excluyó acuerdos entre sus diversas organizaciones. No obstante, en la IC se mantuvo una fuerte resistencia al cambio, una parte importante del movimiento comunista

se siguió identificando con la “teoría de la ofensiva”; de manera destacada el PC italiano, el PC francés, y el PCE, representado por César R. González, votaron contra la propuesta de un frente único obrero.

La “teoría de la ofensiva”, la tesis de que solo importaban las luchas generales, la del mantenimiento de la confrontación absoluta con la socialdemocracia, orientó a los comunistas españoles y llevó a malgastar todo el capital de incidencia en el movimiento obrero que tenían en 1921. En Asturias la influencia inicial en el Sindicato de Obreros Mineros de Asturias (SOMA) se malogró en la primera mitad de 1922. Los comunistas asturianos se enquistaron en el uso recurrente de la huelga general de la cuenca para hacer frente a la rebaja de jornales. Ese comportamiento respondía al malestar general de los mineros y su nada infundada radicalización; pero el hecho es que el sindicato venía perdiendo fuerzas de manera incesante desde 1919 —bajó de 29.000 afiliados a 20.000 a finales de 1920— por la doble presión de la acumulación de luchas y la reducción de trabajo a consecuencia de la crisis. A los comunistas les faltó flexibilidad sindical. Después de muchas oscilaciones de la movilización, con huelgas generales puntuales entre diciembre de 1921 y enero de 1922, la patronal decidió lanzar un desafío a los sindicatos imponiendo unilateralmente una rebaja del 20% de los salarios. La respuesta del SOMA fue declarar una nueva huelga general el 19 de mayo, impulsada por los comunistas. Llaneza se opuso, pero mantuvo la dirección del Comité Minero, desde la que ponía en cuestión la prosecución de la huelga; ante lo que comunistas y anarquistas constituyeron el 17 de junio un frente único, presidido por Eduardo Castro, del PCE, que era un desafío a la dirección de este sindicato. El endurecimiento del conflicto, en el que intervino el Ejército, acompañó a la división obrera. El 25 de junio el SOMA expulsó a las 21 secciones que se habían integrado en el frente, y Llaneza quedó como interlocutor único de la patronal. La huelga acabó con una rebaja de salarios intermedia, arbitrada por el Ministerio de Trabajo, y la derrota de los comunistas y anarquistas que votaron, sin éxito, en favor de mantenerla. El agotamiento de los mineros se reflejó en la caída de la afiliación. El SOMA no tenía al final del conflicto más que 7.500 afiliados. Por su parte, los sindicatos del frente único se constituyeron en noviembre en Sindicato Único Minero, integrado en la CNT y bajo dirección comunista; con 1.750 miembros afiliados, estaba muy lejos de la incidencia comunista un año atrás.

Aún más dura fue la confrontación entre los sectores obreros en Vizcaya. El escenario era el mismo: recesión económica, rebaja de salarios por la patronal, que llegaba hasta el 20% en el metal, y respuesta obrera con tácticas

discrepantes, que en Vizcaya incluyó el apoyo socialista a las demandas proteccionistas de la patronal, rechazadas por los comunistas. En diciembre de 1921, Bullejos vio claro que era el momento de “dar el decisivo asalto al poder” (Fusi, 1975). El Sindicato Minero de Vizcaya invitó en enero de 1922 al Sindicato de La Arboleda a constituir un frente único, que este rechazó. Las relaciones entre ambos sectores se habían deteriorado desde que, en noviembre de ese mismo año, se produjese en Gallarta un enfrentamiento a tiros, con dos afiliados socialistas heridos graves. Y llegó a la ruptura absoluta cuando, ante el anuncio patronal de reducción de salarios, el Sindicato de La Arboleda inició negociaciones con la patronal, en tanto que el de Vizcaya llamó a la huelga general, convocando un mitin en Gallarta el 9 de abril para empezarla. El mitin acabó mal; a la salida se produjo un nuevo enfrentamiento a tiros en la carretera de Gallarta, en el que resultaron muertos dos socialistas, herido muy grave José Bullejos y heridos con pronóstico diverso otros cinco trabajadores, que El Socialista identificó como sindicalistas. No quedó claro quién empezó, aunque el lugar donde se produjo, la carretera que unía a Bilbao con Gallarta, plaza fuerte de los comunistas, puede apuntar a una provocación contra estos. Sea como fuere, el episodio perjudicó a los comunistas, a los que la prensa hizo responsables. La huelga general fracasó, solo llegó a declararse en Gallarta, y se impuso, con apoyo socialista, la solución del arbitraje gubernamental, que reducía la cuantía de la rebaja salarial.

En el informe que Jules Humbert-Droz envió al CEIC el 18 de julio de 1923, no dudó en considerar que una de las causas que habían contribuido al aislamiento del partido y a limitar sus posibilidades de acción había sido “el empleo por él de medios terroristas, en particular en la lucha con los reformistas”, señalando los episodios de Vizcaya y del XV Congreso de la UGT; que se hubiesen producido provocaciones no disminuía el grave error de caer en ellas y “hacer así el juego a nuestros adversarios” (Humbert- Droz, 1983). Las consecuencias del ejercicio de la violencia para dirimir las diferencias obreras —algo no exclusivo de los comunistas, los tiroteos se producen cuando las dos partes llevan armas y las usan— eran la punta del iceberg de las causas del retroceso; el cuerpo sumergido era la política errónea, la adhesión a una concepción mesiánica de la función de vanguardia y una táctica de choque frontal permanente asociada a un déficit de dirección en el partido y a la proliferación de las divisiones internas.

Crecimiento interrumpido

El PCE tomó medidas organizativas cuyo rendimiento quedó limitado por los déficits de la línea general y la confusión entre los criterios de la dirección del partido y los de las organizaciones territoriales, con diferentes rutinas y tradiciones militantes. La respuesta a la expulsión de la UGT y el abandono de la ISR por parte de la CNT fue agrupar la mayor parte de los sindicatos controlados por el PCE en una plataforma propia en el seno de la CNT. El 24 de diciembre, los grupos sindicales comunistas de Cataluña, el País Valenciano, Asturias, Vizcaya y Burgos celebraron una conferencia en Bilbao en la que se acordó constituir los Comités Sindicalistas Revolucionarios, adherirse a la ISR delegando en Nin su representación, y adoptar como portavoz el periódico La Batalla, fundado por Maurín días antes (Bonamusa, 1974). Esa vinculación con la CNT, defendida por la dirección comunista, tuvo resistencias por los dos lados: el Sindicato Minero de Vizcaya no se integró en la CNT y siguió existiendo como organización independiente; en San Sebastián, la pretensión comunista de la fusión de la federación local propia con el SU de la CNT fue rechazada por este último.

Paralelamente al intento de dar una estructura propia a sus bases sindicales, el partido fue completando su estructura interna uniendo las agrupaciones locales en federaciones territoriales. Existían ya los precedentes de las federaciones asturiana y vizcaína, y a ellas se fueron sumando la constitución de la Federación Comunista Andaluza, a finales de 1922, y a lo largo de 1923, la Federación Comunista Gallega; la del centro, que integraba las dos Castillas; la de Levante; y la catalana. Algunas de ellas no se circunscribieron al ámbito geográfico inicial: la de Vizcaya se convirtió en la Federación Vasco-Navarra, la asturiana incorporó a León, y la catalana, además de sumar a la organización balear, incluso en su denominación, extendía su circunscripción a Castellón, Zaragoza y Huesca. Esa organización territorial, que tendría que haber significado una consolidación organizativa, tuvo en efecto indeseado por la debilidad permanente de la Dirección Ejecutiva del partido; los puntos de discrepancia tendieron a identificarse con organizaciones regionales diversas y se produjo, de hecho, una centrifugación política que agravó la confusión en la que vivió el PCE en el primer decenio de su historia y acabó teniendo una consecuencia irreversible con la disidencia final de la Federación Comunista Catalano-Balear. El Ejecutivo, encabezado por el veterano García Quejido, con una mayoría de miembros procedentes del PCOE, no fue capaz de imponer su autoridad. Las discrepancias internas se fueron acumulando en torno a la cuestión sindical y la

participación electoral, planteada esta última de nuevo por la celebración de elecciones generales el 29 de abril de 1923. Desde las regionales del norte, sobre todo la vizcaína, se criticó a la dirección su apego a la antigua UGT y la subvaloración de la CNT. En cuanto a la participación electoral, las diferencias frente a la posición oficial de participar con candidaturas propias iban desde el abstencionismo propugnado por la Federación de Levante, mayoritariamente integrada por militantes procedentes del anarcosindicalismo, hasta la posición de los comunistas catalanes —bajo la influencia de Maurín, todavía fuera del partido— de formar parte de una coalición con el republicanismo de izquierdas. Por otra parte, la “izquierda” configurada en torno a antiguos miembros del PC español pasó a controlar, desde comienzos de 1923, la Agrupación Comunista Madrileña, con Luis Portela al frente.

En esas condiciones de retroceso y división interna se reunió en Madrid, entre el 8 y el 12 de julio de 1923, el II Congreso del PCE; con la asistencia de Humbert-Droz como delegado de la Internacional, acompañado del francés Jacques Doriot, que habría de ser también uno de los enlaces del CEIC con su sección española. Humbert-Droz consiguió que el congreso ratificara la línea de participación electoral sin alianzas, defendida por la dirección, así como una mayor atención a la afiliación a la CNT, como requerían las diversas oposiciones internas. El frente único fue aceptado formalmente, aunque la realidad de la confrontación con los socialistas y con los anarquistas anuló las posibilidades de la consigna. Con el mismo criterio de sumar posiciones y equilibrarlas, Humbert-Droz impuso que el nuevo Comité Central fuera de concentración, con diez miembros del saliente y cinco de la tendencia de oposición. Lo abandonaron García Quejido, Núñez de Arenas y Virginia González, gravemente enferma; se mantuvieron José Baena, secretario internacional, y Lamoneda, secretario sindical; y de la oposición de “izquierda” se incorporó a Luis Portela, como secretario del Interior, y Andrade y Vicente Arroyo, secretario de la regional del Centro, como vocales. Aunque Humbert-Droz habría preferido Oviedo o Bilbao como sede del nuevo Comité Central, se consideró que solo Madrid ofrecía la cobertura de cuadros necesarios para ello y allí se mantuvo. Finalmente hubo unanimidad —según Portela— en ofrecer a Óscar Pérez Solís la Secretaría General del partido. El crédito de este había crecido con su gestión al frente de la Federación Vasco-Navarra, haciendo olvidar su pasado más que reformista; pero Pérez Solís rehusó la oferta y se eligió para la máxima responsabilidad a César R. González, de temperamento afable y buen discurso, que en el congreso había cooperado con la inclinación conciliadora de Humbert-Droz. Después de tantos incidentes en la fusión de los sectores fundadores, parecía haberse llegado al

arreglo. El primer PCE conoció una efímera primavera política.

La satisfacción con que se cerró el congreso se vio reforzada aquellos días por un aumento de la visibilidad del partido. Algunos días después, el domingo 16 de julio, Oscar Pérez Solís participó en un mitin en el Circo Americano de Madrid organizado por el Ateneo dentro de su campaña por la exigencia de responsabilidades por el desastre de Annual, con una participación plural que incluía al republicano Rodrigo Soriano, el tradicionalista Urízar y el monárquico conde de Vallellano; y con la adhesión de Unamuno, que no pudo participar, así como de la CNT. La intervención de Pérez Solís —conviene leer la nota de El Sol al día siguiente— fue aplaudida por una asistencia en la que se debió volcar la militancia comunista. Todos criticaron las dilaciones de la Comisión Parlamentaria que había de investigar los hechos, pero fue Pérez Solís quien apuntó que esas responsabilidades alcanzaban "a todos, hasta los más altos poderes", es decir, que señaló a Alfonso XIII sin nombrarlo. Aunque el mitin acabó con incidentes, con una parte del público abucheando a periodistas presentes, el PCE pudo sentirse satisfecho de aquella participación, a la que respondió El Socialista desautorizando el mitin y acusando, falsamente, a sus participantes de ser partidarios de la guerra de Marruecos. El diario aprovechó la participación en el acto del conde de Vallellano para lanzar un sarcasmo: "El comunismo estará satisfecho de haber logrado el frente único". Era obvio que, en vísperas del golpe de Primo de Rivera, ninguna organización obrera española estaba por la unidad de acción.

La tensión entre socialistas y comunistas seguía siendo extrema. En las elecciones provinciales del 10 de junio se había producido en Bilbao un nuevo incidente grave: a la puerta del colegio electoral de las Cortes, fue asesinado a tiros Ernesto García, del PSOE, presidente de la Junta Municipal del Censo, después de haber tenido un enfrentamiento dentro del local con el militante comunista Méndez Núñez. Los socialistas acusaron a los comunistas de asesinato alevoso y la Policía detuvo a tres jóvenes comunistas. Como en Gallarta, la naturaleza del enfrentamiento y el desarrollo de los hechos no debió de quedar clara, porque días después El Socialista se quejaba de que se pretendiera que el presunto asesino estaba dentro del local y que no podía ser el autor de los hechos. Lo que es innegable es que se había producido una nueva fricción, con resultado mortal, y El Socialista hizo de todo ello una suma, a la que añadió los muertos de Gallarta y los hechos del congreso de la UGT, para instruir causa exclusiva contra los comunistas.

Más allá de esas confrontaciones, el PCE tuvo en el inicio del verano de 1923 motivos de aliento. El 9 de julio el Sindicato Minero de Vizcaya declaró una nueva huelga del sector ante la negativa patronal a restablecer los salarios y la jornada de trabajo de 1922, toda vez que estaba mejorando la coyuntura. La huelga fue un éxito, incluso el Sindicato de La Arboleda, que se había opuesto a ella inicialmente, acabó apoyándola aunque no se integró en el Comité de Huelga. A pesar de todo, la patronal aguantó sin ceder, y la prolongación de la huelga, sin previsión de solución inmediata, llevó a los comunistas bilbaínos a llamar a una huelga general de 24 horas el 23 de agosto, en apoyo de los mineros. Esta convocatoria no fue secundada por la UGT, a pesar de lo cual en Bilbao pararon los tranvías y una parte de las fábricas y talleres. Pero el suceso más destacado del día fue el asalto por la guardia civil y la policía de la Casa del Pueblo, donde se habían reunido el Comité de Huelga y los dirigentes sindicales para debatir si se había de prolongar el paro o dejarlo en la acción prevista de un día. Tras una débil resistencia, la fuerza pública entró a tiros en el edificio, detuvo a una setentena y fusiló contra la pared a un grupo, causando dos muertes; en él estaba Pérez Solís, que resultó gravemente herido aunque salvó la vida.

A pesar de la detención del Comité de Huelga, incluido Bullejos, el paro minero prosiguió bajo el liderazgo comunista, con Facundo Perezagua y Leandro Carro reforzados por Andrade, enviado por la dirección del PCE; aunque los socialistas empezaron a proponer a comienzos de septiembre la vuelta al trabajo. Y era imprevisible su desenlace hasta que el 13 de septiembre la proclamación de la dictadura por el general Primo de Rivera cambió las coordenadas del conflicto. El 15 de septiembre se declaró el estado de guerra en Vizcaya y el Ejército pasó a patrullar las calles de Bilbao al tiempo que la policía inició una amplia redada contra los comunistas, deteniendo entre otros a Perezagua, el 24, y a Carro, el 29. Poco a poco, la situación de fuerza no dejó otro remedio que la vuelta al trabajo, que fue finalmente acordada por el propio Sindicato Minero de Vizcaya el 28 de septiembre.

La proclamación de la dictadura dio también la puntilla a otro conflicto liderado por los comunistas, el de las minas de hierro de Serón y Bacares, en la sierra de los Filabres en Almería. Desde finales de la Gran Guerra se había constituido un sindicato minero que no había podido evitar la rebaja del 18% de los salarios impuesta por la patronal ante la caída de la demanda; tras una huelga, entre diciembre de 1921 y febrero de 1922, los mineros tuvieron que aceptar la rebaja a cambio de la fijación de la semana laboral en seis días. La conflictividad

rebrotó a comienzos de 1923, por la falta de asistencia médica en las minas de la zona —un solo médico, que residía a 10 kilómetros de las minas, por caminos de sierra—, el incumplimiento patronal de la ley de accidentes de trabajo y la persistencia de jornales ínfimos; ante esa situación, Justiniano Bravo, cuadro comunista de origen albaceteño enviado a Almería para organizar el partido, marchó a Serón a comienzos de marzo y se puso al frente del Sindicato Minero y del conflicto. El despido de tres mineros y el incumplimiento patronal del pacto suscrito a instancias del Gobierno civil para su readmisión y la atención de las reivindicaciones de los mineros desembocaron en una huelga de las minas de Serón y Bacares que, desde mediados de mayo, paralizó por completo las explotaciones. El paro se prolongó durante meses, con huelga general de solidaridad en la ciudad de Almería el 24 de junio incluida; y llegó a su nivel máximo de tensión el 30 de agosto, cuando la guardia civil disparó contra los huelguistas que bloqueaban la formación de un tren de carga para reactivar el trabajo con esquiroles, matando a uno de aquellos e hiriendo a varios. Aunque la prolongación del paro empezaba a agotar la capacidad de resistencia, todavía no había finalizado cuando el golpe militar cambió el escenario. La huelga acabó, pero la acción consolidó una organización comunista de un par de centenares de afiliados en Almería y la sierra de Filabres.

Golpes y caídas

El régimen primorriverista truncó las expectativas, centradas en el impulso de un sindicalismo combativo que había encontrado su mejor audiencia en la minería. Primo de Rivera cortocircuitó la radicalización de los conflictos. El 2 de octubre, una reunión en Madrid entre Manuel Llaneza, el general Luis Bermúdez Castro —subsecretario de Guerra, que había sido gobernador militar de Oviedo desde 1919— y el propio dictador puso las bases de un acuerdo de protección gubernamental a la minería y a las mejoras conseguidas por el SOMA, a cambio de que este mantuviera su comportamiento moderado. Las ejecutivas del PSOE y la UGT dieron por bueno el acuerdo circunscribiéndolo a la minería, pero en la práctica esa fue la pauta generalizada en las relaciones entre la UGT y el régimen primorriverista hasta que la entente entró en crisis a partir de 1927. No descartó de entrada el nuevo régimen llevar a los sindicatos comunistas a algún acuerdo semejante; el gobernador de Vizcaya propuso a Pérez Solís y a Bullejos

la reapertura de la Casa del Pueblo y la autorización de los sindicatos a cambio de que renunciaran a la política de movilización (Bullejos, 1972), pero aquellos no aceptaron, frustrándose la neutralización del PCE.

El PCE había condenado el golpe e intentado una movilización contra él, sin éxito, ante la pasividad socialista y anarcosindicalista. Todos estaban expectantes, a la espera de que se concretaran la naturaleza y el alcance del pronunciamiento y si se cumpliría su anuncio de que se trataba solo de una circunstancia temporal. Finalmente, la dictadura se prolongó, buscando su propia arquitectura institucional, y fue definiendo una relación compleja con el movimiento obrero: ante el PCE combinó una relativa tolerancia respecto a La Antorcha —que siguió publicándose hasta finales de 1927— con una represión discrecional y recurrente que acabó desencuadernando a la joven organización. Esa represión, además, ampliaba la ya sufrida a cuenta de la crítica a la guerra de Marruecos, al Ejército y a la Corona, y que había significado procedimientos de jurisdicción militar que seguían en curso contra Lamoneda o el Comité Ejecutivo de las Juventudes Comunistas, detenido en agosto de 1922 por un manifiesto antimilitarista.

Frustrada la neutralización pasiva, el Directorio militar de Primo de Rivera ideó un primer golpe preventivo, inventándose un fantasioso complot entre comunistas españoles y portugueses que supuestamente habrían de desencadenar el 28 de diciembre una acción insurreccional. Siete días antes desencadenó una redada en diferentes lugares de España, sobre todo en el norte, y suspendió las actividades de los sindicatos controlados por los comunistas. Las detenciones se contaron por decenas en Madrid, Andalucía, Asturias y Vizacaya. Fue un golpe general con un impacto psicológico y organizativo más que importante. Entre los detenidos estaban César R. González, Lamoneda y Andrade, del Ejecutivo del PCE; los dirigentes asturianos Eduardo Castro, Lázaro García y José Rodríguez; el sevillano Manuel Hurtado; y el vizcaíno Roberto Fresno; una suma de cuadros nacionales y regionales cuya caída quebró la columna vertebral de la organización. A ello se añadió pocos después el ingreso en prisión de Tiburcio Pico, secretario general de las juventudes, y de José Bullejos, para cumplir sentencias por delitos de prensa. Oscar Pérez Solís se salvó al estar convaleciente por las heridas padecidas en el asalto a la Casa del Pueblo de Bilbao. Portela huyó a Francia antes de ser detenido, donde encontraban ya también José López y López, Manuel Núñez de Arenas y el valenciano Julián Gómez, Gorkín, huidos anteriormente para evitar el cumplimiento de condenas. En los primeros meses de 1924 siguieron produciéndose detenciones de cuadros

comunistas conocidos cuando estos se manifestaban políticamente en público; en abril le tocó a Merino Gracia, instalado desde 1922 en Barcelona, donde se había incorporado a la agrupación comunista local. Los locales del partido fueron clausurados. Meses más tarde, ante el pleito planteado por la UGT y el PSOE, los comunistas fueron desalojados de la Casa del Pueblo de Bilbao, que fue judicialmente entregada a las organizaciones socialistas. Para sortear los requisitos del registro de sociedades y de la autorización previa de actos, las agrupaciones comunistas recurrieron a formar sociedades deportivas, habitualmente de fútbol, para poder seguir celebrando sus reuniones.

De ese primer golpe del invierno de 1924, al PCE le salvó meses después el Decreto de Amnistía del 4 de julio, promulgado para encubrir la puesta en libertad del general Berenguer, tras su condena por los hechos de Annual. La inmensa mayoría de los presos comunistas recuperaron su libertad, aunque algunos, que lo eran con carácter gubernativo, pero no por sentencia, siguieron en prisión. Entre estos últimos estaban Merino Gracia y Ángel Pumarega, que firmaron el 21 de diciembre de 1924 una carta pública de ruptura con el PCE y sus sindicatos, tras la cual fueron puestos en libertad. Merino Gracia se integró después de salir en libertad en los Sindicatos Libres. Antes que él Mariano García Cortés se había sumado al Partido Liberal de Romanones, después de dejar el PCE tras la unificación y actuar hasta el fin de su mandato como "regidor comunista independiente". Algunas de las figuras más notorias del primer "tercerismo" empezaban a desaparecer de la escena comunista. En contrapartida, las relaciones entre la ISR y los grupos sindicalistas liderados por Maurín se consolidaron, y finalmente, Maurín y algunos de sus colaboradores más cercanos se integraron en las filas del PCE, formando la Federación Comunista Catalano-Balear.

Las detenciones de diciembre-enero llevaron a la dirección del PCE a extremar un comportamiento, que había sido el habitual en la socialdemocracia en momentos de adversidad: priorizar la preservación de la organización al impulso de acciones que podría erosionar todavía más las propias fuerzas. No era una decisión errónea, sin embargo, chocó con el nuevo giro que se impuso en la dirección internacional tras la muerte de Lenin, en el contexto de la confrontación en el seno del PCR-b por la orientación política de la URSS y la dirección del partido. Ante la eventualidad de que Trotsky encontrara apoyo entre la militancia más radicalizada del movimiento comunista, Zinóviev —aliado entonces con Bujarin y Stalin— maniobró asumiendo él mismo las posiciones más "a la izquierda", en contra de la orientación del frente único y de

la conquista de la mayoría de las clases trabajadoras.

En la reunión del CE la IC, en enero de 1924, Zinóviev afirmó que el reciente fracaso de un intento insurreccional comunista en Alemania, en octubre de 1923, se debía al comportamiento de la socialdemocracia, que no lo había secundado, e introdujo la noción de que esta se había convertido en una fracción del fascismo, por lo que el frente único no podía hacerse con su dirección, sino "por la base" y en torno al Partido Comunista. Esa pretensión significaba, en la práctica, abandonar la línea del frente único. Añadió que el periodo de estabilización capitalista se empezaba a agotar, como lo demostraba —bajo su criterio— la formación aquel mismo mes del Gobierno laborista encabezado por Ramsay MacDonald en el Reino Unido, que hacía equivaler al de Kerensky en la Rusia de 1917. Siempre según Zinóviev, el Gobierno MacDonald fracasaría y con ello se aceleraría una dinámica "prerrevolucionaria". En consecuencia, había que lanzarse de nuevo al asalto de la fortaleza burguesa y la "teoría de la ofensiva" volvió por la puerta grande a la política comunista. Ese giro se consagró en el V Congreso de la Internacional, entre el 17 de junio y el 8 de julio de 1924; en el que, además, para culminar el control de la IC ante las derivas del debate interno en el PCR-b, se añadió un programa general de "bolchevización" interna de las secciones nacionales, reforzando los mecanismos de centralización en perjuicio de los de debate, instando a pasar de la organización territorial a la de células en los lugares de trabajo y a la proletarización de las direcciones. La "bolchevización", concebida en términos administrativos, abrió el camino para la condena y exclusión de los disidentes.

En el PCE se generalizó un lenguaje en el que el objetivo inmediato no era la conquista de las masas, sino la organización de la revolución, entendida como un hecho insurreccional, cuya eclosión arrastraría definitivamente a las masas. La lucha principal ya no pasaba a ser, ni siquiera, contra el reformismo, sino contra el hipotético enemigo interno. A ello instó el propio CEIC, que en una carta a mediados de septiembre a la dirección del PCE se quejaba de que el partido español no le comunicara nada y mostrara una política de pasividad, en particular ante la guerra de Marruecos, reactivada con la intervención francesa a mediados de 1924. El PCF, nombrado tutor de hecho del PCE (Ceamanos, 2010), había iniciado una campaña de agitación contra la guerra del Rif y esperaba que los comunistas españoles la secundaran. Baena respondió el 20 de octubre, en nombre de la dirección del PCE, rechazando la crítica a la pasividad como injusta, dada la precaria situación en la que se encontraba el partido; añadiendo que, "por atenernos a la letra de las resoluciones de la Internacional,

el Partido y la Federación de las Juventudes han sido prácticamente deshechos varias veces” (Elorza y Bizcarrondo, 1999). La discrepancia acabó en una reunión del Pleno ampliado del Comité Central del PCE, en noviembre de 1924, en la que, ante el aluvión de críticas, la dirección elegida en el II Congreso dimitió y fue sustituida por una “comisión provisional” integrada por Pérez Solís, Maurín y Martín Zalacaín (alias que utilizaba en ese momento González Canet), de la Federación de Levante; Martín Sastre, de Vizcaya; y Roberto Fresno por las juventudes. La voz cantante de la crítica la llevó Maurín, quien posteriormente se atribuyó la posición de secretario general; no está claro que fuera exactamente ese su título, aunque sí que mantuvo la responsabilidad principal en el nuevo organismo de dirección, aceptada por el CEIC el 19 de enero de 1925.

El nuevo rumbo del partido quedó abortado antes de que pudiera iniciarse. A la semana siguiente del Pleno, la detención fortuita de González Canet y Martín Sastre, en Madrid, dio lugar a una nueva caída general que involucró también a los miembros del Comité Central dimitido. Maurín y Pérez Solís escaparon al no estar ya en la capital, pero no por mucho tiempo. El 12 de enero de 1925, Maurín fue detenido en Barcelona, recibiendo un disparo en un frustrado intento de huida, que le dejó con una cojera permanente; su confirmación como secretario general llegó tarde. Pérez Solís, que tras conocer las detenciones había marchado a París, tuvo que regresar a España a comienzos de febrero para encabezar en Barcelona una nueva dirección provisional. Tampoco duró, fue a su vez detenido el 13 de febrero junto con Roberto Fresno. Pérez Solís tuvo que abandonar la Secretaría General provisional, aunque siguió colaborando desde la cárcel con el partido, publicando artículos en La Antorcha, hasta que, en marzo de 1928, tras una relación reanudada en la cárcel con el dominico José Gafo, impulsor del sindicalismo católico en el norte de España, hizo público su abandono del comunismo y su retorno al catolicismo militante. La situación era de desastre total, el partido descabezado, perdiendo militantes, y divididos y desorientados los que quedaban. En ese punto, incluso su supervivencia quedaba en el aire.

Iniciativas sin sentido y rupturas internas

Ante el vacío de dirección generado por las detenciones, el CEIC aprobó el 13

de abril de 1925 la propuesta que Pérez Solís, Maurín y Arlandis hicieron desde su prisión en Barcelona de nombrar como secretario general a José Bullejos. El CEIC le dio plenos poderes para organizar un nuevo aparato dirigente e impulsar la adecuación del partido al nuevo periodo “prerrevolucionario” y la “bolchevización”. Bullejos, que estaba en Moscú desde octubre de 1924 como representante del PCE ante la IC, regresó de inmediato a Francia, consiguió el apoyo de los comunistas españoles allí exiliados y, tras recuperar un primer contacto con las organizaciones del interior, convocó en mayo de 1925, en Ivry —municipio de la aglomeración de París—, una reducida conferencia de reorganización con delegados de Vizcaya, Asturias, Cataluña, Levante, Galicia y las juventudes. En ella se aprobó el nuevo Ejecutivo, con Bullejos como secretario general, Portela de Organización, Gabriel León Trilla de Agitprop, Andrade como director de La Antorcha y dos vocales más de las federaciones de Asturias y Vizcaya. La superación del “atentismo” que las efímeras direcciones encabezadas por Maurín y Pérez Solís no habían podido llevar a cabo, se materializó en dos iniciativas sucesivas que no llevaron a ninguna parte: la participación en el proyecto insurreccional impulsado por Francesc Macià y el primer intento de control general de la CNT. Paralelamente se llevó a cabo la primera depuración general contra los residuos “reformistas” y la permanente disidencia “izquierdista”, a la que se achacó el agravante de su conexión, más supuesta que real, con Trotsky.

Maciá había concebido en Francia un delirante proyecto insurreccional cuya primera manifestación organizativa fue, en enero de 1925, el denominado Comité de Acción de la Libre Alianza (CALA), integrado por Estat Català, la corriente Aberri (patriótica) del nacionalismo vasco y supuestamente la CNT, en realidad, el Comité Nacional del sindicato de la época —una superestructura organizativa desconectada de sus principales bases, instalada en Gijón—, representado por Rafael Vidiella. Su objetivo era derribar la dictadura y la monarquía y conseguir en ese proceso la autodeterminación de Cataluña y el País Vasco. Tras frustrarse la financiación de un grupo de especuladores —franceses, polacos y checoslovacos—, que en realidad buscaban un golpe de efecto para beneficiarse en bolsa, el CALA quedó inactivo. Hasta que, a finales del verano de 1925, el PCE decidió sumarse a la conspiración de Macià, que había conseguido también el apoyo de un reducido grupo de militares españoles, federalistas (los capitanes Fermín Galán y Juan Perea y el teniente Jesús Rubio Villanueva). Se constituyó entonces un Comité Revolucionario instalado en París, que conectaría con el Comité Militar del interior, en el que Bullejos y González Canet representaron al PCE, mientras que Portela, enviado a España

para reorganizar el partido, enlazó con el grupo de militares. La gran baza del PCE era la financiación que la IC pudiera dar al proyecto, por lo que Bullejos, Maciá y Josep Carner-Ribalta marcharon a Moscú donde, junto con Nin, se reunieron a mediados de noviembre con Zinóviev y Bujarin (Ucelay-Da Cal y Esculíes, 2015). Los dirigentes de la IC, empero, frenaron la impaciencia insurreccional de Macià y condicionaron el apoyo económico al trabajo previo de agitprop que los españoles habrían de realizar. El único resultado fue un acuerdo genérico para luchar por la "abolición" de la dictadura y la monarquía, instaurar una república federativa popular, reconocer el derecho a la independencia de Cataluña, el País Vasco y la República del Rif, con la retirada de las tropas españolas de Marruecos, y la amnistía general para los presos políticos y sociales.

El Comité Revolucionario y el Comité Militar se reunieron en París el 26 y el 27 de enero de 1926 y ratificaron lo sustantivo de aquel acuerdo. Sin embargo, los militares impusieron bajar el tono de los objetivos. El acta de la reunión de los dos comités se limitó a considerar en la cuestión nacional "la resolución inmediata del problema referente a las distintas nacionalidades que integran España (Catalunya, Basconia, Galicia, etc.)", lo que sonaba más a federalismo que a separatismo; y en la de Marruecos a "preparar el abandono", lo que introducía su temporalización, sin citar a la República del Rif (Santasusana i Corzan, 2016). A la hora de la verdad, el proyecto no pasó del papel. El Comité Nacional de la CNT no ratificó el acuerdo, se limitó a apoyar la insurrección, pero rechazó iniciarla y sustituyó a Vidiella por Emili Mira en el Comité Revolucionario. La IC nunca proporcionó las 400.000 pesetas que pedían los militares para su organización del golpe. Por parte del PCE no hubo un claro convencimiento sobre la oportunidad del golpe insurreccional y sus relaciones con el Comité Revolucionario de París se rompieron en mayo. De aquel episodio se derivaron dos consecuencias principales. Por un lado, la dirección del PCE quedó escarmentada en cuanto a la viabilidad de un movimiento militar contra la dictadura. Por otro, en el discurso comunista español se incorporó la versión esquematizada de la defensa leninista del derecho a la autodeterminación hasta la separación[19]; por más que no quedase claro si el PCE había de emprender alguna acción en tal sentido o limitarse a esgrimir tal derecho como un argumento táctico para la formación de un frente único revolucionario con los independentistas (Díaz Alonso, 2019).

El fiasco de la breve alianza con Maciá fue acompañado de la depuración interna que, en nombre de la "bolchevización", llevó a cabo Trilla desde finales de 1925,

con decenas de cuadros expulsados; y que incluyó el apartamiento de Portela y Andrade de sus responsabilidades. A la expulsión de los cuadros le siguió el abandono de muchos militantes que les eran afines, haciendo más intensa la sangría de militantes que había iniciado años antes la represión. De los 5.000 que el PCE tenía todavía a finales de 1923, quedaba un escaso millar a mediados de 1927, casi la mitad de ellos en Vizcaya. Sin línea política, sin interés ya por la quimera insurreccional de Maciá o de Sánchez Guerra, reducida a una pobre propaganda genérica de la revolución o el Estado soviético, la sección española de la IC había bajado a un suelo del que no se despegaría hasta después de la proclamación de la Segunda República. En ese suelo, apenas lo mantuvo en pie el ensayo de elaboración de una identidad específica de la revolución española, con la esperanza de dar respuestas coherentes al declive de la dictadura; así como el renovado intento de atraer a la CNT al campo comunista.

Entre las necesidades para activar la acción comunista en España destacaba la de superar su hándicap de presencia en el movimiento obrero, tras su exclusión de la UGT y la decisión final de la CNT de no integrarse en la ISR. La dirección de Bullejos hizo en 1926 un intento fracasado de promover una plataforma sindical mediante la recuperación de la idea de la unidad; pero materializada de manera administrativa, con la convocatoria por cuenta propia de una Conferencia de Unidad Sindical, no tuvo ningún eco y hubo de suspenderse de manera indefinida en agosto de aquel año. Buscó entonces otra opción y encontró esperanza en la crisis de la CNT. Ilegalizada desde mayo de 1924, con Solidaridad Obrera prohibida y los comités nacionales desarticulados de manera recurrente por la Policía, sus bases sindicales sobrevivían dispersas, como sindicatos autónomos o, incluso, integrados en los Sindicatos Libres para mantener un aparato protector (Del Río, 2002; Vega, 2004). Esa situación se tradujo, en los medios anarcosindicalistas, en debates sobre la supervivencia del sindicato y la capacidad del anarquismo para seguir proporcionando el hilo de su costura ideológica. De manera particular, la polémica generada por Pestaña, entre 1927 y 1929, sobre la conveniencia de recuperar el estatus legal convirtiendo sus sindicatos en profesionales e integrándose en los comités paritarios de la dictadura, a lo que se opuso Peiró, y la fundación, en 1927, de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) para asegurar la pervivencia del anarquismo en el sindicato. La dirección del PCE vio en esa fragmentación y desorientación del anarcosindicalismo su oportunidad. En febrero de 1927 Bullejos escribió a la ISR: “Disuelta la Confederación, creen nuestros camaradas que el descrédito de los anarquistas hace posible a nuestro partido reorganizar la CNT” (Elorza y Bizcarrondo, 1999).

Reconstruir la CNT desde el PCE y crecer en el movimiento obrero a partir de esa CNT hegemonizada por los comunistas era un objetivo ambicioso, aunque no carecía de precedentes parciales: los sindicatos únicos de la minería en el norte del país, la adhesión al comunismo de miembros de la CNT en Cataluña y Valencia, y, más recientemente, las relaciones entre la organización sevillana del PCE y la de la CNT, que a finales de 1924 habían constituido un Comité de Enlace entre ambas (Arenas Posadas, 1991). Los sindicalistas revolucionarios de la CNT andaluza —entre los que destacaban entonces Manuel Adame y los hermanos Mije, con José Díaz por el momento en segundo plano y en funciones de hombre de acción— se identificaban con la ISR y cotizaban para el Socorro Rojo Internacional. Manuel Adame fue de los primeros en ingresar al PCE; poco después, cuando a comienzos de 1927 fue detenido el Comité Regional del PCE, Adame propuso encomendar a José Díaz la nueva dirección y la reorganización del partido en Andalucía. Díaz, que todavía no había ingresado en el PCE, lo hizo todo al mismo tiempo y aceptó la responsabilidad que se le daba. Si en Andalucía la militancia cenetista reconstruía el partido, ¿por qué no se había de seguir el camino inverso en toda España?

Esa había de ser la orientación sindical en los siguientes cinco años. No obstante, el punto del que partía Bullejos en 1927, la disolución de la CNT, era inexacto; ya en enero de 1928 se celebró en clandestinidad un Pleno Nacional de la CNT, en el que se cerraba el paso a la reconstrucción comunista concentrando en las corrientes sindicalistas y anarquistas los protagonismos de la supervivencia de la Confederación (Del Río, 2002). Solo la prolongación de su ilegalidad y sus enfrentamientos internos entre sindicalistas y anarquistas siguieron alimentado la ilusión de la dirección comunista, reforzada desde la cúspide de la IC. En junio de 1930, Jacques Duclos, delegado en España del CEIC, impuso al PCE que diera el paso de constituir por su cuenta, en Sevilla, un autoproclamado “Comité Nacional de Reconstrucción de la CNT”, integrado exclusivamente por comunistas. Resultó un completo fracaso. La CNT estaba ya reorganizándose desde que el Gobierno Berenguer la había autorizado de nuevo en abril y ni siquiera buena parte de los sindicatos comunistas —para empezar, los de Asturias y Vizcaya— compartían la idea del comité propio, que temían que fuera visto como una maniobra escisionista en el campo sindical. El Comité de Reconstrucción de la CNT se trasladaría más tarde a Barcelona para intentar ampliar su influencia, pero ni así consiguió prosperar.

Mientras el PCE buscaba sus líneas de acción política y sindical, fue construyendo también una concepción específica de la “revolución española”,

que había de adaptar al país la experiencia referencial de la revolución soviética. En esa tarea el papel principal corrió a cargo de los organismos de dirección de la IC, el Comité Ejecutivo y sus plenos, así como los organismos de supervisión y dirección intermedios, el Secretariado Latino y el Romano[20]. Las resoluciones del Secretariado de la IC de enero de 1927 y mayo de 1928 (Elorza y Bizcarrondo, 1999; Humbert Droz, 1988) y los escritos del delegado de la Internacional M. Garlandi —nombre de guerra del comunista italiano Ruggero Grieco— (Cruz, 1987) calificaron a España como un Estado capitalista, en el que predominaba el capital financiero, con supervivencias feudales en el campo por la privilegiada posición de los propietarios terratenientes en el seno de las clases dominantes y la influencia de la Iglesia católica, determinantes por el carácter mayoritariamente agrario de la economía española. Se reconocía el crecimiento de las burguesías industriales en Cataluña y el País Vasco, y su presencia en el bloque de las clases dominantes, pero sin conseguir hegemonizarlo y, por ello, sin estar en condiciones de hacer culminar el triunfo pleno del capitalismo, como lo habían hecho las “revoluciones burguesas” en Europa. Esas supervivencias feudales impedían el progreso económico, y sobre todo determinaban que el momento histórico de la revolución española era el de la conclusión de la “revolución democrática-burguesa”, de las tareas históricas de reforma política y social que la burguesía española era incapaz de llevar a cabo: la democracia, la redistribución de la propiedad de la tierra y, en el caso español, la reorganización territorial del Estado. Correspondería al proletariado y al campesinado, bajo la dirección del primero, cumplir esa etapa histórica previa, insoslayable para el avance hacia la revolución socialista.

Ese mejunje teórico, construido en la estela de la sacralización de la Revolución rusa como modelo cerrado y referente no ya ideológico, sino político inmediato, constituía una proyección simplista de la experiencia y la política bolchevique desde comienzos de siglo; su concreción táctica resultaba impracticable al querer imponerla sobre la realidad en vez de partir de ella, de manera que la pretensión de acción política comunista se reducía en la práctica a propaganda. No era un problema exclusivo del PCE, sino de toda la IC desde mediados de los años veinte. Con una excepción, el comunismo italiano, que bajo el liderazgo de Gramsci y Togliatti había empezado a considerar la propuesta de una etapa de revolución popular frente régimen fascista basada en una alianza entre el proletariado urbano, los campesinos y sectores antifascistas de las clases medias (Agosti, 2003); esa aportación abría una vía de consideración nacional de la revolución que no fuera mímesis de la rusa, ni siquiera en los términos de la lucha política y las consignas de acción. La sustitución de Zinóviev por Bujarin

al frente de la IC, en 1926 —después de que el primero hubiese cambiado de posición en el conflicto interno soviético para aliarse con Trotsky—, favoreció temporalmente las posiciones de los italianos. En esas circunstancias la resolución del CEIC de enero de 1927 sobre la cuestión española, presentada precisamente por Togliatti, tradujo las fórmulas generales en términos de república popular y federal española, sobre la base de la representación de trabajadores y campesinos; por más que alguna crítica a la exposición de Togliatti debió hacer que en el texto definitivo se hiciera un nuevo recorte dejando la base social de ese régimen de transición en "la representación de la clase trabajadora".

Resultó flor de un día. Bujarin, derrotado frente a Stalin a comienzos de 1929, tuvo que abandonar la Presidencia de la IC, y el X Pleno ampliado del CEIC, en julio de aquel año, desautorizó como "oportunismo de derecha" la posición de los italianos sobre la revolución popular y la amplia alianza social que había de sustentarla. El cambio repercutió en el PCE, que en su III Congreso, reunido en París en agosto de 1929, y luego en la denominada Conferencia "de Pamplona", celebrada en Bilbao en marzo de 1930, adoptó la tesis de una inmediata ruptura revolucionaria como salida a la crisis de la dictadura de Primo de Rivera; caracterizada como revolución "democrático-burguesa" dirigida por el proletariado con el apoyo del campesinado y articulada por sóviets. Culminó con ello una política de aislacionismo absoluto de los comunistas frente a todas las organizaciones obreras y políticas de izquierda convertidas en contrarrevolucionarias. La Federación Comunista Catalano-Balear, dirigida por Maurín, entonces exiliado en París, propuso por el contrario una república federal democrática como alternativa a la dictadura, así como no persistir en la intención de "reconstrucción de la CNT"; pero la dirección del PCE encabezada por Bullejos no le dejó participar en el congreso[21] y las propuestas de su federación fueron rechazadas. En consecuencia, el PCE no se incorporó en 1930 al movimiento republicano, lo denunció como un intento de manipular para fines políticos burgueses las luchas obreras, intensas en el otoño de aquel año, y condenó por esa razón la sublevación de Galán y García Hernández del 12 de diciembre de 1930 en Jaca.

En 1930 el PCE tocaba fondo. En el momento del III Congreso se había reducido a 800 militantes, con organización real solo en Vizcaya —216—, Andalucía —165—, Cataluña —145—, Asturias —140— y Castilla —80—, incluida la agrupación de Madrid. Bullejos, Trilla, Adame y Etelvino Vega no fueron capaces de gestionar las divisiones internas, agravándolas y llevando a la

ruptura a la Federación Comunista Catalano-Balear. Cuando en junio de 1930 Maurín regresó a Barcelona, la dirección del PCE le conminó a hacer una declaración pública de retractación, a lo que se negó, por lo que fue expulsado junto con la Federación Comunista Catalano-Balear, solidarizada con su líder. En agosto se expulsó a la Agrupación Comunista de Madrid, dirigida de nuevo por Portela. Ambas organizaciones disidentes llamaron en septiembre de 1930 a no reconocer a la "falsa dirección" del partido y celebrar un Congreso de Unificación de todas las fuerzas comunistas de España, que nunca se realizó. Fue aquella la primera escisión de importancia en el movimiento comunista español. En las elecciones del 12 de abril de 1931 el PCE se presentó en solitario, contra todos, y con sus fuerzas tan minimizadas que ni siquiera en la ciudad de Sevilla pudo obtener un resultado satisfactorio: entre 800 y 1.000 votos; en Madrid un par de centenares, en Barcelona apenas cien; algún concejal disperso en el norte y en Andalucía. La Federación Comunista Catalano-Balear se coaligó con el Partit Comunista Català (PCC)[22], constituido de manera independiente de la IC, en un Bloque Obrero y Campesino (BOC) que consiguió 3.000 votos en Cataluña en las municipales de febrero.

CAPÍTULO 5

EL GRAN SALTO HACIA ADELANTE

Bajo banderas confusas

Los comunistas se distinguieron el 14 de abril por sus muy minoritarias manifestaciones en contra de la proclamación de la "república burguesa", lo que les ganó en Madrid el abucheo de la gran mayoría del pueblo que celebraba su proclamación. No fue una entrada afortunada en el nuevo régimen político. No obstante, la etapa constituyente que se abrió y el nuevo régimen de libertades favorecieron una lenta recuperación del PCE, a pesar del fracaso de sus predicciones y decisiones políticas. Por más que se pretendiera en la propaganda comunista que nada sustantivo había cambiado, la realidad era que sí y beneficiaba objetivamente al PCE y al resto de formaciones populares. No obstante, el límite de ese beneficio lo puso el desajuste de la propia política comunista a la nueva realidad; encorsetada por un cuerpo de consignas miméticas de la experiencia bolchevique, su acción política se redujo a la propaganda. El PCE fue la organización obrera que menos creció en los tres primeros años de la Segunda República. Dio un gran salto inicial, porque venía de muy abajo, pasando de unos centenares de afiliados en diciembre de 1930 y 1.500 en abril de 1931 a 8.800 en diciembre de 1931 y 13.500 justo un año después (Hernández Sánchez, 2010), pero en esa cota se paró su crecimiento. Por otra parte, ese crecimiento fue muy desigual: Andalucía concentraba casi la mitad de la afiliación —unos 5.700 en 1932—, seguida del País Vasco —1.300—, en tanto que Cataluña, principal región industrial, no conseguía sumar más de medio millar (Cruz, 1987).

Gabriel Trilla, el más capacitado intelectualmente del grupo dirigente, intentó conciliar doctrina y realidad en su proyecto de tesis de octubre de 1931 (Humbert-Droz, 1988). Tras establecer una distinción entre la Restauración y la República centrada en la correlación de fuerzas en el seno de las clases dominantes, mantuvo la identidad sustantiva en el carácter de clase y la

continuidad de su definición de capitalismo imperfecto por las supervivencias feudales. En la monarquía los grandes propietarios de la tierra, la gran burguesía y el capital financiero se habrían combinado de manera que, aunque los primeros mantenían todavía sus grandes privilegios, el capital financiero y sobre todo la burguesía industrial adquirían un papel cada vez más preponderante. La República mantenía esa combinación, con un cambio en la correlación de fuerzas al haber conseguido la gran burguesía arrastrar a la pequeña burguesía y a "capas importantísimas" de la clase obrera a sus posiciones. Esa atracción se habría producido mediante la intermediación de los socialistas, considerados como contrarrevolucionarios, de acuerdo con la política de "clase contra clase" aprobada en el VI Congreso de la IC en 1928; y desde 1929 como principales agentes de la contrarrevolución bajo la calificación de "socialfascistas"[23]. Dado que la crisis económica mundial, iniciada en 1929, parecía anunciar la inminencia del periodo "prerrevolucionario", la República fracasaría como lo había hecho la monarquía. El discurso de rechazo fue integral y monocorde: el Gobierno era contrarrevolucionario, las Cortes Constituyentes eran el instrumento legislativo de la revolución en marcha, las leyes sociales —sin excepción—, maniobras de engaño para en cualquier caso favorecer a las organizaciones socialistas y sus afiliados, etc. La alternativa: un cartel de colores chillones imposible de aplicar. Las consignas principales ante las elecciones constituyentes de junio de 1931 fueron la creación de sóviets obreros, campesinos y de soldados, el desarme de la Guardia Civil y el armamento del proletariado, la "toma revolucionaria" de la tierra de los grandes propietarios. La labor del PCE había de ser la de extremar las contradicciones de clase, las confrontaciones sociales, para sacar a las masas de la trampa reformista y acelerar el tránsito a la fase revolucionaria. En esa tarea de llevar los conflictos al punto más extremo destacaron dos líneas: la cuestión nacional y la cuestión campesina.

La primera de ellas estuvo negativamente marcada desde el inicio por el reduccionismo de la compleja doctrina leninista sobre la cuestión nacional por parte del Comité Ejecutivo de la IC y de Manuilski en particular a partir de su V Congreso en 1924. Lenin había defendido hasta octubre de 1917 la consideración del reconocimiento del derecho de autodeterminación, apuntando siempre que su propuesta no era la separación, para añadir a partir de entonces el federalismo como opción política e institucional en el periodo transitorio tanto en el Estado soviético como en Europa. Significativamente, la ponencia sobre la cuestión nacional aprobada en el II Congreso de la IC desarrollaba el rechazo a la opresión de las minorías nacionales en Europa, conjugándolo con soluciones

de corte federal, dejando la autodeterminación fundamentalmente para el mundo colonial. En 1924, en el contexto de la corrección sectaria de la línea que se había ido construyendo hasta 1922 y de la confrontación con la dirección del Partido Comunista Checoslovaco —el de mayor afiliación entonces en la IC después del ruso—, Zinóviev y Manuilski recuperaron la consigna autodeterminista, no solo despojándola de todos los matices añadidos por Lenin antes y después de 1917, sino antagonizando esa consigna con la defensa de propuestas federalistas o autonomistas transitorias (Carr, 1975; Carrère d'Encause, 1987). El CEIC condenó la defensa del federalismo en Checoslovaquia y del movimiento autonomista en Alsacia-Lorena, inmovilizando a los partidos comunistas, también en este terreno, en una acción de propaganda estéril sin ninguna respuesta política efectiva.

Como se ha explicado antes, el PCE incorporó el discurso sobre la cuestión nacional y la propaganda autodeterminista, a instancias del Comité Ejecutivo de la IC, para participar en el episodio de la conspiración de Maciá. A partir de ese momento lo mantuvo, de manera harto confusa y sin gran convicción fuera de Cataluña y Guipúzcoa. Por otra parte, fue una preocupación marginal de la dirección del partido en lo que quedó de década, con manifestaciones puntuales y, forzosamente, retóricas (Díaz Alonso, 2019). Una muestra de esa confusión fue que, mientras en el conjunto del PCE —a excepción de Cataluña— la cuestión importaba bien poco, el Comité Regional de Vizcaya, en un acto inusitado de converso en una provincia en la que la militancia era abiertamente hostil al nacionalismo, reclamó en marzo de 1930 directamente la independencia de Cataluña y Vizcaya y su separación del Estado español.

La proclamación de la Segunda República puso entre los primeros puntos del orden del día político la cuestión territorial, como ya había sucedido en la experiencia democrática del Sexenio. De manera que el CEIC instó al PCE a superar su incomprensión del problema nacional y su pasividad; aunque lo hizo con su receta doctrinaria e inoperante: "Crear sobre las ruinas del imperialismo español la libre federación ibérica de repúblicas obreras y campesinas de Cataluña, Vasconia, España, Galicia y Portugal" (Carta Abierta del CEIC al CC del PCE, mayo de 1931). Esa orientación no pudo tener ninguna traducción práctica; además, la organización catalana no se había restablecido de la crisis de 1930-1931 y la provincial de Vizcaya redobló su confrontación con el nacionalismo. Con sus 700 afiliados, muy por encima de los 150 de Guipúzcoa, más inclinada al reconocimiento cultural de la nacionalidad vasca, la de Vizcaya determinaba las posiciones de la Federación Vasco-Navarra, dirigida por Vicente

Uribe. Manuilski atribuyó la falta de acción concreta y de resultados no a la inadecuación de las orientaciones del CEIC, sino a la falta de acción de Bullejos y su dirección; por lo que intervino de nuevo con una segunda “carta” pública de amonestación —una crítica general a la gestión de la dirección del partido—, acusándola de “pasividad sectaria con respecto a los movimientos de emancipación nacional de los catalanes, vascos y gallegos y un olvido casi total de los marroquíes” (Elorza y Bizcarrondo, 1999). Bullejos, que ante la “carta” presentó y retiró su dimisión de la Secretaría General, tomó nota de la reprimenda. Reconoció y criticó públicamente, a su vez, que para gran parte de la militancia la cuestión nacional era solo “un problema artificial, creado voluntariamente por la burguesía de estos países y que interesa solo a las clases dominantes”[24]; y la cuestión se incluyó como uno de los temas principales del IV Congreso del partido, iniciado en Sevilla el 17 de marzo de 1932.

El congreso tomó una decisión política y otra organizativa. La primera de ellas fue hacer frente de manera inmediata al debate en Cortes del Estatuto de Cataluña y al debate en el País Vasco entre el proyecto de estatuto promovido por el PNV y los carlistas —el denominado “de Estella”— y el impulsado por Prieto —que los socialistas bautizaron como el de “la libertad”[25]—, denunciando los “estatutos burgueses” y proclamando un Estatuto de la Revolución que incluiría el derecho de autodeterminación y la sustitución de la fuerza pública y las Fuerzas Armadas por el Ejército de los obreros y campesinos. La organizativa consistió en la constitución de la Federación Catalana y la Federación Vasco-Navarra en sendos “Partidos Comunistas” regionales, algo que no iba más allá del cambio de denominación por lo que se refiere a la estructura de la sección nacional española de la IC, que seguía siendo única, aunque buscaba reforzar la iniciativa de aquellas direcciones regionales en el ámbito de su política territorial. Su aplicación no fue tan inmediata como la de la respuesta a los estatutos, tanto por la crisis que se había empezado a abrir entre la dirección del PCE y la de la IC (ver más adelante) como por la resistencia vizcaína en el País Vasco. El Partido Comunista de Cataluña quedó finalmente constituido en vísperas de las elecciones al Parlamento catalán, con el inicio de la publicación de su semanario portavoz Catalunya Roja, pero el vasco tuvo que aguardar hasta junio de 1935.

Por el momento, el cambio en el último caso se concretó —y no fue poco— en la sustitución del vizcaíno Uribe por el guipuzcoano Luis Zapirain al frente de la Federación Vasco-Navarra y la publicación, a partir de abril de 1933, de Euskadi Roja, con el que por primera vez los comunistas incorporaron el neologismo

nacionalista. La nueva dirección regional incorporó la línea autodeterminista y se aplicó a una política de atracción de las bases populares y sindicales del nacionalismo, en particular de Acción Nacional Vasca. Sin embargo, la consigna del frente único por la base, que imponía los ataques constantes a los dirigentes de ANV, y la del Estatuto de la Revolución malograron ese intento; las bases populares del nacionalismo siguieron a sus líderes y defendieron el estatuto de autonomía finalmente pactado entre el PNV y el PSOE. El simplismo de la línea autodeterminista de Manuilski aisló por completo a los comunistas vascos, que votaron en contra del estatuto en el plebiscito del 5 de noviembre de 1933, con la única compañía en esa decisión del carlismo.

Donde mayores réditos dio a los comunistas su posición sobre la cuestión nacional fue en Cataluña, aunque no en beneficio del PCE, sino del grupo disidente de la Federación Comunista Catalano-Balear y la organización que promovió al fusionarse con el PCC, el BOC. De entrada, la militancia del PCC procedía de los sectores juveniles populares que habían participado en los movimientos conspirativos de Macià y habían sido atraídos al comunismo por las posiciones de Lenin sobre la autodeterminación y la imagen de la URSS como Estado compuesto de repúblicas independientes; eso les suponía no solo una posición política determinada, sino contacto permanente con las bases populares de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El BOC denunció a Maciá como traidor cuando, tres días después de proclamar la República Catalana, el 14 de abril, pactó con el Gobierno provisional de la República Española la renuncia a aquella proclamación y la aceptación de un estatuto de autonomía cuya concreción se integraría en el proceso constitucional del nuevo régimen. Maurín y su partido esperaban crecer entre los sectores populares de ERC que pudieran sentirse desilusionados y, entre 1931 y 1932, extremaron su discurso de reivindicación del derecho de autodeterminación, aunque sin concretar líneas de acción en tal sentido y sí en el de adaptarse al marco estatutario.

Maurín destacó en sus intervenciones en conferencias, mítines y artículos, con expresiones enfáticas como la de romper el Estado español, “semifeudal”, para establecer la unión libre de todas las nacionalidades ibéricas; aclarando que no era separatista de España, sino del Estado español, y que su objetivo final era conseguir una verdadera unidad y no la balcanización de la península ibérica (Arnau, 1974, vol. 1)[26]. Su radicalismo no pasó del papel. El BOC llamó a votar a favor del estatuto de autonomía en el plebiscito del 2 de agosto de 1931, por considerar que hacerlo en contra significaría “ayudar al triunfo del centralismo

de la burguesía panespañola"; un voto que no era imprescindible para que el proyecto de estatuto obtuviera el refrendo popular, y que muy bien podría haber sido el de la abstención, no le ganó adeptos sino sospechas de oportunismo entre el independentismo radical. Cuando las Cortes aprobaron el estatuto definitivo, en agosto de 1932, con recortes sobre el proyecto original, el BOC mantuvo su compromiso con este último proponiendo que el futuro Parlamento de Cataluña lo proclamara de nuevo. El crecimiento del BOC en el verano de 1931 se vio frenado y, contra sus expectativas, no consiguió obtener ningún diputado en las elecciones al Parlamento catalán del 20 de noviembre de 1932.

En cuanto a la cuestión campesina, el PCE se situó estrictamente en el marco del futuro Gobierno obrero y campesino y de la movilización revolucionaria para instaurarlo. Este Gobierno procedería a la expropiación sin indemnización de la tierra, a excepción de la del pequeño campesino, y a su redistribución, promoviendo el colectivismo y el cooperativismo a imagen y semejanza de la colectivización general impulsada por Stalin en la URSS a partir de 1929. La reforma agraria, como el resto de medidas del Gobierno y las Cortes republicanas, era una solución burguesa que solo pretendía la supervivencia del feudalismo en el campo español. La única perspectiva era, como forma de movilización y anticipación del futuro, promover la ocupación revolucionaria de las tierras, fueran baldías o estuviesen en explotación por parte de sus propietarios. El PCE consideraba como únicos interlocutores campesinos de la alianza revolucionaria a los jornaleros y los pequeños campesinos; en una visión reduccionista y también sectaria en la que cualquier campesino que empleara en su explotación a alguien a cambio de salario era considerado un patrón. A pesar de ello, la línea agraria fue algo más productiva que la de la cuestión nacional. La lentitud de la política reformista, condicionada por los plazos institucionales y las disponibilidades presupuestarias (Martín Ramos, 2015), así como las reacciones caciquiles en el campo, dio algún margen para que la agitación comunista se tradujera en adhesiones del proletariado campesino, particularmente en Andalucía. Aunque también le acarreó enemigos irreconciliables entre el pequeño propietario, el mediano y el arrendatario, que no explotara su tierra con los exclusivos recursos familiares.

Los límites de esa política a la contra —también contra las organizaciones obreras existentes, fueran socialistas o anarquistas— se pusieron de relieve en el fracaso reiterado de su política sindical. La política de reconstrucción nacional de la CNT había quedado en el absurdo cuando esta fue efectivamente reconstituida por los anarquistas; a pesar de ello, se mantuvo por inercia un

Comité Nacional de Reconstrucción que solo era reconocido por una minoría de sindicatos dirigidos por los comunistas. En el otoño de 1931, el PCE rebobinó su política sindical volviendo, no al punto de 1922, de defensa de la unidad sindical desde el respeto a las dos centrales existentes, sino al de 1926, erigiéndose en referente exclusivo de esa unidad que se concebía "por la base" y desde la cúspide del partido. Convocó otra vez una Conferencia de Unidad Sindical que, ante el escaso eco obtenido, no se celebró hasta el 30 de junio de 1932. Para entonces el CEIC ya había apremiado a la sección española a constituir, sin más, su propio sindicato (Cruz, 1987), de manera que, aprovechando la conferencia, una parte de los sindicatos asistentes fundaron la Confederación General del Trabajo Unitaria (CGTU)[27]. El sindicato del PCE —su primer secretario general fue Antonio Mije, escogido para ello por la dirección del partido— nació con apenas 37.000 miembros, casi 30.000 de ellos de las sociedades obreras andaluzas; su filiación máxima se produjo en 1934, con 48.000 afiliados. No obstante, sería un error reducir a la CGTU al área sindical bajo influencia comunista. En la Conferencia de Unidad Sindical participaron sindicatos que sumaban 160.500 afiliados, de los que 75.200 lo estaban en los denominados "sindicatos autónomos", 21.150 en sindicatos integrados en la UGT, 6.500 en CNT y 7.400 en la Oposición Sindical Roja. La cifra seguía siendo muy inferior a las de la UGT y la CNT, que contaban entonces con un millón y medio millón de afiliados, respectivamente. Aun así, empezaba a tener un peso de movilización, en particular en Andalucía, cuya representación en la conferencia sumaba 80.000, una cifra que era aproximadamente la mitad de la de la CNT en aquella región.

Los datos de la conferencia, por otra parte, ponían de relieve el desplazamiento definitivo del eje principal del PCE desde sus presencias iniciales en el norte de España a su desarrollo en Andalucía, iniciado a mediados de los años veinte y consolidado, desde dentro, por la nueva generación de cuadros que había estado afiliada, precisamente, a la CNT. Algo que se manifestó también en el ámbito electoral. En las legislativas de junio de 1931, de los muy escasos 58.000 votos obtenidos, casi 20.000 lo fueron en aquella región; y eso contando con la decepción sufrida en Sevilla, donde por su presencia sindical habían esperado mucho más de los 5.200 votos que obtuvieron. En el año que transcurrió entre las elecciones a Cortes Constituyentes y la Conferencia de Unidad Sindical, el PCE siguió avanzando más por el sur que por el norte. Triplicó sus resultados en las elecciones generales de noviembre de 1933, obteniendo 167.670 votos, de los que casi 65.900 fueron en Andalucía. Además, superó al PSOE en las ciudades de Sevilla y Málaga. En esta última, donde ningún candidato obtuvo el quorum

para ser proclamado en la primera vuelta, el PCE accedió a participar en la segunda vuelta en una candidatura de Frente único Antifascista, integrada también por una escisión de izquierdas del partido radical y el PSOE; lo que hizo posible que su candidato, Cayetano Bolívar, fuera elegido diputado, con 29.898 votos, apenas 140 por debajo del candidato del Frente, que quedó en primer lugar. No fue el primer diputado que representó al PCE en el Parlamento español. Antes de él lo hizo, en cierta manera de prestado, José Antonio Balbontín, elegido en 1931 por el pequeño Partido Social Revolucionario, que, en marzo de 1933, se incorporó al PCE, al que le pudo proporcionar su escaño, pero no sus votos. Bolívar fue el primer diputado propiamente del PCE, en tanto que Balbontín no logró revalidar su escaño por Sevilla.

Ese desplazamiento del eje principal del comunismo español intervino en la crisis de dirección que sufrió el partido en el verano de 1933. El nuevo conflicto interno fue, como sucedió frecuentemente en aquella época en la IC, un pequeño drama de enredos, que ahorraré al lector. Lo esencial es que Bullejos perdió la confianza de los órganos dirigentes de la Internacional por su gestión del enfrentamiento con Maurín y se convirtió en el chivo expiatorio del lento avance del PCE y en la evidencia de los errores políticos que cometía en los primeros tiempos de la República. Estos no eran ajenos a la línea general del CEIC, pero Manuilski se los cargó en la cuenta de la sección española. Bullejos logró sobreponerse a la hostilidad de Humbert-Droz y a las críticas de las “cartas abiertas” del CEIC; incluso salió ratificado en el IV Congreso. Fue “un aplazamiento de la ejecución de la sentencia” (Elorza y Bizcarrondo, 1999). La tensión final estalló tras el frustrado golpe de Sanjurjo, el 10 de agosto de 1932, ante el que la dirección del PCE llamó a la huelga general para “defender a la República”; una consigna que chocaba con la política de “clase contra clase” y la condena de la “república burguesa” como contrarrevolucionaria. Fue una iniciativa de Bullejos, que no es que hubiese pasado a tener una apreciación positiva del régimen republicano, sino que, sacando una lección del error del 14 de abril, cuando se ganó el abucheo popular, optó esta vez por esa consigna, añadiendo que había que dar una salida de contenido democrático revolucionario al intento de golpe.

Codovilla, principal delegado de la IC en España desde 1932, acusó a Bullejos de transgredir la línea de la Internacional e instó al Comité Central del PCE, reunido el 5 de octubre de 1932, a expulsarlo, junto con Adame, Trilla y Vega, aprovechando la estancia de todos ellos en Moscú. Asimismo, promovió una nueva dirección en la que se reflejaba el peso andaluz; con José Díaz como

secretario general y los también andaluces Manuel Hurtado, Antonio Mije, Manuel Delicado y Adriano Romero, junto con Dolores Ibárruri, Vicente Uribe, y el valenciano Pedro Checa, entre otros. A ese nuevo equipo le correspondería asumir el giro de 180 grados que la IC adoptó después de que, en enero de 1933, Hitler llegara al poder en Alemania.

Contra el fascismo, Frente Popular

El acceso del nacionalsocialismo al poder y la inmediata destrucción de la república democrática en 1933 obligaron al movimiento comunista a rectificar por completo sus posiciones. Antes de ello ya se manifestaron dudas sobre la tesis del "socialfascismo" en algunos sectores del movimiento comunista europeo, hasta el punto de obligar a Manuilski, en el XI Pleno del CEIC, en marzo-abril de 1931, a lamentar que la interpretación sobre la fascistización de la socialdemocracia no hubiera "entrado en la sangre de los partidos comunistas" (Hajeck, 1984). En enero de 1933, las dudas se convirtieron en evidencias, por lo que la dirección de la IC aceptó en febrero la concertación de acuerdos con los partidos socialistas en el ámbito nacional, aunque siguió rechazando un pacto general con la Internacional Obrera y Socialista. No se pasó de la intención. El temor en el CEIC a que cualquier cambio de política reforzara las críticas a la línea mantenida desde finales de los veinte, junto con la ilusión de que Hitler no se consolidaría y de que se generaría una situación de crisis en Alemania que abriría las puertas a la revolución, frenó por el momento la rectificación apenas anunciada. Hasta que el cambio se hizo inevitable cuando Stalin constató, en enero de 1934 ante el congreso del Partido Comunista de la URSS, que Hitler no solo se había consolidado, sino que, firmando aquel mes un tratado de diez años con Polonia, había pasado a ser el enemigo principal del Estado soviético. Lo único en común que podían tener el nacionalsocialismo alemán y el nacionalismo polaco era su hostilidad al comunismo y a la URSS.

Lo hechos acompañaron a la percepción del carácter expansivo de la victoria nacionalsocialista. En los primeros días de febrero el escenario europeo experimentó una aceleración del viraje hacia la extrema derecha. Por un lado, con el autogolpe filofascista de Dollfuss en Austria, consumado con la derrota de la insurrección defensiva de socialistas y comunistas entre el 12 y el 16 de

febrero. Y también con la amenaza de un golpe autoritario de las derechas en Francia, manifestada el 6 de febrero en su intento de asaltar la Asamblea Nacional para poner fin al régimen parlamentario. Este último episodio propició una progresiva convergencia de socialistas y comunistas protestando en las calles de París y de las principales ciudades francesas. Días después de la acción espontánea, se pasó a la manifestación conjunta del PCE, la SFIO y sus sindicatos afines, el 12 de febrero. A diferencia de lo sucedido en Austria, la involución autoritaria en Francia no se consumó por el momento, por más que su amenaza siguió activa en el ambiente político del país. En esas circunstancias, la aproximación entre el PCF y la SFIO resultó irreversible.

La amenaza del tratado germano-polaco, el reforzamiento del eje fascista en el centro de Europa y el riesgo de que Francia fuera la siguiente en caer reactivaron el cambio en la IC, aunque se siguió produciendo paso a paso, por acumulación de experiencias y decisiones. Primero fue la inmediata promoción de Dimitrov como nuevo líder de hecho del CEIC, en el que impuso el apoyo al pacto de unidad de acción entre comunistas y socialistas en Francia, en julio de 1934, y su posible extensión a otros escenarios; salvando incluso las reticencias de Stalin (Dallin y Firsov, 2000; Dimitrov, 2002). Más adelante, en octubre de 1934, el secretario general del PCF, Maurice Thorez, propuso públicamente que la unidad obrera se acompañara con la más amplia unidad antifascista, extendida a las clases medias y sus organizaciones políticas democráticas, en su caso, el Partido Radical. De nuevo, Dimitrov, con el concurso de Togliatti, se impuso a quienes dudaban de esa ampliación en el seno del CEIC. Aunque tuvo que hacerlo por partes, limitándolo primero a Francia y extendiéndolo sucesivamente como una alianza popular “por abajo” hasta la primavera de 1935, y finalmente como el Frente Popular sin restricciones, como alianza social y como coalición política, como se manifestó en la celebración del 14 de julio de 1935.

El triunfo de la rectificación se vio favorecido por el cambio de la política internacional de la URSS, que desde que consideró a la Alemania nazi como el enemigo principal abandonó su aislacionismo y se integró en septiembre de 1934 en la Sociedad de Naciones. Tras el restablecimiento, en marzo de 1935, del servicio militar obligatorio en Alemania, punto de aceleración de su rearme ofensivo, la URSS pasó a proponer un acuerdo de defensa colectiva frente al fascismo; y lo concretó con la firma del Acuerdo de cooperación y defensa mutua con Francia, en mayo de 1935. Ambas líneas interactuaron, sin que sea exacto afirmar que fue una imposición exterior la que obligó a la rectificación de la IC. El Estado soviético y su defensa formaban parte del proyecto y la política

de la IC desde su nacimiento, y así era asumido desde los máximos dirigentes hasta los militantes. Por otra parte, cada una de ellas tenía sus condiciones propias y su dinámica autónoma. La iniciativa de Thorez en octubre de 1934 respondió a su lectura de la situación política francesa y no a ninguna instrucción recibida; de la misma manera que el apoyo que recibió enseguida de Dimitrov y la posibilidad de extenderlo a otros escenarios fue también una decisión autónoma, que tuvo que defender tanto frente a quienes consideraban un error la propuesta “interclasista” de Thorez como ante Stalin. Que la extensión tardara en aceptarse sin reservas fue prueba de las reticencias de uno y otros. Finalmente, tanto Stalin y el Gobierno soviético como el CEIC tuvieron que responder al desafío común que significó la remilitarización de Alemania y la escandalosa respuesta del Gobierno británico, que la aceptó de hecho firmando un acuerdo naval militar anglo-germano en junio de 1935, anticipador de la política de contemporización con Hitler.

El VII Congreso de la IC, desarrollado entre el 25 de julio y el 20 de agosto de 1935, formalizó la aprobación de la nueva línea, que se había venido elaborando desde el verano de 1934 y que estaba ya cerrada. El congreso aportó dos propuestas relativas a la unidad del movimiento obrero y al comportamiento de los partidos comunistas en el seno de la coalición política del Frente Popular. Para el reforzamiento de esa unidad se proponía la fusión de los sindicatos de clase y también de los partidos obreros en una sola organización; sin embargo, mientras que sobre la unificación sindical no se pusieron condiciones, sí se hizo sobre lo que se denominó el “partido único del proletariado”, que debía construirse adoptando el centralismo democrático y el marxismo-leninismo. El resultado fue que la unidad sindical salió adelante entre 1935 y 1936, tanto en Francia como en España, mientras que, a pesar de la formación de comités unitarios entre socialistas y comunistas, la unidad de las organizaciones políticas obreras no prosperó, con la excepción singular de Cataluña y, de todas maneras, sin incorporar a las formaciones comunistas disidentes. Sobre el comportamiento comunista en la política de coalición, se estableció su absoluto apoyo sobre la base del programa unitario acordado tanto antes como después de la celebración de los eventuales procesos electorales; sin embargo, el congreso acordó que los comunistas no formarían parte de los gobiernos de Frente Popular que pudieran formarse como consecuencia de la victoria electoral y se mantendrían en los términos del apoyo parlamentario. La razón pública fue que, siendo el objetivo del Frente Popular la defensa de la democracia y no la implementación del socialismo, los comunistas no podían asumir responsabilidades ejecutivas. Era congruente, aunque también había un motivo no manifestado: con esa renuncia

se ofrecía al resto de la coalición facilidades para mantener el pacto y una garantía de que su intención no era una trampa para controlar el Estado desde las posiciones de gobierno, algo de lo que ya se acusaba a los comunistas desde la derecha.

La nueva línea incluyó también el abandono de lo que Dimitrov calificó de “nihilismo nacional”. La IC pasó a defender las identidades nacionales de los Estados; la legitimidad de un patriotismo democrático frente a la usurpación de la nación por los nacionalismos en beneficio de una minoría y de sus proyectos de negación de las identidades de clase y de confrontación entre los pueblos. Algo que estaba ya en el origen del Frente Popular, cuando Thorez denominó su propuesta de octubre de 1934 como un “frente nacional” contra el fascismo, y que un joven intelectual del PCF, Henri Lefebvre, desarrolló en su libro Le nationalisme contre les nations, publicado en 1937.

El riesgo de un triunfo del fascismo empezó a considerarse en España a partir del avance de las nuevas derechas antirrepublicanas, consolidado en las elecciones generales de noviembre de 1933, y del pacto parlamentario de la CEDA con el Partido Radical, que pasó a encabezar con Lerroux el Gobierno de la República. Antes de esa fecha el PCE se atuvo al “frente único por la base”, promoviendo en abril de 1933 por propia cuenta un Frente Antifascista integrado por él mismo, pequeñas organizaciones en la órbita del partido y simpatizantes de la época como Ramón J. Sender y Francisco Galán, hermano del “mártir de Jaca”. Mayor trascendencia tuvo la participación comunista en la “candidatura antifascista” que se constituyó para competir en Málaga en la segunda vuelta de las elecciones de noviembre. Lo hizo contando con la autorización del CEIC para establecer acuerdos locales y le proporcionó su primer diputado electo como candidato del PCE participó en la segunda vuelta en Málaga en la coalición antifascista por la que se eligió a Cayetano Bolívar. Fue este todavía un hecho circunstancial y la lentitud del cambio de política llevó precisamente a Balbontín a abandonar el PCE, en marzo de 1934, publicando una “carta abierta al Comité Central” en la que reclamaba un pacto unitario general entre el PCE y el PSOE. No eran iniciativas originales, respondían a la evolución emprendida por la IC ya descrita, y estaban lastradas como esta por su limitación y su renuncia a un cambio firme, lo que en marzo de 1934 motivó la salida del partido de Balbontín, que pedía que se aplicara ya en España la incipiente unidad de las organizaciones obreras francesas.

A despecho de sus protestas de ser el partido de unidad verdadera —la de la base

— y del excepcional caso de Málaga, lo cierto es que el PCE se mantuvo no solo fuera, sino en contra de las Alianzas Obreras. Esta plataforma unitaria antifascista impulsada por el BOC en Cataluña en abril de 1933, fue adoptada por el PSOE para toda España, después de su derrota electoral y de la visita de Largo Caballero a Barcelona a comienzos de 1934. Su objetivo era frenar al fascismo e intentar impedir o responder al acceso al Gobierno de la CEDA, considerada por la izquierda republicana y obrera como la principal representante de masas del fascismo. Una percepción que se asentaba en el abierto rechazo de la CEDA de Gil Robles a la democracia republicana y su admiración de los regímenes autoritarios en proceso de fastiscización de Dolfuss en Austria y de Salazar en Portugal. Fuera de Cataluña, las Alianzas Obreras integraron solo a las organizaciones socialistas y la Izquierda Comunista Española de Nin, salvo en Asturias, donde también lo hizo la regional de la CNT. El PCE las rechazó como una operación de engaño reformista, postulando como alternativa sus escuálidos “frentes antifascistas”, hasta que el cambio iniciado en la IC se trasladó también al partido español. A finales de julio de 1934, la dirección del PCE propuso a la del PSOE un pacto de unidad de acción semejante al firmado en Francia; comoquiera que el PSOE respondió que la unidad había de ser en el seno de las Alianzas Obreras, una reunión urgente en Moscú el 31 de julio, de Codovilla, Díaz y Mije con el Secretariado Romano de la IC, acordó aceptar esa condición. Ratificado por el Comité Central del PCE el 11 de septiembre, los comunistas se sumaron a las Alianzas Obreras justo a tiempo para estar presentes en el movimiento insurreccional de octubre, desencadenado ante la consumación de la entrada de la CEDA en el Gobierno de Lerroux; no para participar en su dirección, integrada exclusivamente por socialistas, pero sí en las luchas y luego en la capitalización del recuerdo de la insurrección y de la acción unitaria.

La insurrección resultó un error y un fracaso. No obstante, tanto uno como otro tenían color socialista. Largo Caballero se encontró atrapado en el oxímoron de una “revolución defensiva”, a la espera de que nunca tuviera que producirse porque su anuncio intimidara a Lerroux y no le abriese la puerta a la CEDA. Nunca se preparó seriamente, ni en el plano político ni mucho menos en el militar. José Díaz dijo en el VII Congreso de la IC que su propósito había sido aplazarla algunos meses, sin ser atendido. Puede que fuera solo un argumento a posteriori, pero no dejó de reflejar la lamentable realidad de la insurrección. Sin embargo, tras el levantamiento no se retractó ni abjuró de él ni escondió su responsabilidad, como sí hizo una parte del socialismo, ya fuera por convicción política (Besteiro y en parte Prieto) o como maniobra para evitar las

responsabilidades penales, que podían ser duras (Largo Caballero). Por el contrario, lo tomó como punto de partida para desarrollar dos líneas que iban a cimentar la primera explosión política y militante del partido: la solidaridad y la política unitaria.

La solidaridad dio respuesta a la amplia represión desarrollada al amparo del estado de guerra decretado el 6 de octubre de 1934. Una represión militar y policial, con decenas de miles de presos, muchos de ellos sometidos a constantes malos tratos, en particular en Asturias; social, con el despido de miles de trabajadores, la no contratación de jornaleros, el desahucio de los rabassaires[28];institucional, con la suspensión de la Generalitat de Cataluña, la intervención de la quinta parte de los ayuntamientos de España, que fueron entregados a gestoras en las que predominaron los radicales; política, con la persecución de Azaña, arbitrariamente detenido y procesado bajo la falsa acusación de haber instigado el levantamiento, la clausura de las Casas del Pueblo, la incautación de locales sindicales y la proscripción de prensa. El movimiento comunista destacó en esa acción solidaria fuera y dentro de España. En noviembre de 1934 se constituyó en París a instancias del PCF un Comité popular de ayuda a las víctimas del fascismo en España. Las organizaciones sociales de la URSS crearon fondos de ayuda económica a los presos y represaliados, y acogieron refugiados, muchos de ellos socialistas. Los fondos aportados se distribuyeron mediante la red del Socorro Rojo Internacional, cuya sección española se había constituido en 1923 sin mayor trascendencia hasta entonces que la cobertura de militantes y simpatizantes del PCE. Esa actitud contrastó con la débil respuesta de la SFIO y de la Internacional Obrera y Socialista, de lo que el mismo Prieto se quejó. La Ejecutiva del PSOE se negó, el 13 de febrero de 1935, a constituir organismos conjuntos de solidaridad propuestos por el PCE porque no podrían controlarlos (Martín Ramos, 2015). En definitiva, los comunistas dieron una imagen de eficiencia y apertura ante el resto de fuerzas políticas. Muy al contrario que el PSOE, que aceptó a regañadientes formar parte del Comité Nacional de Ayuda a las Víctimas de la Represión, constituido en marzo, en el que también estaban Izquierda Republicana y Unión Republicana; pero se negó a integrarse en el Comité Nacional Pro Amnistía, formado en junio por Unión Republicana, Izquierda Republicana, Esquerra Republicana de Catalunya, el Partido Federal, el PCE, la sección española del Socorro Rojo Internacional y personalidades de prestigio como Clara Campoamor.

La acción solidaria y la acogida de refugiados aumentaron el prestigio de la

URSS en el segmento más a la izquierda del socialismo español. Su portavoz, la revista Leviatán, dirigida por Luis Araquistaín, difundió la imagen de una democratización del Estado soviético a partir de la elaboración de una nueva constitución que habría de aprobarse en 1936. Esa nueva actitud hacia la URSS no se redujo a la izquierda socialista, también Prieto afirmó en abril de 1935 que aquella era un gran laboratorio social. Más contundentes fueron Santiago Carrillo, líder de las Juventudes Socialistas, o la diputada socialista Margarita Nelken, que formularon disyuntivas combativas: “o Alemania o Rusia”, “o Roma o Moscú” (Bizcarrondo, 1975 y 1986); los dos acabaron militando en el PCE en 1936. Entre 1935 y 1936, una parte de la militancia socialista que había tenido a Largo Caballero como referente basculó hacia el PCE; lo hicieron la mayoría las juventudes y también sectores radicalizados de la UGT, de los que Amaro del Rosal fue uno de sus principales exponentes. Su activa política de solidaridad y su invocación unitaria amplia proporcionaron al PCE, por primera vez, influencia en la política española y por fin un aumento sostenido de su afiliación: de los 14.000 militantes que había tenido entre 1932 y 1934 se movió en torno a los 14.000 afiliados, en diciembre de 1935 había pasado a poco más de 17.300 y en febrero de 1936, a casi 22.500 (Hernández Sánchez, 2010)[29].

La segunda línea de acción, la unitaria, se impulsó el 26 de noviembre de 1934, con la propuesta del Buró Político del PCE a la Ejecutiva del PSOE de crear un Comité de Enlace para la unidad de acción. Y añadió la consideración de un programa común: el impulso de lo que el PCE pasó a llamar Alianzas Obreras y Campesinas, creándolas en los lugares de trabajo, con comités territoriales y un Comité Nacional; la unificación sindical y de los comités de ayuda en favor de los presos; y la constitución una Concentración Popular Antifascista (Cruz, 1987). La dirección del PSOE rechazó que el organismo de relación entre ambos partidos tuviera funciones ejecutivas y un programa común, y solo lo aceptó si se limitaba a acciones concretas. Finalmente, el PCE accedió a esas condiciones y se constituyó una Comisión de Enlace, con extensiones provinciales, solo para la inmediata lucha contra la represión, la defensa de las mejoras sociales obtenidas que el Gobierno radical-cedista estaba anulando, y la lucha contra las organizaciones fascistas. No obstante, a lo largo de 1935 se fue imponiendo en la práctica la mayor parte del programa considerado por el PCE. Se aceptó la perspectiva de una unificación sindical en términos de ingreso en la UGT de los sindicatos controlados por los comunistas y la formación de una alianza política amplia —lo que suponía el fondo de la consigna de Concentración Popular Antifascista— se impondría finalmente cuando, a finales de año, la situación política española se precipitase hacia nuevas elecciones. Lo que no prosperó fue

el movimiento de las alianzas obreras ni cómo se había formulado en 1934, ni cómo quiso reformularlas el PCE en 1935; quedó como un hito del pasado reciente.

“Concentración Popular Antifascista” fue un término transitorio que reflejó la construcción incipiente de la nueva política frentepopulista; era la versión castellana del término utilizado en Francia, “rassemblement”, y su contenido se atenía a la idea del Frente Popular “por abajo”. Restringía el pacto político, “por arriba”, al PSOE; y pretendía que las Alianzas Obreras se ampliaran, no solo al campesinado, sino también a los profesionales, intelectuales y la pequeña burguesía, lo que era poco menos que surrealista. Esa singular propuesta quedó superada por la definitiva configuración por parte de la IC del Frente Popular en el verano de 1935 y por la evolución de la situación política en España, con la rápida descomposición de la coalición de intereses entre el Partido Radical y la CEDA y la configuración de una crisis con características de disyuntiva entre democracia y autoritarismo o fascismo. La CEDA pisó el acelerador para imponer su agenda contrarreformista y la revisión de la Constitución de 1931, en un sentido autoritario, con predominio del Ejecutivo sobre el Legislativo y la sustitución del sufragio universal por el limitado y corporativo. A finales de 1935, Gil Robles exigió una ampliación de la presencia gubernamental de su partido, que Lerroux no aceptó. La ruptura consumada entre ambos se manifestó en la maniobra de acorralamiento del Partido Radical por parte de la CEDA, con el escándalo del “estraperlo”; una concesión irregular a un casino en septiembre de 1934, que involucraba al hijo de Lerroux y a su antiguo ministro de Gobernación, Salazar Alonso. Ante el escándalo, Alcalá Zamora, presidente de la República, se negó a ratificar a Lerroux en la Presidencia del Consejo de Ministros; pero al propio tiempo frustró a Gil Robles, que esperaba sucederlo, nombrando a Joaquín Chapaprieta —sin fuerza política real— como nuevo jefe de Gobierno el 25 de septiembre. Fue una maniobra de corto alcance. Sin apoyo parlamentario suficiente, Chapaprieta dimitió el 9 de diciembre y Alcalá Zamora decidió entonces forzar una nueva convocatoria anticipada de elecciones para cuya gestión puso al frente del Ejecutivo a un político gris, Portela Valladares; con la intención de promover desde el Gobierno una improvisada alternativa centrista entre el bloque de las derechas antirrepublicanas[30], ante la quiebra del Partido Radical y la previsión de una coalición de todas las izquierdas.

Los antecedentes de esa coalición fueron la propuesta comunista de la Concentración de Fuerzas Populares y la iniciativa de Azaña, puesto en libertad el 28 de diciembre de 1934, que empezó a prever la próxima contienda electoral

—entonces se pensaba en las municipales—, restableciendo sus contactos con Prieto, al que instó a recuperar la alianza entre socialistas y republicanos de izquierda. La superposición de ambas llevó a Prieto a sumarlas proponiendo el 23 de marzo a su partido una coalición, “a derecha e izquierda” que incluyera a socialistas y comunistas; lo que no aceptaron ni Azaña, por rechazo a los comunistas, ni Largo Caballero, porque solo aceptaba un frente obrero que incluyera a los antiguos participantes en las Alianzas Obreras. Prieto batalló para conseguir convencer a Azaña y contó con el apoyo de Fernando de los Ríos para que el PSOE hiciera una consulta interna sobre la política de alianzas, en abril, que se saldó con una abrumadora victoria de los partidarios de la alianza abierta a republicanos y comunistas. Todo quedó en suspenso en aquel momento porque las municipales nunca se convocaron. Sin embargo, el debate sobre la política de alianzas quedó fijado, produciendo desde esa primavera una quiebra interna en el PSOE entre los partidarios de la solución de Prieto y los de Largo Caballero, que, en términos de lucha por el control de la dirección del partido, se prolongó hasta la Guerra Civil.

La crisis del PSOE transfirió el protagonismo político en la izquierda al PCE y la llave de la decisión definitiva a Azaña. El PCE nunca secundó la propuesta de Largo Caballero. Por el contrario, José Díaz, en un mitin el 2 de junio, dio ya forma de coalición política a la Concentración Popular Antifascista, a la que llamó a formar parte no solo al PSOE, sino también a los republicanos de izquierda. El secretario general del PCE añadió la propuesta de un programa de cuatro puntos: confiscación de la tierra de los grandes terratenientes, la Iglesia y los conventos, sin indemnización, para entregarla inmediata y gratuitamente a los campesinos pobres y a los obreros agrícolas; derecho de regir libremente sus destinos a Cataluña, Euskadi, Galicia y “cuantas nacionalidades estén regidas por el imperialismo de España”; mejoramiento general de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera; y libertad para los presos por el movimiento de octubre y amnistía para presos y perseguidos “de carácter político-social” (Díaz, 1974). Un mes más tarde, los acuerdos del VII Congreso de la IC consagraron el término de “Frente Popular”, que a partir de entonces ganó espacio en el discurso político y fue adoptado incluso por el diario portavoz de las posiciones de Prieto, El Liberal de Bilbao. Paralelamente, el protagonismo público de Azaña fue creciendo como consecuencia de una intensa campaña de mítines y del liderazgo que asumió entre las formaciones republicanas en la oposición, incluida la Unión Republicana fundada por Martínez Barrio. El PCE facilitó el encuentro de las dinámicas. Bajo el lema de “todos al mitin” de Azaña, llamó a participar masivamente en el acto que este dio el 20 de octubre en el

barrio madrileño de Comillas, con un éxito de asistencia que los benefició.

Cuando el escándalo del estraperlo anunció la inevitabilidad de la crisis del Gobierno y la perspectiva de nuevas elecciones generales, Largo Caballero se había quedado sin margen de maniobra para seguir rechazando la alianza con los republicanos y el Frente Popular. Finalmente lo aceptó ante Codovilla, el 7 de noviembre, a condición de que solo fuera para esas elecciones y con el argumento justificativo de la amnistía si ganaba la nueva coalición. Tampoco Azaña pudo mantener su veto a los comunistas, resignándose a que formaran parte de la coalición con la condición de que no lo hicieran directamente; el PCE y el PSOE habrían de llegar a su propio acuerdo, programático y de reparto de escaños entre ellos, y los republicanos solo negociarían con los socialistas para cerrar el pacto definitivo. Azaña quiso evitar la imagen de un cambio radical por su parte y dar, por el contrario, la de la continuidad de la alianza republicano-socialista. Marcó con ello las formas de la negociación, pero no pudo evitar que el pacto y la imagen final fueran, como él mismo reconoció en la campaña electoral, “el Frente Popular, como lo llama la gente”. El proceso de negociación a tres bandas y dos mesas desembocó el 15 de enero en la firma de la coalición y del manifiesto conjunto con el que se presentaría a las elecciones. El PCE fue la clave, como lo había sido en Francia el PCF. Su propuesta dejó sin recorrido a la opción del frente obrero, a menos que Azaña se hubiese empeñado en un rechazo absoluto a los comunistas, cosa que no hizo; la actitud comunista hacia Azaña cuando menos ablandó su oposición y le llevó a aceptar el consejo de Prieto. Finalmente, en el transcurso de las negociaciones programáticas, el PCE se situó en repetidas ocasiones como puente entre las posiciones propias y del PSOE y las republicanas; y concedió al PSOE un reparto desproporcionado a su favor de las candidaturas, sobre la base de anteriores resultados electorales (Martín Ramos, 2015).

El programa común, el manifiesto, era moderado; de recuperación de la política de reformas del bienio de 1931-1933, con algunas adiciones en la misma orientación. Su primer punto era la amnistía de todos los delitos políticos y sociales anteriores a noviembre de 1935; así como medidas que pusieran fin a la represión y revisaran sus efectos en el ámbito político y en el laboral. Algunas propuestas, como la limitación del fuero castrense a los delitos militares, respondían a una larga tradición reivindicativa del movimiento obrero y republicano. Otras eran apuntes genéricos, como el capítulo de política industrial, con formulaciones obvias de apoyo a la pequeña empresa y aprobación de un sistema de leyes protectoras frente a la competencia exterior y

de regulación del mercado interno. Seguramente, lo más desarrollado fue el capítulo relativo al campo, que hacía hincapié en la defensa del cultivador mediano y pequeño, así como el fomento del crédito y la mejora técnica. Se mantendrían la política de los asentamientos, el fomento del cooperativismo y las explotaciones colectivas voluntarias, todo ello ya previsto en el bienio; y como novedad y a propuesta del PC, la aprobación de normas para el rescate de bienes comunales. Quedaba implícita la subsistencia de la reforma agraria; y se propuso volver a activar una nueva ley de arrendamientos con descenso de las rentas, reconocimiento de las mejoras introducidas por el arrendatario y su acceso a la propiedad de la tierra. Tenía una orientación incluso conciliadora, cuando en el capítulo de la educación, tras considerarla como "atributo indeclinable del Estado" como principio, contempló la coexistencia de enseñanza pública y privada, limitando el ejercicio de ese atributo en esta última a una vigilancia análoga a la que se hacía sobre la pública.

Tras una campaña aceptable en los parámetros de conflictividad electoral de la época en Europa (Tusell, 1971[31]), en la que cada formación defendió el manifiesto común y sus propias posiciones, las elecciones del 16 de febrero dieron la victoria al Frente Popular con un porcentaje de voto que osciló entre el 45 y el 48%[32]. El PCE vio reflejado su aumento de influencia y el papel jugado tan solo en parte; de las 344 candidaturas presentadas por el Frente Popular, 152 correspondieron a los partidos obreros, y de estas, 21 al PCE. Finalmente fueron elegidos 17, de un total de 286 del Frente Popular; entre ellos, José Díaz por Madrid, Dolores Ibárruri por Oviedo, Cayetano Bolívar por Málaga, Leandro Carro por Vizcaya, Jesús Hernández por Córdoba, Vicente Uribe por Jaén y Antonio Mije por Sevilla. Díaz sería el portavoz del grupo comunista en las Cortes y su representante en la Diputación Permanente, y Uribe el secretario. En congruencia con el peso del partido en Andalucía, 7 diputados lo fueron por esa región. No obstante, los resultados no reflejaron exactamente la base de masas del PCE, habida cuenta de que por su acuerdo con el PSOE solo pudo presentarse en una escasa veintena de circunscripciones.

Victoria y ejercicio de la democracia

Las elecciones del 16 de febrero fueron una victoria de la democracia, por el

desarrollo, el resultado y el triunfo del bloque defensor de la democracia frente al autoritarismo y el fascismo. Es de sobra conocido que los enemigos de esa victoria no la aceptaron y que, desde la misma noche electoral, empezaron a conspirar en la perspectiva de la sublevación militar. El nuevo Gobierno encabezado por Azaña tuvo que constituirse el 19 de febrero de manera precipitada, por culpa de la dimisión irresponsable de Portela Valladares, que no soportó la presión del incipiente golpismo. Tuvo que gestionar a la vez las secuelas de la jornada electoral —discusión de actas, segundas vueltas y repetición de elecciones— y el inicio de la aplicación del programa acordado el 15 de enero en condiciones difíciles, no por ningún desbordamiento desde la izquierda, sino por la dinámica guerracivilista adoptada por la derecha antidemocrática y las estrategias violentas de los sectores más extremos de esta. Constituido exclusivamente por republicanos, por la decisión de Largo Caballero de que el PSOE no participara en él, tuvo desde el primer momento el apoyo leal del PCE. Los comunistas, que se autoexcluyeron de entrada en aplicación de su concepción del Frente Popular, apoyaron desde el primer momento al Gobierno de Azaña, y al de Casares Quiroga que le sucedió en mayo, después de que Azaña fuese elegido presidente de la República. Apoyaron también que su composición fuera estrictamente republicana. Con ello mantenían su aproximación a Largo Caballero y a la izquierda socialista; en la confianza de que un rápido proceso de unificación entre el PSOE y el PCE, como el que se estaba consumando entre las juventudes, daría lugar al nuevo Partido Único del Proletariado, para el que también consideraban no conveniente la participación gubernamental.

Apoyo permanente y leal en la forma y en el fondo. Desde la víspera de las elecciones el PCE defendió que el “Bloque Popular” había de mantenerse después de ellas, y aún más tras el triunfo. Su mayor crítica a los gobiernos de Azaña y Casares Quiroga fue la lentitud en la ejecución de los acuerdos al primero y la falta de contundencia ante la conspiración militar y política al segundo. En ningún momento se planteó desbordarlos ni ponerlos en una situación de aprieto, ya fuera parlamentaria o de orden público (Cruz, 1987; Díaz, 1974). El PCE se sentía orgulloso al considerarse artífice principal del Frente Popular y desarrolló una política que priorizara su consolidación; atribuía la razón principal de la victoria del 16 de febrero a la unidad y esta había de ser conservada hasta conseguir el objetivo. La disyuntiva era fascismo o democracia. Se ha utilizado habitualmente el adjetivo de “moderado” para calificar el nuevo comportamiento del PCE; para ser exactos, lo que quiso fue seguir siendo unitario.

Ese comportamiento se manifestó en diversos terrenos. De entrada, en su política de masas y su concepción sobre la relación entre esta y el Gobierno. La movilización había de acompañar a la acción de las Cortes; evitar que estas, por inercia institucional o por otra razón, pudieran con su lentitud distanciarse del pueblo que las había elegido. Casar acción institucional y movilización en una democracia de masas. Eso significaba dejar atrás por completo los ensueños de la teoría de la ofensiva y el papel acaparador del partido, confundiendo liderazgo con prepotencia. Se abandonó de manera explícita la consigna de "la toma revolucionaria de la tierra" y se sustituyó por la intensificación de la reforma agraria y la práctica de las ocupaciones de tierras solo cuando hubiera unidad en ellas de los sindicatos y los partidos del Frente Popular. La iniciativa de la movilización social se dejó a los sindicatos, al tiempo que se señaló que las huelgas habían de ser "las necesarias y bien organizadas", siempre bajo el signo de la unidad y el "control férreo" de las organizaciones. Solo en la retórica se pudo rebasar alguna vez el marco del 15 de enero; como cuando José Diaz, en su discurso en Zaragoza del 1 de junio, tras reconocer que se cumplían los asentamientos campesinos pasó a reclamar la expropiación sin indemnización a los grandes terratenientes y la entrega de esa tierra a los campesinos para minar las bases de la reacción. No dejaba de tener sentido; se estaba en vísperas de la reposición de la Ley de Reforma Agraria, que finalmente hicieron las Cortes el 18 de junio, y la cuestión de las expropiaciones era pertinente en el debate; por lo demás, el PCE no reivindicó esa expropiación sin indemnización de manera general, y combinó la invocación de tal medida, limitada siempre a los terratenientes "feudales", con la propuesta operativa de indemnizar mediante bonos de deuda pública.

El cambio en el comportamiento del PCE, en su propaganda y en su práctica política, se produjo también en la cuestión nacional abandonando el rechazo a los estatutos. En la presentación del Partido Comunista de Euskadi en San Sebastián el 14 de diciembre de 1935, su máximo dirigente, Juan Astigarrabía, manifestó el apoyo al estatuto, que el pueblo ya había plebiscitado. Además, la primera reunión de su Comité Central ratificó que se habían de abandonar los maximalismos para conseguir lo antes posible el estatuto. En Galicia se apoyó también el estatuto votado en junio de 1936. Y el Partit Comunista de Catalunya se sumó al descubrimiento del sistema autonómico aprobando en mayo de 1936 una moción de ampliación del estatuto, no de su derogación. La declaración del Comité de Enlace, que habría de dar lugar meses más tarde al Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), concretó esa ampliación en la sustitución del que las Cortes habían aprobado en 1932 por el proyecto aprobado en el plebiscito de

1931 en Cataluña. Se recuperaba la complejidad del discurso de Lenin sobre las minorías nacionales y la autodeterminación, recordando y adoptando como propuesta política práctica el federalismo, al que tendía la multiplicación de estatutos autonómicos en España. En cualquier caso, recordó Dolores Ibárruri en Euskadi, el PCE no estaba por la secesión de ningún territorio (Díaz Alonso, 2019); ni siquiera, cabe añadir, por oportunistas razones tácticas.

El PCE fue leal también porque en público no renunció a nada, recordando cuáles eran sus objetivos: en el momento parar al fascismo y consolidar la democracia, para, a partir de entonces, plantear el objetivo del Gobierno obrero y campesino, y desde él, la transformación hacia un Estado socialista, una Unión de Repúblicas Soviéticas de la península ibérica. La primera condición de ese proceso era, para él, que además de la derrota del fascismo, la dinámica unitaria alcanzara su nivel máximo con la unificación del PSOE y el PCE. El 4 de marzo de 1936 el Comité Central del PCE instó a la Comisión Ejecutiva del PSOE a un acuerdo político general basado en el programa que ambas organizaciones habían pactado en el inicio de las negociaciones para la formación del Frente Popular, el impulso definitivo de lo que consideraban la forma histórica de la revolución española —análoga a la de los sóviets—, las Alianzas Obreras y Campesinas, y la formación de un Comité de Enlace de ambos partidos en todos los niveles territoriales, culminando con el nacional, para llevar a cabo aquella unificación.

La dirección del PSOE, dominada por Prieto, se desentendió remitiendo la respuesta al próximo congreso de su partido, y el PCE confió en que Largo Caballero y su facción de izquierda ganaran la partida en el conflicto del socialismo español. Mientras tanto tuvo que conformarse con la unificación de las organizaciones juveniles de ambas formaciones en las Juventudes Socialistas Unificadas, fundadas el 5 de abril, con alrededor de 32.000 miembros; así como con el crecimiento del propio PCE, que se había disparado desde febrero hasta alcanzar en mayo casi 50.000 militantes (Hernández Sánchez, 2010). El Congreso del PSOE ya no se celebraría hasta después de la Guerra Civil, y lo mismo ocurrió con el del PCE, convocado para el 15 de agosto. La conspiración militar y política llegó a su tramo final y aprovechó el asesinato de Calvo Sotelo para abonar una sublevación con fecha ya definida. Así se lo echó en cara José Díaz a Gil Robles el 15 de julio en las Cortes; su objetivo “no es presentar el hecho en sí para que todos lo puedan condenar, como nosotros somos los primeros en hacerlo, sino para que en la calle, al leerse este discurso, presentando los hechos como los presenta, las fuerzas que dicho señor acaudilla

encuentren ambiente apropiado para seguir trabajando es esa actuación de complot”. Dos días después estallaba la sublevación.

CAPÍTULO 6

EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN POPULAR

Guerra y revolución popular

Los partidos obreros habían estado alertando sobre el peligro cierto de la sublevación y ya el 13 de julio —tras el asesinato de Calvo Sotelo—, el PSOE, el PCE, las JSU y la UGT se reunieron para emitir una nota pública de reafirmación del Frente Popular, apoyo al Gobierno y ofrecimiento a este de las masas obreras para hacer frente al golpe, si este finalmente se producía. Cuando se inició, en el norte de África, de la oferta se pasó a la petición de armas al Gobierno de Casares Quiroga para defender todos a la República, ya que los partidos obreros no disponían de contingentes armados. Las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas creadas por el PCE ante el movimiento de octubre de 1934 nunca pasaron de ser un organismo de autodefensa y protección de sedes y mítines; muestra definitiva de que no había ninguna estrategia subterránea de asalto al poder. Cuando el 18 de julio Casares Quiroga se negó a repartir armas y Azaña pretendió negociar con los sublevados mediante la formación de un "Gobierno nacional" que excluyera a los comunistas, el PCE denunció ese intento de rendición política de hecho y de ruptura del Frente Popular, y llamó a manifestarse en las calles contra él. Azaña y Martínez Barrio fracasaron ante Mola, que no quiso saber nada, y la movilización obrera los desautorizó. Renunciaron a su erróneo y efímero intento, y Azaña encargó entonces la formación de un nuevo Ejecutivo a Giral, el día 19, que accedió a la entrega de armas y se dispuso a hacer frente a la sublevación, recuperando el esquema establecido en febrero: Gobierno republicano con apoyo de todo el Frente Popular.

Aunque fueron superadas las vacilaciones de Casares Quiroga y Azaña en los dos primeros días, no dejaron de tener consecuencias. Favorecieron a los militares rebeldes y restaron autoridad al Gobierno republicano. La reacción conjunta a partir del día 19, en la que participaron también los anarquistas[33],

frenó la sublevación; la derrotó en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao —con la participación del Partido Nacionalista Vasco que, tras dudar, se situó al lado de la República—, en la mayor parte de España a excepción de Galicia, Castilla y León y puntos de Andalucía, como Sevilla. El golpe estuvo en un tris de fracasar, como reconoció Mola el 25 de julio; sin embargo, Hitler y Mussolini proporcionaron los medios materiales y la logística para que las tropas del norte de África, al mando de Franco, pasaran el estrecho, entraran en Andalucía y, con la connivencia del Gobierno portugués —el dictador Salazar—, fueron subiendo por Extremadura en dirección a Madrid. El semifracaso del golpe mutó en guerra civil (Viñas, 2006 y 2011; Alía Miranda, 2001).

El golpe no derribó a la República, pero la dejó maltrecha. La defección de una parte de los militares y fuerzas de orden público le restó capacidad no solo de reacción, sino de restablecimiento de la autoridad, debilitada también por los errores iniciales del Gobierno. La derrota de los sublevados, allí donde se produjo, fue con el concurso, a veces predominante, de los militantes obreros armados y agrupados en milicias de partidos y sindicatos. La fuerza del poder central se quebró y se desencadenaron, al paso de la derrota de los militares rebeldes, movimientos de centrifugación y fragmentación política en los que emergió un invertebrado poder complementario, el de los comités; que lo compartió con las instituciones, a las que condicionó —como en Madrid y Barcelona— o llegó a suplantarlas, con el ejemplo extremo del Aragón oriental y, en buena media, de Asturias y el norte minero de León. Dado que la sublevación no fue un mero pronunciamiento, sino el levantamiento de la derecha autoritaria y fascista y de sus bases sociales, ese hecho, sumado a la quiebra parcial del Estado, propició una respuesta de movilización revolucionaria por parte de las organizaciones obreras, que cada una de ellas entendió según sus propias convicciones y expectativas del momento. Fue desde luego una ruptura política y social, pero no una revolución unívoca y consumada. La ruptura, por otra parte, desarrolló una violencia de retaguardia que no sería reducible a un solo adjetivo, y que, por parte del PCE, no solo no fue concebida como un instrumento “revolucionario”, sino que fue detenida por su parte y por la del PSUC allí donde tuvieron peso: Madrid (Cervera, 1998) y Cataluña (Martín Ramos, 2018).

Cada corriente construyó su propio proyecto revolucionario. El PCE partió del mantenimiento del carácter democrático-burgués del momento de la revolución española y del carácter defensivo del Frente Popular, para asumir que la guerra situaba la disyuntiva fascismo-democracia en un nuevo parámetro; el

frentepopulismo debía tener también una dimensión ofensiva, propositiva, que llevaría a la república democrática a un nivel no solo más allá de la de 1931, sino del punto de febrero de 1936. La democracia, por la base social de sus defensores y la defección de gran parte de la burguesía que había caído en el fascismo, pasaba a ser una democracia popular. No es que los comunistas no apoyaran una salida revolucionaria al conflicto, como hacían el ala izquierda del PSOE y los anarquistas; lo que hacían era defender una revolución popular, no exclusivamente proletaria, sino configurada por el conjunto social que se oponía al fascismo y, en primer término, los trabajadores de la ciudad y del campo y los segmentos populares del campesinado.

Desde el día 17, el CEIC reaccionó a las noticias de la sublevación instando al PCE a la defensa del Frente Popular, a la formación de milicias obreras y campesinas, y a llevar a la CNT a la formación de Comités de Unidad, para evitar que cayera en la tentación de dar una respuesta insurreccional propia —que el CEIC calificó de “putschista”— al levantamiento militar (Hernández Sánchez, 2010; Radosh, Habeck y Sevostianov, 2002). Amplió el 20 de julio sus instrucciones de apoyo, formulando por primera vez la idea de un Gobierno integrado por todos los partidos del Frente Popular, incluido el PCE. Por primera vez admitía la incorporación comunista a un Gobierno frentepopulista, interclasista, rectificando los acuerdos del VII Congreso de la IC, aunque cuatro días más tarde se matizó que lo haría solo si era “urgente y absolutamente necesario” para acabar con el levantamiento. Por el momento, durante la etapa de Giral, el PCE se dedicó a apoyar las instituciones republicanas supervivientes, defender la unidad ante la guerra, organizar su propia milicia con el emblemático Quinto Regimiento, surgido de las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas, y proponer la formación de un Ejército Popular que superara la multiplicación de milicias, voluntaristas, pero sin disciplina ni capacidad técnica para hacer frente a la guerra.

Esa defensa de las instituciones tuvo ejemplos destacados más allá de la capital de la República. En el País Valenciano se manifestó con éxito en Alicante, cuyo Comité de Frente Popular acató desde el primer momento de la guerra la autoridad del gobernador civil, Francisco Valdés Casas, de Izquierda Republicana; tanto en el Comité del Frente Popular como en el Consejo municipal de Alicante, presidido por Rafael Millá, predominaban los comunistas. Por el contrario, no consiguió evitar, aunque lo intentó, el Gobierno casi independiente de Asturias-León, pactado por los socialistas y los anarquistas y presidido por Belarmino Tomás. Tampoco que el Comité Ejecutivo Popular de

Valencia se sometiera a la autoridad de la Junta Delegada para el País Valenciano presidida por Martínez Barrio, que el Gobierno Giral envió en los primeros días de la guerra.

En Cataluña ese comportamiento lo representó el PSUC, fundado en julio de 1936, tras la derrota de los sublevados, por la fusión de las organizaciones catalanas del PCE y del PSOE y dos partidos de exclusivo ámbito catalán: la Unió Socialista y el Partit Català Proletari. Comorera, su secretario general, planteó constituir un nuevo Gobierno de la Generalitat, integrado por los partidos del Frente Popular. No lo consiguió y el PSUC tuvo que conformarse con la participación en el Comité Central de Milicias Antifascistas; hasta que la evolución de los acontecimientos le dio la razón y en septiembre el comité fue desplazado por un Gobierno unitario, de partidos y sindicatos, de la Generalitat (Martín Ramos, 2018).

La expectativa de una derrota rápida de los sublevados, que alentaba el voluntarismo miliciano, quedó frustrada por el paso del estrecho de las tropas de Franco y el apoyo decisivo de Alemania e Italia a las tropas sublevadas. Aunque las columnas de Mola, también en gran parte voluntarias, no habían conseguido tomar Madrid, la capital pasó a estar amenazada por el avance sublevado por Extremadura, sin que las milicias mostraran capacidad de frenarlo. Ante esa situación, que empezó a ser extrema, Largo Caballero encabezó una operación política para dotar a la República de un Gobierno cuya autoridad pudiera ser reconocida por las masas populares; para imponer la prioridad del esfuerzo de guerra, acabar con la fragmentación política y constituir, con milicianos, soldados de leva y militares leales un Ejército Popular capaz de plantar batalla a las tropas profesionales de los sublevados. Esa era también la propuesta del PCE, que desde los primeros días de la sublevación venía defendiendo un Gobierno del Frente Popular ampliado a los socialistas, con activo apoyo comunista sin llegar a formar parte de él, y capaz de atraer asimismo a la CNT a la nueva política de guerra.

La debacle miliciana en Talavera de la Reina, el 3 de septiembre, precipitó el cambio. Giral dimitió y Largo Caballero, venciendo la animadversión de Azaña, formó nuevo Gobierno, en el que los socialistas pasaron a tener la posición hegemónica, invirtiendo la correlación de fuerzas que hasta entonces había existido de la primera etapa del Frente Popular. Largo Caballero quiso que se incorporaran al Ejecutivo también la CNT y el PCE. No lo consiguió en ese momento por lo que se refiere a los anarquistas, todavía reticentes a formar parte

de un gobierno. Pero sí lo aceptó el PCE, que tuvo que superar, en su caso, la resistencia de Stalin y el CEIC. En el nuevo Gobierno constituido el 4 de septiembre se integraron Jesús Hernández y Vicente Uribe, como ministros de Instrucción Pública y de Agricultura, junto con seis socialistas, cinco republicanos y uno del PNV. El Ministerio de Agricultura, por cierto, no era un encargo secundario y su ocupación se correspondió con algunas de las posiciones específicas de los comunistas españoles en el Frente Popular desde que se hubiera empezado a configurar en 1935.

El nuevo Gobierno de unidad de la República tuvo una consecuencia importante en Cataluña, donde ni el Comité Central de Milicias Antifascistas ni el Gobierno de la Generalidad, integrado exclusivamente por ERC, conseguían controlar la situación y ordenar la acción de guerra y la gestión de la retaguardia, gravemente afectadas por las discordias interpartidarias entre anarquistas, socialistas unificados y republicanos. En la línea de la formación del aquel Gobierno, el 26 de septiembre se constituyó un nuevo Consejo Ejecutivo de la Generalidad encabezado por Tarradellas con mayoría simple republicana y la participación de la CNT-FAI, el PSUC —a través de la UGT de Cataluña, que controlaba— y el sindicato campesino de la Unió de Rabassaires. Al propio tiempo, el Comité Central de Milicias Antifascistas se autodisolvió, devolviendo las funciones asumidas en julio al Gobierno de la Generalitat. Si la novedad del Gobierno de Largo Caballero fue la incorporación de los comunistas, la del Gobierno de Tarradellas fue la de los anarquistas, que rompieron su tradición antiestatal. La diferencia entre ambas incorporaciones, empero, estuvo en que, mientras el PCE la asumió sin fisuras internas y se adaptó a su nueva condición de partido de gobierno, en la CNT-FAI catalana esa incorporación resultó ampliamente incómoda para su afiliación y fue abiertamente rechazada por una parte importante de ella. A pesar de todo, el Gobierno de unidad catalán empezó con el mejor pie. Recuperó el control institucional y se apoyó en el circunstancial pacto entre CNT-FAI y PSUC-UGT para promulgar un Decreto de Colectivizaciones el 24 de octubre, que legalizaba y regulaba la situación de hecho de apropiación sindical de la mayoría de centros industriales y comerciales, al tiempo que establecía la supervivencia de la pequeña empresa en manos de sus propietarios. Por otra parte, se dispuso a impulsar la militarización de las milicias y la llamada a quintas para organizar el Ejército Popular en Cataluña.

El cambio de posición comunista no se limitó al hecho de la participación en el Gobierno. Pocos días después se fundamentó en una nueva concepción de la revolución española y del momento y la función del Frente Popular. En el CEIC

del 19 de septiembre, Dimitrov sostuvo que “la cuestión del Estado democrático-burgués no puede ser establecida como antes”, la guerra, la lucha del pueblo español marcaba un nuevo objetivo, el de “una auténtica democracia popular”, “un Estado antifascista orientado a la izquierda, en el que colaborará la parte de la burguesía realmente de izquierda” (Agosti, 2003). Togliatti desarrolló la idea en su artículo “Sobre las particularidades de la revolución española”, que eran también de la nueva faceta del frentepopulismo, publicado en la prensa de la IC a finales de octubre de 1936. En él consignaba que “la república democrática que se crea en España no se asemeja a una república democrático-burguesa de tipo común”, sino que era una “nueva república democrática”. Luchar por ella no era un instrumento, sino un objetivo. Era la teoría de la revolución popular aplicada a España; con la única precisión de que todo había de subordinarse al hecho prioritario de la guerra. Por otra parte, la amenaza inminente de la caída de Madrid, el hecho del nuevo Gobierno de la República y la persistencia de la pasividad del Gobierno francés —engullido por la política británica del apaciguamiento y su propio engaño de la no intervención— llevaron a Stalin a abandonar su cautela inicial; de manera que aprobó finalmente, el 29 de septiembre, un programa de ayuda militar a la República. El paso adelante de la URSS fue decisivo para salvar Madrid y evitar la derrota inmediata; lástima que fuera correspondido por el Gobierno de Léon Blum con tres pasos atrás (Dullin, 2001)

La participación comunista en el Gobierno se desarrolló desde esa perspectiva de democracia popular. Uribe puso freno a la expansión de las colectivizaciones en perjuicio de buena parte del campesinado, de las explotaciones de pequeños propietarios y arrendatarios; y por el decreto del 7 de octubre restableció la autoridad del Instituto de la Reforma Agraria como fiscalizador exclusivo —excepto en Cataluña, donde había legislación propia— de las incautaciones y sus adjudicaciones. Al propio tiempo reorientó la producción agraria para atender el doble imperativo de las necesidades del abastecimiento interior y la obtención de divisas, imprescindibles para financiar la guerra, mediante la exportación de artículos con demanda exterior como los cítricos, el aceite y los frutos secos. Su gestión gubernamental estuvo acompañada desde las organizaciones comunistas por la Federación Provincial Campesina, promovida en Valencia por el PCE con el apoyo de los partidos republicanos, e integrada por explotadores familiares; y el apoyo del PSUC a la Unió de Rabassaires en Cataluña. Pretender que esa política por no ser colectivista era “burguesa” e incluso “contrarrevolucionaria” es un desatino absoluto. Otra cosa es el éxito o el nivel de acierto en el desarrollo concreto de las líneas generales. Las exigencias, de hecho competidoras, de la

producción para la exportación y el abastecimiento interior introdujeron importantes disfunciones en los cultivos de la huerta valenciana; y tampoco fue un acierto la política de precios, que desde finales de 1937 primó al consumidor urbano en detrimento del productor campesino. Aunque los errores en ambas cuestiones no fueron resultado de decisiones exclusivas de Uribe, este las compartió en el primer caso con el ministro de Comercio Juan López, de la CNT; en el segundo con el socialista Trifón Gómez, director general de Abastecimientos; y, por último, con Negrín, que sancionó ese trato desigual.

El protagonismo del PCE y su política se reflejó, de nuevo, en el crecimiento de su afiliación. Las luchas de julio se tradujeron en una oleada, con unos 30.000 ingresos en dos semanas, que lo llevó a casi 119.000 miembros en el momento inicial de la Guerra Civil. Luego prosiguió, con ritmo menor, para rebasar los 142.000 a finales de año. Esa afiliación masiva tuvo aspectos cualitativos nuevos, la confirmación de la aproximación de una parte de la intelectualidad republicana y segmentos profesionales hacia el PCE como defensor más coherente del Frente Popular, y también de militares republicanos, que compartieron la política militar comunista. No obstante, incluía algún inconveniente no desdeñable: el rápido crecimiento desbordó la estructura organizativa, debilitando el compromiso militante real e hizo con el tiempo, y con la evolución negativa de la guerra, que una parte importante de los que se habían afiliado al PCE se distanciaran de él. A finales de 1937, tras medio año de Gobierno Negrín, en el que se desarrolló la política que el PCE pudo compartir mejor, la entrega de carnets alcanzó los 341.000, pero los afiliados realmente controlados eran solo 246.000 (Hernández Sánchez, 2010); una cifra de todas maneras importante. Por su parte, el PSUC había pasado de unos 7.000 miembros que sumaban las cuatro organizaciones fundadoras en julio de 1936, a 47.000 en febrero de 1938. La pérdida de territorios y el creciente conflicto político en la zona republicana se tradujo en un descenso de la afiliación del PCE a lo largo de 1938, que lo dejó a la mitad de aquel máximo alcanzado. Por el contrario, en Cataluña la pérdida de la parte oriental no afectó a las zonas de mayor afiliación y el PSUC siguió manteniendo un incremento de afiliación, que podría haber alcanzado un máximo de 63.000 en enero de 1939.

Reactivación del frentepopulismo

El Gobierno de la República entró en crisis en el tránsito de 1936 a 1937. La experiencia del Frente Popular ampliado tenía sus retos, uno de ellos conciliar las posiciones ideológicas de las tres corrientes obreras que participaban. Un ejemplo es la discusión en torno a la presencia del Estado en las empresas intervenidas o incautadas, que Negrín quería llevar a su grado máximo posible, exactamente lo contrario que el ministro anarquista Peiró, en tanto que el PCE proponía la nacionalización general de las industrias básicas. No obstante, ninguna discrepancia de ese tipo tambaleó al Ejecutivo, lo que lo hizo fue el control absoluto de la política de guerra por parte de Largo Caballero, que acumulaba a la Presidencia del Consejo de Ministros el Ministerio de la Guerra. Sin conocimientos militares, Largo Caballero se confió de manera absoluta a su subsecretario, el general Asensio Torrado, y al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Martínez Cabrera, de cuya lealtad desconfiaban tanto los comunistas como los anarquistas.

El PCE empezó a presionar para su relevo y en favor de una mayor rapidez en la construcción del Ejército Popular. El 18 de diciembre hizo públicas sus "ocho condiciones para la victoria": servicio militar obligatorio y transformación de las milicias para la construcción acelerada del Ejército Popular, disciplina militar, Estado Mayor único y plan general de operaciones, adecuación de la industria a la producción de guerra y respeto a la voluntad de los campesinos, presionados por la colectivización forzada por la CNT y una parte de la UGT, y que el Gobierno tuviese como guía explícita de su actuación el programa frentepopulista. Condiciones presentadas también en Cataluña por el PSUC en su propio Plan de la Victoria, en el prólogo del primer cambio del Gobierno de la Generalitat, en diciembre. La principal novedad del cambio no fue, lamentablemente, la adopción de ese plan, sino la exclusión del POUM, acusado por el PSUC y los republicanos de deslealtad al formar parte del Ejecutivo catalán y llamar, al propio tiempo, en sus actuaciones públicas y su prensa al desbordamiento por la izquierda del programa unitario adoptado. No obstante, el principal problema del Gobierno de unidad no era ese comportamiento del POUM, que argumentando su derecho a la crítica entraba en el terreno de la deslealtad; el problema fue, desde el principio, el rechazo de amplios sectores anarquistas a la participación gubernamental, su exigencia de desbordar el Decreto de Colectivizaciones mediante la sindicalización integral de todas las actividades productivas y comerciales y la negativa a la militarización y la llamada de las quintas (Martín Ramos, 2018). La cesión a la presión del PSUC para excluir a los que tildaba de "trotskistas", en la fiebre de los primeros procesos de Moscú, sirvió a Tarradellas para no hacer más concesiones al partido

unificado y reforzar, por el contrario, la presencia de la CNT en el Gobierno de la Generalitat. De esa manera la crisis de Gobierno se resolvió en falso, y las divisiones internas entre anarquistas, por un lado, y republicanos y socialistas unificados, por otro, siguieron erosionando la política de unidad.

La trágica caída de Málaga en manos de los sublevados el 8 de febrero, que no se había acertado a prever ni evitar, cargó de razones a los comunistas. Inmediatamente, el 9 de febrero, impulsaron manifestaciones en Cataluña promovidas por el PSUC; y el 14 el PCE hizo lo propio en Valencia, sede del Gobierno de la República, acompañada de un documento firmado por las organizaciones del Frente Popular exigiendo mayor poder de decisión en la construcción del nuevo Ejército y el nombramiento de un mando militar único. El Gobierno entró en fase de turbulencias. Largo Caballero amagó con dimitir y los anarquistas pasaron a su vez a plantear una ampliación de su presencia en el Ejecutivo de manera que este, al contrario de lo que proponía el PCE, se convirtiera en un “Gobierno sindical” de hecho, con los partidos del Frente Popular en situación minoritaria. Azaña dio su apoyo a Largo Caballero, quien por su parte rechazó la propuesta anarquista. Como salida al amago de crisis que se estaba planteando, los “caballeristas” empezaron a plantear la reducción de la representación del sector socialista liderado por Prieto, al que entonces apoyaban los comunistas, en el que se encontraba el ministro de Hacienda, Negrín.

Sin que acabaran de resolverse aquellas fisuras, la crisis gubernamental fue acelerada por los sucesos de mayo en Barcelona. La división de la retaguardia catalana, que no había podido resolverse por vías políticas, desembocó en una rebelión de sectores anarquistas contra la Generalitat, el PSUC, ERC, el restablecimiento de la única autoridad institucional en septiembre y el desarrollo del pacto de octubre. Ante la incapacidad de las fuerzas del Gobierno catalán para controlar la situación, Azaña y Companys pidieron la intervención del de la República. Sin embargo, Largo Caballero y su ministro de la Gobernación, Galarza, decidieron demorar esa intervención, evitando enfrentarse a la CNT y confiando en que el envío a Barcelona de García Oliver y Federica Montseny —sus ministros anarquistas— convenciera a los que se habían rebelado de que depusieran su actitud. La gestión resultó inútil y Largo Caballero no tuvo otra opción que intervenir en el orden público en Cataluña —de acuerdo con lo que disponía el Estatuto de autonomía— y enviar fuerzas, con lo que la rebelión quedó desactivada.

La reacción inicial de su presidente elevó el enfrentamiento interno en el

Consejo de Ministros, que se rompió de manera definitiva cuando el PCE planteó la proscripción del POUM, acusado de promover una rebelión que no había iniciado ni nunca protagonizó, aunque si participó y quiso aprovechar para un cambio de gobierno en la Generalitat en favor de un “Ejecutivo Obrero”. Largo Caballero se negó y, a iniciativa de Prieto, se abrió el camino para un cambio de Gobierno en el que no se contemplaba inicialmente la sustitución de su jefe, sino que accediera a abandonar el Ministerio de la Guerra. La negativa también a ese abandono y a participar en el Gobierno sin retener la responsabilidad de la política de guerra desembocó en la formación de un nuevo Ejecutivo encabezado por Negrín, en tanto que Prieto se reservó el Ministerio de Defensa. El PCE dio su pleno apoyo y siguió formando parte del Gobierno republicano a través de Uribe y Hernández. Sin embargo, la Ejecutiva de la UGT se solidarizó con Largo Caballero, y rehusó seguir en él, acompañada de la CNT, que quiso hacer un gesto de solidaridad sindical. El Frente Popular empezó a tener jirones.

Esas defecciones incidieron negativamente en la dinámica unitaria. Comenzó una grave crisis en la UGT por el rechazo por parte del Comité Nacional, el 28 de mayo, de la decisión de su Ejecutiva. Predominó en aquel la alianza del sector afín al PCE y el denominado “unitario”, encabezado por Amaro del Rosal, Felipe Pretel y Antonio Génova y el apoyo común al nuevo Gobierno Negrín. El Comité Nacional eligió nueva Ejecutiva y la dirección de la UGT se partió en dos; hasta que en enero de 1938 intervino la Federación Sindical Internacional, consiguiendo que se formara una nueva Ejecutiva con participación de todos los sectores. No obstante, Largo Caballero no quiso seguir al frente de la UGT, manteniéndose la confrontación en el seno del sindicato entre “negrinistas” y “caballeristas”. La CNT, que también renunció a seguir formando parte del Gobierno de la Generalitat, se dividió asimismo entre los que al cabo de un tiempo querían regresar a ambos gobiernos y los que se mantuvieron en posiciones de rechazo al Ejecutivo de Negrín; en lo que todos los anarquistas estuvieron de acuerdo fue en culpar a los comunistas de su exclusión, injustamente, puesto que habían sido ellos los que habían tomado tal decisión.

Más allá de esa consecuencia negativa, el Gobierno Negrín relanzó la política frentepopulista y recogió algunas de las propuestas fundamentales de los comunistas. Se aceleró la construcción del Ejército Popular, se impulsó la producción de guerra propia y se completó la recuperación de la autoridad institucional en el territorio republicano. Lamentablemente, no se estuvo a tiempo de evitar la caída del norte en manos de los sublevados. Tras el

hundimiento de la defensa de Bilbao el 13 de junio, el Partido Nacionalista Vasco pactó el 24 de agosto con el mando de las tropas italianas por su cuenta, a espaldas del Gobierno de la República, la rendición de los batallones vascos en Santoña, a cambio de que fueran considerados prisioneros de guerra y de la evacuación de políticos, funcionarios y oficiales. Ese vergonzoso trato, que no fue respetado por Franco, impidió una mejor defensa de Santander y Asturias, cuya última resistencia acabó finalmente el 20 de octubre.

Por otra parte, la construcción del Ejército Popular, consumada con su reorganización en divisiones dejando atrás los últimos vestigios de la etapa miliciana, y la ampliación de las levas —que por fin se hicieron efectivas en Cataluña—, tuvo sus limitaciones en la disponibilidad de armamento y equipo de guerra. Los suministros soviéticos, en menor cuantía que los que Alemania e Italia enviaron a Franco, tuvieron un carácter fundamentalmente defensivo (Viñas, 2008); y a partir de finales de 1937, como consecuencia del conflicto militar con Japón que se le abrió a la URSS en la frontera de Manchuria, se redujeron de manera importante. La contrapartida a ese descenso de la aportación soviética fue el empeño de Stalin, a partir de septiembre de 1937, para que la República intentara de nuevo conseguir el apoyo de Gran Bretaña y sobre todo de Francia.

En esas circunstancias se produjo una importante división en el seno de la Dirección de los comunistas españoles; en realidad, entre los delegados de la IC ante el PCE, Codovilla y Stepanov, y Togliatti, habida cuenta de que Díaz, aquejado de cáncer de estómago, estuvo cada vez más ausente de las tareas de dirección[34]. Stepanov y Codovilla menospreciaban a Negrín, creían que la verdadera autoridad del Gobierno era Prieto, y se manifestaban abiertamente hostiles a la CNT. Lógicamente, se sentían aislados y temían un golpe “bonapartista” del Gobierno —de Prieto—, que, en su opinión, solo podía evitarse con una mayor presencia en el Ejecutivo y mediante la celebración de elecciones a Cortes, confiados en el apoyo social obtenido por el PCE desde la guerra. Para asegurarse el resultado proponía que se celebraran al modo de las soviéticas, con una lista única del Frente Popular que, obviamente, habría de recoger la nueva correlación partidaria (Elorza y Bizcarrondo; 1999). Togliatti criticó duramente su posición, los acusó de haber perdido la cabeza con la caída de Largo Caballero, pretendiendo alcanzar una posición hegemónica que el italiano consideraba que ni era posible ni correspondía, por más que ese hegemonismo también fuera defendido por la organización territorial de Madrid, donde los comunistas se enfrentaban a la ASM, dominada por los

“caballeristas”, y a la regional de la CNT. Togliatti propuso apoyar al Gobierno Negrín, no abandonar el frentepopulismo por un hegemonismo comunista sin sentido y mejorar las relaciones con la CNT hasta llegar a un acuerdo. Ese era el camino y no una convocatoria de elecciones que consideraba problemática y contraproducente por la confrontación pública que podía abrir. La movilización, que Codovilla y Stepanov confundían —y restringían— con la hipotética campaña electoral, había de conseguirse mediante la constitución de comités locales y sectoriales del Frente Popular que actuaran como agentes de movilización permanente.

La dirección de la IC, con el visto bueno de Stalin, acogió favorablemente en su reunión de septiembre la propuesta electoral de Codovilla. A pesar de eso, Togliatti consiguió que el núcleo duro de la dirección del PCE —Hernández, Uribe, Pasionaria, Antón— compartiera sus posiciones. Después de que en el Consejo de Ministros del 30 de septiembre Negrín y Prieto rechazaran la idea y que el PSOE la considerara en el Comité de Enlace de ambos partidos una propuesta prácticamente hostil fue abandonada, cubriéndose la dirección del PCE las espaldas con el argumento de que el resto de partidos no la habían compartido. Siguieron las Cortes de 1936, suspendidas en su funcionamiento habitual, celebrando solo reuniones de la Diputación Permanente y del Plenario de manera puntual, para convalidar la política gubernamental. Se impuso la línea Togliatti. De hecho, antes de descartar formalmente las elecciones, el PCE se dispuso a promover la constitución de nuevos comités territoriales del Frente Popular, abiertos a los anarquistas. El Comité Nacional de la CNT no lo rechazó de plano, aunque advirtió a sus afiliados que solo se podría participar en ellos en el caso de que la denominación “Frente Popular” fuera sustituida por “Frente Popular Antifascista”. Fue un primer paso de aproximación entre la dirección comunista y la anarquista, que cobró mayor impulso tras la caída de Asturias. A finales de noviembre, José Díaz y Mariano R. Vázquez, en representación del Buró Político del PCE y del Comité Nacional de la CNT, llegaron a un acuerdo de principio: rechazar cualquier propuesta de mediación o armisticio, defender las “transformaciones revolucionarias”, la libertad de los “presos antifascistas” -—refiriéndose a los que pudieran estarlo por los sucesos de mayo o por otras razones que no hicieran absolutamente imposible la medida— e ingreso de la CNT en el Comité Nacional del Frente Popular, a cambio de que este pasara a llamarse como pedían los anarquistas.

A pesar de ese resultado positivo inicial, el desarrollo del Frente Popular como un movimiento de masas tuvo desde el principio dos obstáculos que se

levantaban en el espacio socialista. Negrín nunca compartió la concepción comunista del frentepopulismo como alianza social, lo reducía a los términos de coalición gubernamental y parlamentaria. Menos aún quería saber de la movilización de masas, a la que siempre fue reacio, temiendo sus desbordamientos o simplemente la presión que pudiera ejercer. No la creía necesaria para ganar la guerra; para ello confió en la constitución sólida del Ejército Popular y en la posibilidad, por remota que fuera, de un cambio en las condiciones internacionales en las que la República tenía que defenderse. Por otra parte, las relaciones con el PSOE estaban encalladas por arriba, donde su Ejecutiva era afín a Negrín y desconfiaba de la política de unificación que le proponía el PCE; su secretario general, Ramón Lamoneda, el antiguo dirigente comunista ahora alineado con el sector centrista del socialismo, quería un partido silente, cuya única voz había de ser la del presidente del Gobierno (Graham, 2005). Se encontraban también muy maltrechas por abajo, donde las voces, poco calladas, de las antiguas corrientes de derecha (Besteiro) y de izquierda (Largo Caballero) se sumaban para acusar a los comunistas de hegemonismo, con algún motivo, pero sin ninguna razón fundamental en definitiva.

La propuesta del Frente Popular como movimiento no era una maniobra hegemonista, todo lo contrario. La defensa más coherente, y cerrada, del Frente Popular corrió a cargo de los comunistas. En la política de coalición, deseando que se ampliara a los anarquistas; en la de las alianzas sociales, insistiendo en no perjudicar los intereses de las clases medias antifascistas y del campesinado popular. No obstante, se cayó en algunas contradicciones nada secundarias. Su propuesta de nacionalizaciones industriales, que solo estaba plenamente justificada en la de guerra, entró en conflicto con los sindicatos, la CNT y la UGT, las principales organizaciones de masas, que las gestionaban mediante la colectivización sindical o el control obrero. El apoyo a una política de precios, que priorizó combatir la inflación en las poblaciones urbanas, malogró buena parte de su defensa general del campesinado, que se consideró lesionado por esa priorización y fue alejándose de la causa de la República. La política de proselitismo en el Ejército, teóricamente legítima, aumentó los recelos de las otras formaciones, en particular del PSOE, que rechazaba la cultura proselitista o no estaba en condiciones de desarrollarla por su división interna; y entorpecía además sus relaciones con los militares profesionales, que temían que el PCE estuviera introduciendo redes de control en el Ejército o simplemente por competencia corporativa con los militares que ingresaban en el PCE o que el PCE promocionaba. El proselitismo en el Ejército se perseguía para garantizar su constitución y su actuación de acuerdo con las líneas compartidas con Negrín,

pero tuvo costes importantes por el enrarecimiento político que la marcha adversa de la guerra produjo en la retaguardia republicana.

Resistir hasta la última posibilidad

El principio de acuerdo entre el PCE y la CNT quedó interferido por la batalla de Teruel. Iniciada de manera exitosa con el asalto del Ejército Popular del 15 de diciembre de 1937, acabaría en desastre tras la contraofensiva de las tropas de Franco el 17 de febrero, haciendo temblar los cimientos de la frágil unidad republicana, con fisuras por la creciente división respecto al desenlace de la guerra. Azaña había iniciado, ya en 1937, algunos movimientos para buscar una intermediación internacional que estableciera un alto al fuego y abriera negociaciones de paz arbitradas por las potencias internacionales; posición "mediacionista" que fue ampliada por otros y fue ganando adeptos en el campo republicano a medida que se sumaban los reveses militares. Por el contrario, Negrín encabezó la posición de quienes consideraron muy problemática la mediación, que Franco no se avendría nunca a ella y que Hitler y Mussolini no podían permitirse que este no se impusiera; entre ellos estaban también el PCE y el PSUC. La mediación era para estos una quimera, y aventurarse en ella solo serviría para desmovilizar y desmoralizar la retaguardia, facilitando el avance militar de Franco y su victoria final. La única opción era resistir antes que darse por vencidos, a la espera de que la coyuntura internacional cambiara, por el abandono de la no intervención o por una conflagración general en Europa. Y, en cualquier caso, si eso no llegaba a producirse, no había que facilitarle la victoria a Franco y obligarle, en último extremo, a abandonar su posición de hacer rendirse incondicionalmente a la República. Negrín recuperó el lema de "Resistir es vencer", popularizado por la aventura del buque rompehielos Endurance ("Resistencia") en su expedición a la Antártida entre 1914 y 1916, y los comunistas lo hicieron plenamente suyo. Sin ningún género de dudas, esa división erosionaba la política unitaria.

El Comité Nacional del Frente Popular no atendió a las peticiones que hizo el PCE desde diciembre para que la CNT fuese admitida en él. Ni siquiera las tomó en consideración, funcionaba al ralentí y los partidos republicanos no tenían interés en aquella ampliación. Dolores Ibárruri lo exigió el 16 de febrero en un

mitin organizado precisamente por el Comité Nacional del Frente Popular, sin éxito todavía. En su contra jugaba el rumor de fondo de las crecientes discrepancias de Prieto acerca de la política de guerra y algunas maniobras, incipientes todavía, para desplazar al jefe del Gobierno. Finalmente, la ruptura por parte de los sublevados del frente de Aragón en dirección hacia Cataluña, el 7 de marzo, que empeoraba de manera grave la situación militar de la República, activó tanto la propuesta de reforzamiento del Frente Popular como su contraria. Aquel mismo día, Giral informó a Azaña sobre la próxima presentación de un documento conjunto de los partidos republicanos, lo que avivó las especulaciones sobre la sustitución del Gobierno Negrín por otro de hegemonía republicana, que significaría un cambio general de política en la línea de la mediación internacional.

Para empeorar las cosas, Stalin complicó la situación desde mediados de febrero dando instrucciones para que el PCE saliera del Gobierno, confiado en que ello mejoraría las relaciones de la República con Gran Bretaña y Francia (Elorza y Bizcarrondo, 1999; Viñas, 2009). La propuesta, hecha en plena fase adversa de la batalla de Teruel, no podía sino dar verosimilitud a la expectativa del cambio político en beneficio de los “mediacionistas”. No resultó un secreto, el embajador francés Labonne lo supo y se sabe que, cuando menos, informó de ello a su Gobierno el 23 de febrero de 1938. El PCE y Togliatti recibieron la información con sorpresa y desagrado, y Negrín hizo llegar a Stalin que la defensa de la República no podía prescindir en esos momentos ni de la presencia comunista en el Gobierno ni del apoyo de la URSS. La ocurrencia de Stalin quedó suspendida en el aire por la fuerza de los acontecimientos de la guerra y el estallido de la crisis política en la retaguardia republicana.

Ante la ruptura del Frente y los rumores de maniobras contra Negrín, el PSUC, de común acuerdo con el PCE, empezó el 11 de marzo a movilizar a sus militantes por las calles de Barcelona y pueblos limítrofes, llamando en mítines relámpago a la resistencia y la movilización popular, con consignas de “No pasarán” y “Frente Popular Antifascista”. Por el contrario, Azaña intentó, sin conseguirlo, que el presidente de las Cortes, Martínez Barrio, tomara la iniciativa de impulsar la alternativa de un Gobierno de hegemonía republicana. Se impuso la respuesta comunista. La amenaza militar favoreció la firma el 12 de marzo del pacto de unidad de acción entre CNT y UGT, y este a su vez alimentó la dinámica de manifestaciones. El conflicto se disparó con las maniobras de Labonne, apremiando al Gobierno de París a emprender una acción mediadora y dando con ello expectativas a los partidarios de esa vía. Finalmente, Negrín

consiguió que el Consejo de Ministros del 16 de marzo rechazara las maniobras de Labonne y dejara a Azaña en minoría. Lo hizo con el respaldo interno de los ministros comunistas y socialistas, incluido entonces Prieto; y el apoyo externo de la manifestación promovida por los comunistas en Barcelona, que se presentó ante el Palacio de Pedralbes, donde estaba reunido el Gobierno. Además, una comisión conjunta del PSOE, el PCE, el PSUC, la UGT, la CNT y la FAI instó también al Gobierno a la resistencia y a la exclusión de los ministros que actuaran en pro de la mediación. La reafirmación del Gobierno y la inesperada decisión de Franco de detener su ofensiva en Cataluña, para desplazarla hacia Valencia, dio un respiro a la República; que no obstante vio cómo quedaba partida territorialmente en dos con la toma de Vinaroz por los sublevados el 15 de abril.

El 16 de marzo de 1938 se evitó un hundimiento prematuro del Frente Popular y, más que probablemente, de la República. Su situación material, no obstante, siguió la misma pauta. La URSS empezó a reactivar los suministros de guerra, en particular, artillería defensiva y aviones para sustituir las pérdidas sufridas. No se consiguió más, porque el Gobierno francés, tras cubrir su decisión con una reunión de su Consejo de Defensa Nacional, el 15 de marzo (Lacroix-Riz, 2006), rechazó la petición del Gobierno español de que proporcionara también el envío de un contingente de aviones similar al soviético; con el que casi podría haberse equilibrado la potencia aérea de los sublevados, que sí siguieron recibiendo suministros de Hitler y Mussolini, reponiendo plenamente sus pérdidas. Por otra parte, Prieto, ante la ofensiva rebelde en Cataluña que habría de llegar hasta Lleida, abrió una nueva crisis de Gobierno y de unidad de la retaguardia, dando por perdida la guerra; y así lo expresó de manera sucesiva en el Consejo Superior de Guerra y en el Consejo de Ministros, el 27 y el 29 de marzo. El PCE, a través de Jesús Hernández, le salió al paso en el seno del Gobierno y en la prensa acusándolo de derrotismo. Pero no fue este nuevo enfrentamiento con los comunistas, sino la insistencia de Prieto en su posición, lo que obligó a Negrín, el 30 de marzo, a pedir a Prieto que dejara el Ministerio de Defensa y siguiera en el Gobierno sin asumir ninguna cartera. Prieto completó la fractura negándose a permanecer en el Gobierno. No fue expulsado de él por los comunistas, como más tarde pretendió; por el contrario, su salida y esa argumentación que luego hizo agravaron la crisis interna del PSOE, rompiendo el sector centrista, que tuvo que elegir entre seguir apoyando a Negrín o darle crédito a Prieto.

Dado el papel central de los socialistas en el Gobierno de la República y el Frente Popular, desde septiembre de 1936, su fractura se trasladó a la dinámica

unitaria, avivada con el acuerdo de principio del PCE y la CNT, la entrada de esta en el Frente Popular Antifascista a finales de marzo y el pacto de unidad de acción entre CNT y UGT aquel mismo mes. Ciertamente, la resolución de la crisis provocada por la salida de Prieto del Gobierno proporcionó una imagen de unidad. Negrín asumió el Ministerio de Defensa, como venían reclamando los comunistas, y los sindicatos se reincorporaron al Ejecutivo, que mantenía las mismas representaciones de partido. El PCE siguió en él. Stalin, convencido por la respuesta de Negrín, las argumentaciones de Dimitrov y Togliatti, y sobre todo por la evolución de la guerra y la persistencia de la posición francesa, levantó el 20 de marzo su oposición a que permaneciera en el Gobierno; aunque minimizó su presencia reduciéndola a Uribe —Hernández se había "quemado" en la confrontación con Prieto—, un solo representante, lo mismo que en los sindicatos. No fue más que una imagen, que ya no respondía a la realidad y resultó fugaz. La constitución de redes territoriales y sectoriales de comités de Frente Popular o comités de enlace CNT-UGT se hizo muy lenta, sin llegar a desarrollar un frentepopulismo de masas efectivo. El Frente Popular siguió siendo una coalición de organizaciones. Y, además, una coalición en dinámica de ruptura por las crisis internas de socialistas y anarquistas y la frustración de las maniobras mediacionistas, que alimentaron la expansión del anticomunismo, acusando al PCE de ser el principal sostenedor de la política de guerra.

Negrín pasó a ser estigmatizado como un títere del PCE, si no un criptocomunista, tanto por los sectores socialistas que lideraban Besteiro, Largo Caballero y Prieto como por los republicanos, los nacionalistas catalanes y vascos —todos ellos afines, de una u otra manera, a la propuesta de conseguir el fin de la guerra mediante una mediación franco-británica— y una parte importante del anarquismo que comprendía las regionales de Madrid y Cataluña. Sobre el PCE llovieron las denuncias de hegemonismo y de tener una agenda oculta para activar tras la victoria en la guerra. Nada era cierto, la preocupación comunista, desde Stalin hasta José Díaz, pasando por Dimitrov y Togliatti, fue precisamente huir de toda tentación hegemonista; asumir la realidad histórica y política de que el PCE había de ser principal impulsor y garante del Frente Popular, pero de ningún modo pretender ser él el Frente Popular y ocupar su espacio. De ahí las dudas sobre la participación gubernamental, que resultó obligada por las divisiones del campo republicano y antifascista. Y no solo rechazaron esa agenda oculta, sino que nada hicieron para escribirla.

Es cierto que en el seno de la militancia y en algunas organizaciones pudo considerarse ese hegemonismo en momentos de crisis y acoso de rivales

políticos. Ocurrió, como lo señaló Togliatti, con ocasión del traumático fin del Gobierno Largo Caballero. Y volvió a ocurrir en marzo de 1938, tras las convulsiones sufridas cuando la organización regional de Madrid —siempre ella — sugirió, a través de Mundo Obrero, que la disyuntiva sí era entre fascismo y comunismo. La dirección del PCE zanjó la salida de tono y José Díaz publicó, también en Mundo Obrero, el 29 de marzo, que esa no era la disyuntiva, sino que “la única solución para nuestra guerra es que España no sea fascista ni comunista”, y remachó que la lucha del pueblo era “por la independencia nacional y la república democrática”, y que el PCE nunca había pensado que “la solución de esta guerra pueda ser la instauración de un régimen comunista”. No era una cortina de humo, esas palabras correspondían cien por cien a la concepción de la revolución popular como etapa de transición entre el fascismo y el socialismo. Otra cosa era que las tendencias hegemonistas de la organización madrileña encontraran aliento en Stepanov y Codovilla, que nunca se sintieron cómodos con el frentepopulismo. Pero ellos no fueron los que marcaron la política de la IC, ni en definitiva del PCE, y sus divergencias pertenecen a otra intrahistoria, la del aparato de la IC, que no incidió de manera importante en España y no viene a cuento en esta historia.

El PCE apoyó lealmente a Negrín, que a su vez nunca llevó su alianza con los comunistas y sus llamadas al apoyo de la URSS —no le quedaba otra— al terreno de la subordinación (Moradiellos, 2006). Lo apoyó en la declaración gubernamental de los Trece Puntos, del 1 de mayo de 1938, una declaración moderada sobre los objetivos de la República, que evocaba el reformismo de antes de la guerra y tenía el objetivo de reforzar la defensa internacional de la República y su caracterización de la Guerra Civil como un hecho de agresión exterior de las potencias fascistas. Lo hizo frente a las desconfianzas anarquistas que interpretaron, erróneamente, que Negrín quería dar marcha atrás en los cambios operados en el sistema socioeconómico (las colectivizaciones, el protagonismo sindical, etc.). Negrín no solo no tomó semejante decisión, sino que disuadió a Azaña de anular la legislación que la Generalitat había producido unilateralmente, desbordando los márgenes del estatuto y de la Constitución, empezando por el Decreto de Colectivizaciones de octubre de 1936. En su criterio, ambas cosas habrían de resolverse tras la victoria, cuando el pueblo estuviese de nuevo en condiciones de ejercer toda su soberanía.

Y más que apoyarlo, el PCE lo defendió entre el 9 y el 17 de agosto de 1938, en plena batalla del Ebro, cuando ERC lideró una maniobra, apoyada por una parte de la CNT-FAI, para derribar al Gobierno Negrín y sustituirlo por aquel de

hegemonía republicana pretendido desde el invierno anterior. El apoyo del PCE, de la parte de los socialistas que le siguió siendo leal y, en esta ocasión, de un Azaña que temió más la hegemonía de los nacionalistas catalanes que la continuidad de Negrín salvó la situación. A costa de perder una nueva pieza en el traje de la unidad y de un desencuentro entre el PCE y el PSUC. En ese desencuentro, que gravitó entre ambas organizaciones hasta el final de la guerra, se sumaron las diferencias sobre la política de precios, otras cuestiones —menos trascendentes— de interferencia del Gobierno Negrín en la Administración catalana, y sobre todo una cadena de equívocos por el apoyo del PSUC a Companys, al que Azaña y Negrín consideraban artífice de la maniobra. Era erróneo, el artífice era Tarradellas, que, por su parte, reprendió duramente a Companys por considerarlo confabulado con el PSUC.

Lo apoyó lealmente, pero no a ciegas. En diciembre de 1938 los comunistas rechazaron la propuesta de Negrín de constituir un “Frente Nacional unido”, una plataforma política nueva liderada por él mismo que soslayara la crisis interna de los socialistas, la hostilidad dominante en el PSOE contra el PCE y las debilidades y deslealtades de los partidos republicanos. Dimitrov apuntó en su diario, el 10 de diciembre, que la propuesta escondía tendencias de dictadura personal (Dimitrov, 2002). También empezaron a distanciarlos las crecientes críticas del PCE a Rojo y el hecho de que, en definitiva, no se hubiera llegado a instituir un mando militar único. Los tres ejércitos decidían por su cuenta, y el mando único del de Tierra quedaba de hecho disminuido por la división de zonas territoriales y la hostilidad entre el general Miaja, comandante en jefe del Grupo de Ejércitos de la Región Central, y Rojo. Fueron tensiones de un tramo final de la guerra, en el que el vergonzoso acuerdo de Múnich, el 30 de septiembre, entre los gobiernos del Reino Unido y Francia y Hitler y Mussolini, a costa de Checoslovaquia, dejó a la República a merced de Franco, por la carta blanca otorgada a sus dos padrinos internacionales. Los gobiernos de Londres y París no iban a conceder al de la República española lo que habían negado al checoslovaco: salvaguardarlo del fascismo. Uno y otro habrían de ser piezas inevitables de la política de apaciguamiento, en el zurrón de los gobiernos de Berlín y Roma.

En cualquier caso, los comunistas no se apearon de la resistencia; apoyaron y participaron hasta el final en el cada vez más difícil y costoso esfuerzo de guerra. De la misma manera que Stalin decidió, en noviembre de 1938, un nuevo e importante envío de suministros militares para posibilitar esa resistencia; incluía, entre un volumen notable de armas y artillería, unos 175 aviones y 40 tanques.

No pudo llegar a tiempo, a pesar de que la primera entrega, embarcada en el Winnipeg, arribó a Francia el 15 de enero de 1939. Once días más tarde las tropas de Franco entraban en Barcelona y a lo largo de febrero se desarrolló en Madrid una conspiración, irresponsable y facciosa, promovida por el coronel Casado y el general Miaja, con el apoyo de todas las corrientes socialistas que se habían opuesto a Negrín, encabezadas en la capital por Besteiro y los anarquistas de la región centro-sur. El 5 de marzo la junta golpista proclamó depuesto al Gobierno de la República, cayendo en la trampa que le tendió Franco de una supuesta rendición negociada. Los comunistas madrileños se resistieron y fueron derrotados, su jefe militar, Barceló, fusilado y algunos dirigentes del partido que pudieron ser capturados, enviados a prisión (Domingo Girón, Eugenio Mesón y Guillermo Ascanio), donde los encontró Franco cuando entró en Madrid (Bahamonde, 2014). La sublevación de Casado desarboló al PCE. Togliatti, que concluyó que la respuesta militar comunista en Madrid no tenía opciones, intentó adaptar al partido a la nueva situación y prepararlo para pasar a la clandestinidad. Tampoco se hizo a tiempo, la sublevación facilitó las cosas a Franco, que no aceptó más rendición que la incondicional, como siempre había considerado, y la guerra acabó con la victoria de los sublevados proclamada el 1 de abril. Era la derrota de la República, y en particular del Frente Popular y el PCE. Este tardaría más de 15 años en volver a reencontrarse con una política de masas.

PARTE III

ENTRE DEMOCRACIA

Y SOCIALISMO

CAPÍTULO 7

TIEMPO DE RESISTENCIA

Derrota, dispersión y desorientación

El PCE había sido, en sus primeros 12 años de vida, el partido de los bolcheviques españoles, el partido de la revolución, más de la rusa que de la española. Entre 1934 y 1935 había entrado en el campo de la realidad, asumiendo que la rusa era el referente y la base primera de legitimidad del proyecto comunista, pero no el modelo. De la necesidad de la defensa frente al fascismo se había hecho virtud y la política frentepopulista había iniciado la aplicación de la voluntad revolucionaria en una realidad adversa: la elaboración de un nuevo camino en la lucha contra el capitalismo, que no sería un interludio, sino un largo periodo de transición en el que ni las clases trabajadoras ni los comunistas estarían solos. El frentepopulismo dio contenido concreto al concepto de la “revolución española”; el PCE se erigió en el partido del Frente Popular, como lo hizo en Cataluña el PSUC, que se integró de manera definitiva en la IC tras acabar la guerra. Esa condición impulsó el crecimiento de ambas formaciones en número de militantes y en influencia social. Por fin el movimiento comunista en España había conseguido ser un hecho de masas. ¿Podría mantenerlo bajo la represión y en el exilio? Difícilmente si la dictadura y sus formas fascistas se prolongaban de manera indefinida.

La derrota de marzo de 1939 fue un golpe del que costó levantarse. Se agravó por la descomposición final del campo republicano, el aislamiento en el que volvió a encontrarse el PCE y la dimensión exterminadora de la represión franquista. El exilio resultó mucho peor de lo pensado. Francia no fue tierra de asilo, sino de campos de concentración a la espera de que se fuera resolviendo el destino personal de cada uno de los internados. El PSUC y el PCE tuvieron que reconstituirse en tierra extraña, en la ilegalidad y la precariedad, con el único apoyo del PC francés. Un apoyo reducido después de que este partido fuese prohibido al comienzo de la Guerra Mundial por su línea derrotista.

El PSUC pudo hacerlo de manera suficiente, ratificando a Comorera en su reunión del Comité Central en París, el 2 y 3 de marzo de 1939, y consiguiendo, en junio, ser reconocido como sección de la IC, independiente organizativamente del PCE, con el que estaría obligado a concertar la política general española (Martín Ramos, 2002). Frustrada su voluntad de regresar al interior por el fin de la Guerra Civil y el estallido de la mundial, trasladó la dirección y la mayoría de sus cuadros a México, aunque el grueso de su militancia permaneció en Francia (en 1945 se contabilizaron 250 miembros del partido en México, 500 en toda América Latina, 150 en las colonias francesas del norte de África y unos 4.000 en la Francia metropolitana).

El exilio del PCE se produjo en peores condiciones, con el peso de la derrota definitiva encima, sin haber podido establecer una organización clandestina en España, a pesar de que se tuviera conciencia de su necesidad (Morán, 1986; Hernández Sánchez, 2015; Fernández Rodríguez, 2020). El mayor deseo de la militancia que pudo huir de España era ser acogida en la URSS, pero solo una minoría de cuadros y profesionales especializados, seleccionados por la contribución que podían aportar, lograron su objetivo: poco más de un millar, de los que algún centenar pertenecía al PSUC (Arasa, 1993). A Latinoamérica emigraron unos 500 y la mayoría de los militantes permanecieron en Francia, en torno a los 7.000[35], también en sus colonias norteafricanas. Conforme a las normas de la IC, la dirección del PCE marchó a Moscú para rendir cuentas políticas del final de la Guerra Civil —también lo hizo Comorera— y el estallido de la guerra en Europa hizo que esa presencia se prolongara, al tiempo que se producía la dispersión de la militancia entre América y Europa. La Guerra Mundial no solo detuvo una mejor adaptación al exilio. A ello se añadió el agravamiento de la crisis del frentepopulismo, del enfrentamiento entre el PCE y el resto de formaciones que habían combatido la sublevación fascista. Primero con el sorprendente, pero no inexplicable (Carley, 1999), pacto germano-soviético que precedió al estallido del conflicto; inmediatamente después al declarar la URSS y la IC la guerra como un enfrentamiento entre Estados imperialistas y no como una confrontación general entre fascismo y democracia, como se había esperado que fuese en la España republicana desde 1937. Tras esa declaración, que retrotraía a las causas de la Gran Guerra de 1914, los comunistas no solo tenían que abstenerse, sino sabotear la guerra. Los comunistas españoles lo acataron más por disciplina y confianza incondicional hacia la URSS que por convicción, debilitándose política y emocionalmente ante sus antiguos interlocutores del Frente Popular; además, perdieron la protección del PCF, que fue prohibido por el Gobierno francés como consecuencia de

aquella declaración.

La dirección quedó en estado de prolongada provisionalidad, con José Díaz, Dolores Ibárruri y Jesús Hernández en la URSS, Francisco Antón al frente del partido en Francia, y Checa, Uribe y Mije acabando en tierras americanas. En junio de 1939 el CEIC decidió reducir al máximo el funcionamiento de la dirección española y restringió su Buró Político a un Secretariado de cinco miembros con Uribe como responsable político, y Mije, Hernández, Antón y Santiago Carrillo por las juventudes; tenía, además, que instalarse en México, donde contaría con el apoyo de Checa, que mantenía la responsabilidad organizativa aunque no formaba parte de los cinco. Las reuniones del Comité Central quedarían en suspenso; más adelante, a partir de febrero de 1940, empezaron a editarse en México España Popular y Nuestra Bandera, con una incidencia restringida al exilio hasta 1945.

La ejecución de la decisión del CEIC fue accidentada y lenta. Antón fue detenido en septiembre de 1939 en el transcurso de las redadas contra los comunistas franceses. Puesto en libertad, fue enviado a la URSS en octubre de 1940 por gestiones de la embajada soviética. La Guerra Mundial y las cautelas y dudas del CEIC sobre una dirección que perdió a José Díaz, muerto en marzo de 1942 —el que contaba con la mayor confianza del aparato de Dimitrov—, fueron retrasando los desplazamientos. Checa murió también, en México, en agosto de 1942, de tuberculosis. Hasta septiembre de 1942 no se decidió que Hernández y Antón marcharan a reunirse con Uribe, Mije y Carrillo, que ya estaban en México. Antón lo hizo en la primavera de 1943, Hernández, en el verano y no llegó a su destino hasta diciembre. La reunión de todos no se tradujo en dirección efectiva, al producirse de inmediato un enfrentamiento entre Uribe y Mije, por una parte, y Hernández, por otra. Un choque que respondió al vacío producido por la muerte de Díaz y las aspiraciones de Jesús Hernández de sucederle; en el que este perdió la partida y fue expulsado en la primavera de 1944, sin que con ello la dirección americana ganara en capacidad y autoridad.

Por otra parte, la detención de Antón en Francia dejó la responsabilidad de la relación entre la militancia a Carmen de Pedro, con ayuda de Jesús Monzón, ambos cuadros del primer nivel del partido aunque no formaran parte del Comité Central (Martorell, 2000). Monzón, apoyado por De Pedro, acabó convirtiéndose de facto en el máximo dirigente del partido en Francia a partir de 1940. Lo hizo por propia decisión, sin contar con la aprobación previa del Secretariado, en proceso de instalación en México, que tuvo que resignarse, por su parte, al hecho

consumado. El dinamismo organizativo y político de Monzón desbordaría al Secretariado y configuraría una suerte de dirección autónoma en Francia, que se proyectó también, a partir de 1943, hacia el interior de España.

La dispersión de la dirección del PCE no importó demasiado por el momento. No hubo ninguna línea política real a aplicar durante un buen tiempo. La función dirigente se aplicó a mantener la organización y la fidelidad de los militantes, capeando el temporal del estallido de la guerra, con el añadido de sus inconvenientes materiales y políticos. Lo único que se añadió fue iniciar una rectificación, recuperando el discurso de la "unidad por la base", pretendiendo la sustitución del "viejo Frente Popular" por una nueva "Unión Nacional" en la que el PCE y el PSUC se encontraron solos. Esa unión no era posible en el exilio, enfrentados con todos, también con Negrín; ni en el interior, con el partido clandestino en la mínima expresión, al borde de la aniquilación y circunscrito a la supervivencia cerrada de pequeños grupos o a la huida a las sierras. De todas maneras, el futuro del comunismo español no se jugaba en esas magras instrucciones políticas y en los avatares de las direcciones del exilio, sino en lo que podría volver a ser en el interior. Su realidad fue más que problemática durante un largo tiempo, como escribió Morán: "En los primeros meses de 1942 el partido estaba en las cárceles".

Una vez acabada la Guerra Civil, los primeros intentos de reorganización resultaron en una mezcla de disposiciones de dirigentes internados en los campos de Albatera (Jesús Larrañaga, Ramón Ormazábal, José Cazorla) e iniciativas de cuadros locales, fragmentadas y desconectadas entre sí, desarrolladas con escaso rigor en la clandestinidad. Los nombres de Matilde Landa, Enrique de Castro, Enrique Sánchez García y José Cazorla jalonaron los intentos de constituir una nueva dirección en Madrid, sucesivamente frustrada por la represión, que acabó situando a los tres últimos ante el pelotón de fusilamiento. Las instrucciones que se recibieron del exilio se limitaron a garantizar la supervivencia de la organización, evitar la acción armada y contemplar la penetración en las organizaciones de masas del nuevo régimen, así como asistir a los presos. Ninguna orientación de acción política precisa.

La situación de precariedad organizativa y política empezó a mejorar cuando la dirección de Madrid y de todo lo que se podía conectar del partido en el resto de España quedó en manos de un experimentado cuadro del aparato de la IC. De origen moldavo, había empezado a desarrollar sus actividades en España en 1931, bajo diversos nombres hasta que consolidó el de Heriberto Quiñones

(Ginard, 2000). Al acabar la guerra, Quiñones se negó a marchar de España y, tras pasar también por Albatera, se instaló en Valencia, donde colaboró en la organización clandestina del partido. Detenido y en la cárcel entre julio de 1939 y octubre de 1940, pudo fugarse sobornando al cura de la prisión. Durante su estancia en Valencia conoció a otro miembro del aparato de la IC en España, el polaco José Wajsblum, que participaba por entonces en la organización clandestina de Madrid. Fue este quien lo presentó a sus compañeros de la capital como un miembro del Comité Central —lo que no era cierto— que podría hacerse cargo de la orientación política del partido.

Quiñones llegó a Madrid en mayo-junio de 1941 y, gracias a su discurso y su experiencia clandestina, fue reconocido enseguida como nuevo dirigente por los comunistas madrileños y por una “Comisión Central Reorganizadora” constituida por Calixto Pérez Doñoro, último superviviente de los enviados desde los campos de Albatera. En agosto, tras una nueva caída que desarboló aquella “Comisión Central”, Quiñones se invistió a sí mismo como responsable del PCE en España, nombró un Buró Político y consiguió articular la primera red nacional efectiva de la clandestinidad. Esa red estaba integrada por organizaciones comunistas de Galicia, Vizcaya, Asturias, Aragón, País Valenciano, Albacete, Extremadura, Andalucía, Salamanca, Valladolid y Palencia; también incorporó a la de Cataluña, a la consideró como una parte más del PCE, desconociendo su existencia como PSUC (Fernández Rodríguez, 2020). De la pequeña importancia que la organización del interior estaba empezando a tomar dieron testimonio los centenares de detenidos entre finales de 1941 y comienzos de 1942; de ellos, más de 160 en Andalucía, donde se había constituido un Comité Regional con células prácticamente en todas las provincias y en localidades de larga tradición comunista como Villanueva de Córdoba. Quiñones no se limitó a labores de reunión de militancia y asistencia a los presos, pretendió convertirse en dirigente efectivo del PCE desde el interior, poniendo en cuestión la validez de la dirección establecida en México. Impulsó una propaganda propia e incluso empezó a concebir —sobre el papel— una línea política de “unión nacional” abierta a todos los sectores políticos, incluidos falangistas, requetés y católicos enfrentados a la dictadura franquista, para promover una nueva república popular.

Lo más importante del “quiñonismo”, más allá de los recelos personales y de la búsqueda de diferencias políticas —no demasiado claras— con la dirección de México, fue el cuestionamiento que hizo de la capacidad de esta para dirigir al PCE, la afirmación del predominio de la dirección del interior sobre cualquier

estructura que pudiera sobrevivir en el exilio. A esa pretensión se opuso el intento de Uribe y Mije de recuperar el control de la organización del interior, enviando en mayo de 1941 una delegación propia encabezada por Jesús Larrañaga —evadido de Albatera e instalado en América en la primavera de 1940—, del PSUC, con Jaume Girabau y Pere Valverde, y de las JSU, con Eleuterio Lobo y la catalana Perpetua Rejas. Las delegaciones se instalaron en Lisboa para preparar su entrada en España y los jóvenes fueron enviados como avanzada, llegando a Madrid en el verano. Quiñones los entrevistó, pero no solo no reconoció su autoridad, sino que el 31 de agosto envió una carta a la dirección de México afirmando que la única autoridad comunista era la suya. Además, sostuvo que los exiliados habían de regresar a España, incluso si pendían sobre ellos penas de muerte, para ponerse a disposición de la dirección del interior, que sería la que decidiría su destino “donde más falta hagan”. La respuesta de la dirección del PCE fue una dura crítica, negándole autoridad y reprochando a Quiñones que deformara la línea del partido a su conveniencia.

Aunque el enfrentamiento quedó servido, no llegó a tener desarrollo por la detención a mediados de septiembre de Rejas y Lobo. Tras sus interrogatorios, cayó todo el grupo de Lisboa, entregado a la Policía española y ejecutado en Madrid en enero de 1942, excepto Pere Valverde, que por tener la nacionalidad cubana fue expulsado a su patria de pasaporte. Quiñones quiso evitar más consecuencias dando instrucciones a las organizaciones del interior de interrumpir toda relación con la dirección de América que no pasara previamente por sus propias manos. Sea como fuere, las caídas prosiguieron y el 30 de diciembre el propio Quiñones fue detenido en plena calle de Madrid, junto con Ángel Cardín, su responsable de organización, al que había encargado formar un grupo de acción armada que no llegó a constituirse. Tras ser torturado durante dos meses en la Dirección General de Seguridad, fue ejecutado el 2 de octubre de 1942.

Con la caída del moldavo desapareció la peculiar disidencia “quiñonista”, pero no el fruto organizativo de su acción. La red que había conseguido articular no se deshizo del todo y permitió, a lo largo de 1942, una nueva reorganización en el interior utilizando buena parte de los cuadros en los que se había apoyado Quiñones. Sin embargo, no la gestionó la dirección en México, que con las detenciones de otoño vio frustrado su primer intento de restablecer directamente su autoridad en España, sino Jesús Monzón. Este, después de la invasión de la URSS por Alemania en junio de 1941, constituyó, también por iniciativa propia, aunque sin impugnar como Quiñones la autoridad final de la dirección de

América, una Delegación del Comité Central en Francia, con Carmen de Pedro y el responsable de las JSU, Manuel Azcárate. Tras la caída del grupo de Lisboa decidió asumir desde Francia el control del interior.

La Unión Nacional Española

Todo cambió con la evolución del conflicto mundial. Después de la intervención alemana en los Balcanes, en abril de 1941, que empezó a amenazar a la URSS, Dimitrov inició la rectificación de la política comunista. Instruyendo al PC francés a luchar por la independencia nacional, abandonando la línea del "derrotismo revolucionario", y a constituir un "amplio frente de liberación nacional", que podía alcanzar incluso a De Gaulle (Bayerlein et al, 2003). La organización comunista española en Francia pudo empezar a percibir el cambio y no es descartable que la propuesta de Quiñones estuviera también influida por ese cambio incipiente. Por el contrario, la dirección en México reaccionó más tarde y con alguna confusión. Con fecha de 1 de agosto, el Secretariado hizo pública una declaración llamando a la "unión nacional de todos los españoles contra Franco y Serrano Suñer" a constituir un frente con republicanos, socialistas, nacionalistas, católicos, anarquistas en el exilio y "los elementos que en el interior del país constituyen en las filas del régimen la oposición a la política que él realiza", por más que esa amplia apelación se contradecía, al postular al final un imposible "Gobierno de Unión Nacional presidido por Negrín", representante de la última etapa del Frente Popular. Como único resultado de esa nueva línea en el exilio americano, en febrero de 1942 se constituyó la Unión Democrática Española, integrada por el PCE y el PSUC, socialistas negrinistas, representantes de Izquierda Republicana, Unión Republicana y Partido Republicano Federal, y el sector de la Unió de Rabassaires afecto al PSUC. A finales de aquella primavera, el grupo cenetista encabezado por García Oliver y Aurelio Fernández, minoritario en el muy complejo mundo de las disensiones anarcosindicalistas del momento, se aproximó al PCE, y en junio firmó con el PSUC un pacto de unidad de acción.

Fueron acuerdos precarios y breves. La persistencia en el seno de la dirección de la IC del temor a que España se involucrara en la guerra hizo que Dimitrov forzara un año más tarde la rectificación de la contradictoria declaración del

Secretariado del 1 de agosto de 1941 (Dimitrov, 2002). Reclamó a Hernández, Pasionaria y Antón una declaración del Comité Central —en realidad, de ellos y de un reducido grupo de miembros exiliados en la URSS—, emitida el 16 de septiembre de 1942, en la que se explicitara que la disyuntiva en España no estaba entre república democrática o dictadura militar, sino entre estar a favor o en contra de que España entrara en la guerra. En consecuencia, se postuló la unidad de todos los españoles, de los patriotas sin distinción de convicciones políticas (desde los comunistas a los católicos y a los conservadores), frente a la alianza con el bloque fascista, para formar un Gobierno auténticamente nacional, contra la involucración en la guerra de España y por su independencia, que pusiera en libertad a los detenidos republicanos, promoviera el regreso del exterior de los republicanos emigrados, estableciera la libertad de prensa y “asegurara el pan al pueblo” y convocara una Constituyente. El Gobierno en torno a Negrín desapareció de la política comunista, de la misma manera que toda disyuntiva entre monarquía y república, algo que habría de corresponder al futuro, a las Constituyentes, o al plebiscito que por las mismas fechas Prieto propuso por su cuenta y sin ninguna conexión con los comunistas.

El documento del Comité Central, emitido por Radio España Independiente, significó la ruptura con el PCE de los negrinistas y el sector anarcosindicalista encabezado por García Oliver. En febrero de 1943 se disolvió la Unión Democrática Española, que ya había dejado de existir de hecho con aquellas rupturas; sin que el fin de la incipiente línea unitaria de agosto de 1941 fuese compensado por ningún tipo de aplicación práctica de la declaración del 16 de septiembre de 1942. La desconexión de Mije y Uribe con el interior impedía que pudieran hacerla avanzar en el escenario principal, España; y en el exilio americano tampoco se dio ningún paso adelante, por la escasa capacidad de ambos, que en España Popular se preocuparon más de polemizar, de manera singular con Prieto, que de sugerir posiciones comunes. La llegada de Antón y Hernández a México, en el otoño de 1943, solo sirvió inicialmente para enredar la discusión en la cúpula con polémicas sobre la validez del nuevo cambio, que revistieron con argumentos políticos su confrontación personal. El Secretariado estaba viviendo en el mundo de las palabras.

La aplicación de la nueva línea y el eje de la acción política de los comunistas españoles se trasladaron a Francia y al interior de España; bajo la autoridad de Monzón, que consiguió, por primera vez desde el estallido de la Guerra Mundial, establecer su dirección única sobre las organizaciones comunistas en ambos territorios. La dirección de México tuvo que aceptarlo a regañadientes, no sin

hacer un último intento de relegar a Monzón al exilio francés instando a Carmen de Pedro a que asumiera la dirección del interior, cosa que rechazó (Martorell, 2000). Monzón dio cuerpo real a una política hasta entonces fantasmagórica. Empezó reuniendo en el verano de 1942 en Montauban, en el sur de Francia, un Congreso Constitutivo de la Unión Nacional Española, cuyos objetivos estaban en sintonía con la declaración del Comité Central: luchar por el derrocamiento de Franco y la Falange y "por la auténtica neutralidad de España", para instaurar

[…] un auténtico Gobierno de Unión Nacional con representantes de todas las fuerzas políticas de España, desde los partidos obreros hasta los católicos y de derecha, que, con garantías para todos los sectores, convoque al pueblo español a expresar libre y pacíficamente su voluntad sobre el más venturoso porvenir de la Patria por medio de elecciones democráticas[36].

La reunión de Montauban dotó además de política propia a la resistencia comunista española en Francia, con la perspectiva de trasladarla al interior tan pronto como fuera posible. Los comunistas españoles venían participando de manera importante en la resistencia francesa (Courtois, Peschanski y Rasky, 1994)[37]. Con la iniciativa de Monzón, los españoles del maquis comunista en Francia adquirieron personalidad organizativa propia, plasmada en la constitución del XIV Cuerpo Guerrillero y su consideración como brazo armado de hecho de la Unión Nacional Española. Luchaban en tierras francesas como antesala para luchar en España, aunque habría que esperar.

La situación en el interior continuaba siendo adversa por los golpes de la represión. De septiembre de 1942 a septiembre de 1943, la Policía española detuvo a 450 comunistas; y desde la época de Quiñones el número de caídos llegó a los 1.000 (Fernández Rodríguez, 2020). Entre ellos estaban Jesús Carreras y Calixto Pérez Doñoro, en marzo de 1943; el primero fue ejecutado en 1945, destino que evitó Pérez Doñoro al fugarse de la cárcel. La dirección establecida después del fin de Quiñones había quedado también desarticulada. Sin embargo, en esta ocasión Manuel Gimeno, enviado al interior por Monzón sin conocer todavía la detención de Carreras, la recompuso y dio los primeros pasos concretos para aplicar la nueva línea de Unión Nacional. Lo hizo mirando hacia la oposición clandestina, reuniéndose, en agosto de 1943, con el

republicano Ramón Ariño; Sócrates Gómez, de la dirección del PSOE del interior; Ramón Gómez Zurdo por los jóvenes socialistas; y los libertarios Gregorio Galleo y Manuel Fernández. Pero no consiguió que ninguno de los asistentes se adhiriera a la Unión Nacional Española.

La gestión política de Gimeno fue insuficiente desde cualquier perspectiva. En 1943 la Guerra Mundial giró a favor de los aliados, primero con la victoria soviética en Stalingrado, en febrero, y luego con la ocupación de Sicilia por las tropas estadounidenses en julio. Aquel mismo mes Mussolini fue destituido y arrestado, y días después de que las tropas anglo-americanas desembarcaran en la península, el nuevo Gobierno Badoglio firmó, el 8 de septiembre, el armisticio con los aliados. Paralelamente, Juan de Borbón escribió, con fecha de 8 de marzo, una carta a Franco instándole a restaurar la monarquía y a adoptar una posición inequívoca de neutralidad. Los monárquicos irrumpieron en el escenario del fin o la continuidad del régimen, asociada a aquella evolución de la contienda. Sin embargo, lo hicieron de manera dividida. Mientras Gil Robles, instalado en Portugal, propugnaba la restauración en ruptura con Franco, Joan Ventosa —máximo dirigente de la Lliga de Catalunya en España, con buena relación con el dictador y procurador en las Cortes del régimen— propugnaba la restauración pactada con el dictador e incluso proclamada por las Cortes (De Riquer, 1996). La marcha de la guerra y las aspiraciones de Juan de Borbón daban recorrido objetivamente a la política de aproximación hacia la derecha no republicana; y esta se veía reforzada, incluso, por la división entre los monárquicos y la posición de Gil Robles, contraria a la conciliación con el dictador. Limitar la Unión Nacional a la oposición clandestina, que tampoco estaba aceptando el proyecto, no respondía ya a las expectativas que generaba esa nueva situación política.

Fue entonces cuando Monzón dio el paso de trasladarse él mismo a España, en septiembre, para dar el salto cualitativo de la política de alianzas anunciado el año anterior. Lo hizo creando en octubre un organismo de Unión Nacional Española que solo representaba a los comunistas, que él mismo presidía, con el objetivo de seguir avanzando en dirección a la derecha disidente del régimen franquista. Poco después obtuvo su primer éxito al entrevistarse con Manuel Giménez Fernández, dirigente de la CEDA durante la República y principal figura en el interior del grupo católico liderado por Gil Robles. Monzón consiguió su adhesión personal a la política de Unión Nacional y lo hizo público el 16 de noviembre de 1943 como un acuerdo “entre la Junta Suprema de Unión Nacional” y los católicos. Fue el primer resultado positivo desde que el PCE

hiciese su propuesta de apertura a católicos y monárquicos. Los contactos de Monzón siguieron explorando posibilidades; llegando a incluir al banquero Juan March, que se mostró dispuesto a financiarle, aunque aquel lo rehusó (Vázquez Montalbán, 1995). No hubo más. Monzón persiguió la adhesión de Gil Robles, que, en el contexto de sus diferencias con el sector monárquico partidario de pactar con Franco, dejó hacer a sus seguidores sin comprometerse él en ningún sentido; hasta que, tras el fin de la invasión del Valle de Arán, el 30 de octubre de 1944, Gil Robles quiso hacer público que no era cierto que tuviese nada que ver con la Unión Nacional. Para entonces, la guerra ya estaba perdida para el eje y todos los sectores de oposición o disidencia del régimen franquista, de izquierda a derecha, miraban expectantes a los aliados en la esperanza de que decidieran extender su victoria al fin de la dictadura en España.

Inercia resistente y recuperación

de la propuesta republicana

La propuesta de Unión Nacional, paralizada en el ámbito de las alianzas políticas, se vinculó al proceso insurreccional que se alentaba en la resistencia del sur de Europa; contando con poder agrupar en el interior los dispersos grupos de huidos y guerrilleros refugiados en las sierras y con que el avance hacia el final de la guerra, con la derrota del fascismo, estimulara una movilización popular de apoyo que culminara en un proceso insurreccional. Con ello se perseguía, como mínimo, presionar a los aliados para que intervinieran en España y, en el mejor de los escenarios, iniciar el derrumbe de la dictadura desde dentro. La posibilidad de intervención aliada fue siempre sobrevalorada, no solo por los comunistas, y la movilización popular fue siempre el talón de Aquiles del planteamiento de Monzón. En España la previsión del final de la guerra generó inquietud en el Gobierno y en las élites, y expectación y alegría en clases populares; hubo huelgas y concentraciones de paseantes por las calles en celebración del desembarco aliado en Europa y de la derrota de Hitler y Mussolini, en 1944 y 1945, en Barcelona y en Madrid. Pero no existían redes organizativas suficientes para empezar a encauzar y capitalizar la inquietud y la expectación hasta conseguir una movilización inducida en un momento

determinado.

Monzón siguió reforzando la red del partido en el interior; su liderazgo estaba fuera de discusión. Tanto que, cuando la dirección en América consiguió organizar una nueva vía de conexión con el interior, desde Buenos Aires —en la que trabajarían Claudín y Carrillo— y volvió a enviar a España enlaces propios desde finales de 1943, estos se sometían a su autoridad. Así lo hizo Pere Canals, que había recibido el encargo de Comorera de reactivar el PSUC en Cataluña, devolviéndole la independencia orgánica que Quiñones y Monzón habían ignorado por completo; en vez de hacerlo, se quedó en Madrid integrándose en el grupo de dirección del PCE.

Monzón y su equipo —Gabriel León Trilla, Alberto Pérez de Ayala, Canals— confiaron en compensar las debilidades de la resistencia interior con la intervención del Ejército Guerrillero español —unos 9.000 hombres— que, derrotando a tropas alemanas a la defensiva y en retirada, se había adueñado en agosto de 1944 de buena parte de la región pirenaica francesa, tras el desembarco aliado en las costas de la Provenza. A partir de entonces se iniciaron las infiltraciones de grupos armados hacia España, que habían de ir preparándose y culminar en una invasión del Valle de Arán para instalar en él un Gobierno provisional de Unión Nacional que recabara el reconocimiento de los aliados. Era la operación Reconquista de España. Se cometieron errores de coordinación entre los de Francia y la organización del interior; la operación del Valle de Arán, del 19 al 24 de octubre, no cogió de sorpresa al Gobierno de Franco y fue tácticamente un desastre. Quedó en evidencia que no era suficiente con poner sobre la mesa el peso de los guerrilleros que habían participado en la resistencia francesa y que, además, se corría el riesgo de quemar su potencial en una acción militar precipitada.

La versión militar de la teoría de la ofensiva no funcionó; no levantó a las masas, que no estaban movilizadas de manera estable por falta de organización. En ese momento, en pleno fiasco de la entrada en el Valle de Arán, llegó Santiago y mandó parar, ordenando el fin de la invasión. Carrillo llegó al sur de Francia como colofón al envío de cuadros desde América. Antes había pasado por Argelia, donde puso fin a la colaboración de un grupo del partido con la CIA. Con la autoridad de ser un enviado directo de la Delegación del PCE en México, avalado por Dolores Ibárruri desde Moscú, tomó inmediatamente la iniciativa arrebatándosela a Jesús Monzón, al que acusó del fiasco de la operación Reconquista de España. Mantuvo el lema de la Unión Nacional Española, pero,

ante la expectativa de que la reorganización política incluyera la caída de Franco por la presión exterior, la opción republicana volvería a situarse en primer plano. Dado que la principal consecuencia del proyecto insurreccional de Monzón había sido el desplazamiento a España de una parte de los comunistas españoles que habían participado en la resistencia francesa para sumarse a las partidas existentes en las sierras, se mantuvo esa línea de acción guerrillera; cambiando su sentido, no orientada ya a un proceso de levantamiento popular, sino de hostigamiento al régimen, una suerte de propaganda por el hecho que se fue consumiendo en sus propias limitaciones, por más que reforzara el imaginario resistente de los comunistas.

La rectificación política empezó en la Conferencia de la Unión Nacional Española en Francia, reunida en Toulouse a comienzos de noviembre de 1944, con la participación del pequeño grupo disidente del PSOE encabezado por Enrique de Santiago y Julia Álvarez y figuras individuales como Victoria Kent, el general Riquelme o el escritor Corpus Barga. En ella se apeló de nuevo a Negrín, para que encabezara el Gobierno de concentración nacional antifranquista que proponía la Junta Suprema de Unión Nacional. Era un imposible. La llamada a quien se presentaba todavía como jefe de Gobierno de la República, en el exilio, a asumir una función institucional y política diferente tenía poco sentido y no prosperó. Negrín tomó sus propias disposiciones aquel mismo mes y anunció su intención de marchar a México para reactivar las instituciones republicanas. A lo que respondió Martínez Barrio reuniendo la Diputación Permanente de las Cortes en el exilio, el 15 de noviembre, y convocando sesión general de estas para el 10 de enero de 1945, a fin de elegir un Consejo Nacional de la República. Tampoco sucedió ninguna de las dos cosas, Negrín no pudo ir a México y no hubo propiamente una reunión de Cortes, solo una asamblea reducida de diputados que no llegó a ningún acuerdo formal por la oposición de Prieto a la presencia comunista y al Consejo Nacional de Martínez Barrio (Heine, 1983). A pesar de ello, con esas iniciativas se abrió el proceso de reactivación de las instituciones republicanas en el exilio y con él la pugna por quién lo lideraría y gestionaría: Negrín o la alianza de republicanos y socialistas que lo había destituido en la Diputación Permanente en julio de 1939.

El PCE entró en ese proceso, abandonó la línea del 16 de septiembre de 1942 e intentó primero redefinir una UNE republicana encabezada Negrín. Con él se entrevistó Carrillo en el sur de Francia en febrero de 1945, sin conseguir nada concreto. Luego, para subrayar la reorientación, Carrillo dio instrucciones a la organización del interior para la celebración del 14 de abril con acciones de

masas y operaciones guerrilleras “de la mayor envergadura posible”. Las primeras no se produjeron y las acciones guerrilleras fueron dispersas y sin envergadura. Finalmente, en junio, la Unión Nacional Española en Francia se disolvió para, dijeron, facilitar la unidad de todos los españoles; era ya un espectro de lo que había querido ser, y esa disolución le era imprescindible al PCE para estar presente en la nueva situación. Las Cortes republicanas en el exilio se reunieron en México el 17 de agosto de 1945, y Negrín pactó con Martínez Barrio su dimisión ante ellas para dar paso a la elección, el 7 de noviembre, del primer Gobierno republicano en el exilio, encabezado por José Giral. El PCE quiso estar ya en ese Gobierno, pero no lo consiguió al empeñarse en sostener la candidatura de Negrín, y se abstuvo en la votación de Giral. Finalmente, el partido dejó de reivindicar el retorno de Negrín, haciendo posible que Giral, superando la oposición socialista, incluyera en marzo de 1946 la presencia del PCE en su Gobierno, representado precisamente por Carrillo.

El PCE logró el objetivo superar el aislamiento en un momento en que, aparentemente, seguía en el aire la continuidad del régimen de Franco, condenado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en febrero de 1946. Una condena sin consecuencias efectivas. En marzo de ese año, la nota tripartita de los gobiernos de Francia, Estados Unidos y el Reino Unido dejó claro que no habría intervención aliada para derribar a Franco y que el deseable retorno a la democracia era un asunto interno de los españoles que habría de producirse sin violencia. La opción de la restauración republicana quedó en el aire y el inicio de la Guerra Fría devolvió a los comunistas españoles al aislamiento. Su posición empezó a ser precaria después de la formación en enero de 1947 de un nuevo Gobierno republicano en el exilio encabezado por el socialista Llopis, en el que Carrillo fue sustituido por Uribe. La pasividad de Llopis, tanto ante las maniobras en favor de la monarquía por parte de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas como ante las de Prieto, produjo amenazas de dimisión por parte de Uribe; estas se combinaron con la petición socialista de que el PCE fuera excluido del Gobierno, como lo habían sido el PCF y el PCI del francés y el italiano en mayo de 1947. Llopis mantuvo a Uribe, pero no pudo resistir la presión interna de su partido, en el que se impuso Prieto, por lo que dimitió poniendo fin a los gobiernos unitarios del exilio; el suyo fue sustituido por un desvaído gabinete integrado exclusivamente por republicanos y presidido por Álvarez de Albornoz. La política del exilio acabó por hundirse cuando, tras aquella fractura de la unidad, Prieto se enredó en sus negociaciones con Gil Robles y los monárquicos, y estas desembocaron en el pacto de San Juan de Luz del 28 de agosto de 1948, nacido muerto después de que Juan de Borbón hubiese

pactado por su cuenta tres días antes con Franco, a bordo del yate Azor.

El futuro del PCE quedó estrictamente vinculado a su presencia en la lucha contra el régimen en España, donde siempre quedó fuera de las plataformas de oposición hasta finales de los años sesenta. Dependería de la capacidad de desarrollar una lucha de masas propia, que tardó en llegar; mientras su resistencia guerrillera y republicana se cronificaba en una situación residual, sin factores de alimentación interior, dependiendo del “ejército de reserva” de los restos de la guerrilla comunista en Francia, que en su cénit había alcanzado no más de 10.000 efectivos y que se iba agotando sin remedio. Paralelamente a la efímera política unitaria del exilio, Santiago Carrillo se dedicó primero a controlar la organización comunista de Francia, restableció la militancia por separado del PCE y del PSUC, anulada en los comienzos de la Guerra Mundial y cambió los cuadros intermedios. Luego anunció el cambio político, que se iniciaba, en el primer número de la edición francesa de Nuestra Bandera de enero de 1946, con una carta abierta de la Delegación del Comité Central. En ella, junto con veladas críticas a Monzón, afirmó que “frente a las maniobras fascistas y reaccionarias para la restauración de una monarquía que no sería más que la confirmación del régimen fascista bajo otra forma, la Junta Suprema debe levantar la bandera del restablecimiento de la República y la legalidad constitucional”. Dejó claro que él era el único delegado del Comité Central y envió a España a Agustín Zoroa para que tomase las riendas del aparato militar. Un mes más tarde, el 19 de febrero, pidió a Dolores Ibárruri ordenar el regreso de Monzón a Francia y desposeerlo de la Delegación en el interior por no acatar los cambios (Morán, 1986); la misma orden había de darse a Trilla.

La situación se precipitó pocos días después. El asalto el 25 de febrero a la subdelegación de Falange de Cuatro Caminos por un grupo guerrillero comunista, que mató a los dos falangistas que estaban en el local, desencadenó una prolongada acción policial, que se extendió durante dos meses y culminó en abril con decenas de militantes detenidos, incluidos los autores del ataque, y el descubrimiento del aparato de propaganda del partido y la Junta Suprema. Ante la redada, la dirección del interior se dispersó; Trilla se ocultó en Madrid, negándose a regresar a Francia, y Monzón marchó con su compañera Pilar Soler a Barcelona, a la espera de poder pasar al país vecino. Allí le esperaba el nuevo Buró Político, reorganizado tras la llegada de Dolores Ibárruri a Francia, en mayo de 1945, con Uribe, Mije, Antón como nuevo responsable de organización; Carrillo, que lo era de agitación y propaganda y las relaciones con el interior; Líster, responsable del aparato militar; y Fernando Claudín, secretario

general de las JSU. No pudo producirse el que habría de ser un conflictivo encuentro; Monzón, retenido en Barcelona por un problema de salud, cayó en manos de la Policía, de manera accidental, durante otra redada contra el PSUC, en junio (Martín Ramos, 2002). Sí pudo pasar a Francia Pilar Soler, que escapó a la detención y sufrió un duro interrogatorio de Carrillo, Claudín y Ormazábal para que confesara algo de lo que ellos estaban convencidos: que Monzón y sus colaboradores habían caído en la provocación. Fue entonces cuando el Buró Político decidió la ejecución por supuesta traición de Trilla y Alberto Pérez Ayala, el 6 y el 4 de octubre. Además, se destituyó a la mayor parte de los cuadros implicados en la gestión de Monzón en Francia y en España (Asenjo y Ramos, 1999; Azcárate, 1994). A finales de año la depuración alcanzó a Canals, reclamado en su caso por Comorera para que le rindiera cuentas; pasó la frontera en diciembre, contactó con la dirección del PSUC y desapareció en enero de 1946 (Martín Ramos, 2002). A cada uno sus purgas.

Fueron los años más oscuros del PCE desde muchos puntos de vista. La multiplicación de caídas en el interior, los riesgos y tensiones de la acción armada, la decepción por la persistencia de la dictadura, todo generó una atmósfera de sospecha interna, de confusión entre el discrepante y el traidor. No fue solo paranoia, como también se acostumbra a etiquetar. Lo cierto es que la experiencia que se iba acumulando en la clandestinidad desde 1939 era la de la fragilidad de la organización, la gravedad de las infiltraciones y las traiciones de militantes a los que se les “daba la vuelta” en las torturas policiales o ante ellas (Hernández Sánchez, 2018). Un informe interno del PCE, probablemente de 1948, coincidente con otros de la CNT y los servicios de información franceses, daba cuenta de esa infiltración, para la que se habían instalado en la capital de España diversas escuelas de entrenamiento. La dura y sangrienta represión de la dictadura contra los comunistas y la política de resistencia de estos configuraban una prolongación particular del estado de guerra. Un informe de Antón, de 1952, dio cifras y motivos de la depuración en Francia (Moran, 1986): afectó, en números redondos, a 2.000 militantes, entre expulsados y separados, la mayor parte de ellos por mal comportamiento moral (incluido mercado negro y robo), inactividad, derrotismo, desviaciones políticas, trato con consulados franquistas, regreso a España sin autorización del partido, relaciones con la Segunda Bis española y los servicios extranjeros y, en último término, por “trotskismo”. Esa cuenta no incluyó las depuraciones del interior, cuya cuantificación y clasificación es más que problemática y que en muchos casos comportó la ejecución del depurado; algunas de ellas correspondieron al área de responsabilidad de Carrillo, cumpliendo acuerdos del Buró Político en los casos

más graves —Trilla, Pérez de Ayala, Bas Aguado y Francisco Serrano—, pero muchas fueron decisiones “de guerra”, tomadas en el seno de la guerrilla por sus mandos interiores.

Fueron los años más oscuros también porque el mantenimiento de la acción armada no logró plantear al régimen franquista un problema mayor que el del orden interno. La guerrilla urbana no llegó a implantarse ni en Madrid ni en Barcelona y en el intento se perdieron cuadros importantes, cuya larga enumeración desbordaría estas páginas. El maquis de las sierras pudo llegar a constituir pequeños contingentes organizados, en Galicia, León, Asturias, entre Extremadura oriental y Castilla-La Mancha occidental, en algunas provincias andaluzas (Córdoba, el eje Granada-Málaga, Cádiz) y, el más importante de todos, la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA), con presencia en la confluencia de Cuenca, Teruel, Castellón y Valencia (Romeu Alfaro, 2002; Sánchez Cervelló, 2003). La mayor parte de ellos integrados por comunistas, excepto en la guerrilla leonesa, más plural; y en Asturias, donde los socialistas tuvieron también un papel destacado. El total de guerrilleros o huidos en armas a las montañas, entre 1939 y 1952 se ha situado en un máximo de 7.500 (Moreno Gómez, 2001) y más probablemente 6.000 (Serrano, 2001); con un porcentaje de bajas de más del 40%. Estuvieron apoyados por un número de enlaces mucho más difícil establecer, de los que en torno a 19.500 resultaron detenidos. Los contingentes activos fueron reducidos. La AGLA tuvo en su mejor momento entre 200 y 300 guerrilleros; el eje Granada-Málaga, un máximo de 200; y el resto, en torno a los 100. Contra ellos el régimen movilizó a la Policía, el Ejército, la Legión, el Tercio y sobre todo a 20.000 guardias civiles, a los que fidelizó encargándoles la represión fundamental del maquis. Fue una historia épica y trágica, que pudo tener réditos de propaganda e incrementó la cultura militante, pero de ninguna manera fue un éxito político.

CAPÍTULO 8

EL PARTIDO DEL ANTIFRANQUISMO

De la política resistente

a la de la 'reconciliación nacional'

Ante la quiebra del proyecto de restauración republicana en 1947, la dirección del PCE se propuso impulsar a fondo la lucha armada; con una atención particular a la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón, que había de marcar la pauta de la política guerrillera del partido. Por ello, en octubre de 1947, Carrillo envió a Francisco Bas Aguado (alias Pedro) para que asumiera su dirección y la reorganizara tanto en el aspecto militar, seleccionando sus acciones y regulando su uniformidad, como en el político, planteando la constitución de Consejos Locales de la Resistencia. A su vez, Carrillo, al frente de una delegación en la que también estaba Líster, viajó en febrero de 1948 a Belgrado para solicitar a Tito ayuda logística y material para la guerrilla del AGLA; pidieron que partiendo de Yugoslavia se efectuaran lanzamientos de material en paracaídas sobre las bases de esta agrupación. Tito se limitó a entregarles dinero —30.000 dólares de la época—, que permitirían al AGLA prescindir durante un tiempo de las "expropiaciones", pero no concedió el apoyo logístico solicitado. A pesar de ese magro resultado, el empeño guerrillero siguió adelante. Al mes siguiente, el PCE hizo público un manifiesto denunciando el apoyo del imperialismo inglés y americano a Franco y llamó a la formación de un Frente Nacional Republicano Democrático y a constituir un Consejo Nacional de la Resistencia cuyo brazo armado debía ser la guerrilla. El discurso resistente había de llenar el vacío por la decepción sufrida y el aislamiento del PCE.

El Frente Nacional Republicano Democrático y el Consejo Nacional de la Resistencia no pasaron nunca del papel, pero la acción guerrillera siguió adelante. En esa situación se produjo un episodio, solo documentado por testimonios personales, que ha dado lugar a numerosas especulaciones e

inexactitudes: en octubre de 1948, Dolores Ibárruri, Antón y Carrillo acudieron a Moscú a entrevistarse con Stalin, quien al parecer les dio instrucciones sobre la política antifranquista. No rechazó la acción guerrillera, pero les recordó que una característica de la táctica comunista era la de utilizar también las posibilidades legales y entrar en las organizaciones de encuadramiento de masas de la dictadura para mejorar las condiciones de la movilización contra el régimen. No pudo pedirles el abandono de la guerrilla —como se ha escrito en muchas ocasiones— porque la dirección del PCE no podría haberla mantenido, como lo hizo hasta finales de 1951, desobedeciendo a Stalin durante tres años. En el fondo, lo que Stalin les pudo advertir fue del peligro de militarizar la política comunista y desnudar la acción guerrillera de sentido político.

Tras la entrevista se mantuvo la línea, rectificando las formas y los objetivos de la acción guerrillera. En febrero de 1949 Mundo Obrero publicó un artículo cuyo contenido se condensaba en el título: “Los guerrilleros, instructores políticos y organizadores de los campesinos”. Un mes más tarde, una delegación del Estado Mayor de la AGLA, con Bas Aguado al frente, marchó a Francia para exponer la situación real de la guerrilla, muy desgastada en el transcurso de 1948, y recibir las instrucciones de la nueva orientación. El grupo regresó al interior en julio, con una docena de cuadros más y la promesa de que se les enviarían más armas por mar desde Francia y Marruecos. Los suministros no pudieron llegar nunca. Lo único real fue que el Estado Mayor se reconvirtió en el Comité Regional del PCE en Levante y Aragón; y que se dejó de publicar el portavoz de la agrupación El Guerrillero, de manera que su prensa exclusiva pasó a ser Mundo Obrero. La AGLA disponía, como máximo, de un centenar de guerrilleros, con un aumento de deserciones y, con ellas, la sospecha de traición. Los campesinos, golpeados por las dificultades de vivir en una zona de persistencia de la guerra, se distanciaban de la guerrilla.

La puntilla al relanzamiento político de la acción guerrillera fue el asalto de la Guardia Civil y los somatenistas, el 6 de noviembre de 1949, contra la base de Cerro Moreno (Santa Cruz de Moya, Cuenca), donde se encontraba instalado el Comité Regional. Mató a casi todos sus miembros, pero no a Bas Aguado, que pudo huir, aunque quedó bajo sospecha por su supervivencia. Fue un golpe definitivo del que la AGLA no se recuperó. Carrillo lo intentó, en el verano de 1950, enviando un nuevo equipo de dirección con el catalán José Gros al frente; un hombre de absoluta confianza de la dirección, con experiencia en la guerrilla soviética durante la Guerra Mundial. Su objetivo era perseverar en la reconversión política y limitar al máximo las acciones armadas. No lo logró, ante

la oposición de Bas Aguado y Francisco Serrano (Pepito, el Gafas), que fueron llamados a Francia y ejecutados por traidores en el paso de la frontera, en marzo de 1951. Los restos de la guerrilla estaban entrando en una dinámica autodestructiva.

Tampoco hubo ya ninguna posibilidad de reactivar nada desde Francia. El descubrimiento de un depósito de armas en la localidad de Barbazan, que sin duda pertenecía al maquis comunista español, dio el pretexto al Gobierno francés para prohibir, en septiembre de 1950, al PCE y al PSUC y a todas sus organizaciones anexas y desencadenar una redada contra más de 400 de sus miembros, de los que 288 fueron detenidos y deportados a Córcega y al norte de África (Guixé, 2002). La dirección volvió a quedar dispersa. Pasionaria y Claudín, que estaban ya en Moscú desde 1948, siguieron allí; Uribe y Mije huyeron y se instalaron en Praga; Carrillo y Antón permanecieron en Francia, actuando en una clandestinidad que fue relajándose con los años. No quedaron ni material de reserva ni cuadros para seguir enviando al interior. En la primavera de 1951 la dirección del PCE reconoció el fin de la guerrilla y dio la orden de evacuar a los 57 que quedaban del AGLA, en una operación que no acabó hasta finales de 1952.

La discusión sobre la política guerrillera, el mantenimiento de la orientación resistente y la introducción de nuevas perspectivas de acción militante y política tuvo, por otra parte, una grave derivada en Cataluña, que culminó los recurrentes roces que venían produciéndose entre el PCE y el PSUC desde los tiempos de la Guerra Civil. Nacido como un partido unificado, fue percibido en Cataluña ya durante la guerra como la organización de los comunistas y siempre se la consideró así desde el PCE, que aceptó su existencia independiente como producto de la situación excepcional. Desde el final del conflicto bélico, la dirección del PCE pensó que el PSUC debía dejar de ser una formación independiente para integrarse en el PCE, con un estatus semejante al del PC de Euskadi (Caminal, 1985). Comorera, con el apoyo de la mayoría de su partido, se resistió y logró confirmar la independencia del PSUC al ser admitido como miembro pleno de la IC. Su argumento de peso era que la IC había de darle un trato singular por ser un partido unificado, a diferencia del PCE. No obstante, la realidad era que ambas organizaciones se identificaban como plenamente comunistas, sobre todo en el interior; lo que dio pie a que tanto Quiñones como Monzón subsumieran en España la organización del PSUC en el PCE, al tiempo que en el exilio francés, tras el estallido de la Guerra Mundial, ambas militancias se fusionaron en una sola estructura de comunistas españoles.

Cuando Carrillo llegó a Francia restauró la independencia formal del PSUC tanto en Francia como en Cataluña; lo hizo para facilitar la relación con el exilio catalán y el relanzamiento político del partido en el interior, con su propia imagen de marca, no porque compartiera los argumentos de Comorera. Por ello, mientras se impuso a Comorera un dilación de su retorno a Francia, que no se produjo hasta noviembre de 1945, Carrillo promocionó al frente del PSUC a cuadros de la confianza del PCE: Ramón Soliva o Josep Serradell (alias Román) y Margarita Abril, antiguos militantes como él de las JSU. El cuadro del cambio de correlación interna en la dirección del PSUC se completó con la incorporación en ella de Pere Ardiaca, antagonista de Comorera desde siempre y que en 1939 había sido apartado del Comité Central del PSUC por maniobrar en favor de la integración en el PCE. Desde noviembre de 1945, Comorera recuperó el ejercicio efectivo de la Secretaría General del PSUC, pero no pudo retomar el control de su dirección; y aún menos de la organización del interior, cuya relación estuvo en manos sucesivas de Soliva y Serradell, y desde 1948 fue dirigida por Gregorio López Raimundo, otro miembro de las JSU. A partir de 1946 se reactivaron las tensiones, por diferencias sobre el grado de independencia que el PSUC había de tener en la línea política y militar a seguir en Cataluña; y por las repetidas sugerencias de Dolores Ibárruri de ir a la fusión orgánica con el PCE "cuando las circunstancias de la lucha lo permitan".

Comorera acabó quedando en absoluta minoría en el Secretariado del PSUC y, en un típico episodio de ruptura, en agosto de 1949, a raíz de la discusión sobre los modos de celebración de la fundación del partido, uno y otros se expulsaron mutuamente. Comorera perdió la partida. Intentó activar un PSUC propio, que consideraba, por su condición de secretario general, el único legítimo. Pero solo consiguió un apoyo minoritario en la militancia del exilio y ninguno en la del interior, cuya relación no había controlado y que era absolutamente contraria a una ruptura con el PCE, en medio de la dura lucha antifranquista. Comorera regresó clandestinamente a Cataluña, en enero de 1951, sin conseguir ganar apoyos hasta que su detención, el 9 de junio de 1954, puso fin a su infructuoso intento. El PSUC estrechó su relaciones con el PCE, manteniendo la relación equívoca de dos organizaciones independientes —"hermanas"— con un mismo proyecto ideológico y político, yendo al unísono desde la segunda mitad de la década de los cincuenta, bajo la dirección respectiva de Carrillo y López Raimundo.

Para el PCE el fin de la guerrilla en Levante significó su final en todas partes. En contrapartida, el aldabonazo de la huelga de tranvías en Barcelona, en marzo de

1951, así como sus ecos en otros movimientos de huelga en el País Vasco y en el intento fracasado de la “huelga blanca” en Madrid, de boicot a los transportes, el comercio, la prensa y el espectáculo, puso el foco en la alternativa de la movilización de masas. Lo era, sin duda, aunque el problema era cómo ponerle el cascabel al gato. La conexión con las masas estaba cortocircuitada por múltiples factores: las duras condiciones de trabajo y subsistencia que persistían en la larga posguerra; la represión de las bases sociales históricas del partido en el sur de España, buena parte de ellas obligadas a la emigración a las regiones industriales de Vizcaya y Barcelona y a Madrid, para encontrar trabajo y para huir de la persecución civil de que eran objeto; una legislación laboral que seguía siendo básicamente disciplinaria, a la que solo se escapaban muy ocasionales explosiones de protesta, seguidas por una represión policial y patronal que abortaba su continuidad. Por si el empresariado pudiera tener alguna tentación que diera algún margen a la movilización obrera, en 1948 se decretó la prohibición de pactar mejoras salariales entre trabajadores y patronos fuera de lo reglamentado y los cauces institucionales establecidos. Las posibilidades de organización antifranquista dentro y fuera de la empresa eran mínimas. La opción de infiltrarse en las estructuras del sindicato obligatorio del régimen, la Central Nacional Sindicalista, fue una quimera hasta los años cincuenta. En 1944 se instauró la elección de los enlaces sindicales, pero hasta 1947 la exigencia para ser candidato era tener la confianza política expresa del régimen y se elegían sin ningún tipo de junta electoral; eran, de hecho, una designación. Por ello, y dijera lo que dijese Stalin, las elecciones sindicales de 1950 siguieron siendo denunciadas por Mundo Obrero como una farsa franquista. EL PCE no participó en ellas, aunque luego pudiera incorporar al partido algún enlace sindical de manera individual.

Por otra parte, el PCE no tenía acceso entonces a las clases medias y a los sectores profesionales e intelectuales, una parte de los cuales había empezado a movilizarse en algunas ciudades, en disidencia con el régimen más que en franca oposición. El acceso que se había iniciado en los tiempos del Frente Popular y la guerra había quedado dinamitado por el exilio de los intelectuales y el consenso anticomunista promovido por la dictadura. Salvo relaciones puntuales, la incidencia del PCE en el ámbito intelectual y universitario madrileño tuvo que esperar a la llegada de Jorge Semprún a Madrid en 1953 y al activismo de Octavi Pellisa en Barcelona en 1955, reforzado por el ingreso en el PSUC de Manuel Sacristán en 1956 (Pala, 2016).

La política de masas era un deseo difícil de realizar. No desesperar en él

requeriría un esfuerzo de voluntad, un cambio en las condiciones del país y también un cambio general del análisis del partido sobre la situación nacional e internacional y de su estrategia. Parecía casi un imposible salir del pozo y en el seno del Buró político se produjeron el enfrentamiento político y la autocrítica. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial venía creciendo la competencia entre los supervivientes de la poco atinada dirección instalada en México, Uribe y Mije, y los que habían asumido las principales responsabilidades operativas a finales de 1944 en Francia y España, Francisco Antón y Santiago Carrillo; y todos buscaban el apoyo de Dolores Ibárruri, sucesora provisional de José Díaz a la espera de la celebración del congreso del partido, pendiente desde 1936. Todo lo que pasó en 1951 debilitó la posición de Antón y Carrillo, sobre los que recayó la responsabilidad de los reveses. En junio de 1952 Dolores Ibárruri se puso de parte de los veteranos con una carta desde Moscú "a Vicente Uribe y a todos los camaradas del Buró Político", que era una dura y ventajista crítica a "esa renuncia a trabajar en las organizaciones de masas franquistas, esas impaciencias, esa huelgomanía y ese afán de enviar al país armas y dinero y camaradas a costa de lo que fuere". Con eso de la "huelgomanía", Pasionaria pudo referirse al fracaso de la "huelga blanca" en Madrid; sea como fuere, apuntaba directamente a Carrillo, aunque añadió que no eran solo errores de este, sino de "todos nosotros".

La carta de Ibárruri no contemplaba el error de línea general, sino deficiencias de aplicación. Su crítica solo repercutió en un proceso interno en la dirección del PCE, en agosto de 1952, a los dos responsables operativos. Carrillo, más hábil, pudo salir del trance con una autocrítica que siguió la pauta marcada por Pasionaria; por el contrario, Antón se autoinculpó sin llegar a convencer. Carrillo pudo seguir en su puesto, bajo la tutela de Ignacio Gallego, mientras que Antón fue separado del Buró Político y del Comité Central en 1953, y obligado a residir en Polonia trabajando en una fábrica de motocicletas[38].

Con el apoyo de Dolores Ibárruri, que permaneció en Moscú, Uribe pasó a dirigir de manera plena el PCE en 1952. Su victoria fue estéril y precaria, por su incapacidad para interpretar las novedades que venían del interior y del ámbito internacional. Carrillo, que mantuvo la responsabilidad de la relación con España, se rehízo al calor de esas novedades, que sí supo interpretar y de las que sacó la clave de bóveda con la que sustentar la nueva política que exigían. En el momento más bajo de la acción en el interior, el PCE y el PSUC pudieron estar presentes gracias a las emisiones de Radio España Independiente, iniciadas en 1941 desde la URSS y que desde 1955 pasaron a hacerlo desde Bucarest. La

radio alcanzó allí donde no llegaba la débil organización clandestina. La oían viejos militantes, por fidelidad y esperanza, y jóvenes activistas obreros que conocieron por ella que existía "el partido" y que lo empezaron a buscar para sumarse a él. Para que lo encontraran no era la "huelgomanía" la que había que cambiar, sino las inercias de la política resistente, una cáscara vacía desde el fin de la guerrilla.

Los nuevos tiempos en España se empezaron a percibir en el V Congreso del PCE, celebrado por fin en septiembre de 1954, en Praga, cuando los delegados del interior señalaron que se estaba moviendo algo nuevo en fábricas, tajos y minas, donde se constituían comisiones de representación de los trabajadores, no vinculadas a ningún sindicato clandestino ni tampoco al del régimen franquista (Erice, 2007). Era todavía algo incipiente, que fue tomado como una oportunidad por parte de la dirección del PCE. A lo largo de 1955, Mundo Obrero abogó por vincular las nuevas comisiones con la acción de los enlaces sindicales, con los que el partido empezaba ya a contar; después del fin del requisito de disponer del carnet de Falange para ser candidato, el PCE participó por primera vez en las elecciones sindicales de 1954, aunque fuese muy minoritariamente. No obstante, el congreso fue política y organizativamente ambivalente. Eligió a Dolores Ibárruri como secretaria general del partido y a Vicente Uribe como el segundo en la jerarquía de dirección y el máximo responsable operativo. A la par, aprobó una línea que incluía formulaciones de los tiempos de la resistencia —la del Frente Nacional Antifranquista para el derrocamiento de la dictadura mediante una rebelión popular y la formación de un "Gobierno provisional revolucionario"— junto con la defensa de la táctica del entrismo en las organizaciones sindicales del régimen.

Nada de ello pudo durar más de dos años. El congreso renovó el Comité Central con una amplia incorporación de la generación de las JSU (Grimau, Romero Marín y Tomás García, entre otros), que reforzaron la posición de Carrillo, cabeza principal de aquella generación, y con la inclusión de cuadros básicos del interior: Simón Sánchez Montero, Narciso Julián y Jorge Semprún. Este último, enviado por Carrillo a Madrid en junio de 1953, le había proporcionado dos ases: la noticia de las comisiones de trabajadores y la penetración iniciada en los ambientes de la intelectualidad madrileña. Poco después del congreso, Carrillo recibió un nuevo apoyo con el regreso de Claudín a París, en 1955. No lo hizo a la callada. Recién llegado, con el aura de su estancia de siete años en la URSS completando su formación ideológica, Claudín recriminó a Uribe por el bajo nivel político de la organización. Solo fue por el momento un amago, que de

paso señaló la función que Claudín aspiraba a tener en el PCE.

Lo que sacó al PCE de su parálisis fue el reconocimiento por parte de esa nueva generación dirigente, liderada por Carillo, de la mejora de las condiciones de lucha en el interior; favorecidas por la seguridad que el régimen creyó haber adquirido tras la firma de los pactos con Estados Unidos, en septiembre de 1953. Así como el error de bulto cometido por la generación veterana en el seguimiento del cambio que se estaba produciendo en el ámbito internacional, tras el fin de la guerra de Corea y el relevo de la dirección soviética impuesto por la muerte de Stalin, en marzo de aquel año. La política internacional soviética pasó a combinar propuestas de distensión e iniciativas de fortalecimiento de la unidad del conjunto de las democracias populares, en torno a la URSS, con la firma en mayo de 1955 del Pacto de Varsovia. Su complemento era conseguir la incorporación en la ONU del grueso de las democracias populares —Hungría, Rumanía, Bulgaria, Albania y Mongolia— para sumarse a Polonia y Checoslovaquia, que ya formaban parte del organismo internacional desde su fundación[39]. La ONU tenía congelada desde el inicio de la guerra de Corea, en 1950, la incorporación de nuevos miembros, con una veintena de aspirantes entre los que estaban los del bloque socialista. En esas circunstancias, España entró en la agenda del debate sobre la reapertura de las admisiones. La URSS, que hasta el día anterior se opuso a su ingreso, accedió a ello en última instancia el 14 de diciembre, para desbloquear la incorporación de las cinco democracias populares —aunque Mongolia no lo hizo hasta 1961— mediante el juego de equilibrios en la Asamblea General; aunque también pudo pesar en la decisión soviética el evitar que España, donde las bases norteamericanas podían albergar bombas nucleares, actuara en el escenario internacional solo mediante la relación bilateral con Estados Unidos, fuera del concierto general de las Naciones Unidas.

La medida cogió por sorpresa a la dirección del PCE, con respuestas antagónicas. Carrillo y Claudín decidieron considerar el lado positivo de la decisión soviética como “una victoria de la política de paz, de coexistencia pacífica, que encabeza la URSS y los países de democracia popular”. No así Uribe, y durante un tiempo Dolores Ibárruri, a los que no solo les costó digerir la presencia del régimen franquista en la ONU, sino que reaccionaron contra aquella interpretación positiva. El intento de condena de Carrillo y Claudín por la vieja guardia del Buró Político quedó desbordado por el desarrollo del XX Congreso del PCUS, en febrero de 1956, en el que Kruschev defendió la nueva política de la URSS y presentó su famoso informe sobre el periodo de Stalin;

también por la habilidad de Claudín, que asistió a él, resistió la embestida de Uribe y consiguió la convocatoria de un Pleno del Buró Político en abril. En el interín, Carrillo hizo pública la principal consecuencia del nuevo escenario internacional y del contacto con la nueva generación del interior, en un artículo editorial de España Popular, en el que postuló la necesidad de superar la línea divisoria de la Guerra Civil y considerar el futuro político "sin venganzas, ni segundas vueltas". La reunión del Buró Político de abril, lejos de ser una condena de los "jóvenes", resultó ser el inicio de una cadena de reuniones en el transcurso de la cual Carrillo y Claudín se impusieron por completo, con el apoyo de Dolores Ibárruri, que rectificó su posición. En junio se explicitó la propuesta de la reconciliación nacional, "por una solución democrática y pacífica del problema español" apuntada en un artículo de Carrillo en España Popular. Uribe quedó definitivamente derrotado en la sesión del Comité Central del verano de 1956, en el que tuvo que hacer su autocrítica; y el nuevo grupo dirigente reforzó su posición con la incorporación de Jorge Semprún, Santiago Álvarez y Simón Sánchez Montero al Buró Político.

Consolidación de la política de masas,

por encima de nuevas divisiones

La política de reconciliación nacional ha sido frecuentemente presentada como una maniobra táctica del PCE para romper su aislamiento y constituir un amplio frente partidario contra la dictadura. Desde luego tenía esas consecuencias políticas, pero en absoluto se limitaba ni empezaba por ellas. Partía de un análisis nuevo sobre la situación internacional y nacional, y constituía un cambio estratégico a fondo que incluía la voluntad de establecer una relación lo más amplia posible entre el PCE y la sociedad española. El análisis internacional recogía el inicio de una nueva etapa entre el campo socialista y el capitalista caracterizada por la "coexistencia pacífica", superadora de la Guerra Fría. En ella, el régimen franquista quedaba alineado mediante el pacto de defensa con Estados Unidos con el sector más agresivo del imperialismo, lo que amenazaba en última instancia la instrumentalización de España por este y, con ello, un riesgo para su seguridad. En el ámbito nacional se había generado una nueva

polarización profundamente desigual entre el régimen, que se había identificado de manera absoluta con el capitalismo monopolista, y la inmensa mayoría del pueblo, desde los campesinos y los trabajadores hasta las clases medias, los intelectuales como exponentes de ella y el empresariado no monopolista. Esa nueva división no era solo un análisis abstracto, se reflejaba ya en el día a día con el surgimiento de fuerzas disidentes en el seno de la base social de la dictadura: monárquicos como Calvo Serer, liberales en el mundo intelectual y universitario, y una incipiente democracia cristiana que lideraría Joaquín Ruiz-Giménez, el ministro de Educación destituido de manera fulminante por Franco tras los sucesos en la universidad de Madrid de febrero de 1956 (Sánchez Rodríguez, 2004).

Los sucesos de febrero no fueron en nada ajenos a la rompedora Declaración del CC del PCE. En el origen de su estallido estaba la limitada política de apertura de Ruiz-Giménez, que venía promoviendo la recuperación de figuras intelectuales y académicas del pasado republicano que reconocieran las razones del bando vencedor (Juliá, 2004); y la acción de los primeros universitarios captados por Jorge Semprún para el PCE, entre ellos Javier Pradera, Enrique Múgica, Ramón Tamames y Julio Diamante, que después de no conseguir que se autorizara un Congreso de Escritores Jóvenes que tendría un claro perfil crítico contra la dictadura, promovieron un Congreso Libre de Estudiantes, que desafió al régimen y desbordó a Ruiz-Giménez. El episodio mostraba que las nuevas generaciones de las clases medias ya no se sentían representadas por la dictadura, ni siquiera buena parte de los hijos de quienes habían militado activamente en el bando franquista, como era el caso de Javier Pradera; y también que una parte de la intelectualidad del régimen —Laín Entralgo, rector de la Universidad de Madrid, y Dionisio Ridruejo, que participó en el congreso estudiantil— se estaba apartando de la continuidad de la dictadura. Era una fractura grave que se hacía pública y Franco reaccionó no solo destituyendo a Ruiz-Giménez, sino reactivando el discurso de guerra civil con el objetivo de volver a cerrar las filas de los iniciales partidarios del régimen. Tomando nota del éxito del trabajo de Semprún y de la reacción del régimen, Carrillo y Claudín impusieron sus posiciones en la dirección del PCE, situándolo en el centro de la oposición a la dictadura de Franco. Contra la reactivación del discurso guerracivilista de Franco, la Declaración del PCE concluyó que la polarización de la Guerra Civil, de la que hacía ya veinte años, no era ya lo que dividía a la sociedad española y seguir pretendiéndolo era el discurso del régimen para sobrevivir. La conclusión estratégica era superar aquella división, que ya no era la presente, reconciliar a los españoles y unir a su inmensa mayoría en el

objetivo común del fin de la dictadura, del restablecimiento de la democracia, sin "vueltas de la tortilla" ni condiciones de restauraciones institucionales, que tendría decidir al pueblo en su reconquistada democracia.

Podía sorprender que la iniciativa partiera de los comunistas; sin embargo, no era tan insólita. En un contexto diferente y con formas distintas, Togliatti, secretario general del PC italiano, había defendido también la reconciliación de los italianos con su Ley de Amnistía del 22 de junio de 1946. Años más tarde, Carrillo se quejaría de la, en su opinión, excesiva influencia del comunismo italiano en el español; lo cierto es que él y Claudín abrieron en 1956 la puerta a esa influencia, cerrándosela a la que en el pasado había tenido el francés. Con diez años de diferencia, ambas decisiones venían a reconocer el cambio de una etapa histórica abierta tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la consolidación de una perspectiva revolucionaria nueva, que había tenido su apunte inconcluso en la etapa del Frente Popular. La alternativa al capitalismo pasaba por la democracia y la conquista de la mayoría, no de las clases trabajadoras, sino de la más amplia parte posible de la sociedad.

La Declaración de junio de 1956 estableció las razones y el principio de la ruptura estratégica del PCE. Quedaban por concretar sus formas, sus instrumentos y su desarrollo programático; algo que todavía requeriría su tiempo, hasta alcanzar los años centrales de la década de los sesenta. En un primer momento, la euforia por la aplicación de la nueva política y una sobrevaloración en términos de movilización de masas de la reactivación de la disidencia y la oposición en España desembocaron en una precipitación de las acciones generales, del "jornadismo", como se calificó cuando a toro pasado se comprobó que esa aceleración había sido inadecuada.

El "jornadismo", primera aplicación táctica de la nueva propuesta, fue una suerte de "enfermedad infantil" ante un escenario que parecía llenarse de acciones contra el régimen: la ocupación del Paraninfo por los estudiantes en febrero de 1957 y las huelgas obreras de la primavera del mismo año en el País Vasco, Cataluña y Asturias, repetidas a finales del invierno de 1958. La dirección del PCE decidió buscar su proyección política impulsando manifestaciones generales de masas, por lo que convocó la Jornada de Reconciliación Nacional el 5 de mayo de 1958, y una Huelga Nacional Pacífica el 18 de junio de 1959. Resultaron sendos fracasos, tanto en la movilización como en la captación de apoyos más allá del partido. Solo se consiguió el del Frente de Liberación Popular, recién fundado por Julio Cerón, la Agrupación Socialista Universitaria

de Madrid, el Moviment Socialista de Catalunya y grupos católicos y socialistas dispersos. El PSOE y la UGT, que seguían teniendo una presencia importante en Vizcaya y Asturias, no se sumaron. Estas acciones nunca se habían pensado como un levantamiento, pero incluso como ensayo de movilización general resultaron frustrantes, por más que tuvieran un efecto de agitación y propaganda, de difusión pública de la nueva línea comunista, no desdeñable.

El VI Congreso del PCE, en diciembre-enero de 1960, abordó una mejor concreción de las formas y el inicio del desarrollo programático, y consolidó el cambio de cuatro años atrás. La lección del fiasco de 1958 y 1959 no cayó en saco roto y se hizo una crítica implícita al "jornadismo", al concebir la lucha de masas no desde la perspectiva de la acción extraordinaria, sino prestando atención a las pequeñas acciones; considerando las pequeñas luchas como paso previo para las grandes acciones, las acciones generales, que se situaban bajo la consigna de la "huelga general política" (Molinero e Ysás, 2017). El congreso emprendió el desarrollo programático de la política de reconciliación nacional (Sánchez Rodríguez, 2004), recuperando la definición de la revolución española como un proceso de dos etapas, sin solución de continuidad, aunque se revisaron los contenidos de las etapas y del tránsito entre ambas. La primera sería de carácter democrático, antifeudal y también antimonopolista, y la segunda sería plenamente socialista. Se abandonó para siempre la fórmula del Frente Nacional y la consigna de un "Gobierno nacional revolucionario" emanado del levantamiento de las masas. Por el contrario, se previó el derrocamiento de la dictadura como fruto de un movimiento nacional pacífico, con la formación de un Gobierno provisional de transición, en el que el PCE quería estar sin condicionar su apoyo a su presencia efectiva, sino a un programa mínimo que incluyera la amnistía, el restablecimiento de todas las libertades y la elección de unas Cortes Constituyentes con garantías para que el pueblo decidiera entre monarquía y república. Finalmente, Carrillo fue elegido secretario general y Dolores Ibárruri pasó a la posición, simbólica, de presidenta del partido; el Secretariado del Comité Ejecutivo quedó integrado por Carrillo, Claudín, Gallego, Mije y Eduardo García, y Uribe dejó de pertenecer a la dirección.

El PCE no reincidió en convocar nuevas "jornadas" y desarrolló sus conceptos de huelga nacional y huelga general, pacífica o política, como también se denominaron, como títulos de un proceso de movilización de masas. A partir de la década de los sesenta, en ese proceso se destacarían los efectos acumulativos; combinando la reivindicación económica y social con la lucha por la democracia, y la movilización de masas con la política de unidad de toda la

oposición al franquismo, sin exclusiones. Las huelgas mineras en Asturias de 1962 y los movimientos de solidaridad que produjeron en toda España, la activación casi permanente desde esos años del movimiento estudiantil contra el Sindicato Español Universitario, en el que el PCE y el PSUC consiguieron imponer la táctica de participación en la elección de sus cargos representativos, consolidaron la línea de masas. La oposición interna en el PCE a la política de reconciliación nacional fue insignificante y ni siquiera el conflicto chino-soviético y la impugnación por Mao Tse-Tung de la "coexistencia pacífica" pudieron sacar a esa oposición interna de su irrelevancia; la constitución de grupos prochinos, "marxistas-leninistas", se circunscribió a una parte de los militantes universitarios de Madrid y a ambientes reducidos de la emigración española en Bélgica y Suiza. Sin embargo, la pervivencia del régimen franquista, cuyo consenso social se debilitaba de manera cierta pero lenta, abrió una importante crisis en el PCE cuando Claudín, apoyado por Semprún y por los dirigentes del PSUC Francesc Vicens y Jordi Solé Tura, propuso en 1964 una lectura diferente de la situación y una rectificación de los tiempos de la revolución española y la política comunista.

Crisis, con debate, y continuidad

La crisis de 1964 se desarrolló fundamentalmente en el seno de la dirección del PCE, pero no dejó de trascender entre la militancia intelectual y universitaria. Considerada en perspectiva, la importancia de la crisis sorprende, no porque lo que se debatiera no fuera importante, sino por lo abrupto de su resolución, con la expulsión de los críticos que no habían formulado posiciones antagónicas con el giro de 1956. Tuvo mucho de primer balance de ese giro, con argumentos y resultados contradictorios en mano sobre el acierto del rumbo tomado. Lo que entonces parecían incipientes avances de la movilización de masas, todavía con interrupciones aunque cada vez más sostenida, contrastaba con el elevado coste humano que suponía aún la militancia comunista. Errores por exceso de optimismo, como el manifestado en las jornadas de 1958 y 1959, se pagaban con caídas de centenares de militantes, cuadros y dirigentes; como ocurrió con Simón Sánchez Montero, máximo responsable en el interior junto con Semprún, detenido a consecuencia de la jornada de 1959. También cayó su sustituto, Julián Grimau, enviado desde el exterior el mismo 1959 y detenido en noviembre de

1962, en plena resaca de las movilizaciones iniciadas por los mineros de Asturias, lo que obligó a la dirección a evacuar a Semprún como precaución. Aunque las condenas de los comunistas procesados ya no tenían la misma saña que en los años cuarenta, el régimen quiso hacer un escarmiento ejemplar con Grimau: lo juzgó por la Ley de Responsabilidades Políticas de 1938, y lo ejecutó en abril de 1963, sin hacer caso a la campaña internacional en contra de esa injustificable condena.

Los riesgos seguían siendo elevados y los resultados todavía no indiscutibles. Desde aquel mismo año de 1962, Fernando Claudín empezó a poner en cuestión algunas de las tesis más tradicionales; trascendió que en marzo consideró no pertinente seguir reivindicando “la tierra para quien la trabaja”, dando una pista sobre el fondo de su preocupación: esa consigna pertenecía, desde luego, a la etapa de la “revolución democrática, antifeudal y antimonopolista”, pero él empezaba a dudar que la salida de la dictadura fuera tal revolución. Como había ocurrido en la Italia de la segunda mitad de los años veinte, los comunistas se interrogaban sobre qué era lo que le sucedería al fascismo para poder orientar la acción política de su presente bajo la dictadura. Un año más tarde, Claudín sorprendió a militantes intelectuales y profesionales que asistían a un seminario de formación del partido en Arras, Francia, criticando los modos autoritarios de Carrillo, que no estaba presente. El episodio delataba que se estaba ya produciendo un debate, cuyo contenido no trascendía aún y enturbió las relaciones entre los dos dirigentes. El conflicto estalló finalmente en el Comité Ejecutivo del PCE del 24 de enero de 1964, en el que Claudín expuso su opinión de que, en vez de la “revolución democrática, antifeudal y antimonopolista”, la salida a la dictadura sería oligárquica, aunque bajo formas más o menos democráticas. A partir de ese momento fue desarrollándose a lo largo de todo el año, en el seno de la dirección, incluyendo un artículo de Carrillo en Nuestra Bandera, en marzo, de defensa las posiciones de la dirección, y una Declaración del Comité Ejecutivo, en junio, en el que, insistiendo en esa defensa, se desautorizaron explícitamente las posiciones de Claudín y Semprún.

Entre Carrillo y Claudín no hubo inicialmente diferencias antagónicas. Ambos compartieron la tesis principal de la vía pacífica del derrocamiento de la dictadura y la transición hacia el socialismo y tenían como interés prioritario mantener la presencia del Partido Comunista, garantizar que no quedase desplazado en el momento del fin de la dictadura franquista y en la nueva situación política que en ella se configuraría. También el papel fundamental que el partido habría de tener en la etapa de transición al socialismo, como partido de

la clase obrera, clase dirigente sin duda de esa última transición. Los dos se desmarcaban del proyecto socialdemócrata, que seguían combatiendo. Compartían un mismo lenguaje y las mismas categorías conceptuales; su discrepancia empezó en el análisis del momento, prosiguió en la estimación de los tiempos y los ritmos políticos, y culminó en la definición del objetivo programático.

Claudín, que hasta el inicio de los años sesenta había compartido la aplicación de la "teoría del derrumbe"[40] a la dictadura franquista, considerando inminente su crisis, pasó a defender que lo único que estaba realmente en declive era el régimen franquista, la forma fascista del poder político del capitalismo monopolista; y que este había empezado ya a dar una salida oligárquica a la crisis del régimen mediante la liberalización económica. Sostuvo que no había condiciones para evitar la salida oligárquica; tanto más cuanto que las clases trabajadoras se estaban impregnando de la cultura del neocapitalismo y limitaban sus aspiraciones a las reivindicaciones económicas. El partido debía tomar nota de ello, no seguir generando expectativas para él irreales que conducían a la frustración cuando no se cumplían. El objetivo, concluía, era aceptar esa democracia puramente institucional que se estaba preparando y seguir trabajando para que el PCE, con un discurso "realista", siguiera creciendo como partido de las masas trabajadoras; pensando que el PSOE se desplazaría definitivamente hacia las clases medias y el compromiso con el capital monopolista. Tras la Declaración de junio del Ejecutivo, Claudín elevó el tono, dio por definitivamente obsoleta la consigna de "revolución democrática antifeudal y antimonopolista", y pasó a sostener que la revolución española, tras el fin del régimen franquista y su sustitución por una democracia formal, solo podría tener ya un contenido socialista.

Ramón Mendezona puso en evidencia un punto débil clave de la argumentación de Claudín, cuando en la reunión del Ejecutivo de marzo-abril de 1964 le espetó: "¿Qué le vamos a decir al pueblo? Que después de 25 años de poder fascista tiene que resignarse a un periodo relativamente largo de poder reaccionario, con libertades recortadas. ¿Para eso estos 25 años? ¿Para eso tanto sacrificio, tanto esfuerzo del partido?" (Morán, 1986). La crítica de Claudín tenía tres problemas principales: no aportaba orientaciones concretas de movilización y agitación en ese periodo largo, no contemplaba consignas de transición e iba a contracorriente del movimiento de fondo que se iniciaba en las fábricas y las universidades en aquel 1964 en que en Madrid se formalizaba la Comisión Obrera del Metal, y en las universidades de Madrid y Barcelona se iniciaba el asalto definitivo al SEU.

Tampoco era secundario no tener en cuenta la realidad interna del partido, que no podía digerir el vuelco que proponía ni las abiertas críticas que ya empezaba a hacer a la URSS. Carrillo, y con él la dirección, pudo seguir sobreestimando algunos aspectos de la crisis del régimen, pero evitó la caída en el estupor militante que habría significado la aceptación, sin más, de la reflexión autocrítica de Claudín. Para desgracia de aquel debate, faltó un elemento mediador, sintetizador; como el que pudo representar Sánchez Montero, desde la cárcel, que reconoció el acierto analítico de Claudín al señalar la capacidad del capitalismo monopolista: "No es precisamente un tigre de papel". Faltó quien equilibrara el debate y sobraron pirómanos, como Lister y sobre todo Eduardo García, el hombre de los soviéticos en el Ejecutivo del PCE, que bloqueó todos los puentes que pudiera haber entre Carrillo y Claudín e hizo todo lo posible por mantener las diferencias entre ambos en el territorio de la ruptura. Además, el debate se empobreció con una consideración maniquea y simplista, por parte de unos y otros, sobre el subjetivismo y el voluntarismo en la acción comunista. La defensa por parte de Carrillo del valor del voluntarismo e incluso de una cierta dosis de subjetivismo, controlada y como mal menor necesario, le ganó más puntos entre la militancia del interior que no la condena de ambas actitudes, hecha sin matices por Claudín.

Claudín y Semprún fueron separados del Comité Ejecutivo a comienzos de abril y, tras su refutación de la Declaración de junio y la elevación del sentido programático de su propuesta, quedaron separados del Comité Central y finalmente expulsados en la primavera de 1965. La crisis repercutió en la dirección del PSUC. Jordi Solé Tura, entonces exiliado en París, se solidarizó con las posiciones de Claudín en agosto, y Francesc Vicens, del Ejecutivo del PSUC y máximo dirigente del interior, criticó los métodos de argumentación personal y exclusión aplicados contra Claudín y Semprún a comienzos de septiembre. Ambos fueron a su vez expulsados, en noviembre de 1964, cuando, de hecho, ya habían abandonado el partido.

La trascendencia organizativa de aquel año largo de conflicto fue limitada. Afectó sobre todo al sector universitario de Madrid, dirigido por Ignacio Romero de Solís y Santiago Roldán, que se identificó muy mayoritariamente con el "claudinismo"; también a los intelectuales y profesionales que Semprún había ido captando desde 1953, empezando por Javier Pradera y Eduardo Haro Tecglen. Hubo abandonos de militancia, entre ellos los de los cuatro citados. Algo semejante ocurrió en el PSUC, aunque sin que en este se produjeran rupturas ni abandono significativo de militantes. El Comité de Estudiantes de la

Universidad de Barcelona quedó por algún tiempo bajo sospecha, levantada finalmente por el éxito de las iniciativas que tomó en el derrumbamiento del SEU bajo la dirección sucesiva de Andreu Mas-Collell y Salvador Jové; y el sector de intelectuales, dirigido por Francesc Espinet y August Gil Matamala, manifestó su protesta por el trato dado a los discrepantes, dejando el poso de un malestar que se mantuvo en lo que quedó de década. Por el contrario, no tuvo ninguna incidencia en la militancia obrera del partido. De todas maneras, su trascendencia política fue mayor que esa mínima afectación organizativa. El debate fue uno de los de mayor calado que tuvo el partido, y muchos de los análisis de Claudín sobre la situación española —no todas sus interpretaciones ni sus conclusiones finales— acabaron siendo asimilados en la política del PCE en el tramo final de la dictadura.

Las luchas llevan en volandas al PCE

Carrillo no negaba la capacidad del capitalismo monopolista. Es más, concebía que este mantendría todavía parte de su poder económico durante la revolución democrática, aunque esperaba reducirlo con la expansión de la burguesía no monopolista en un sistema de economía mixta, y sobre la base de la alianza de las cuatro clases antifeudales y antimonopolistas. Por otra parte, consideraba que la situación de dictadura y la actitud de la oligarquía española daban a España una diferencia fundamental con respecto a Occidente que favorecía la singularidad de una revolución española basada en la combinación de la movilización de masas y la política de alianzas. Si podía no tener toda la razón en el análisis que hacía de la realidad —lo que no dejaba de reconocer con su defensa de la necesidad de una dosis de subjetivismo para mantener la lucha—, los acontecimientos de mediados de los sesenta parecieron dársela en su defensa de las características políticas de la movilización de masas y el optimismo sobre el crecimiento de un sentimiento unitario en la oposición antifranquista.

Entre 1964 y 1966 la lucha de masas contra la dictadura dio un salto trascendental, con la cristalización del movimiento de Comisiones Obreras y la eclosión de un nuevo sindicalismo estudiantil en las universidades. No fueron procesos repentinos, surgidos de la nada y con un carácter explosivo pero efímero. En el corto plazo, sus antecedentes en el movimiento obrero estaban en

la generalización de la nueva organización de los trabajadores en la empresa en los primeros años de la década de los sesenta (Molinero e Ysás, 1998); así como en el apoyo dado a esas nuevas formas por el PCE, que fue subsumiendo en ellas sus grupos de Oposición Sindical Obrera (Erice, 2007) y los avances en la participación en las elecciones sindicales, lo que facilitó el paso a estructuras sectoriales, locales y provinciales de Comisiones, particularmente en Madrid y Barcelona. Por su parte, esos antecedentes en el movimiento estudiantil universitario fueron las movilizaciones de apoyo a la minería asturiana en 1962 y la intensificación del control del SEU en la primera instancia representativa de los delegados de curso y facultad. En el contexto de la confirmación sobre los progresos de las nuevas formas de luchas de masas, el VII Congreso del PCE, celebrado en agosto de 1965, dio por cerrada la crisis de identidad del año anterior, insistiendo en el carácter singular de la vía española, que la militancia comunista defendió como réplica al mito neocapitalista del fin de la revolución en occidente.

El documento fundamental del congreso, el informe político de Carrillo publicado aquel mismo año bajo el título de Después de Franco, ¿qué?, dio además contenidos propios a esa vía nacional, al definir el régimen de transición hacia el socialismo como una “democracia política y social”. Las características de esta serían el pluripartidismo, la socialización gradual no violenta ni expropiadora, un Estado multinacional y una política internacional neutralista. No sería difícil encontrar numerosos antecedentes discursivos de la propuesta de Carrillo en el pasado socialdemócrata y comunista; en particular, el concepto de la “revolución popular”, la primera experiencia de las democracias populares y en particular de la China, cuya bandera es la simbolización de la doctrina de la alianza de las cuatro clases. Carrillo nunca fue un innovador teórico, ni lo pretendió, pero la propuesta de la “democracia política y social” puso previsiones concretas, asunción de problemas y propuestas de solución con posibilidad de amplio consenso, a la tesis de la vía pacífica y democrática hacia el socialismo y, para empezar, el derrocamiento de la dictadura. Eso no solo permitía dar una respuesta a las invocaciones generalistas de una “revolución socialista”, que por lejana se desdibujaba, sino que consolidaba la política de alianzas en el interior y el esfuerzo militante en la construcción de movimientos sociales potentes ya en la lucha contra el régimen. El relato histórico y confuso de la “revolución democrática antifeudal y antimonopolista”, algo que los sectores intelectuales y profesionales del interior ya no podían soportar, se fue dejando en beneficio del de la democracia político social. Establecía un enlace lógico, no imposible, entre la aceptación de la democracia parlamentaria y una

evolución de esa democracia que habría de entrar en las fábricas, en la gestión de las ciudades, en la función asistencial del Estado, en la educación y la cultura, para devenir social también. Como en el origen del movimiento comunista, la conquista de la mayoría, ahora abierta a toda la nación, volvía a ser la condición y el instrumento fundamental.

1966 fue el año del salto adelante de la lucha contra el franquismo y de la política comunista, que entró, por fin, en una dinámica de éxito que llevaría a hegemonizar la oposición al franquismo. Empezó por la Universidad de Barcelona, al inicio del curso 1965-1966, cuando, tras las importantes movilizaciones del curso anterior en Madrid y Barcelona[41], el régimen franquista dio por perdido el SEU y quiso sustituirlo por unas Asociaciones Profesionales de Estudiantes (APE). El Comité de Estudiantes del PSUC tomó la iniciativa y, sin seguir exactamente las orientaciones de la dirección, decidió boicotear la nueva instancia institucional y convocar elecciones libres a todos los niveles, desde los representantes de curso hasta los delegados de facultad y la Junta colectiva de Distrito. Con el apoyo del Moviment Socialista de Catalunya, el recién constituido grupo socialista de origen católico Universitat Popular y, a regañadientes, del FOC la federación catalana del Frente de Liberación Popular —, las elecciones fueron un éxito; tanto como el boicot a las APE, que no pudieron constituirse en Barcelona. Lo trascendental resultó que, también por iniciativa de la organización estudiantil del PSUC, se pasó a la constitución de un Sindicato de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB) —ilegal, pero no clandestino— en la Asamblea de delegados de todo el distrito, el 9 de marzo de 1966, en el convento de los Capuchinos del barrio de Sarrià de Barcelona. El modelo del SDEUB y su documento constitutivo, “Manifiesto por una Universidad Democrática”, escrito por Manuel Sacristán, se extenderían en el curso siguiente por toda la universidad española.

No fue su única consecuencia. Descubierta la Asamblea de Capuchinos por la policía, esta, que por concordato no podía entrar en el convento, puso sitio al centro durante tres días. Se desencadenó de inmediato una notable movilización ciudadana de solidaridad —mayoritariamente de clases medias, las del grueso de estudiantes— y para apoyarla se constituyó una mesa redonda de todos los partidos de la oposición catalana, incluido el PSUC, que se mantendría más allá de aquellos hechos. Fue la primera plataforma política unitaria en la que estuvieron presentes los comunistas y la ruptura del aislamiento al que habían sido sometidos desde 1947. Un aislamiento puesto todavía de manifiesto en la reunión de del Movimiento Europeo de junio de 1962 en Múnich, en la que

participó todo el arco político de la disidencia y la oposición, desde los monárquicos afectos a Juan de Borbón hasta el PSOE, pasando por la emergente democracia cristiana del interior, a excepción del PCE, que siguió siendo excluido. La reunión de Múnich abogó por un pacto por arriba para el restablecimiento de una democracia parlamentaria, que incluyó la consideración de que esta pudiera llevarse a cabo bajo una monarquía si Juan de Borbón así lo asumía. Este se desmarcó públicamente, ateniéndose de nuevo al pacto del Azor; no obstante, esa opción, que el PCE calificó de "neocentrista", quedaría flotando en el aire político.

Las elecciones sindicales de septiembre de 1966 significaron a su vez un éxito notable del nuevo movimiento obrero promovido por los comunistas. En Madrid las candidaturas de Comisiones consiguieron la mayoría en las grandes fábricas del metal, en algunas empresas de la construcción y de la banca, y presencia menor en otros sectores. En Barcelona la mayoría votó por candidatos de Comisiones en el metal, el textil, la construcción y los transportes. Las elecciones propiciaron también la constitución de las Comisiones Obreras de Asturias, y consolidaron las existentes en Sevilla, El Ferrol, Vigo y La Coruña. No es ocioso vincular ese éxito y el salto organizativo que comportó con el aumento de la conflictividad en 1967, que, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, triplicó el número de conflictos con respecto a 1966 y multiplicó prácticamente por diez la participación de trabajadores, alcanzando en torno a los 300.000 en toda España. Las manifestaciones en la calle de los estudiantes, las de los trabajadores a las salidas de las fábricas, las demostraciones de protesta obrera como la del 27 de enero en Madrid, con un éxito razonable, y el copo de la plaza de Atocha por los manifestantes dibujaron la imagen de un movimiento en ascenso y la ilusión de que resultara imparable hasta la huelga general política y el derribo del régimen.

No era inmediato, pero la luz que llegaba parecía sugerir el final del túnel. En ese momento se plantearon dos dilemas: qué ritmo había que dar a la movilización de masas, a las luchas obreras y estudiantiles, y qué relación se establecía entre movilización y política unitaria. Ambos sacudieron las organizaciones comunistas. En Madrid, la posición de Romero Marín de apretar el acelerador chocó con la de Sánchez Montero y Marcelino Camacho de no "pegar tirones" en la movilización obrera. En Barcelona, la dirección del PSUC criticó las "impaciencias" de su organización universitaria, que defendía articular ya un frente obrero-estudiantil, entre el SDEUB y Comisiones Obreras. El Comité de Estudiantes creía que la dirección estaba frenando la movilización de

estudiantes para no poner en riesgo la mesa redonda, en la que catalanistas y democristianos se inquietaban por la radicalidad de los universitarios. Esta segunda cuestión resultó ser la más conflictiva después de la Declaración del Comité Central del PCE de abril de 1967, en la que se introducía una distinción entre "ultras" y "evolucionistas" del régimen y se invitaba a estos últimos a sumarse a la oposición. Carrillo consideraba que esa división erosionaba la dictadura, aunque al propio tiempo temía que los "evolucionistas" del régimen convergieran con la disidencia liberal y demócrata cristiana y reforzaran una "tercera vía" centrista frente al franquismo pactada al margen del PCE y de la movilización social. Invitando a los evolucionistas a sumarse a la oposición no pretendía reforzar esa vía, sino, por el contrario, vincularla al rechazo completo del régimen. Aunque abría públicamente la relación compleja, que podía a ser contradictoria, entre la movilización social y el desarrollo de la política unitaria.

La percepción de que Carrillo podría estar sacrificando la intensificación de la movilización de masas para facilitar las relaciones políticas desembocó en una escisión en Barcelona aquella misma primavera, que dio lugar al Partido Comunista de España (internacional), denominado a partir de 1974 Partido del Trabajo de España (Martín Ramos, 2011). Ese fue el primer paso en el crecimiento de una extrema izquierda que se consideraba a sí misma como la única revolucionaria; hasta entonces marginal, a pesar de la existencia desde 1964 del Partido Comunista de España marxista-leninista que aglutinó a los prochinos. Prosiguió con la implosión del FOC en 1970, fragmentado en su carrera por colocarse a la izquierda de la izquierda del PSUC; de sus restos nacieron la Liga Comunista Revolucionaria, trotskista, y la Organización de la Izquierda Comunista, ecléctica en sus referentes comunistas aunque con predominio del consejismo, todas ellas, como el PCE (internacional), proyectadas al conjunto de España. Y se completó con dos presencias genéricamente maoístas: el Movimiento Comunista de España, derivado de una escisión obrerista de ETA que se constituyó entre 1969 y 1971 fusionándose con diversas disidencias locales del PCE; y la Organización Revolucionaria de Trabajadores, surgida en 1969 en el seno de las "vanguardias obreras" promovidas por los jesuitas. Todos compitieron con el PCE por la dirección de la lucha de masas bajo la dictadura, pero nunca pusieron en riesgo el hegemonismo en ella del partido histórico de los comunistas españoles. Esa extrema izquierda nunca llegó a tener las dimensiones de la italiana y la francesa de los años setenta, alimentadas por los episodios de Mayo de 1968 en Francia y del otoño caliente de 1969 en Italia; su extrema condición minoritaria quedó de manifiesto finalmente en las elecciones de junio de 1977.

La dirección del PCE salió al paso del empacho de éxito que manifestaban las propuestas de aceleración de la movilización de la lucha de masas discutidas en Madrid y la escisión en el PSUC, recordando lo esencial de la línea adoptada desde el giro de 1956 y ratificada en 1964; y aportando elementos que, so capa de novedad o de respuesta a la novedad, la ponían al día. Lo hizo Carrillo en su escrito "Nuevos Enfoques a los problemas de hoy", impreso en mayo y aprobado por el Comité Central de septiembre de 1967. En él se insistió en una política de alianzas sociales amplia, cuya perspectiva de alternativa sistémica evolutiva se reforzaba, al hilo del debate de la época sobre la "revolución científico-técnica", con la postulación de una "alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura", cuya hegemonía garantizaría el cambio democrático y la transición al socialismo. La formulación de esa alianza, además, empezaba a reconocer que la evolución del capitalismo —el neocapitalismo— estaba modificando la estructura de clases y que ya no podía seguir pensando la revolución teniendo por sujeto natural e histórico al "proletariado". En lo inmediato destacó la aproximación al mundo católico, a cuyos elementos progresistas se invitaba a ingresar en el partido y lanzó dos mensajes dirigidos, al propio tiempo, a los impacientes de dentro y a los potenciales aliados de fuera: se luchaba por las libertades políticas para mantenerlas, no como una argucia táctica; la dictadura del proletariado se definía como el gobierno de la inmensa mayoría del pueblo contra una minoría, reducida, a la que ni siquiera se le negarían sus derechos políticos

Quedaba todavía un largo camino. El salto de la movilización y la organización ilegal de masas se vio frenado por la represión padecida entre 1968 y 1969. La prohibición de Comisiones Obreras, el inicio de la persecución de sus dirigentes —Marcelino Camacho, Saborido de Sevilla, etc.— y la de los sindicatos democráticos de estudiantes, y finalmente el estado de excepción por tres meses decretado para toda España el 24 de enero de 1969 dejaron claro que aún se estaba dentro del túnel. En esos tres meses se produjeron más de 700 detenciones y arrestos domiciliarios, en todas partes de España y de todas las condiciones sociales y signos políticos de oposición, aunque la mayor parte de ellos eran comunistas y nacionalistas vascos. El PSUC padeció una caída general de más de 60 militantes, entre ellos Ángel Abad, responsable de la política del partido en Comisiones Obreras. El asesinato por la policía de Enrique Ruano, el 20 de enero en Madrid, proporcionó el icono de aquella oleada represiva que se había iniciado ya antes del decreto; y la oleada no se detuvo al acabar el estado de excepción, el año acabó con un saldo de 2.000 detenciones, un centenar de ellas procesadas por el TOP y medio centenar por la jurisdicción militar.

Para mayor desazón, en agosto de 1968 las tropas del Pacto de Varsovia pusieron fin al movimiento de reforma política y económica emprendido en Checoslovaquia por el Partido Comunista local bajo la dirección de Dubcek. Lo hicieron poniendo en práctica la doctrina de la soberanía limitada en el bloque socialista propugnada por Breznev, que en 1964 había desplazado a Kruschev en la dirección del PCUS. Fue un golpe inesperado, que amenazó con hacer añicos la credibilidad democrática que el PCE y el PSUC estaban ganando en el interior y desestabilizar los puentes unitarios. La respuesta de la dirección comunista española fue de rechazo a la invasión y la interrupción brutal de la vía nacional checa al socialismo. Lo que solo salvó al PCE y al PSUC de la trampa en la que podía haber caído de haberla ni siquiera tolerado, sino que incrementó su credibilidad.

Por otra parte, la delegación del PCE —junto con las de una docena de partidos, entre ellas, la italiana y la británica— se pronunció, en la Conferencia de Partidos Comunistas de Moscú de junio de 1969, en contra del intento del PCUS de extender la soberanía limitada a todos ellos y de volver a considerar al movimiento comunista como un partido mundial regido por el centralismo democrático, como en los tiempos de la Internacional Comunista disuelta en 1943. Carrillo compartió la defensa de un internacionalismo basado en la igualdad de derechos de los partidos comunistas, incluido el de la crítica, y la plena independencia y soberanía de estos en la elaboración de su línea política nacional (Sánchez Rodríguez, 2004). La declaración final de la conferencia renunció a las condenas y a la consideración de centros dirigentes por encima del movimiento y reconoció la igualdad y la plena soberanía nacional de los partidos; aunque a cambio los soviéticos se blindaron ante las críticas al “socialismo real”, forzando a su favor el argumento de la no injerencia y evitando el debate sobre su intervención en Checoslovaquia. El inicio del distanciamiento crítico con el PCUS tuvo algún coste interno, con las disidencias de Eduardo García que, separado del ejecutivo en abril de 1969, abandonó el PCE para constituir un grupúsculo propio; y sobre todo la de Lister, que hizo lo propio más tarde para fundar también en 1973 su propio grupo, el Partido Comunista Obrero Español, con una pequeña militancia, aunque un muy escaso reconocimiento social. Más importantes fueron las muestras de descontento disperso en el PSUC en bases obreras del interior y algún miembro de la dirección (Pala, 2016); que aunque fueron reducidas por el momento, sembraron algunas semillas de conflictos futuros.

El oscurecimiento de la lucha antifranquista fue pasajero. En 1970 se reactivó la

movilización en el mundo del trabajo, superando la cifra de 460.000 huelguistas según el Ministerio de Trabajo (Molinero e Ysás, 1998). También en la Universidad, estimulada ideológicamente por las ilusiones de Mayo del 68 en Francia. Y el consejo de guerra de diciembre de 1970 contra 16 miembros de ETA, en Burgos, reactivó las manifestaciones de protesta y la dinámica unitaria iniciada en 1967. Frente a los sobresaltos de los últimos años, la década de los setenta empezó confirmando los réditos de la política desarrollada y las decisiones tomadas. De hecho, la intuición política de Carrillo, su comprensión del valor de la iniciativa en la acción política le llevó a adelantarse al cambio de coyuntura movilizadora. Ya en junio de 1969, con las secuelas en el interior del estado de excepción calientes, Carrillo anunció en la Conferencia mundial de Partidos Comunistas, en Moscú, la oferta que el PCE iba a hacer al resto de fuerzas de la oposición de un “pacto por la libertad” (Sánchez Rodríguez, 2004). En ese circunstancial momento más bajo de la oposición antifranquista, el PCE iba a impulsar una iniciativa que sorteara el descenso de la movilización con una oferta política unitaria completamente abierta y neutralizara, al propio tiempo, la posibilidad de que los “neocentristas” aprovecharan ese descenso para avanzar. A la vuelta de las vacaciones de verano, y en respuesta al nombramiento por Franco de Juan Carlos como su sucesor “a título del rey”, el Comité Ejecutivo del PCE hizo público el 2 de septiembre el término del pacto por la libertad —todavía en minúsculas— como alternativa para dar al pueblo todo el poder de decisión en el fin de la dictadura y ante la sucesión del dictador.

Con los “nuevos enfoques” y el “pacto por la libertad”, el discurso obrerista se desvanecía en sus derivaciones políticas. Algo que la emergente extrema izquierda iba a aprovechar para desbancar al PCE de su posición hegemónica en el movimiento obrero y en la movilización antifranquista, sin llegar a conseguirlo nunca; y que aparecía también en críticas internas de la propia militancia. Carrillo salió al paso, no obviando el debate, sino afirmando, en la reunión del Comité Central ampliado del verano de 1970, que la clase obrera no estaba en condiciones de luchar por sí sola por la conquista del poder; el obrerismo se mantendría en el seno del partido, principalmente como garantía de identidad —el partido de la clase obrera— y, de manera particular, como freno echado por la dirección de la disidencia intelectual. La lucha implicaba múltiples combinaciones: el horizonte estratégico de la transición de la democracia política al socialismo, la política de alianzas sociales, la política unitaria. Y una de esas combinaciones, la táctica en el más elevado sentido del término, era la que relacionaba movilización de masas, convergencias políticas y pacto por la libertad. Carrillo postulaba la unidad de esos factores mediante el recurso de

considerarlos aspectos de un mismo “proceso dialéctico”; sin embargo, obvió el hecho fundamental de la contradicción entre ellos en todo proceso dialéctico.

El nuevo enfoque tuvo su primer gran éxito en la constitución de la Asamblea de Cataluña el 7 de noviembre de 1971, en una parroquia de Barcelona. Su nacimiento tenía su origen en la práctica: la movilización contra el consejo de guerra en Burgos y, más en concreto, la asamblea de los profesionales e intelectuales que se encerraron en Montserrat en diciembre del año anterior. Con aquella asamblea la política unitaria había saltado de las mesas de los partidos a todo un sector social. La práctica se enriqueció y consolidó con la teoría. La dirección del PSUC, en la que ascendía la figura de Antoni Gutiérrez Díaz, decidió aplicar la prescripción política del partido promoviendo una plataforma amplia de partidos, organizaciones sindicales, entidades y también personalidades significativas del mundo de la cultura y las profesiones llamadas liberales. Esa fue la Asamblea de Cataluña, que pasó a aglutinar y llevar a la calle la lucha contra el franquismo, con acciones parciales y generales como las concentraciones del 12 de noviembre de 1972 en Ripoll, del 1 de mayo de 1973 en Sant Cugat y, tras la muerte de Franco, las manifestaciones por la amnistía de febrero de 1976 en Barcelona. La Asamblea de Cataluña era la plasmación en Cataluña del pacto por la libertad, y el PCE intentó que se extendiera por otros puntos de España; infructuosamente, la constitución transitoria de “mesas democráticas” no llegó en ninguna parte a aquel nivel alcanzado en Cataluña.

Ahora bien, los éxitos de los primeros años de la nueva década —subrayados de manera optimista en el VIII Congreso del PCE de julio de 1972— no dejaron ver, o ayudaron a obviar, las limitaciones de la oferta unitaria del PCE y las contradicciones que Carrillo ignoraba en su particular concepción de la dialéctica. El VIII Congreso se centró en las exigencias de política unitaria y consagró el Pacto por la Libertad, ya convertido en una de las consignas fundamentales en mayúsculas. Al propio tiempo se precisó que ese pacto no podía incluir ningún tipo de concesión a cualquier propuesta de continuismo del régimen ni de su evolución desde dentro. Frente al “neocentrismo”, el congreso afirmó que el paso de la dictadura a la democracia tenía que llevarse por medio de una revolución política, pacífica como la de abril de 1931, pero, en definitiva, “de manera revolucionaria”. Al propio tiempo, para seguir levantando barreras entre el PCE y el ala derecha de la oposición y la disidencia antifranquista, se rectificó la posición contraria al Mercado Común defendiendo la entrada en él de una España democrática; para consumo interno se argumentó que el objetivo era reforzar en el Mercado Común a quienes trabajaban ya en él por su

democratización, como el PC italiano, que había asumido ese ingreso diez años antes.

Eran pasos firmes por parte del PCE hacia la convergencia política para acabar con la dictadura. Sin embargo, esa convergencia se enfrentó, sin poder superarlo, al obstáculo de la posición de dos de sus principales cooperadores necesarios: la oposición democratizante nacida en el seno del régimen y que tenía sus principales exponentes en el antiguo ministro Ruiz-Giménez y su revista Cuadernos para el Diálogo[42] y el PSOE. La primera de ellas, con muy escasa base social militante, nunca tuvo en su plan propiamente luchar contra la dictadura, sino que, anticipando su fin biológico, construía una propuesta política para después (Carrillo, 1983). Por su parte, el PSOE —reactivado entre 1970 y 1972 desde el interior por el grupo liderado por Felipe González y Nicolás Redondo— rechazó la prohibición de acuerdos conjuntos con el PCE establecida desde el final de la Guerra Mundial, pero nunca llevó su rectificación a una propuesta de alianza activa con el PCE, como sí estaba haciendo el reconstituido Partido Socialista Francés, que en junio de 1972 firmaba un "programa común" con el PCF. El referente del nuevo PSOE no era el socialismo francés, sino la socialdemocracia alemana, que apoyó y financió al grupo renovador del PSOE, y en su agenda nunca estuvo la alianza con los comunistas. Una cosa era que el PSOE firmara un manifiesto conjunto de celebración del 1 de mayo de 1972 y otra que aceptara ni siquiera coincidencias tácticas. La esperanza de los comunistas españoles de que el PSOE se incorporara a la dinámica del "programa común" fue, durante cinco décadas, tan recurrente como vana. Sin poder contar con ellos, el acuerdo general no podría llegar nunca. En el orden táctico, la "unidad dialéctica" entre movilización de masas y política de unidad, al obviarse las contradicciones entre los factores que se pudieran presentar, hacía que la síntesis del Pacto por la Libertad tuviera un polo prioritario: la convergencia política, la política unitaria. Como se había apuntado en las críticas que sustentaron la crisis del PSUC en 1967, la acción nacional, la Huelga Nacional Pacífica, se ponía por delante de la acción social, la "huelga general política", que quedaba como un factor subordinado

CAPÍTULO 9

¿QUÉ DEMOCRACIA?

La última ofensiva

Superado el susto del 20 de diciembre de 1973, cuando el atentado contra Carrero Blanco hizo temer en todo el antifranquismo una noche de cuchillos largos y una marcha atrás, quién sabe hasta dónde, el PCE llegó al cénit de su elaboración doctrinal y política. Meses más tarde, ante el ingreso hospitalario de Franco por flebitis y el encargo provisional de la jefatura del Gobierno al príncipe Juan Carlos, Carrillo decidió aprovechar la incertidumbre y forzar el proceso de convergencia política con la constitución de un organismo unitario, presentado en París el 29 de julio de 1974: la Junta Democrática de España. Era una iniciativa parcial, a la que además del PCE y Comisiones Obreras solo se sumaron el Partido Socialista Popular de Tierno Galván, la facción carlista mayoritaria aglutinada en torno a Carlos Hugo de Borbón-Parma, la Alianza Socialista de Alejandro Rojas Marcos, el Partido Socialista de Aragón y el PCE (internacional), que para poder integrarse tuvo que cambiar su nombre por el de Partido del Trabajo de España. También se unieron independientes como Rafael Calvo Serer y el abogado madrileño Antonio García-Trevijano, a quien se le encargó la coordinación de la junta. Obviamente, no pretendía ser el pacto político definitivo, sino una presión para superar las indecisiones de los socialistas y la pasividad de los democristianos. Todo dependía de su impacto y de la evolución de los hechos. Para empezar, Franco, más mal que bien, se restableció, y la interinidad de Juan Carlos finalizó el 2 de septiembre.

El retorno de Franco al ejercicio de la jefatura del Estado no evitó la imagen de su decrepitud, como quedó en evidencia en su reacción exasperada a los atentados mortales de ETA y del FRAP[43] en 1975. El fin de la dictadura podía ser un resultado biológico, quedaba por ver cómo se recompondría la España posterior a Franco. En enero de 1975 el Comité Ejecutivo hizo una declaración pública sobre la vigencia de la Junta Democrática y el papel que esta —es decir,

el pacto político— había de tener en ese inevitable “después de Franco”. La Huelga Nacional Pacífica, se afirmó, era precisamente la acción democrática nacional que proponía la Junta Democrática. En la izquierda del escenario español, la movilización obrera experimentaba un nuevo salto en respuesta a la crisis del petróleo de 1973, que desembocaría en una crisis general del neocapitalismo; 1974 registró el mayor número de trabajadores en huelga del franquismo, más de 680.000, siempre según el Ministerio del Trabajo. Era una movilización sustantivamente económica que, no obstante, reforzaba los poderes que podía invocar el PCE para situarse en el centro de ese escenario. No en vano las elecciones sindicales de 1975 supusieron un claro éxito de Comisiones Obreras, sobre todo en Cataluña —donde controlaron toda la estructura sindical en el Bajo Llobregat—, Madrid, Asturias y Navarra, con victorias de sus candidaturas en torno al 50%; y menores que en cualquier caso consolidaron su presencia en los centros industriales de Galicia, Vizcaya, País Valenciano y Andalucía. Ciertamente el PCE no era la única organización presente en Comisiones Obreras, pero el movimiento había surgido por su impulso, lo seguía dirigiendo de manera mayoritaria y lo capitalizaba en primer lugar.

En ese contexto la Conferencia del Comité Central ampliado, en julio de 1975 en Arrás, llevó a término el encargo del VIII Congreso de aprobar un manifiesto-programa que sistematizaba la posición doctrinal, estratégica y táctica del partido. Las líneas fundamentales de su proyecto, escritas por Carrillo, habían sido ya aprobadas en octubre de 1973. Su contenido final quedó reforzado por la cadena de novedades que reactivaron el protagonismo de los partidos comunistas en Europa occidental y que parecían anunciar un giro general a la izquierda: la firma de un programa común en Francia, en junio de 1972, entre el PCF y el Partido Socialista refundado por Mitterand; el “compromiso histórico” propugnado por Berlinguer en el otoño de 1973 en respuesta al derrocamiento de Allende en Chile el 11 de septiembre de aquel año, subrayando la vía democrática y llamando al mundo católico a converger con los comunistas en su defensa y desarrollo; la revolución de abril de 1974 en Portugal y la formación en julio de aquel año de un Gobierno presidido por el coronel Vasco Gonçalves, apoyado por el PC portugués. Poco antes de la revolución portuguesa, la Conferencia de Partidos Comunistas de Europa occidental, desarrollada en enero de 1974 en Bruselas, acordó a instancias de la delegación italiana y con el apoyo de la española el principio de las vías nacionales que habían de establecer esos partidos para el avance del proyecto socialista en su ámbito, consagrando de hecho su derecho de acción independiente respecto al PCUS, ante el que, no obstante, el PC francés y el PC portugués rechazaban una posición de ruptura.

El texto definitivo del manifiesto-programa se situó en sintonía principalmente con las posiciones de Berlinguer. Lo hacía partiendo de la propia situación, enfatizando la exigencia de que en España la restauración de la democracia partiese de aquel levantamiento popular, nacional, que invocaba la Junta Democrática; su triunfo significaría la revolución política que abriría la vía hacia la democracia política y social y el socialismo, todo ello presentado como un proceso continuo. Ese levantamiento se atendría al Pacto por la Libertad, al acuerdo más amplio posible para poner fin de manera definitiva a la dictadura, sin prejuzgar en él ni el carácter del régimen político ni las transformaciones sociales que podrían abrirse cauce, cuestiones que habrían de decidirse en el nuevo marco democrático. A partir de ahí la política del PCE había de inspirarse en el principio de que el triunfo del socialismo en "esta zona de Europa" solo podía producirse a través del desarrollo pleno de la democracia, la articulación democrática y descentralizada del Estado, la pluralidad política y de partidos y el reconocimiento de todas las libertades, incluida la religiosa. El manifiesto-programa no solo obviaba mencionar el término "dictadura del proletariado", sino que sostenía que la concepción del PCE —no ya de la democracia política y social, sino del sistema socialista— continuaría siendo la de un sistema democrático pluripartidista. El manifiesto-programa consagraba también la independencia plena de los partidos comunistas en un nuevo internacionalismo que no podía repetir las experiencias de la IC —un solo partido mundial— ni de la Kominform —un movimiento dirigido por un centro de referencia, el PCUS, y la URSS—. La exigencia de la revolución en el mundo actual incluía que los partidos comunistas fueran —"y así lo vieran las masas"— totalmente independientes de cualquier otro Estado, incluidos los socialistas.

La línea del PCE se veía apoyada por buena parte de los trabajadores y reconocida internacionalmente por el más prestigioso de los partidos comunistas en Europa: el italiano dirigido por Enrico Berlinguer. El mismo mes que se aprobaba el manifiesto-programa, Carrillo y Berlinguer se reunían en Roma y marchaban luego a Livorno, ciudad donde se había fundado el PC italiano en 1921, donde hicieron pública una declaración conjunta que recogía los principios básicos compartidos y presentes en el texto del PCE. La convergencia de posiciones entre el PCE y el PCI, a la que con reticencias se sumó el PC francés, fue bautizada por la prensa como "eurocomunismo", término exagerado que habría de crear confusión, pero que, no obstante, como reconoció el secretario general del comunismo francés, Georges Marchais, tenía detrás algo real.

El término periodístico se popularizó a partir del encuentro en Madrid de los tres

secretarios generales, Carrillo, Berlinguer y Marchais, en marzo de 1977, en un acto en apoyo a la legalización del partido español. Luego, durante años dio lugar a escritos y debates, que no llegaron a aclarar si existían un cuerpo de doctrina y una práctica política común y compacta. Lo que había detrás, para seguir con la expresión de Marchais, se remonta a la crisis del movimiento comunista internacional de comienzos de los sesenta y repetía el esfuerzo de adaptación de sus partidos en el "mundo capitalista desarrollado" a una situación no revolucionaria de probable larga duración. Aquella crisis, iniciada con la confrontación entre la URSS y la República Popular China, se extendió al conjunto del movimiento comunista por el empeño del PCUS en obtener de él una condena explícita del PC chino, que revalidaría su posición de centro dirigente del comunismo. Cuando en 1964 el PCUS anunció la convocatoria de una nueva Conferencia de Partidos Comunistas para conseguir esa condena, Togliatti respondió, en lo que había de ser su último escrito[44], oponiéndose a esa intención. Defendió, por el contrario, la "autonomía" de los partidos comunistas, la "diversidad de las posiciones políticas concretas que corresponden a la situación y al grado de desarrollo de cada país", y rechazó, en fin, que se creara de nuevo cualquier organización internacional centralizada. Lo que Togliatti formuló en términos de autonomía y de reconocimiento de la diversidad se transformó, en la Conferencia consultiva de 1969, en independencia y soberanía para decidir las líneas políticas nacionales. El núcleo impulsor de ese proceso fueron los principales partidos de Europa occidental, que configuraron así, quizá no un bloque, pero sí una corriente.

También compartían la evidencia de que, en Europa occidental y Norteamérica, no se daban las condiciones para una revolución considerada en términos de ruptura insurreccional. Pensaban que el camino de avance hacia el socialismo en ese mundo pasaba por la democracia, por su desarrollo político pleno y su extensión en el ámbito de la producción, confrontando la tendencia autoritaria intrínseca del capitalismo monopolista. Había que explotar a fondo esa contradicción entre capitalismo y democracia para conquistar mediante la defensa de esta última el Estado, a través de las instituciones y de la movilización y la organización social. Sería una vía pacífica en la medida en que no lo sería insurreccional. El escenario de un levantamiento interno era impensable ante el desarrollo de la capacidad militar de los Estados; y el de una coyuntura de quiebra del sistema como se había producido en la Primera Guerra Mundial tampoco era pensable, por el empate estratégico que había producido el arma nuclear bloqueando —en principio— la amenaza de una nueva conflagración general.

Manuel Sacristán escribió a finales de 1977[45] que el eurocomunismo acertaba al percibir que ya no se cumplía aquella perspectiva revolucionaria, estimular la autocrítica de la tradición comunista y querer analizar también la nueva estructura social para buscar un nuevo tipo de alianzas sociales. Consideró que era un nuevo repliegue, como el que se había producido a partir de 1921. Sin embargo, añadió, su error consistía en presentar el repliegue no como tal, sino como un avance; no como un paso atrás para seguir adelante según la idea táctica de Lenin, sino como un paso adelante. De esa manera, concluía Sacristán, el eurocomunismo transformaba al movimiento comunista en una nueva socialdemocracia y dejaba de ser revolucionario. Esa última apreciación, que compartieron todos los críticos del eurocomunismo, tenía una carga ideológica profunda y se hacía juzgando la política comunista en términos subjetivos. No obstante, prescindía del contexto en el que se producía ese nuevo repliegue, muy diferente al de 1921, en el que, a pesar del paso atrás, no se descartaba que se produjera una nueva coyuntura favorable al asalto insurreccional al poder.

Sin entrar en el debate ideológico —que no corresponde en esta síntesis histórica del comunismo español—, es cierto que la inconcreción, el oscurecimiento o la subestimación de las resistencias que podía encontrar esa estrategia, hasta la involución de conquistas políticas y sociales conseguidas, hacían del eurocomunismo una propuesta evolucionista de un proceso sin soluciones de continuidad. En última instancia, una especulación confusa —a pesar de sus aciertos—, que reducía el proyecto a mera proposición. Carrillo presentaba la perspectiva de un avance a velocidad de crucero hacia el socialismo, pasando por la democracia política y social, a partir de la ruptura democrática que había de significar el fin de la dictadura franquista; sin más observaciones que la de señalar que los escollos que pudieran presentarse serían sorteados merced a la mayoría social y su traducción directa en mayoría política. Lo único que concedió, fugazmente, fue que el uso de la violencia solo podría estar justificado ante una involución por la fuerza, protagonizada por una minoría en contra de la inmensa mayoría (Sánchez Rodríguez, 2004); algo que sonaba a la idea de la revolución defensiva de la socialdemocracia de entreguerras.

Los escollos se presentaron muy pronto. En Italia, cuando el asesinato de Aldo Moro el 9 de mayo de 1978 por un grupo de extrema izquierda, las Brigadas Rojas, bloqueó la aproximación entre comunistas y católicos, que era el núcleo fundamental del compromiso histórico de Berlinguer, la progresión electoral del PCI, que en 1976, con el 34,4% de los votos, había alcanzado el mejor porcentaje de su historia, se frenó en seco para descender hasta el 26,6% antes de

la disolución del partido. En España, al no abrirse a la muerte de Franco un proceso de ruptura democrática, de revolución política como la que se había producido el 14 de abril de 1931, sino una transición en la que el PCE perdió el protagonismo que había tenido durante la lucha contra la dictadura.

Transición, no ruptura

Con la perspectiva que hoy tenemos podemos reconocer que el primer signo adverso a la progresión del "eurocomunismo" en España había sido la constitución, el 11 de junio de 1975, de la Plataforma de Convergencia Democrática, promovida por el PSOE con la participación de UGT, la Izquierda Democrática de Ruiz-Giménez, la Unión Social Demócrata de Dionisio Ridruejo, dos grupos comunistas —el Movimiento Comunista de España y la Organización Revolucionaria de Trabajadores— y una serie de pequeños grupos socialistas de carácter regional, afines ideológicamente a la derecha de la socialdemocracia europea. Fue un mal síntoma. En el momento agónico del régimen de Franco, la oposición quedaba dividida. Entre la junta y la plataforma había una diferencia capital: la primera proponía un Gobierno provisional, la segunda se saltaba ese paso e iba al siguiente, el de las elecciones libres.

La muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, avivó en un primer momento la expectativa de la ruptura: el Gobierno Arias Navarro, con José María de Areilza en Exteriores y Manuel Fraga en Interior, no fue capaz de imponer una salida continuista al régimen de Franco, en el sentido de un sistema de participación política limitada del que quedaba excluida la izquierda. Las manifestaciones en las calles reclamando la amnistía, la huelga general de varias semanas en Madrid en enero de 1976, la generalización de huelgas locales y sectoriales por toda España y la masacre del 3 de marzo en Vitoria perpetrada por las fuerzas de orden público sobre una asamblea de huelguistas dejaron desnudo al Gobierno. El primer Ejecutivo de la monarquía quedó limitado a la represión y a la bravuconada de Fraga, reclamando que las calles eran suyas. Las calles que Fraga decía propias lo bloquearon y Juan Carlos I se vio obligado a sustituirlo en julio por otro, de intenciones entonces desconocidas, encabezado por Adolfo Suárez. La dirección comunista consideró, empero, que eso ni situaba al proyecto rupturista en la vía de la victoria ni hundía de manera

definitiva las opciones reformistas; lo que se había producido era la derrota del “búnker” del régimen, de la continuidad de la dictadura con otros gestores. La disyuntiva que se presentaba a partir de ese momento era entre el reformismo continuista y la democracia rupturista. La movilización de masas, creciente pero todavía minoritaria, podía bloquear el continuismo, pero no tenía todavía suficiente fuerza para imponer por sí sola la ruptura (Andrade, 2012; Molinero e Ysás, 2017).

En la “relación dialéctica” de Carrillo se impuso de nuevo el polo del pacto político; había que atraer a los reformistas a negociar las formas de una ruptura. Eso no era una tarea fácil ni el partido podría entenderlo sin fisuras. No se podía seguir dirigiéndolo a distancia, y a comienzos de 1976 el Comité Ejecutivo decidió trasladarse al interior, a “dirigir sobre el terreno”. Lo hicieron legalmente Ignacio Gallego, Federico Melchor, Santiago Álvarez, Manuel Azcárate y Tomás García; Carrillo, al que se le negó el pasaporte, regresó a España de manera clandestina, el 7 de febrero, para pilotar directamente el acompasamiento escalonado de la política del partido a la evolución de los acontecimientos. A la espera de lo que podía hacer aquel Gobierno forzado de Arias, Areilza y Fraga, Carrillo viajó por España entrevistándose con diversas direcciones regionales, así como con personalidades del mundo político y económico de la derecha no franquista, como Pere Durán Farrell o Jordi Pujol. Consolidó así su autoridad, dentro y fuera del partido, y llegó a introducir incluso en el Comité Ejecutivo del PCE la idea de un pacto de ruptura “con el Ejército, la Iglesia y los banqueros” (Moran, 1986). Esto último era correr mucho, pero también una muestra de que se estaba dispuesto a ello.

Bajo el impacto del cambio de Gobierno, y todavía con la incertidumbre sobre su significado, el Comité Central del PCE se reunió en Roma el 28 de julio de 1976, incluyendo un acto de presentación pública. En él se acordó postular un “Gobierno provisional de reconciliación nacional”, lo que abría la puerta a la participación, no ya de la oposición demócrata cristiana y liberal, sino de personas que hasta el último momento habían estado en la nómina política del franquismo. Carrillo podría estar pensando en Areilza; con él se entrevistó en París, en agosto, pero habida cuenta de que fue una vez que el conde ya había sido excluido del Gobierno, el encuentro resultó un brindis al sol. Sin embargo, se abrió una nueva puerta cuando Suárez envió al periodista José Mario Armero a entrevistarse con Carrillo en Francia aquel mismo mes. El empresario catalán Durán Farrell avaló ante Carrillo la intención reformista de Suárez y Gutiérrez Mellado y le regaló el caramelo de una información según la cual algunos

grandes bancos —el Urquijo, el Hispanoamericano y el de Bilbao— se negaban a financiar a Fraga y su proyecto puente entre el continuismo franquista y la reforma (Carrillo, 1993). Los partidarios de una reforma no continuista, que desembocara en una monarquía parlamentaria aceptable para los gobiernos europeos, empezaron a envolver al proyecto de ruptura democrática.

Con el polo “dialéctico” del pacto a toda marcha, la cuestión del PCE iba a ser pieza angular en el proceso de reforma que Suárez se dispuso a iniciar. Por una parte, porque su reconocimiento legal era la línea infranqueable que la mayoría del Ejército y la élite política franquista ponían a la reforma; un reconocimiento que también rechazó el Gobierno norteamericano cuando Henry Kissinger aconsejó a Juan Carlos I, en junio, esperar unos años antes de legalizar al PCE. Por otra, porque el PCE se puso como condición para tomarlo en consideración precisamente lo contrario; y, para empezar, no quedar marginado del margen de tolerancia legal que se estaba dando a los socialistas, ya en los últimos días del Gobierno Arias Navarro. Felipe González, secretario general del PSOE, actuaba con plena libertad de movimiento, amparado por la Internacional Socialista; la UGT había celebrado su congreso en abril de 1976 en Madrid, ilegal pero no clandestino; a los socialistas catalanes se les autorizó la realización de un mitin público en el Palacio de Deportes de Barcelona el 22 de junio. El cambio de trato era significativo y tenía consecuencias. Desde el final de la primavera de 1975 la competencia entre socialistas y comunistas estaba marcando, en buena medida, la dinámica de la que todavía se consideraba la oposición antifranquista; erosionando por debajo la hipótesis de la ruptura. En marzo de 1976 la oposición pareció dar un paso adelante con la fusión de la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática en un nuevo organismo denominado Coordinación Democrática. Contra la opinión de García Trevijano, la dirección del PCE decidió impulsar esa fusión tras constatar que la Junta Democrática no había conseguido ninguna aproximación a los poderes fácticos en España, la Iglesia, la banca y el Ejército (Morán, 1986). A pesar de todo, fue una unidad débil, que se tambaleó enseguida por los movimientos del PSOE de aproximación del nuevo jefe de Gobierno. El 10 de agosto Felipe González y Adolfo Suárez se reunieron por primera vez de manera formal, en privado, y, según se dijo luego, intercambiaron sus propuestas respectivas de restauración democrática y de reforma.

Acabado el verano, Suárez impulsó de manera definitiva su proyecto, que contemplaba la instauración de un sistema parlamentario bicameral y la celebración de elecciones generales en junio de 1977, abiertas a las formaciones

del régimen y de la oposición a excepción de los comunistas y los republicanos. Aprobado como ley por las Cortes franquistas el 18 de noviembre, Suárez busco legitimarlo mediante su refrendo en plebiscito el siguiente 15 de diciembre. El PCE hizo un último intento por poner sobre la mesa el hecho de la ruptura, convocando una huelga general para el 12 de noviembre contra el proyecto de reforma. La acción tuvo un seguimiento importante, un millón y pico de huelguistas, pero distó de ser general. Carrillo instó entonces al Pleno del Comité Ejecutivo reunido el 23 de noviembre de 1976 —por primera vez en España desde 1939— a tomar nota de que la propuesta de Suárez no solo se había consolidado, sino que una parte de la oposición —los demócrata-cristianos y los socialistas— estaba ya en ese terreno. Añadiendo consideraciones sobre la correlación de las fuerzas sociales y políticas, el secretario general impuso la conclusión de que no era posible seguir adelante con la ruptura; el único campo de juego que quedaba era el que había abierto Suárez y en él lo único negociable, en aquel momento, era la libertad de los partidos. Se opuso una parte de la dirección, en particular Sánchez Montero, López Salinas, Azcárate y Tamames, pero quedaron en minoría (Morán, 1986). El Comité Ejecutivo acordó que el PCE entrara también en la dinámica de negociación con Suárez, con el que ya se habían establecido contactos indirectos, aunque por un tiempo se mantuvo el uso del término “ruptura”, que pasó a apellidarse “pactada”; lo que con el tiempo y en un juego de palabras acabó derivando en “reforma pactada”. Paralelamente, se había decidido un gesto público de “salida a la superficie” con objeto de reforzar la presencia del PCE en el proceso político abierto; desde el lunes 21 de noviembre, se desarrolló en toda España una “semana del partido”, con celebración de actos públicos que culminan en la presentación en rueda de prensa del Comité Provincial de Madrid.

La primera consecuencia del acuerdo del 23 de noviembre fue responder al referéndum con una campaña de abstención, no de boicot y movilización activa, para impedirlo. Nunca se sabrá qué resultados reales habría tenido ese boicot. Lo cierto es que, de impulsarlo, el PCE se habría quedado solo entre la dividida oposición, acompañado únicamente por la extrema izquierda. A la vista del resultado del referéndum, se habría quedado también muy solo en la sociedad española, ante la cual Suárez y los reformistas usaron con eficacia los medios de comunicación de masas; empezando por la televisión pública, TVE, la única que entonces existía. Con una participación del 77,7%, algo más del 94% de los votantes dieron su sí. La opción que le quedó al PCE, no solo para sobrevivir políticamente a la aceleración del proyecto reformista, sino para salvar la capacidad de presión que todavía mantenía el movimiento de masas, era romper

el límite anticomunista del proyecto de reforma. Ese límite, por otra parte, tenía el inconveniente de dejar incompleta la transición a un Estado de democracia parlamentaria, algo que inquietaba a parte del socialismo español; y que, sobre todo, dificultaba la gestión de una transición que tenía que enfrentarse al propio tiempo a la grave crisis económica iniciada en los comienzos de la década. Entre Suárez y el PCE se dibujó un espacio de negociación específico, de manera que Armero hizo llegar a la dirección del PCE que el Gobierno "ampliaba la tolerancia" en su favor, siempre que no forzaran los ritmos.

El PCE recogió el mensaje y adoptó sus iniciativas para abrir más pronto que tarde aquel espacio. Tolerancia no significaba todavía nada más que vista gorda. Al mismo tiempo que la ofrecía, Suárez puso como condición para dialogar con la Comisión Negociadora de Coordinación Democrática que el PCE no estuviera presente. Y lo peor era que Felipe González aceptó negociar directa, e unilateralmente, con Suárez si el encuentro colectivo se frustraba. El PCE se dispuso a forzar sin romper. Su primera vuelta de tuerca fue días antes del referéndum, cuando llevó a cabo una rueda de prensa en Madrid, con Carrillo al frente, haciendo manifestación pública de su presencia en España y de la voluntad del partido de estar presente en el proceso de negociación. La segunda resultó sobrevenida: ya celebrado el referéndum, Carrillo fue detenido el 22 de diciembre junto a seis miembros del Comité Ejecutivo a la salida de una reunión. De inmediato se produjeron manifestaciones en España, así como en el ámbito internacional, exigiendo la puesta en libertad de los detenidos, focalizada en la de Carrillo. Esta se produjo muy pronto, ocho días más tarde, después de que lo aprobara el núcleo duro del Gobierno (Suárez, Gutiérrez Mellado, Martín Villa y Alfonso Osorio) y antes de que la prolongación de la detención complicara la solución. Carrillo tuvo clara su primera victoria con palabras a la prensa: "No significa automáticamente la legalización del partido, pero constituye el primer paso".

Después de que del asesinato de cuatro abogados laboralistas y un administrativo, comunistas, en un asalto ultra a su despacho en Atocha, el 24 de enero de 1977, se convirtiera en nuevas manifestaciones de apoyo al PCE, este pidió su inscripción legal el 11 de febrero. Era la tercera vuelta de tuerca. Suárez cedió y convocó a Carrillo a una reunión secreta el 28 de febrero. Fue su primera entrevista, en la que Suárez empezó intentando convencer al dirigente del PCE de que su partido se presentara como "independiente" a las elecciones del 15 de junio; la negativa de Carrillo obligó a Suárez a comprometerse a encontrar la fórmula para la legalización del PCE y a hacer frente a los importantes sectores

del franquismo que seguían oponiéndose. Aquella perspectiva fue reforzada, por el lado comunista, con la mencionada reunión pública en Madrid el 2 de marzo de Carrillo, Marchais y Berlinguer. Finalmente, Suárez, contra el criterio de Osorio y los mandos del Ejército, impuso esa legalización el 9 de abril, sábado santo en la liturgia católica; con una broma del calendario que a muchos les supo a gloria y a unos pocos, a derrota. Como quiera que fuese, las vueltas de tuerca siguieron siendo medidas. Para responder a la reacción del mando militar que repudió públicamente la legalización y reforzar la posición de Suárez si se producía el choque con aquel, la dirección del PCE convocó un Comité Central el 14 y 15 de abril, en el cual se presentó el programa electoral del partido, bajo la bandera rojigualda, aceptando la monarquía y la unidad de España; un acto simbólico, de acatamiento del proyecto reformista, que no tuvo ningún voto en contra por parte de los miembros del Comité Central y solo 11 abstenciones. Pactado entre Carrillo y Suárez para hacer frente a la reacción de los militares contra la legalización del PCE, se consideraría más adelante desproporcionado y, en cualquier caso, un coste excesivo para la identidad republicana del partido.

La legalización del PCE no fue un hecho menor. Carrillo escribió en sus memorias que eso era la “ruptura pactada”. Aunque evidenciara cuáles fueron sus prioridades desde finales de 1976, es exagerado; aunque sí fue un pacto de ruptura, el más importante que se consiguió junto con la restauración provisional de la Generalitat, tras el resultado de las elecciones de junio de 1977 en Cataluña. Constituyó un factor fundamental del proceso de transición, que pudo avanzar en los términos de reforma pactada con prácticamente toda la oposición. Fue algo más que un mal menor. Quedaron fuera del pacto las organizaciones comunistas disidentes —Partido del Trabajo, Movimiento Comunista, Organización Revolucionaria de Trabajadores, Liga Comunista Revolucionaria —, los republicanos y otras formaciones aún menores; no obstante, todos ellos pudieron participar en las elecciones del 15 de junio de 1977 a través de coaliciones aceptadas como agrupaciones de electores y, tras su celebración, fueron siendo legalizadas. Para el PCE tampoco habría sido conveniente que no participasen.

Desilusión y primeras fracturas

Los comunistas mostraron una importante capacidad movilizadora durante la campaña electoral y se llevaron a engaño por ello. En el PCE se generó la expectativa de conseguir una minoría sustantiva de diputados, hasta 40 o 50 diputados (Anguita y Andrade, 2015); y en el PSUC se tenía el convencimiento de resultar la fuerza más votada en Cataluña, capitalizando la indiscutible hegemonía que había conseguido a través del movimiento de la Asamblea de Cataluña. Las organizaciones comunistas disidentes, a su vez, esperaban contabilizar algún apoyo social, en correspondencia con el activismo desplegado en los dos últimos años; el Partido del Trabajo, que se presentaba como Frente Democrático de Izquierda y en Cataluña coaligado con Esquerra Republicana de Cataluña, aspiró a alcanzar representación parlamentaria. El resultado de las elecciones fue un duro baño de realidad. El PCE y el PSUC sumaron 1.712.000 votos, el 9,3%; obteniendo por mor de la ley electoral solo 20 diputados, 8 de ellos del PSUC. El PSOE, que había estado casi ausente en la lucha antifranquista, excepto en el norte de España, obtuvo tres veces más votos y, por la misma ley electoral, seis veces más diputados, 118. La desilusión fue importante; cuarenta años más tarde Anguita lo recordaba diciendo que no solo la mayoría de los trabajadores españoles habían votado al PSOE, sino que lo peor era que lo habían hecho la mayoría de los afiliados a Comisiones Obreras (Anguita y Andrade, 2015). En Cataluña el PSUC, que obtuvo 561.000, el 18,2 %, se vio superado por la candidatura de Socialistas de Cataluña, que consiguió más de 880.00, el 28,4%, y 15 diputados; había perdido su privilegiado ascendente político en Cataluña y la primacía en la izquierda.

Las formaciones comunistas disidentes fracasaron estrepitosamente, con resultados ínfimos que no llegaron al 1% y en el que solo Euzkadiko Ezquerra, en su coalición con el Movimiento Comunista, consiguió un diputado. Lo peor fue que la coalición promovida por el Partido del Trabajo solo consiguió uno. Fue en Cataluña y correspondió a su coaligado Heribert Barrera, de Esquerra Republicana de Catalunya, que al día siguiente de las elecciones se desligó de la coalición y ni tan siquiera accedió a repartir la compensación económica del Estado por el escaño obtenido. El recuento quedó hecho: la extrema izquierda en España iba a quedar lejos de lo que representaba en las democracias parlamentarias vecinas, Francia, Italia y Portugal.

La desilusión fue grande. Aunque no era un tropiezo político grave. Aquellos casi 1,7 millón de votos constituían un capital de apoyo importante. La dirección del PCE dio una primera respuesta en términos de continuismo en la que se refería a su preocupación principal en la etapa final de la dictadura: el polo de

los pactos. El Comité Central del 25 de junio aprobó la valoración de Carrillo, que consideró que las elecciones habían sido un éxito de las fuerzas democráticas y de izquierda, que podían tener mayoría en las Cortes y convertirlas en constituyentes; para hacerlo posible defendió la formación de un Gobierno de concentración democrática nacional. La "concentración democrática" sustituyó en el discurso al "pacto por la libertad". Con una fuerza de atracción menor y un resultado de decepción mayor, no pasó de ser un deseo y el proceso constituyente quedó en manos de Suárez con el apoyo del PSOE.

El polo de los pactos, por otra parte, incluyó una dimensión no solo no prevista, sino que iba en dirección contraria a las transformaciones sociales que se esperaba que se pudieran impulsar con el restablecimiento de las libertades políticas. La prolongada crisis económica mundial se había agravado en España por la dejadez de los gobiernos de Arias y Suárez, carente el primero de un proyecto de futuro y el último, de consenso suficiente para aplicar una terapia que, a las alturas de 1977, tenía que ser, necesariamente, de choque. Tras el éxito de las elecciones del 15 de junio de 1977, Suárez intentó un pacto social entre los sindicatos y la patronal, sin éxito. Amagó luego con un plan de estabilización más o menos encubierto mediante la fijación de un límite salarial del 17% frente a la previsión de incremento de la inflación del 22%. Finalmente consiguió organizar una negociación colectiva con la participación de Unión de Centro Democrático, Alianza Popular, el Partido Nacionalista Vasco, Convergencia Democrática de Cataluña, el PSOE, Socialistas de Cataluña y el PCE; que desembocó el 25 de octubre en la firma de lo que se llamaron los Pactos de la Moncloa, con un acuerdo de dos caras. La primera establecía una norma de limitación salarial, al 22%, con previsión de revisión si se desbocaba la inflación, un margen de despido libre de hasta el 5% de las plantillas de las empresas y la devaluación de la peseta; la segunda, reformas del código penal y de justicia militar, la modificación de la ley de orden público y la reorganización de los cuerpos policiales, la despenalización del adulterio y de la convivencia de hecho, reformas fiscales y del sistema de la seguridad social, políticas del suelo y de la vivienda para facilitar su acceso a las clases populares y otras medidas de signo político y social. La dirección del PCE justificó su firma aduciendo que esos pactos eran una primera muestra de la política de concentración democrática, e indujo a Comisiones a apoyarlos, como lo estaba haciendo UGT. No obstante, las contrapartidas sociales se administraron lentamente, incumpliéndose en parte y el resultado fundamental que se consolidó fue el componente de estabilización, a costa de los salarios y el empleo de los trabajadores. Aquel fue un trago que se hizo imposible de seguir; empezó a

transformar la decepción de la militancia en descontento creciente por el magro resultado de las concesiones que consideraba que había hecho y por el mantenimiento sin asomo de rectificación por parte de Carrillo de las líneas maestras de la política seguida en los dos últimos años.

A finales de aquel mismo año de 1977 empezó a abrirse una crisis en el seno del PCE cuya prolongación y desenlace sí constituyó un tropiezo grave. La crisis interna tuvo argumentos diversos que se fueron acumulando sucesivamente: discusiones sobre la gestión de la imposibilidad de la ruptura y el acierto en la firma de los Pactos de la Moncloa; dudas sobre la identidad ideológica propia, sobre la manera de seguir haciendo una política revolucionaria en una democracia parlamentaria y como parte de ella; equívocos sobre la cuestión territorial; y, finalmente, división profunda sobre la forma de organización y funcionamiento del partido. El catalizador que hizo de todo ello una mezcla implosiva fue psicológico, ya fuera la reacción autoritaria de Carrillo, que digirió peor la crisis que la decepción electoral, ya la de la revuelta de quienes no quisieron seguir cediendo, no ya en el campo político general, sino en el seno de su propio partido. Todo esto ayudado por un crecimiento demasiado rápido del partido, que multiplicó el efecto del factor personal al tiempo que hacía difícil el control de la formación por sus cuadros dirigentes máximos e intermedios.

Quizás el factor más importante para su exasperación fue el derrumbe de las expectativas de una generación militante que a la muerte de Franco tenía entre 25 y 40 años, llegaba a la edad de su plenitud personal y política, y que, en contra de lo pensado, vio que todo quedaba todavía por hacer y que lo considerado posible iba camino de convertirse en una quimera; o, como escribiera Sacristán sobre la propuesta eurocomunista, en “una insulsa utopía”. Era en cierta manera una repetición del mal trago que tuvieron que pasar los partidos comunistas en su nacimiento, cuando en 1921 Lenin y Trotsky les dijeron que no cabía seguir pensando la revolución en términos de inmediatez, sino en el horizonte de un periodo de años probablemente largo. Con el problema añadido de no disponer, en este caso, de ninguna autoridad que hiciera aquel tipo de reflexión y recondujera al movimiento comunista para adaptarse a lo imprevisto. Lo expresó de manera genérica Carlos Alonso Zaldívar en el Comité Central de noviembre de 1980: “Nos hemos educado en el convencimiento, mezcla de esperanza y de voluntad, de que en España las libertades iban a ser una fuerza dinámica que iban a llevar las cosas adelante”[46].

El segundo factor psicológico, que paradójicamente se agravaba con el

crecimiento de la afiliación, fue el choque que supuso la asunción de responsabilidades de gestión, sobre todo tras la celebración de las elecciones municipales de 1979. El choque tenía más de una cara. Por un lado, estaba la desazón generada por la obligación de asumir tareas administrativas cotidianas, que dejaban poco tiempo para otra cosa, incluida la reflexión política; por otro, se encontraba la dificultad de combinar esa reflexión con decisiones que en la escala local resaltaran el perfil comunista de la gestión municipal. Lógicamente, la mayor parte de cuadros con experiencia militante desde los tiempos de la dictadura tuvieron que asumir ese tipo de responsabilidades, sin que por otra parte quisieran alejarse de las tomas de decisión políticas internas y de sus escenarios organizativos. Además, el PCE no pudo volcar a su favor de manera masiva, como sí lo hizo el PSOE, a sectores profesionales y de los aparatos de Administración local y general que no necesitaban ya aprender de qué iba esa Administración. Finalmente estaba el distanciamiento entre los cuadros implicados en la Administración local y los órganos de dirección del partido en las diversas escalas, en los que predominaban o militantes demasiado veteranos o afiliados demasiado recientes. En este último caso el factor psicológico se traducía inmediatamente en un problema funcional del partido.

El factor psicológico afectó sobre todo a los cuadros. La crisis del PCE y del PSUC —que fue paralela e interactuó con ella— no fue una rebelión de “la base”, fue una rebelión de cuadros y, precisamente por esa razón, resultó extraordinariamente dañina para un partido comunista que tenía en la red de cuadros su columna vertebral. Y no fue inevitable. Podría haberse previsto o amortiguado si antes de la muerte de Franco se hubiese avanzado en la consideración de las discontinuidades del proceso de la democracia a la democracia política y social. La elaboración del proyecto de esta no fue mucho más allá del enunciado y no se consideró la previsión del retroceso más allá de un par de respuestas primarias, tampoco examinadas a fondo: que había que respetar siempre el resultado de las elecciones en democracia y que, si constituida la democracia política y social, una parte de la burguesía —o de la sociedad, para simplificar—, que se reputaba que sería siempre minoritaria, se rebelaba contra ella, sería entonces legítimo el uso de la fuerza. No se exploró la eventualidad de que, después de la ruptura, pudiera producirse un giro adverso que bloqueara con instrumentos institucionales democráticos el desarrollo de la democracia social; y no se percibió a tiempo que la salida de la dictadura no sería la ruptura, ni siquiera la pactada, sino una reforma pactada pendiente de desarrollos importantes en el periodo constituyente. Las advertencias sobre semejantes incidencias en el proceso continuo hasta el socialismo se habían

dirigido más a tranquilizar a las clases medias y los aliados políticos, a desarmar la propaganda anticomunista, que a dar respuesta a la militancia del partido; ejemplo de ello era la extraordinariamente superficial consideración de que el dominio de las políticas keynesianas, en retroceso precisamente desde el estallido de la crisis económica mundial, preparaba el terreno para la nacionalización y posterior planificación de sectores estratégicos de la economía.

La propuesta de la “concentración democrática” fue una salida táctica de continuidad que no estuvo acompañada por la consideración estratégica sobre cómo había dejado al proyecto de la revolución democrática política y social la frustración de la ruptura. El freno al desarrollo de ese proyecto, hasta entonces considerado sin solución de continuidad con el fin del franquismo, había llegado antes de lo esperado y era imprescindible un análisis en profundidad del por qué y una reconsideración estratégica de cómo se había de seguir. El análisis no podía quedarse en una superficial constatación de la correlación de fuerzas electorales y la reconsideración no podía reducirse a una nueva consigna táctica sin más. A lo que obligaba el momento era a desmenuzar hasta el fondo las razones de ese cambio de correlación, que trastocaban la que se había producido en la movilización contra el franquismo; reducirlas a la irrupción del PSOE, el peso del anticomunismo y los molinos de viento mediáticos contra los que se había luchado era de una insuficiencia palmaria. Tras esa obligación había que volver a conectar, como se había hecho en el tránsito de los sesenta a los setenta, las consignas de acción política, las propuestas tácticas a la reflexión estratégica; lo contrario, que es lo que Carrillo impulsó, anclaba al partido en el tacticismo y lo abocaba a que la desmoralización y la riña interna fueran los sucesores inmediatos de la decepción. En esta última deriva incidió también la escasa reflexión sobre el partido de masas. Aparte de la acertada suposición de sus bondades, no se tuvieron en cuenta los ritmos deseables de crecimiento y los procesos de formación ideológica y política de los militantes; por el contrario, el abandono precipitado de la organización por sectores sociales en beneficio de las secciones territoriales, acordado en 1977, alejó al partido de las movilizaciones sociales —dejadas en manos de los sindicatos— y primó en él la cantidad a la calidad militante. Rebasar los 200.000 militantes en el IX Congreso de abril de 1978 no tuvo futuro, la crisis de los cuadros hizo descender esa militancia a 160.000 en el X Congreso en 1981.

El empeño de la dirección del PCE en circunscribir el debate a la siguiente opción táctica llevó a revestirlo de un debate ideológico, que se hizo en falso. Carrillo decidió ponerse al frente, más para controlarlo que para impulsarlo, y,

sobre todo, lo hizo falseándolo; invirtiendo los términos, no derivándolo del reconocimiento de la realidad, sino imponiendo un discurso ideológico parcial para legitimar la acción política que él proponía y solo esa. Promovió el ideologismo en su peor dimensión; incluso de una manera grosera, imponiendo el debate de consignas para cortocircuitar la autocrítica incipiente. Esa imposición tuvo dos referentes: el "leninismo" y el "eurocomunismo", cuya aceptación o rechazo se convirtió exageradamente en bálsamo de fierabrás de la "renovación" o en chivo expiatorio de la decepción. Su discusión se realizó de forma instrumental, invocando aquellos referentes como pantalla o bandera de conveniencia; no llevó a nada positivo ni resolvió los problemas reales. Por otra parte, en los intersticios de los debates se fue colando la cuestión, largamente pendiente, de la relación entre los partidos comunistas, en particular los de Europa occidental, y el PCUS.

Carrillo anunció por sorpresa, en una conferencia en la Universidad de Yale, en el transcurso de una gira por Estados Unidos en noviembre de 1977, que iba a proponer al partido, en su próximo congreso, el abandono del "leninismo" como señal de identidad. Al parecer no previó que sus palabras fueran recogidas por la prensa española, a la que no invitó a la conferencia, pero el hecho es que la agencia Efe las recogió y los militantes del PCE y del PSUC se enteraron, de la peor manera, de la nueva pretensión del secretario general (Morán, 1986). Tal como se produjo pudo dar la impresión de una ocurrencia más. Sin embargo, la cuestión de la definición identitaria de los partidos comunistas de Europa occidental estaba en el aire; fuera en el sentido de su contenido de clase en una estructura social que se había transformado en los últimos treinta años, fuera en el de su identidad ideológica, habida cuenta de la asimilación de la fórmula del "marxismo-leninismo" al estalinismo, reforzada por la disidencia china. El IV Congreso del PSUC, celebrado entre los últimos días de octubre y los primeros de noviembre, sin la asistencia de Carrillo por su viaje a Estados Unidos, encontró una formulación abierta a lo que entonces eran diferentes sensibilidades de la organización: los nuevos estatutos del PSUC pasaban a considerarlo como una organización "basada en los principios del marxismo, del leninismo y de otras aportaciones de la práctica y el pensamiento revolucionario" (Cebrián, 1997).

Sea como fuere Carrillo colocó el debate sobre una vía autodestructiva, al servicio de las preocupaciones políticas inmediatas: desactivar la persistencia del anticomunismo y hacer posible la "concentración democrática", y atraer votante popular, de las clases trabajadoras y de las clases medias, que había optado en las

elecciones de junio de 1977 por el PSOE. No conseguiría nada de eso, pero sí dar una bandera a las voces críticas que empezaban a levantarse y generar un equívoco de enfrentamientos entre viejos y nuevos, dogmáticos y renovadores, prosoviéticos y antileninistas, disyuntivas todas ellas inexactas que prolongaron el retraso en abordar los problemas reales. En vísperas del IX Congreso del PCE, que se celebraría entre el 19 y el 23 de abril de 1978, el debate precongresual se focalizó en la propuesta de la Tesis XV, que lo definía como “un partido marxista revolucionario y democrático que se inspira en las teorías del desarrollo social elaboradas por los fundadores del socialismo científico Marx y Engels y en su método de análisis”; todo el mundo entendió que el significado principal de esa fórmula era lo que no contenía: ninguna alusión a Lenin.

Carrillo mantenía todavía la mayor parte de su prestigio y de su autoridad interna y el control de la organización, por lo que las conferencias territoriales se decantaron en general en favor de la Tesis XV, por mayorías que iban desde importantes hasta abrumadoras: 79% en Madrid, 82% en el País Valenciano, 90 % en Andalucía, más de ese porcentaje en Badajoz, 99% en Baleares, etc. (Andrade, 2012). Sin embargo, le falló el control en el PSUC, en el que, por una ajustada mayoría del 52%, se impuso, frente a la defensa por parte del Comité Ejecutivo del partido de la Tesis XV, la propuesta defendida por Francisco Frutos de plantear como alternativa la definición que se había aprobado el IV Congreso meses atrás. Para mayor desazón de la dirección del PCE, el secretario general del PSUC, que había encabezado la defensa de la Tesis XV, había presentado, al propio tiempo, un informe autocrítico sobre la acción política comunista en los dos últimos años. La disidencia del PSUC inquietó a la dirección del PCE; el partido catalán suponía más de la tercera parte de la fuerza parlamentaria comunista. Más adelante Carrillo empeoraría las cosas, tanto la relación entre el PCE y el PSUC como la situación interna en este último; en una reunión con el Comité Ejecutivo en octubre de 1980, planteó que el partido catalán se integrara en el PCE como una federación. La propuesta fue apoyada por Serradell y Ardiaca, que ya en el pasado habían sustentado esa incorporación del PSUC al PCE; sin embargo, fue rechazada tanto por Gregorio López Raimundo y Antoni Gutiérrez Díaz, presidente y secretario general respectivamente, como por dirigentes críticos como Antoni Lucchetti. Resultó descartada, no sin consecuencias, al aumentar las desconfianzas tanto entre la dirección de ambos partidos como en el seno del PSUC.

El IX Congreso del PCE registró algunas pocas tensiones en el ámbito de la discusión política, producidas por la falta de autocrítica de Carrillo en la defensa

de la línea seguida, manteniendo su inclinación a ver solo avances relativos cuando ya se empezaban a producir retrocesos claros. Por el contrario, la unidad se rompió en la discusión de la Tesis XV, finalmente aprobada por 968 votos a favor contra los 248 recogidos por la enmienda defendida por Frutos; la delegación catalana había elevado el porcentaje de la disidencia, que se había manifestado en el resto de conferencias territoriales previas al congreso. La discusión, ideológicamente estéril, empezó a reventar las costuras internas.

Por el momento, empero, los avances electorales en 1979 taparon la crisis incipiente, reactivando en sus campañas a la militancia. En las elecciones generales del 1 de marzo del 1979, el PCE y el PSUC obtuvieron casi 1.940.000 votos, el 10,8%, y 3 diputados más que en 1977, todos ellos del PCE. El avance fue todavía mayor un mes más tarde, en las municipales del 3 de abril, en las que obtuvieron 2.140.000 votos en toda España, el 13,6 %, y 3.732 concejales; un aumento del 25% en los votos y de cuatro puntos en el porcentaje total con respecto a junio de 1977. Los años de libertades políticas restauradas parecían sentar bien a los comunistas. La perspectiva de reducir el desequilibrio con el PSOE parecía confirmarse, al obtener este partido 4,6 millones, un 15% menos; aunque su mayor presencia local le permitió obtener algo más del triple de concejales. Además, el acuerdo entre el PSOE y el PCE para la elección de alcaldes y formación de mayorías municipales reactivó la moribunda política comunista de coalición. Los nueve concejales comunistas deshicieron el empate a 25 del PSOE y UCD y dieron la alcaldía a Tierno Galván en Madrid, y una parte del Gobierno municipal al PCE. La mayoría “de progreso” pactada en la ciudad de Barcelona entre el PSC-PSOE, el PSUC y Convergència Democràtica de Catalunya la reforzó prefigurando un Gobierno local de concentración democrática. En Córdoba, Julio Anguita fue elegido alcalde al frente de un Gobierno integrado por el PCE, el PSOE y el Partido Socialista de Andalucía. No obstante, la esperanza de que el PSOE virara a la izquierda, mirando al PCE como un aliado indispensable, se vino abajo aquel mismo año. En mayo de 1979 Felipe González inició una maniobra para aislar a las posiciones de izquierda de su partido, con el pretexto en su caso del abandono del “marxismo”, culminada en el congreso extraordinario de septiembre del mismo año, que ratificó el liderazgo de González. Confirmado como líder socialista indiscutido, se dispuso a orientar al PSOE como única alternativa al Gobierno de una UCD en crisis, que en febrero de 1981 hizo dimitir a Suárez y lo sustituyó, al frente del partido y del Gobierno, por Leopoldo Calvo Sotelo, afín a la derecha conservadora, pero carente por completo de carisma.

La focalización que Carrillo se empeñó en mantener en el polo del coalicionismo, subordinando todo a la consecución de la concentración democrática, lo que era un ensueño absoluto, embarrancó la política del PCE; le impidió capitalizar el descontento social por la prolongación de la crisis económica y la falta de contrapartidas sociales a la política de estabilización. El secretario general del PCE bloqueó que el partido diera una respuesta política propia al proyecto del Estatuto de los Trabajadores. En el Comité Central de noviembre de 1979, rechazó la propuesta de Camacho de que se tomara en consideración la petición de una parte de Comisiones Obreras de impulsar una huelga general puntual en protesta del retroceso salarial y del proyecto de estatuto presentado por la UCD. Para Carrillo esa acción "extrema" no tendría más consecuencia que aislar al PCE y podía desestabilizar el proceso democrático (Andrade, 2012). El PCE se disociaba de toda acción de clase y limitaba la movilización obrera al sindicalismo, al que también reducía a la lucha económica defensiva, olvidando por completo los postulados iniciales de CC OO como movimiento sociopolítico. Ese embarrancamiento facilitó el avance de la propuesta de Felipe González, flanqueado por una UGT que incluso pareció en algunos momentos más combativa que Comisiones.

El comunismo español entró en barrena a lo largo de 1981, desperdiciando los avances de 1979. Primero con el V Congreso del PSUC, en enero de aquel año, en el que otra discusión de términos —el abandono o no del "eurocomunismo"— desvió la atención de la falta de estrategia política. El mantenimiento del "eurocomunismo" postulado por la mayoría de la dirección fue rechazado por 424 votos a favor, 350 en contra y 21 abstenciones, pero generó una notable confusión, no reflejada en la amplísima mayoría con que se aprobaron el resto de cuestiones. López Raimundo y Gutiérrez Díaz volvieron a ser los más votados, habilitados así para seguir en sus puestos; sin embargo, ambos se sintieron desautorizados y se negaron a mantenerse en la Presidencia y la Secretaría General. De manera imprevista tuvieron que ser sustituidos respectivamente por Pere Ardiaca y Francisco Frutos, al frente de un Ejecutivo integrado mayoritariamente por los que se identificaban como "leninistas", con la inclusión del sector que más adelante fue denominado "prosoviético" por su defensa de la intervención de la URSS en Afganistán. Lo que siguió en meses sucesivos fue un juego fraccional a tres bandas, en el que, a instancias de la dirección del PCE, la mayoría de los "leninistas", con Frutos al frente, llegó a un compromiso con los "eurocomunistas" para la celebración de una conferencia de revisión del conflicto creado. La IV Conferencia, en julio, recuperó la inclusión del "eurocomunismo", pero se aceleró la ruptura. En diciembre, Ardiaca,

Serradell y diez miembros más del Comité Central, que se habían opuesto a la celebración de esa conferencia en nombre del respeto al acuerdo del congreso, fueron expulsados del PSUC por trabajo fraccional; pasaron entonces a encabezar una escisión, consumada en abril de 1982 con la fundación del Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC), que arrastró una parte importante de militantes, en torno a los 7.000, y cuatro de los ocho diputados comunistas del Parlamento de Cataluña. Su orientación prosoviética quedó confirmada al ser reconocido por el PCUS y los partidos comunistas del bloque del "socialismo real". Ciertamente, el PCUS debió ver la posibilidad de volver a tener una incidencia en el comunismo español que las escisiones grupusculares de Eduardo García y Enrique Líster no le habían proporcionado.

Todos perdieron en aquel insólito golpe que el PSUC se infligió a sí mismo. En las elecciones generales de 1982 el PSUC pasó del 17,4% de los votos en Cataluña, en 1979, al 4,6%, y perdió siete de los ocho escaños que tenía desde 1977; el PCC, con un más que magro 1,4% no consiguió ningún diputado a Cortes. Sumadas, las dos formaciones no habían conseguido más que un tercio del voto anterior a la ruptura. No fue una consecuencia pasajera, circunscrita al carácter de aquellas elecciones dominadas por la irrupción de Felipe González. Las autonómicas de 1984 ratificaron el retroceso de todo el espacio comunista y la correlación entre los dos partidos rivales; el PSUC descendió del medio millón largo de votos, el 19%, y 25 diputados de 1980 a poco más de 160.000 y seis diputados; el PCC se quedó en 71.000 votos, un 2,8% que no le permitió conseguir ningún escaño. El comunismo se hundió en Cataluña en esos primeros años ochenta. El PSUC decidió hibernar en 1990, en beneficio de Iniciativa per Catalunya —que exploraremos más adelante—, que fue desmarcándose de la identidad comunista. La minoría que acabó rechazando ese abandono de identidad, con Antoni Lucchetti al frente y el concurso de Gregorio López Raimundo, se separó para fundar en 1997 el PSUC Viu (PSUC Vivo)[47], una formación minoritaria que hasta el presente no ha conseguido tener representación minoritaria, aunque fue reconocida por el PCE como su organización correspondiente en Cataluña.

El escenario de división y resolución disciplinaria de los conflictos se instauró también en el PCE, sin aquel efecto de autodestrucción padecido en Cataluña. El X Congreso en julio de 1981 repitió la presentación escasamente autocrítica de la actuación política del partido y el apoyo mayoritario al informe del secretario general, aunque ya con un grueso importante de discrepancia que se resistía a ser activa: 689 votos a favor por 64 en contra y 266 abstenciones. El peor síntoma

fue que la discusión se centró en la cuestión organizativa, algo que venía anunciándose con las crecientes críticas a los modos de Carrillo. El partido pasó de no entrar a discutir el traspiés de 1976-1977 y cómo adaptar la estrategia de la vía democrática al socialismo en condiciones políticas y económicas adversas, a ensimismarse con las características personales de los órganos de dirección, el sistema de organización por agrupaciones y el modelo territorial de la formación. La discusión de las características personales era endiablada por el carisma y el peso que Carrillo mantenía en el PCE; y la discusión sobre la funcionalidad de las agrupaciones apuntaba a devolver al partido su capacidad movilizadora mediante la recuperación, no exclusiva, de la organización sectorial. No obstante, la cuestión más corrosiva fue la del modelo de partido, en la que el PSUC, que se había alejado de Carrillo, y el PC de Euskadi abanderaron la conversión del PCE en un partido federal, para adaptarse mejor al Estado de las autonomías.

El juego nominalista no ayudó tampoco en este caso a facilitar el debate y sobre todo a abrir el que se seguía obviando. Los “renovadores”, que habían publicado un manifiesto adoptando esa etiqueta el 5 de mayo, se identificaron por su defensa del cambio organizativo y generacional del partido; así como la sustitución de la jerarquía y la dirección individualizada por el reconocimiento de la pluralidad como un hecho positivo y la defensa de la dirección colectiva. Pero también tendían a alinearse con las posiciones “eurocomunistas” y de apertura ideológica, y se enredaron, perdiendo buena parte de sus posibilidades, defendiendo la federalización del partido. El congreso registró una correlación de dos tercios a favor de la dirección y de un tercio que estaba resueltamente en contra o no la apoyaba, en el que se mezclaban “renovadores” y críticos desde la izquierda. Carrillo pudo salir del encuentro reelegido, pero no reforzado. Además, cometió un error de libro, constituyendo un secretariado monolítico, del que excluyó a todos los renovadores, incluidos Carlos Alonso Zaldívar, Pilar Brabo y Manuel Azcárate, y dejando a este último también fuera del Ejecutivo. Algo que no podía sino consolidar la fisura.

La cuestión territorial remató la polarización. El PC de Euskadi había iniciado, bajo la dirección de Roberto Lertxundi —que había militado inicialmente en ETA hasta que en 1972 se integró en el PCE—, un proceso de fusión con Euskadiko Ezkerra, defendido por una mitad del partido y rechazado por la otra, mayoritaria en militantes. Finalmente, el Comité Central del PCE dio la razón a estos últimos en octubre de 1981 autorizando la celebración de un congreso extraordinario de la organización vasca. Se detuvo con ello la fusión, que no

obstante mantuvieron Lertxundi y una parte minoritaria de la organización. El conflicto vasco se trasladó al PCE. Los “renovadores” del Comité Central, encabezados por los ya mencionados Brabo y Azcárate, habían intentado evitar la resolución de octubre, sin éxito, para impedir la ruptura interna del PC de Euskadi. Cuando esta se produjo, no solo siguieron apoyando a Lertxundi, sino que organizaron en Madrid un acto, el 5 de noviembre, bajo el título de “Hacia una nueva izquierda vasca”, protagonizado por Lertxundi y Mario Onaindía. Esa acción llegó al Comité Central del 10 y 11 de noviembre, en el que Carrillo amenazó con dimitir si no se adoptaba la máxima sanción contra los miembros de la dirección del PCE que habían participado en la convocatoria y la realización del acto. Azcárate, Brabo, Záldivar, Arroyo y Jaime Sartorius fueron expulsados acusados de actividad fraccional por 67 votos contra 24.

La división resuelta en términos disciplinarios, la falta de perspectivas claras, desembocaron en el desastre de las elecciones de octubre de 1982. A ellas no solo acudió el PSOE como alternativa de Gobierno con posibilidades, sino que el PCE se presentó como opción capitidisminuida por sus querellas. Mucho más de la mitad del electorado conseguido dos años antes optó por buscar la victoria de Felipe González, detener la involución iniciada por UCD y dramáticamente apuntada por el intento de golpe del 23 de febrero de 1981, y esperar que, cuando menos, el reformismo democrático dominara la acción de gobierno. Un año antes, en mayo de 1981, Mitterrand había conseguido la Presidencia de la República en Francia en segunda vuelta gracias al voto comunista y había formado un Gobierno de coalición con cuatro ministros del PC francés; la esperanza de que el voto a Felipe González fuera también útil para un hipotético Gobierno de la unidad de la izquierda, solo posible si el PSOE ganaba las elecciones, motivó también el cambio de papeleta. La suma de todos esos factores subjetivos fue desastrosa para el PCE y el PSUC, que no consiguieron más que 846.500 votos, el 4%, y cuatro diputados, incluido uno del PSUC. Ese resultado y la mayoría absoluta conseguida por el PSOE hacían prescindible por completo al PCE, facilitando la esperanza de Felipe González de no tener que contar con él. El 9 de junio Santiago Carrillo presentó su dimisión, tras recibir críticas duras y mayoritarias, incluso de personalidades históricas como Marcelino Camacho. Se abrió un periodo de búsqueda de una sucesión al secretario general al cabo del cual fue elegido Gerardo Iglesias, con el apoyo de Carrillo, que pilotó ese proceso.

Anguita o la supervivencia del PCE

Carrillo esperaba que Iglesias desarrollara una gestión de continuidad. Sin embargo, el nuevo secretario general no solo se liberó de los intentos de tutela del dirigente dimitido, sino que anunció el inicio de una rectificación política, con la propuesta de impulsar una convergencia de toda la izquierda que estuviese dispuesta a constituirse en alternativa al PSOE. La estéril propuesta de concentración democrática quedó abandonada. A pesar de la reacción de Carrillo, que llegaría a conceptuar de sectaria la nueva política, Gerardo Iglesias fue ratificado por el XI Congreso del partido, en diciembre de 1983, con un apoyo heterogéneo, que incluía antiguos renovadores y un amplio abanico de posiciones críticas a las cesiones hechas durante la transición y al abandono del ideario comunista histórico. Su gestión no resultó fácil. Carrillo se convirtió en aquello que siempre había condenado, el opositor público a la línea del partido y en singular al secretario general; hasta que fue expulsado del Comité Central en 1985 y abandonó el partido que había estado asociado a su nombre desde hacía casi cuarenta años para constituir una nueva formación, el Partido de los Trabajadores de España-Unidad Comunista, de vida breve por su escaso apoyo social —un 1,1% en las elecciones de 1986—, que desapareció en 1991 en el seno del PSOE.

El partido de Carrillo fue insignificante, pero no así la trascendencia de la crisis en el PCE. Con Carrillo se fueron algunos de los cuadros significados del partido desde los sesenta, Adolfo Piñedo, Julián Ariza, el vasco Ignacio Latierro —antagonista de Lertxundi—, con una particular incidencia en la organización de Madrid y en el sector del metal de Comisiones Obreras. Además, esa división no vino sola. En octubre de 1983, Ignacio Gallego abandonó el PCE y promovió, con la colaboración del PCC y el apoyo del PCUS, la formación del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE). Gallego arrastró también a algunos dirigentes importantes como Jaime Ballesteros, el cura García Salve, Fernando Sagaseta, y en su cúpula dirigente figuraron de manera destacada los representantes del PCC —Ardiaca, Joan Ramos, Celestino Sánchez, Joaquim Boix—, que estableció con el PCPE la relación que el PSUC había tenido con el PCE.

A pesar de las turbulencias internas, el proyecto de convergencia fue favorecido por los costos sociales de la política desarrollada por Felipe González. El

Gobierno del PSOE sustituyó las propuestas socialdemócratas incluidas en el programa electoral de 1982 por una agenda de contrarreformas, que incluyeron, entre otras medidas, la reconversión industrial, el despido libre, la reforma de las pensiones y una ley de alquileres para el fomento de la propiedad inmobiliaria. Abandonó la posición equívoca sobre el ingreso en la OTAN, ejecutado por el Gobierno Calvo Sotelo en mayo de 1982, manteniendo a España en dicho organismo a cambio de plantear la decisión definitiva en referéndum, el 12 de marzo de 1986. El anuncio del plebiscito catalizó la aproximación de todos los que podían constituir desde la izquierda la alternativa al Gobierno del PSOE, constituyendo plataformas unitarias de defensa del abandono de la OTAN. Felipe González pudo salvar la situación con una ajustada mayoría del 52,5% a favor de la continuidad; al propio tiempo, el casi 40% de votos en contra consolidó la nueva línea comunista. En la estela de ese éxito de movilización, si no de resultados, y ante la perspectiva de las elecciones generales de junio de 1986, se constituyó en abril una plataforma que adoptó la denominación de Izquierda Unida (IU), integrada por el PCE, el PSUC, el PCPE, el grupo socialista disidente de Alonso Puerta (Partido de Acción Socialista[48]), Izquierda Republicana, la Federación Progresista de Ramon Tamames[49], el Partido Carlista y el Partido Humanista. Con retraso, se constituyó, en febrero de 1987, Iniciativa por Cataluña, referente catalán de IU, integrada por el PSUC, el PCC y el grupo de los Nacionalistas de Izquierda, aunque el PCC abandonó la plataforma dos años más tarde.

El resultado de las elecciones fue una nueva decepción. La coalición política consiguió 935.500 votos en toda España, apenas el 4% del total y siete escaños: cuatro del PCE y uno del PSUC —los mismos que ya tenían— uno para el PCPE, para Ignacio Gallego, y uno para Ramón Tamames. Nada que ver con las expectativas generadas por la campaña contra la OTAN. La única satisfacción se produjo en Andalucía, donde el voto recuperó un 29%, consiguiendo tres escaños del total, el triple que en 1980; en el conjunto del voto comunista español el andaluz significó el 29%, también. Andalucía volvió a ser, como en los años treinta, la cantera básica del PCE. Gerardo Iglesias, el iniciador del nuevo rumbo, quedó bajo interrogantes por esos datos y decidió abandonar la Secretaría General y la primera línea de la acción política. Se abrió un nuevo momento de incertidumbre sucesoria, hasta que el XII Congreso, en febrero de 1988, eligió como nuevo secretario general al malagueño Julio Anguita, exitoso alcalde de Córdoba desde 1979 y único alcalde que el partido tenía en una capital de provincia. Anguita, que no pertenecía al núcleo de la dirección nacional, lo aceptó después de que el secretario general de los comunistas

andaluces Felipe Alcaraz, figura clave en aquel episodio, se lo propusiera antes sin éxito a Francisco Frutos (Anguita y Andrade, 2015). El malagueño tenía el capital de su gestión municipal y su popularidad en Andalucía, el hecho a favor de que no se había visto involucrado en las batallas intestinas, aunque ya desde 1980 había discrepado de los modos de Carrillo, y un carácter fuerte y decidido en el que destacaba el mantenimiento de las posiciones de principio, algo que se venía echando en falta desde las renuncias de la Transición.

Su llegada a la Secretaría General tuvo a favor el agravamiento de las consecuencias sociales de la gestión gubernamental socialista, que culminó en la huelga general contra la reforma de las pensiones el 14 de diciembre de 1988, convocada por CC OO y UGT. La acción apagó España por un día, incluida TVE, que dejó de emitir en toda la jornada, y proporcionó nuevo aliento al proyecto de IU. 1989 fue el año del despegue político de Anguita y la recuperación de las organizaciones que lideraba. Para empezar, reunió una conferencia del PCE, el 21 y 22 de enero, para elaborar la nueva línea ante la Comunidad Económica Europea; en la que el Acta Única, en vigor desde julio de 1987, significaba su configuración en beneficio del poder de los gobiernos y las políticas neoliberales. Anguita y Salvador Jové, miembro del equipo de Iglesias que se convirtió en brazo derecho de Anguita en política económica, aunque no solo en ella, rechazaron el Acta Única y defendieron una propuesta de integración europea, política y económica, federal y solidaria, que fue aprobada por unanimidad. Anguita dio un segundo paso adelante reuniendo en febrero de 1989 la Primera Asamblea Federal de la coalición, que lo eligió como coordinador general. Luego, tras conseguir el visto bueno de los soviéticos en una visita a la URSS, consiguió la reintegración de la gran mayoría del PCPE, con Gallego y Ballesteros al frente. Y, para acabar, llevó a IU a su primer éxito, al lograr en las elecciones generales de octubre del mismo año casi 1.860.000 votos, el 9,1%, y 17 diputados, de los que 13 eran del PCE y 3 de Iniciativa per Catalunya. No eran todavía los resultados de 1979, sobre todo en escaños conseguidos, pero se acercaba mucho en apoyo social, y, tras la acumulación de crisis internas y divisiones desde aquellas fechas, era sin lugar a duda un resultado más que satisfactorio. En Andalucía siguió creciendo el apoyo electoral, para rebasar los 414.000 votos, aunque solo se consiguió un diputado más. Pero lo más relevante fue el salto en Madrid, donde se pasó de 414.000 votos, 100.000 más que en 1979, y se consiguieron cinco diputados, uno más que en aquella fecha y tres más que en 1986. La nueva política de alianzas se consolidó. Aunque su flanco débil fue Cataluña, donde apenas se obtuvieron 231.500 votos, dos diputados del PSUC y uno de los Nacionalistas de Izquierda,

lo peor, por otra parte, fue que el PCC había abandonado la coalición a finales del año anterior y tampoco participó, excepto una minoría, en la reunificación comunista, en este caso en el seno del PSUC, lo que más tarde restaría posibilidades al sector que se opuso a la hibernación y al abandono de la identidad comunista.

IU ganó credibilidad como alternativa de izquierdas. Pero tenía un problema que nunca pudo resolver, dependía en exceso del PCE; era fundamentalmente su imagen de marca electoral y su configuración como coalición de partidos dejaba en evidencia que solo el PCE tenía entidad social y política suficiente. Eso, que podía ser beneficioso en el rodaje inicial, en la medida en que le daba base organizativa sólida, se convirtió en algo más que un inconveniente cuando el PCE volvió a entrar en barrena dos años más tarde. En los antecedentes de la nueva y grave crisis que se abrió en 1991 estaba la heterogeneidad de los que habían apoyado a Iglesias y a Anguita. Y por debajo de esa heterogeneidad, algo más profundo, la subsistencia de la ruptura del hilo estratégico que había generado la primera quiebra del PCE entre 1977 y 1982: el déficit de previsión ante el triunfo de la reforma y la instauración de una democracia parlamentaria gobernada no en favor de su evolución social, sino todo lo contrario, y, sobre todo, el déficit de respuesta ante ello, habiendo limitado esta a consideraciones de política de coalición a la espera de conseguir la supervivencia del partido. La nueva dura crisis del PCE repercutió en IU, que no estuvo en condiciones de capitalizar significativamente la derrota del PSOE en las elecciones de 1996, tras 14 años de gobierno. IU había obtenido 2.254.000 votos, el 9,6%, en 1993, aumentando solo un diputado, y pasó en 1996 a 2.640.000, 10,5% y 21 diputados, 12 del PCE y 2 del PSUC. Era un proceso de crecimiento, sin duda, pero lento e insuficiente para compensar el declive del PSOE. La alternativa al “felipismo”, al oxímoron del socialismo neoliberal, no fue una izquierda en la que el PCE pudiese tener peso decisivo, sino la derecha: el Partido Popular liderado por Aznar y apoyado por los nacionalistas catalanes y vascos.

La crisis se desencadenó con el hundimiento del “bloque socialista” a partir de 1989, que habría de culminar en la desaparición de la URSS, en diciembre de 1991, algo que nadie había previsto y menos en la forma en que se produjo. Una de las consecuencias fue la enorme crisis de identidad que se abrió en el comunismo europeo; de manera particular en el PC italiano, que, dirigido por Achille Occhetto, optó por refundarse en términos socialdemócratas y cambiar en febrero de 1991 su histórico nombre por el de Partido Democrático de la Izquierda. Ese abandono de la propia cultura, la renuncia a considerar el poso

constructivo de la tradición comunista y emprender el regreso a una socialdemocracia —que ni siquiera defendía ya la Internacional Socialista y desde 1945 había sustituido su programa por el keynesianismo de izquierda— repercutió también en el PCE. Los antiguos renovadores liderados por Sartorius, aglutinados en la corriente de Nueva Izquierda, y una parte del Ejecutivo heredado de Iglesias por Anguita defendieron tomar el mismo camino que los italianos. Anguita lo rechazó y consiguió evitarlo, salvando la supervivencia del PCE, finalmente amenazada desde dentro y no por la derecha del sistema, secundado por un nuevo equipo, ya plenamente propio, con Jové, Manuel Monereo, Frutos y Víctor Ríos. El XIII Congreso, en diciembre de 1991, apoyó la continuidad dando el 75% de los votos a la propuesta de su secretario general, que quedó ratificado.

No pudo acabar ahí. La confrontación se trasladó a IU, después de que la Comunidad Económica Europa se convirtiese en Unión Europea, con moneda única y banco central “independiente”, en virtud del Tratado de Maastricht del 7 de febrero de 1992. El PCE propuso no apoyar el tratado y exigir que fuera sometido a referéndum en España, como se había hecho ya en los Países Bajos, y no aprobado simplemente por las Cortes, entre otras cosas por sus implicaciones constitucionales y, desde luego, por el diseño económico que consagraba la hegemonía neoliberal. Por el contrario, Nueva Izquierda, el PSUC y otros sectores de IU, liderados por Sartorius, apoyaron ese voto en Cortes y la aceptación del tratado. La III Asamblea Federal de IU, en mayo de 1992, mostró su profunda división: la propuesta de la dirección del PCE salió adelante con el 60% de los votos. Lo peor fue que en la votación en Cortes, en la que IU acordó abstenerse para evitar la ruptura interna, el sector pro-Maastricht rompió el acuerdo y votó a favor. La ruptura se convirtió en una cuestión de tiempo.

Tras perder la mayoría en las Cortes en 1993, el PSOE desoyó la propuesta de apoyo que le hizo Anguita y optó por el de los nacionalistas catalanes. Todas las especulaciones, defendidas por Carrillo y la corriente de Nueva Izquierda, de un acuerdo inevitable con el primer partido de la izquierda quedaron rotundamente desmentidas. La dirección del PCE marcó la línea roja y buscó reforzar al PCE y a IU ante la caída libre del PSOE en 1995, agobiado por el agotamiento de su gestión y los escándalos de corrupción. Insistió en la independencia de la política de coalición comunista con respecto al PSOE, con la metáfora de “las dos orillas”, que no establecía un divorcio irreversible, sino que solo podría haber encuentro en un territorio programático común; y llamó incluso a no resignarse a ser la segunda formación de la izquierda, con su apelación al sorpasso, que

nunca pensó que pudiera ser inmediato, sino un horizonte, en cualquier caso, no quimérico. La iniciativa de Anguita fue rechazada por Nueva Izquierda, que se situó en rebeldía y acabó expulsada del PCE. En la misma posición que Nueva Izquierda estaba la mayoría de ICV, la que correspondía a la antigua militancia del PSUC y a los nacionalistas de izquierda y los ecologistas. El resultado electoral de 1996 no premió, como se ha visto, el esfuerzo del equipo de Anguita y abrevió el tiempo de ruptura de IU. Esta se hizo realidad en la V Asamblea, en septiembre de 1997, con la exclusión del Partido de la Nueva Izquierda; también de ICV, lo que condujo a la reformulación de la coalición en Cataluña, con la sola participación del PSUC Viu, el PCC y otros grupos comunistas menores, en la plataforma de Esquerra Unida i Alternativa, que pasó a ser el homólogo de IU en Cataluña. Con una relación fluctuante con ICV, con alianzas y rupturas, EUiA desapareció de hecho en junio de 2019, cuando su coordinador general, Josep Nuet, decidió cambiar de coaligado en favor de ERC. Entre una cosa y otra los diversos herederos del PSUC de 1977 no siguieron ni siquiera la recuperación del PCE impulsada por Anguita y el espacio comunista catalán se mantuvo fragmentado y cada vez más minoritario.

En resumidas cuentas, las modificaciones en la política de coalición no habían supuesto el motor de recuperación del PCE ni de una alternativa de izquierdas. Por el contrario, habían mantenido el debate político fuera de la raíz del problema. Anguita lo percibió planteando cuestiones más allá de la táctica, denunciando que el pacto constitucional de 1978 se había roto por el incumplimiento de las previsiones sociales de la Constitución y las injerencias de la monarquía —difícilmente discutibles en 1981; más evanescentes después, al margen del comportamiento personal de Juan Carlos I— e intentando reconducir la estrategia del PCE hacia la defensa de una Tercera República y la recuperación de la tesis del proceso constituyente. Pareció un acelerón, pero el problema principal residió en que Anguita no pudo gestionar su propia iniciativa en buena medida por su propio agotamiento físico, en 1997 sufrió un infarto. No solo por esa razón, también por las reticencias que encontró a sus nuevas iniciativas en el seno del PCE, y sobre todo por parte de CC OO, que le era absolutamente hostil. Anguita decidió renunciar a la Secretaría General del PCE y el XV Congreso, en diciembre de 1998, eligió a quien diez años antes no había querido serlo, Francisco Frutos. El antiguo secretario general del PCE se mantuvo como coordinador general de IU, pero tampoco fue ya su candidato en las elecciones del 2000, en las que Frutos encabezó el cartel de la coalición; la aportación principal del nuevo candidato fue un preacuerdo con el PSOE para apoyarle en la investidura a la Jefatura de Gobierno si este ganaba las elecciones.

Se reprodujo el batacazo del 1986, con un grado levemente menor, al reducirse sus votos a 1.263.000, el 5,4%, y sus diputados a ocho, siete de ellos del PCE.

El reto de recuperar los orígenes

o la tradición

Anguita se retiró por completo y la coordinación de IU pasó a Gaspar Llamazares, que representaba la reactivación de la propuesta de acercamiento al PSOE y la minimización de la presencia comunista. La dirección del PCE se resistió a tomarlo como línea general, e incluso intentó, sin éxito, sustituir a Llamazares por candidatos propios: Enrique Santiago en 2004 y Marga Sanz en 2007, representantes de una nueva generación militante formada en las Juventudes Comunistas durante los años de apogeo del Gobierno del PSOE. La historia de IU en los primeros años del siglo XXI es una cadena de pugnas constantes y magros resultados electorales que llegaron a su punto más bajo en 2008, cuando solo obtuvo 970.000 votos y un único diputado, el propio Llamazares. La del PCE, un empequeñecimiento constante, perdiendo el control de IU y manteniendo en 2005 solo 27.000 afiliados. En ambos casos se desperdició la ocasión de reactivar la izquierda y renovar y ampliar su militancia, que ofreció la importante movilización social en España en 2003 contra la guerra de Irak y la complicidad del Gobierno de Aznar con quienes la habían impulsado a base de mentiras, George Bush y Tony Blair. Quien acabó capitalizando el descontento no fue ni IU ni el PCE, sino el PSOE, que con un candidato no vinculado ya al equipo histórico de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, ganó de nuevo las elecciones generales en 2004 y también en 2008, sin mayoría absoluta, pero con un grupo parlamentario suficiente como para ser investido jefe de Gobierno y gobernar con el apoyo de los partidos nacionalistas catalán y vasco. Como había ocurrido en el pasado, la reducida minoría comunista resultó prescindible para el Gobierno socialista, convirtiendo una vez más la aproximación al PSOE pretendida por Llamazares en un esfuerzo inane.

Tras el fiasco de las elecciones de marzo de 2008, Llamazares dimitió de la Coordinación General de IU, para la que fue elegido en diciembre de aquel año

Cayo Lara, con el apoyo del PCE. El nuevo coordinador procedía del ámbito agrario, había sido uno de los impulsores de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas, y desde el año 2000 era el coordinador territorial de IU en Castilla-La Mancha. Una cara nueva con procedencia no partidaria cuya imagen prometía la renovación de IU. El partido pareció recuperar la orientación política de la plataforma y Cayo Lara dejó desde el primer momento clara su decisión de dejar de pretender algún tipo de alianza con el PSOE y, por el contrario, recuperar el espíritu inicial de Izquierda Unida; lo hizo abriendo la plataforma a diversas formaciones ecologistas, las dos formaciones rivales en Cataluña, ICV y EUiA, grupos de izquierda no comunista de ámbitos regionales y de nuevo Izquierda Republicana. Por su parte, el PCE acompañó en las formas el aire de renovación, eligiendo en su XIII Congreso, en noviembre de 2009, al cordobés José Luis Centella, secretario desde 2002 de su federación andaluza.

Los cambios pudieron reactivar ambas organizaciones, demasiado marcadas en los últimos tiempos por las querellas internas y los recelos mutuos. No obstante, lo que más contribuyó a su recuperación fue la caída en picado de la popularidad de José Luis Rodríguez Zapatero y el Gobierno del PSOE como consecuencia del estallido de la crisis financiera mundial de 2008, que en España agravó las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, iniciado un año antes. El Gobierno Zapatero no fue capaz de dar una respuesta creíble a la crisis, que se empeñó en negar durante largo tiempo; para finalmente adoptar, a partir de mayo de 2010, la drástica política deflacionista, de devaluación salarial y recorte drástico del gasto público, que le exigían la Unión Europea y el Gobierno de Estados Unidos, y concluir su mandato con la promulgación el 27 de septiembre de una reforma de urgencia de la Constitución, acordada con el PP, con el objeto de incluir en ella el techo del déficit público y la prioridad obligatoria del pago de la deuda sobre cualquier otro gasto del Estado. El giro económico del Gobierno Zapatero produjo una importante respuesta popular, con presencia mayoritaria de jóvenes, que culminó en las manifestaciones simultáneas por toda España del 15 de mayo de 2011, no convocadas ni orientadas por las organizaciones políticas y sindicales tradicionales, que significaron el inicio de un nuevo tiempo político en España.

El inicio de ese nuevo tiempo político no fue percibido de inmediato. Tampoco por el PCE e IU, que en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011 recuperó fuelle, con 1.681.000 votos, el 6,9%, y ocho diputados. No pudo avanzar más; su ausencia política en lo que pasó a denominarse el “movimiento del 15M”, la desconexión con los movimientos sociales, cuya relación siempre

había procurado, paralizó al PCE. Ni siquiera le quedaba la opción de impulsar una movilización obrera, encorsetada en las instituciones por los sindicatos mayoritarios y, en particular, por CC OO; a la defensiva y convirtiendo en doctrina inmutable la reivindicación económica y laboral, a la que Carrillo los quiso reducir en su tiempo, enterrando la bonita consigna del movimiento sociopolítico.

En contraste con esa parálisis comunista, de aquel movimiento del 15M surgió en 2014 un nuevo proyecto organizativo que combinó modernismo retórico e ideológico con una lectura rupturista de la situación política. Adoptó el “we can” de Obama, convertido en carismático lema de época, y se constituyó bajo el nombre de Podemos. Su grupo dirigente, encabezado por Pablo Iglesias, se inspiraba en la reinterpretación izquierdista del populismo desarrollada por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que se pretendía superador del agotamiento del marxismo político y del discurso de la lucha de clases en un nuevo proyecto revolucionario. Y no se limitaba a pretender ninguna nueva alternancia gubernamental, sino que consideraba que lo que se estaba produciendo en ese comienzo del siglo XXI era el fin del “régimen” surgido del pacto de la Transición de 1977-1978, la obsolescencia de la elite política tradicional, que calificó de “casta”, y sus formaciones, y el comienzo de una etapa de ruptura —la que no se había producido a la muerte de Franco— que se manifestaría en un proceso constituyente sin limitaciones, ni de sistema institucional ni de organización territorial. Su discurso rupturista se vio abonado por la depresión económica que generó la respuesta deflacionista a la crisis, arrastrando al descrédito a sus promotores, el PSOE y el PP, los protagonistas del turno bipartidista mantenido desde 1982, y a la Unión Europea; también por el conflicto territorial que estalló en Cataluña a partir de 2012; y, en última instancia, por los escándalos del titular de la monarquía, Juan Carlos I, que le obligaron a abdicar en junio de 2014. Todo formaba una tormenta perfecta que invitaba a luchar con rumbos y pilotos nuevos.

La irrupción de Podemos cumplió el dicho de la entrada de un caballo, joven y agresivo, en una cacharrería con demasiados trastos viejos. Después de sorprender en las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014 situándose en el cuarto lugar, con el 8% de los votos, dos puntos porcentuales menos que IU, la superó de lejos en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. Podemos y sus confluencias catalana, valenciana y gallega sumaron más de 5.212.000 votos, dejando muy atrás a IU, en la que Alberto Garzón había tomado el relevo de Cayo Lara, que se quedó en 927.000 en un nuevo, y

enésimo, traspiés. Podemos hizo el sorpasso al PCE y amenazó al PSOE, que bajó a los 5.500.000 votos dirigido también por una figura nueva, Pedro Sánchez.

No fue una ruptura, pero sí un terremoto político. Sus debilidades de articulación, su reciente factura y la competencia por liderazgos y decisiones tácticas frenaron a Podemos, pero los efectos del terremoto persistieron en la izquierda, de manera particular en el seno del PCE. Poco después de las elecciones, José Luis Centella anunció en marzo de 2016 la necesidad de que el PCE recuperara su autonomía electoral con respecto a IU, pretendiendo que eso no significara que fuera a abandonarla. Fue la primera manifestación de una reacción a todo lo sucedido que se planteó recuperar iniciativa e identidad propia en dos ámbitos, el de la identidad ideológica y política, maltratadas desde los años ochenta, y el de las alianzas, en el que la coalición políticoelectoral de IU había entrado en un estado agónico a un paso de recibir la puntilla.

Bajo la dirección de José Luis Centella se hizo una primera revisión de la política de alianzas, impulsando a IU a formar un solo cartel electoral en las generales del 26 de junio con Podemos y otras formaciones menores, bajo la etiqueta ecléctica de Unidas Podemos, con Pablo Iglesias como cabeza de cartel y Alberto Garzón en la quinta posición de la candidatura en Madrid. El resultado fue suficientemente satisfactorio, aunque sus votos, 5.050.000, estuvieron por debajo de la suma de los de sus integrantes en las elecciones anteriores. Sea como fuere, la nueva coalición se consolidó, lo que dejó en el aire cuál había de ser en ella el papel del PCE y, sobre todo, de IU. También se había iniciado una primera modificación de la identidad ideológica del partido reflejada en sus estatutos. El XIX Congreso, en noviembre de 2013, reintrodujo a Lenin, al lado de Marx y Engels, en la personificación fundamental de la “obra teórica” en la que se basaba el partido.

La revisión se aceleró con el relevo en la Secretaría General de José Luis Centella, que pasó luego a presidente del partido, por Enrique Santiago en el XX Congreso del PCE, celebrado en dos partes en abril y diciembre de 2017. El PCE asumió plenamente la propuesta de la obsolescencia del régimen de 1978 y de la “ruptura democrática”. Rechazó cualquier reforma de la constitución y la política de consenso, abogando por el reconocimiento de una política de conflicto —cuyo perfil está por dibujar por completo— que desemboque en un proceso constituyente; en este, el objetivo será una democracia participativa, bajo los conceptos de “federal”, “plurinacional”, “laica” y “solidaria”. Gran parte de ese

discurso venía a coincidir con el de Podemos, aunque se diferenciaba del de este por el mantenimiento de un discurso de clase, expresado en la propuesta de la "articulación de un bloque social alternativo en torno a la clase trabajadora y los sectores populares". El rechazo a la UE se reactivó en términos de propuesta de salida y abandono del euro. Por otra parte, se buscó recuperar los orígenes, postulando el retorno del PCE a la condición de un partido de cuadros, de militantes y no de afiliados regido por los principios del centralismo democrático; concebido no como un hecho definitivo, sino como "un paso atrás" para generar aquella política de conflicto y recuperar la homogeneidad del núcleo central que pueda permitir recuperar la vocación de partido de masas. Finalmente reformuló de nuevo la identidad estatutaria del partido, no ya recuperando a Lenin, sino "la aportación del marxismo-leninismo y del socialismo científico".

Epílogo

El XX Congreso no acabó todos los deberes. Dejó para una conferencia posterior la concreción de la nueva política de alianzas cuyo objetivo y base no había de ser la formación de una coalición partidaria, y menos electoral, sino la formación de un nuevo movimiento político-social, lo que más había deseado el PCE y lo que más había echado en falta en ese ámbito desde el final de la dictadura franquista. Su celebración se decidió después en junio de 2019 y entre las decisiones que había de tomar estaba, no solo la voluntad de generar ese movimiento, sino la consideración del papel que en ello habían de tener IU y el pacto de Unidas Podemos. Sobre esa cuestión las opciones se dividían hasta llegar en sus extremos desde la desaparición de IU y la fusión con Podemos en una nueva formación permanente, a la que parecía se inclinaba la nueva dirección del PCE, hasta la contraria de recuperar la independencia de IU con respecto a Podemos, defendida por el alcalde comunista de Zamora, Francisco Guarido, o Cayo Lara, entre otros; pasando por el mantenimiento del statu quo entre IU y Podemos, defendido por Alberto Garzón. No ha de tomarse esa foto como definitiva, el carácter reciente e inconcluso de ese debate admite nuevos contornos y muchos matices sobre lo apuntado. Sea como fuere, la repetición de las elecciones generales en noviembre de 2019 y la formación del inédito Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, encabezado por Pedro Sánchez, con Pablo Iglesias como uno de sus vicepresidentes y Garzón también de ministro modificó el escenario político del debate. El estallido de la pandemia de la COVID-19, acto seguido, impuso un cambio también en los tiempos, al no poder realizarse la conferencia a comienzos de 2020, como se preveía.

Finalmente, pudo celebrarse telemáticamente, culminando entre el 2 y el 6 de octubre en una votación de 239 delegados, que aprobó, con el 76% de los votos, un texto que armonizaba las posiciones de Enrique Santiago, José Luis Centella y Alberto Garzón, eliminando aristas y convirtiendo las decisiones inmediatas en un proceso. Su contenido ratificó la autocrítica de las insuficiencias de IU y el nuevo objetivo de converger hacia un nuevo movimiento político-social; no obstante, en la medida en que el nuevo sujeto político no esté construido, IU habrá de seguir siendo el instrumento a través del cual el partido ha de realizar su política de convergencia, con “todos los actores que buscan la ruptura del

Estado de 1978”. En esa perspectiva el texto reconoce la importancia de la política institucional, así como sus límites, que han de ser visibilizados y superados mediante el fomento de políticas e instancias de democracia participativa. La coalición con Podemos ha de formar parte del proceso de convergencia, proponiendo su ampliación, ir más allá del pacto electoral y vertebrarlo mediante la constitución de organismos territoriales y la instauración también en ellos de formas de democracia participativa. Finalmente, el documento aprobado señaló que no era ajena al proceso de convergencia la existencia del Gobierno de coalición con el PSOE, al que hay que apoyar y “organizar el apoyo popular”. En su conjunto un texto ecléctico, que anuncia cambios y evita nuevas fracturas internas, que combina conceptos de las experiencias del Frente Popular —la territorialización de las alianzas— y del proyecto de la democracia político-social —la superación constructiva de la política institucional mediante mecanismos de democracia directa— con la recuperación del discurso rupturista y el protagonismo de la concepción más reciente de la democracia participativa como factor de movilización, de democracia de masas, y de anticipación de un nuevo sistema. El acuerdo de la conferencia enmarcó el proceso de convergencia dentro de la perspectiva de la legislatura de coalición y pasó la pelota inmediata a la Asamblea de IU, prevista para enero de 2021, siempre que nuevos sucesos imprevistos no la impidan y modifiquen las piezas del escenario.

BIBLIOGRAFÍA

Sobre la Internacional Comunista

y otras cuestiones internacionales

Agosti, Aldo (1974-1979): La terza internazionale. Storia documentaria, 6 volúmenes, Roma, Riuniti.

— (2003): Togliatti. Un uomo di frontera, UTET Università, Turín.

Bayerlein, Bernard H.;Narinski, Mikhaïl; Studer, Brigitte y Wolikow, Serge (2003): Moscou-Paris-Berlin. Télégrammes chiffrés du Komintern (1939-1941), París, Le Grand Livre du Mois.

Carley, Michael Jabara (2001): 1939. L'alliance de la dernièr chance.Une reinterpretation des origines de la Seconde Guerre mondiale, Montreal, Presses de l'Université de Montréal.

Carr, Edward H. (1976): "El V Congreso de la Internacional Comunista", en V Congreso de la Internacional Comunista. Primera parte, Córdoba, Argentina.

Carrère d'Encause, Hélène (1987): Le gran défi. Bolcheviks et nations 1917-1930, París, Flammarion.

Courtois, Stephane; Peschanski, Denis; Rasky, Adam (1994): Le sang de l'étranger. Les immigrés de la MOI dans la Resistance, París, Fayard.

Dallin, Alexander y Firsov, F. I. (2000): Dimitrov & Stalin 1934-1943. Letters from the soviet archives, Nueva York, Yale University Press.

Dimitrov, Georgi (2002): Diario. Gli anni di Mosca (1934-1945), Turín, Einaudi.

Dullin, Sabine (2001): Des homes d’influences. Les ambassadeurs de Staline en Europe, 1930-1939, París.

Hájek, Milos (1984): Historia de la Tercera Internacional. La política de frente único (1921-1935), Barcelona, Crítica.

Humbert-Droz, Jules (1970): Origines et débuts des partis communistes des pays latins. 1919-1923, Dordrecht, Springer.

— (1983): Les partis communistes des pays latins et la Internationale Communiste dans les anneés 1923-1927, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers.

— (1988): Les partis communistes des pays latinset la Internationale Communiste dans les anneés 1928-1932, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers.

Lacroix-Riz, Annie (2006): Le choix de la défaite. Les élites françaises dans les années 1930, París, Armand Colin.

Ragioneri, Ernesto (ed.) (1973): Los cuatro primeros congresos de la Internacional Comunista, Córdoba, Argentina, Cuadernos de Pasado y Presente.

Vigreux, Jean (2016): Histoire du Front Populaire. L’échappée belle, París, Tallandier.

Sobre España y el comunismo español

Alía Miranda, Francisco (2011): Julio de 1936. Conspiración y alzamiento contra la Segunda República, Barcelona, Crítica.

Andrade, Juan[50] (1983): Recuerdos personales, Barcelona, Serbal.

Andrade, Juan (2012): El PCE y el PSOE (en) la Transición, Madrid, Siglo XXI.

Anguita, Julio y Andrade, Juan (2015): Atraco a la memoria. Un recorrido

histórico por la vida política de Julio Anguita, Madrid, Akal.

Arenas Posadas, Carlos (1991): “Auge y caída de un grupo revolucionario: los dirigentes sevillanos del PCE, 1919-1936” (texto inédito).

Arnau, Roger (seudónimo de Josep Benet) (1974): Marxisme català i qëstió nacional (1930-1936), 2 volúmenes, París, Edicions Catalanes de París.

Aróstegui, Julio (2013): Largo Caballero. El tesón y la quimera, Barcelona, Debate.

Arranz Notario, Luis (1985): “La ruptura del PSOE en la crisis de la Restauración: el peso del Octubre ruso”, Estudios de Historia Social, nº 32-33.

— (1986): “La ruptura del PSOE en la crisis de la Restauración: debate ideológico y político”, Anales de Historia, nº 1, Fundación Pablo Iglesias.

Asenjo, Mariano y Ramos, Victoria (1999): Malagón. Autobiografía de un falsificador, Madrid, El Viejo Topo.

Avilés Farrés, Juan (1999): La fe que vino de Rusia. La revolución bolchevique y los españoles (1917-1931), Barcelona, Biblioteca Nueva.

Bahamonde, Ángel (2014): Madrid 1939. La conjura del coronel Casado, Madrid, Grupo Anaya Publicaciones Generales.

Bizcarrondo, Marta (1975): Araquistain y la crisis socialista en la República. Leviatán (1934-1936), Madrid, Siglo XXI.

— (1986): “La segunda República. Ideologías socialistas”, Anales de Historia, nº 1, Fundación Pablo Iglesias.

Bonamusa, Francesc (1974): El Bloc Obrer i Camperol: primers anys. 1930-1932, Barcelona, Curial.

Bosch, Aurora (1983): Ugetistas y libertarios. Guerra civil y Revolución en el País Valenciano, Valencia, Institución Alfonso El Magnánimo.

Brademas, John (1973): Anarcosindicalismo y revolución en España (1930-1937), Barcelona, Ariel.

Bueno, Manuel y Gálvez, Sergio (eds.) (2009): Nosotros los comunistas. Memoria, identidad e historia social, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas.

Bueno, Manuel; García, Carmen e Hinojosa, José (2007): Historia del PCE. I Congreso, 1920-1977, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas.

Bullejos, José (1972): La Comintern en España. Recuerdos de mi vida, México D. F, Impresiones Modernas.

Caminal, Miquel (1985): Joan Comorera. Comunisme i nacionalisme (1939-1958), Barcelona, Empúries.

Carrillo, Santiago (1993): Memorias. Una vida política larga y azarosa marcada por responsabilidades importantes, Barcelona, Planeta.

Ceamanos Llorens, Roberto (2010): El Parti Communiste Français y la Segunda República española (1931-1936), Madrid, Biblioteca Nueva.

Cebrián, Carme (1997): Estimat PSUC, Barcelona, Empúries.

Cruz, Rafael (1987): El Partido Comunista de España en la Segunda República, Madrid, Alianza Editorial.

De Riquer, Borja (1996): L'últim Cambó (1936-1947). La dreta catalana davant la guerra civil i el franquisme, Barcelona, Eumo.

Del Río Santos, Sonia (2002): Corporativismo y relaciones laborales en Cataluña, Bellaterra, Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Díaz Alonso, Diego (2019): Disputar las banderas. Los comunistas, España y las cuestiones nacionales (1921-1982), Gijón, Trea.

Díaz, José (1974): Tres años de lucha, Bucarest, Buletinul Oficial.

Durgan, Andrew Ch. (1996): BOC.1930-1936: el Bloque Obrero y Campesino, Barcelona, Laertes.

Elorza, Antonio y Bizcarrondo, Marta (1999): Queridos camaradas. La

Internacional Comunista y España, 1931-1939, Barcelona, Planeta.

Erice, Francisco (coord.) (1996): Los comunistas en Asturias 1920-1982, Gijón, Trea.

— (2006): “Los condicionamientos del ‘giro táctico’ en 1956: el contexto de la política de Reconciliación Nacional”, Papeles de la FIM, Fundación de Investigaciones Marxistas.

Forcadell, Carlos (1978): Parlamentarismo y bolchevización, Barcelona, Crítica.

Forner Muñoz, Salvador (1982): Industrialización y movimiento obrero. Alicante, 1923-1936, Valencia, Institució Alfons el Magnànim.

Forti, Steven (2014): El peso de la nación. Nicola Bombacci, Paul Marion y Óscar Pérez Solís en la Europa de entreguerras, Santiago de Compostela, UAB.

Fusi, Juan Pablo (1975): Política obrera en el País Vasco.1880-1923, Madrid, Turner.

Ginard i Féron, David (2000): Heriberto Quiñones y el movimiento comunista en España (1931-1942), Palma-Madrid, Compañía Literaria.

Girona, Albert (1986): Guerra i revolució al País Valencià (1936-1939), Valencia, Eliseu Climent.

Graham, Helen (2005): El PSOE en la Guerra Civil. Poder, crisis y derrota (1936-1939), Barcelona, Debate.

Guixé i Corominas, Jordi (2002): L’Europa de Franco. L’esquerra antifranquista i la “caça de bruixes” a l’inici de la guerra freda. França 1943-1951, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Heine, Harmut (1983): La oposición política al franquismo, Barcelona, Crítica.

Hernández Sánchez, Fernando (2010): Guerra o revolución. El Partido Comunista de España en la Guerra Civil, Barcelona, Crítica.

— (2015): Los años de plomo. La reconstrucción del PCE bajo el primer franquismo, Barcelona, Crítica.

— (2018): La frontera salvaje. Un frente sombrío del combate contra Franco, Barcelona, Ediciones de Pasado y Presente.

Martín Ramos, Josep Lluis (1977): Els orígens del Partit Socialista Unificat de Catalunya (1930-1936), Barcelona, Curial.

— (2002): Rojos contra Franco. Historia del PSUC, 1939-1947, Barcelona, Editora y Distribuidora Hispano Americana.

— (2006): “La política de Unión Nacional Española”, Papeles de la FIM, Fundación de Investigaciones Marxistas.

— (2008): Historia de la UGT. Entre la revolución y el reformismo, 1914-1931, Madrid, Siglo XXI.

— (coord.) (2011): Pan, Trabajo y Libertad. Historia del Partido del Trabajo de España, Barcelona, El Viejo Topo.

— (2015): El Frente Popular. Victoria y derrota de la democracia en España, Barcelona, Pasado y Presente.

— (2018): Guerra y revolución en Cataluña. 1936-1939, Barcelona, Crítica.

Martorell, Manuel (2000): Jesús Monzón, el líder comunista olvidado por la Historia, Pamplona, Pamiela.

Meaker, Gerald H. (1978): La izquierda revolucionaria en España. 1914-1923, Barcelona, Ariel.

Molinero, Carme e Ysás, Pere (1998): Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista, Madrid, Siglo XXI.

— (2010): Els anys del PSUC. El partit de l’antifranquisme (1956-1981), Barcelona, La Magrana.

— (2017): De la hegemonía a la autodestrucción. El Partido Comunista de España (1956-1982), Barcelona, Crítica.

Moradiellos, Enrique (2006): Don Juan Negrín, Barcelona, Península.

Morán, Gregorio (1985): Miseria y grandeza del Partido Comunista de España, 1939-1985, Barcelona, Akal.

Pagés, Pelai (1975): Andreu Nin: su evolución política (1911-1937), Bilbao, Zero.

Pala, Giaime (ed.) (2008): El PSU de Catalunya. 70 anys de lluita pel socialisme, Barcelona, Fundación de Investigaciones Marxistas.

— (2016): Cultura clandestina. Los intelectuales del PSUC bajo el franquismo, Granada, Comares.

Portela, Luis (1980): “El nacimiento y los primeros pasos del movimiento comunista en España”, Estudios de Historia Social, nº 14.

Puigsech Farrás, Josep (2009): Entre Franco y Stalin. El difícil camino de los comunistas en Cataluña, 1936-1949, Barcelona, El Viejo Topo.

Puigsech, Josep y Pala, Giaime (eds.) (2017): Les mans del PSUC. Militància, Barcelona, Memorial Democràtic.

Radosh, Ronald; Habeck, Mary R. y Sevostianov, Grigory (eds.) (2002): España traicionada. Stalin y la Guerra Civil, Barcelona, Planeta.

Rybalkin, Yuri (2007): Stalin y España, Madrid, Marcial Pons.

Romeu Alfaro, Fernanda (2002): Más allá de la utopía: Agrupación Guerrillera de Levante, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha.

Sánchez Cervelló, Josep (ed.) (2003): Maquis: el puño que golpeó al franquismo. La Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón, Barcelona, Flor del Viento.

Sánchez Rodríguez, Jesús (2004): Teoría y práctica democrática en el PCE (1956-1982), Madrid, Montesinos.

Santasusana i Corzan, Marc (2016): Quan la CNT cridà independència, Barcelona, Base.

Santidrián, Victor M. (2002): Historia do PCE en Galicia (1920-1968), A Coruña, Edicios do Castro.

Serrano, Secundino (2001): Maquis. Historia de la guerrilla antifranquista, Madrid, Temas de Hoy.

Taibo II, Paco Ignacio (1986): Los bolsheviquis. Historia narrativa de los orígenes del comunismo en México. 1919-1925, México D. F., Joaquín Mortiz.

Termes, Josep (2011): Historia del movimiento anarquista en España (1870-1980), Barcelona, RBA.

Tusell, Javier (1971): Las elecciones del Frente Popular, Madrid, Cuadernos para el Diálogo.

Ucelay-Da Cal, Enrique y Esculíes, Joan (2015): Macià al país dels soviets, Barcelona, Edicions de 1984.

Vázquez Montalbán, Manuel (1995): Pasionaria y los siete enanitos, Barcelona, Planeta.

Vega, Eulàlia (2004): Entre revolució i reforma. La CNT a Catalunya (1930-1936), Lleida, Pagès.

Viñas, Ángel (2006): La soledad de la República. El abandono de las democracias y el viraje hacia la Unión Soviética, Barcelona, Crítica.

— (2007): El escudo de la República. El oro de España, la apuesta soviética y los hechos de mayo de 1937, Barcelona, Crítica.

— (2008): "Armas y Hombres para España. Los apoyos exteriores en la Guerra Civil", en Enrique Fuentes Quintana y Francisco Comín (eds.), Economistas y economía española en la Guerra Civil, Madrid, Taurus.

— (2009): El honor de la República. Entre el acoso fascista, la hostilidad británica y la política de Stalin, Barcelona, Crítica.

Viñas, Ángel y Hernández Sánchez, Fernando (2009): El desplome de la República, Barcelona, Crítica.

Zapatero, Virgilio (1999): Fernando de los Ríos. Biografía intelectual, Granada, Pre-Textos.

NOTAS

1 . Citado por Madeleine Reberioux (1974): “Le socialisme et la première guerre mondiale (1914-1918)”, en Jacques Droz (dir.), Histoire générale du socialisme, vol. II, P. U. F., París, p. 156. Hay una versión en español, publicada por Destino en diversos formatos.

2 . La Crisis de Tánger, entre el Imperio alemán y Francia, que contó con el apoyo del Reino Unido.

3 . Día Internacional de la Mujer Trabajadora, cuya celebración fue reprimida sangrientamente por el zar, dando lugar a la insurrección que acabó en su derrocamiento. La fecha corresponde a nuestro calendario, el gregoriano; en el Imperio ruso regía el calendario juliano, con una diferencia de diez días, por lo que esa fue la revolución de “febrero”, de la misma manera que la de “octubre” tuvo lugar el 7 de noviembre de nuestro calendario.

4 . En 1915, tuvo lugar, en la población suiza de Zimmerwald, una conferencia de partidos y sectores del movimiento obrero opuestos a la guerra. En ella nació un movimiento crítico, aunque heterogéneo, en el que se yuxtaponían posiciones pacifistas y revolucionarias; mantuvo un segundo y tercer encuentros en 1916 y 1917, en Kiental y Estocolmo, y se disolvió al acabar la guerra.

5 . Su elección forzó al Gobierno a las Cortes a amnistiarlos el 8 de mayo y los

cuatro tomaron posesión inmediata de sus escaños.

6 . En la ciudad de Barcelona el número de huelgas, que había oscilado sobre la cincuentena entre 1914 y 1917, saltó a 84, con la particularidad del incremento de acciones por solidaridad, así como de generales de oficio y ramo.

7 . Sección francesa de la Internacional Obrera, denominación del Partido Socialista en Francia desde que en 1905 se constituyera por la unificación de grupos marxistas y no marxistas.

8 . En mayo de 1923 se fundó en el Congreso de Hamburgo la Internacional Obrera Socialista, que subsistió hasta su desaparición práctica durante la Segunda Guerra Mundial.

9 . La afiliación de la ASM representada en el congreso de aquel año ascendió a los 1.300, de un total de 34.347 de todo el partido; aunque la participación en sus asambleas no rebasaba los 400 asistentes, esa era la fuerza que sus delegados hacían valer. Algo semejante ocurría en las juventudes. Su sección madrileña y el Grupo de Estudiantes Socialistas, con organización propia, sumaban 620 afiliados de un total de 7.500 en cifras redondas. Las decisiones de las organizaciones madrileñas no eran definitivas, pero sí tendían a marcar pautas.

10 . El texto de Torralva Beci fue publicado por El Socialista el 2 de agosto.

11 . Estuvieron representados cerca de 34.400 afiliados de los poco más de

42.000 que tenía. El partido había experimentado un salto numérico desde el XI Congreso, un año atrás, cuando sus delegados representaron a 13.800 afiliados de un total de 14.600.

12 . Cada delegado votaba por el total de miembros de la agrupación que representaba.

13 . Como él, participaron en las organizaciones mexicanas revolucionarias algunos estadounidenses que huyeron a México en protesta por la entrada de su país en la Gran Guerra.

14 . Lo firmaron Anguiano, Lamoneda y Núñez de Arenas, de la Comisión Ejecutiva del partido; Mariano García Cortés y César R. González, de la ASM; José López y López y Ramón Merino Gracia, del Ejecutivo de las Juventudes; José González de Ubieta, del Grupo de Estudiantes Socialistas; y Virginia González, líder del feminismo socialista y antigua vocal del Comité Nacional.

15 . La IC estableció en 1919 diversas oficinas de expansión y más adelante supervisión de diversas regiones europeas, las más importantes fueron entonces el Buró de Ámsterdam para Europa Occidental y América, y el Buró de Berlín para Europa Central. El de Ámsterdam, dirigido por el PC holandés, asumió una línea política radicalizada, en la que se rechazaban la participación en las instituciones burguesas y el sindicalismo, y se defendían el consejismo y una estrategia de insurreccionalismo proletario estricto. Lenin desautorizaría esa línea en vísperas del II Congreso de la IC.

16 . Anguiano dimitió tras informar, como autocrítica por su frustrado viaje a

Róterdam.

17 . Tanto en uno como otro, sus congresos decidieron la integración en la IC a finales de 1920 y cambiaron su denominación. El sector derrotado decidió mantener la denominación “socialista”.

18 . En el III Congreso de la IC se inició la rectificación sobre las expectativas de una nueva fase revolucionaria, que pasó a considerarse a largo plazo y no como posibilidad inmediata. En consecuencia, se empezó a diseñar una nueva política de adaptación a la estabilización del capitalismo, que se concretaría entre 1921 y 1922 en la propuesta del frente único entre todas las organizaciones obreras y en la adopción de consignas para el periodo de transición, que se consideró podría durar años, sustituyendo como consigna inmediata la dictadura del proletariado por la del Gobierno obrero y campesino (Hajeck, 1984).

19 . Lenin desarrolló, entre 1903 y 1916, una compleja doctrina sobre el reconocimiento del derecho de autodeterminación como obligación negativa —no poder dejar de reconocer— a la que, a partir de 1917, sumó la asunción del federalismo. Tras la muerte de Lenin en 1924, Zinóviev impulsó en la IC ese reconocimiento como consigna, despojado de las complejidades contempladas por Lenin.

20 . Para evitar confusiones con el organismo de supervisión de los partidos comunistas latinoamericanos, el Secretariado Latino pasó a denominarse Romano a finales de los años veinte.

21 . Maurín mantenía un pulso con Bullejos por el liderazgo del PCE desde su

salida de la cárcel en 1927. La dirección del PCE le acusó de haber negociado su libertad con la dictadura, pero aunque fue exonerado por la IC de esa falsedad, la dirección del partido se empeñó en mantenerlo marginado.

22 . El Partit Comunista Catalá fue fundado en 1928 por un grupo de jóvenes, algunos de ellos procedentes de los movimientos conspirativos alentados por Macià, en su mayoría dependientes mercantiles o enseñantes; lo hicieron atraídos por la imagen de la URSS como Estado plurinacional y el discurso autodeterminista de la IC en aquella época, pero sin ninguna vinculación formal con esta.

23 . El término “socialfascista”, acuñado por el sector más radical del KPD a mediados de los años veinte, no fue aprobado en el VI Congreso, ante el rechazo de Bujarin y otros delegados, entre los que destacó Togliatti. Sin embargo, tras la derrota de Bujarin y los sangrientos sucesos del 1 de mayo de 1929 en Berlín, donde la policía, bajo las órdenes del Gobierno socialdemócrata del Land, causó más de treinta muertos entre los manifestantes comunistas, su uso fue adoptado finalmente por el CEIC.

24 . Bolchevismo (11 de marzo de 1932), citado por Díaz Alonso (2019).

25 . El proyecto nacionalista incluía el concordato con el Vaticano y no concedía el voto a la población inmigrante que no acreditara diez años de residencia en el País Vasco.

26 . Entre esas intervenciones destaca la conferencia en el Ateneo de Madrid, en junio de 1931, recogida en el diario El Sol (9 de junio de 1931) y en La Batalla

(4 de julio de 1931), así como el artículo “Las tres etapas de la cuestión nacional” publicado en La Batalla (16 de julio de 1931).

27 . La denominación era calcada de la del sindicato comunista en Francia, cuyo origen era una escisión de la CGT por parte de sus sectores comunista y anarquista, de ahí el añadido de “unitario”; los anarquistas acabaron abandonando la CGTU francesa, pero esta mantuvo su denominación.

28 . Nombre dado a los arrendatarios del sector de la viña en Cataluña, cuyo contrato estaba vinculado a la supervivencia de la cepa, “a rabassa morta”. Estaban organizados en la Unió de Rabassaires, el sindicato agrícola más importante de Cataluña, vinculado a Esquerra Republicana de Cataluña y, a partir de 1936, también al Partit Sosialista Unificat de Catalunya (PSUC).

29 . En dos meses se incrementó en un 30%, iniciando el despegue de afiliación que se mantuvo hasta mediados de la Guerra Civil.

30 . El bloque, que nunca llegó a constituir formalmente una alianza, estaba integrado por la CEDA y los monárquicos de Renovación Española, liderados por Calvo Sotelo como formaciones de masas; el pequeño grupo de Falange como formación activista y de conexión explícita con el ideario fascista; y diversos grupos regionales entre los que destacaba la Lliga Catalana de Francesc Cambó.

31 . Sigue siendo la mejor obra de referencia. El libro de Tardío y Villa, sectario y manipulador de los datos, no ha conseguido mejorarla.

32 . El sistema electoral de la República, con complicadas atribuciones de escaños por mayoría y por minoría y posibilidad de que el votante escogiese nombres de listas diversas, impide establecer un cómputo exacto.

33 . El término "anarcosindicalista", que tuvo pleno sentido para calificar a la CNT hasta 1933, dejó de responder a la realidad desde que, a partir de esta fecha, la FAI estableció su hegemonía. La CNT pasó a ser CNT-FAI. Por ello, utilizaré a partir de este punto el término "anarquista" para identificar su orientación ideológica.

34 . En diciembre de 1938 marchó a la URSS para ser operado y ya no pudo regresar a España.

35 . Un fichero de afiliación elaborado por los organismos del exilio en Francia, en junio de 1939, registró 3.550 militantes del PCE de un total de 59.250 fichas; teniendo en cuenta el volumen del exilio y que no todos tenían afiliación explícita, creo que esa cifra puede ser la más probable, en números redondos.

36 . Moran y Heine sostuvieron que la reunión se celebró en el verano, Martorell que lo hizo en noviembre. Es un detalle, cuya trascendencia solo afecta a reforzar o no la capacidad de iniciativa de Monzón, caso de que hubiese sido en el verano, adelantándose a la declaración del 16 de septiembre.

37 . Ejemplo relevante fue Conrad Miret Musté, militante del PSUC, primer

responsable de los grupos armados de la OS (Organisation Speciale), autores de las primeras acciones armadas en París en 1941, detenido y torturado hasta su muerte el 27 de febrero de 1942.

38 . Carrillo ganó la partida años más tarde y rehabilitó por completo a Antón, que fue readmitido como miembro del Comité Central en 1964.

39 . La República Democrática Alemana no podía ingresar al corresponder a un Estado dividido.

40 . La “teoría del derrumbe” es un supuesto ideológico recurrente en el marxismo político que considera la inevitabilidad del hundimiento del capitalismo, por sus propias características sistémicas.

41 . Las movilizaciones quedaron señaladas por la expulsión a perpetuidad de los profesores de la Universidad de Madrid, José Luis López Aranguren, Enrique Tierno Galván y Agustín García Calvo, y la rescisión del contrato de Manuel Sacristán en la Universidad de Barcelona.

42 . Revista fundada en octubre de 1963 por Ruiz-Giménez, con el objetivo de defender una alternativa democrática a la dictadura y construir, en esa perspectiva, un proyecto demócrata cristiano español.

43 . Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, plataforma política del PCE (marxista-leninista) constituida en noviembre de 1973 y presidida por el antiguo

dirigente socialista Álvarez del Vayo. En nombre de la lucha armada inició una política de atentados, que culminaron en julio de 1975 con el asesinato de un policía y un teniente de la Guardia Civil. Por su parte ETA recrudeció en 1974 su cadena de atentados, en la que destacó la bomba contra la cafetería Rolando de Madrid, que produjo 13 muertos y 70 heridos; entre 1974 y 1975 sumó una veintena de acciones mortales.

44 . "Memorándum sobre las cuestiones del movimiento obrero internacional y sobre su unidad", Yalta, agosto de 1964. Murió el 21 de aquel mes.

45 . "A propósito del eurocomunismo", Mientras Tanto, noviembre-diciembre de 1977.

46 . Citado por Pere Ysás y Carme Molinero (2017: 343).

47 . Su intención de recuperar la denominación de PSUC no fue posible porque seguía registrada por el sector mayoritario, aunque estuviera políticamente inactiva.

48 . Su origen estuvo en la facción que quedó en minoría en el PSOE, en 1972, liderada por Llopis y que, paradójicamente, tenía entonces como una de sus señas de identidad el rechazo a la alianza con los comunistas; el denominado PSOE (histórico) fue evolucionando tras la Transición, adoptando posiciones de la izquierda socialista en Francia, Italia y Grecia, y en 1982 adoptó esa denominación bajo el liderazgo de Alonso Puerta, diputado entre 1977 y 1979, y concejal del Ayuntamiento de Madrid entre 1979 y 1981.

49 . La constituyó tras abandonar el PCE en 1984. Nunca tuvo entidad real, ni estabilidad; abandonó IU en diciembre de 1987 y se desintegró.

50 . Se trata del militante comunista. El autor Juan Andrade de las obras de 2012 y 2015 es el historiador.

Índice